



REGIONES Y CONFLICTO ARMADO

BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN
DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO
HISTÓRICO



**REGIONES
Y CONFLICTO ARMADO**

**BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN
DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO
HISTÓRICO**

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

**REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL
ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO**

Clara Inés García
RELATORA

Kelly Johanna López
ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

Gonzalo Sánchez Gómez
DIRECTOR GENERAL

Camila Medina Arbeláez
DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA
HISTÓRICA

**AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL
DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID)**

Lawrence J. Sacks
DIRECTOR DE USAID/COLOMBIA

Michael Torreano
DIRECTOR DE LA OFICINA DE RECONCILIACIÓN E
INCLUSIÓN DE USAID/COLOMBIA

Ángela Suárez
GERENTE DEL PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACIÓN DE USAID/COLOMBIA

Ricardo Amaya
DIRECTOR PROGRAMA PAR – ACDI/VOCA

Jimena Niño
SUBDIRECTORA PROGRAMA PAR – ACDI/VOCA

Este libro fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad del Centro Nacional de Memoria Histórica y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

ISBN: 978-958-8944-95-1

Primera edición: junio de 2018

Número de páginas: 296

Formato: 15 x 23 cm

Coordinación Grupo de Comunicaciones:

Adriana Correa Mazuera

Coordinación editorial:

Tatiana Peláez Acevedo

Edición y corrección de estilo:

Nicolás Pernet

Diseño y diagramación:

Leidy Sánchez Jiménez

Georreferenciación:

Jonathan Stucky

Fotografías:

Portada: © Nubia Sarria, habitante fundadora de San Joaquín. 2017. Fotógrafo: Daniel Sarmiento para el CNMH.

Impresión:

Panamericana Formas e Impresos S.A.

© Centro Nacional de Memoria Histórica

Calle 35 N° 5 - 81

PBX: (571) 796 5060

comunicaciones@centrodememoriahistorica.gov.co

www.centrodememoriahistorica.gov.co

Bogotá D.C. – Colombia

Impreso en Colombia. Printed in Colombia

Queda hecho el depósito legal.

Cómo citar:

Centro Nacional de Memoria Histórica (2018), *Regiones y conflicto armado. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico*, Bogotá, CNMH.

Este balance es de carácter público. Puede ser reproducido, copiado, distribuido y divulgado siempre y cuando no se altere su contenido, se cite la fuente y/o en cualquier caso, se disponga la autorización del Centro Nacional de Memoria Histórica como titular de los derechos morales y patrimoniales de esta publicación.

Centro Nacional de Memoria Histórica

Regiones y conflicto armado : Balance de la contribución

Del CNMH al esclarecimiento histórico / Centro Nacional de Memoria Histórica, Clara Inés García ; fotografía Daniel Sarmiento. – Bogotá : Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018.

296 páginas ; 23 cm. – (Informes de investigación)

ISBN 978-958-8944-95-1

1. Conflicto armado - Aspectos sociales - Colombia

2. Víctimas de la violencia - Colombia 3. Acuerdos de paz – Colombia 4. Territorio nacional 5. Memoria histórica I. García,

Clara Inés, autora II. Sarmiento, Daniel, fotógrafo III. Tít.

IV. Serie.

303.6 cd 21 ed.

A1596560

CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	9
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESTUDIOS.....	13
LOS OBJETIVOS.....	13
LAS GEOGRAFÍAS	16
LAS TEMPORALIDADES	18
LOS FOCOS TEMÁTICOS	19
LOS ACTORES VICTIMIZANTES	19
2. EL MODELO ANALÍTICO DEL GMH - CNMH	
EN LAS MEMORIAS REGIONALES.....	23
ÉNFASIS Y DIFERENCIAS EN LA APLICACIÓN DEL MODELO.....	24
LOS CASOS COMO ESTRATEGIA	26
3. CONFLICTO Y TERRITORIO	31
EL DESENCADENAMIENTO DE LAS VIOLENCIAS	
EMBLEMÁTICAS: ENTRE LO LOCAL Y LO NACIONAL.....	31
CONFLICTO Y RECONFIGURACIÓN REGIONAL.....	40
Anotaciones metodológicas previas	41
Desencadenantes	44
La reconfiguración territorial resultante.....	55
El papel del Estado en las reconfiguraciones territoriales.....	75
El papel de las élites locales	81

4. RESISTENCIAS	85
CARACTERÍSTICAS GENERALES	86
Las temporalidades.....	86
Las lógicas narrativas	89
TERRITORIOS Y RESISTENCIAS: PARTICULARIDADES Y TENDENCIAS	93
El capital social acumulado previamente	94
La condición étnica y el valor del territorio.....	102
Estigmatización política de la memoria y las memorias violentadas	110
Economía del narcotráfico y resistencia.....	113
La condición urbana en las resistencias.....	115
5. MEMORIAS EN TENSIÓN.....	123
TERRITORIOS Y TENSIONES POR LA MEMORIA.....	124
El Salado.....	124
Trujillo	125
Remedios/Segovia	127
El Castillo	128
San Carlos	129
Bahía Portete.....	130
Bojayá.....	131
ALCANCES Y SIGNIFICADO DE LAS TENSIONES	131
INTERROGANTES QUE EMERGEN	137
Sobre la temporalidad y la espacialidad en los trabajos de la memoria.....	137
Sobre los acompañamientos	138
Sobre la reconciliación	139
RECOMENDACIONES	143
BIBLIOGRAFÍA	153

INTRODUCCIÓN

Este balance responde al requerimiento del Centro Nacional de Memoria Histórica, y busca establecer la contribución que dicho centro ha hecho al esclarecimiento histórico del conflicto armado en torno a la temática de “memorias regionales”, a partir de una muestra de 13 estudios de caso.

Los 13 casos abarcados por el balance pertenecen a territorialidades bien diferenciadas del país, y son:

Trujillo	El Salado
Bahía Portete	Bojayá
San Carlos	Comuna 13
Remedios y Segovia	El Placer
Buenaventura	Granada
El Castillo	Tibú
Arauca	

Mapa 1. Incidencia territorial. Balance regiones y conflicto armado, 2018



Fuente: elaboración propia.

El balance consta de seis partes. La primera establece las características más generales del conjunto de los estudios, en términos de los objetivos, geografías, temporalidades, temáticas y actores victimizantes trabajados por los estudios del CNMH. La segunda parte identifica el modelo analítico que los investigadores siguieron para dar cuenta de lo que en conjunto y para efectos de este balance se denominó “memorias regionales”. El tercer capítulo aborda el núcleo duro del balance con la pregunta por las claves que se encuentran en los estudios a propósito de la relación entre el conflicto armado y el territorio. Para tal efecto se desarrollaron dos acápite: uno, dirigido a dilucidar la manera como se relacionaron los conflictos locales (violentos y no violentos) y los procesos del orden nacional (políticos y político-militares) en el desencadenamiento de las violencias en los territorios; el otro, concentrado en los procesos de reconfiguración de los territorios producida en función del conflicto armado. Para lograrlo se definieron criterios conceptuales y metodológicos que posibilitaran poner 13 casos tan diversos dentro de un marco comparativo que, sin perder la riqueza de la complejidad y particularidad que mostraba cada caso, pudiera establecer las tendencias más remarcables y pertinentes a propósito de la relación entre conflicto armado y territorio. El cuarto capítulo desarrolla el tema de las resistencias, central para dilucidar las lógicas de la agencia de la población civil y de las víctimas en cada territorio, en el contexto de una violencia que pasó distintas etapas; también se identifican las tendencias más remarcables que en medio de su heterogeneidad es posible delimitar. El quinto capítulo se centra en el análisis de las memorias en tensión, identificando la gran variedad de fuentes de esas tensiones y el grado de facilidad o dificultad para resolverlas y planteando algunas preguntas que le quedan abiertas a futuros trabajos por la memoria.

El balance finaliza con unas reflexiones en clave de recomendaciones para las instituciones que en la actual etapa de posconflicto con las FARC se ven avocadas a la compleja tarea de construir paz en el país, tarea que implica al mismo tiempo la consideración del territorio como uno (país) y como muchos (regiones).

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESTUDIOS

El propósito de este primer capítulo es hacer, como introducción al balance, una caracterización general de los 13 informes abordados. Fueron cinco los asuntos que se consideraron pertinentes para tal efecto: los objetivos buscados, las geografías abarcadas, las temporalidades estudiadas, los focos temáticos escogidos y los actores victimizantes sobre los que los estudios centraron la atención.

LOS OBJETIVOS

Todos los casos tienen como objetivo general la reconstrucción de la memoria de las violencias padecidas por las poblaciones y sus maneras de afrontarlas, dando voz a las víctimas y visibilizando sus visiones del conflicto y de lo que padecieron. Además de lo que implica el trabajo de memoria para las víctimas en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación en todos los casos, cada caso en particular, en tanto caso emblemático, propone también objetivos específicos según los aspectos que las propias víctimas han querido subrayar y/o que MH ha considerado pertinente destacar, dadas las especificidades del

conflicto en cada territorio. Los objetivos general y específicos también responden a la preocupación por mostrarle al país momentos álgidos del conflicto armado en los que ha sido afectada principalmente la población civil y sobre los cuales pesa una capa de invisibilización y olvido.

De los objetivos específicos seguidos por cada informe es interesante resaltar lo siguiente:

Algunos casos se concentran en *el trabajo de visibilización de los hechos y sus significados*. En Trujillo se trata de quitar el manto de olvido y silenciamiento colectivo que pesa sobre los hechos y la población. En El Salado se reivindica la voz individualizada de los sujetos que se vieron sometidos a una violencia extrema (masacre y tierra arrasada, en medio de un entorno —Montes de María— en el que en seis años se cometieron 42 masacres), con el fin de lograr una acción pedagógica a partir de la cual los colombianos comprendan que el dolor de unos compatriotas es el “resultado de procesos sociales y políticos identificables”. En Remedios y Segovia se pretende dar voz a quienes fueron silenciados, en un contexto en el que una de cada tres víctimas era portadora de una identidad política y en el que incluso la práctica de memoria fue violentada (supresión del duelo, prohibición de la denuncia y proscripción del ejercicio ciudadano); es una apuesta por recobrar a través de la memoria de las víctimas, los discursos e ideas de quienes fueron acallados y de quienes aún no pueden hablar, pues la violencia sigue vigente.

Otros casos se proponen *deslegitimar interpretaciones sobre el conflicto que ocultan las condiciones de violencia estructural y exclusión histórica que afectan a poblaciones indígenas y afrodescendientes del país*. Así, en el informe sobre Bahía Portete se ponen de manifiesto los eventos de violencia contra el pueblo Wayúu como parte de las dinámicas estructurales del conflicto, y no como meros “asuntos de guerras” o comportamientos delictivos dentro de la misma etnia. Para el caso de Bojayá se rompe “con la visión fragmentada de los hechos que aísla la masacre del entramado de actores y confrontaciones que estuvieron en el origen y desenlace de lo sucedido el 2 de mayo de 2002 en Bojayá y de

la situación de exclusión histórica que convirtió este territorio en zona de ilegalidad, refugio y de ventajas competitivas para guerrillas, paramilitares y narcotraficantes.

En Buenaventura se atiende la demanda de las víctimas, organizaciones étnicas, eclesiásticas y sociales quienes solicitaron llevar a cabo un proceso de reconstrucción de memoria que permita *comprender la degradación, escalamiento y continuidad de la disputa armada en la ciudad puerto, además de visibilizar cómo la población afrodescendiente ha sido afectada en un ámbito urbano.*

Un par de casos buscan responder a la necesidad colectivamente sentida y expresada por las víctimas de *romper con los estigmas*. En El Placer, esa apartada y asilada inspección del bajo Putumayo, se quiere romper, a través de la reconstrucción del conflicto, con el estigma de pueblo cocalero, pueblo guerrillero y pueblo paramilitar “que la guerra les ha heredado”. Este sentir colectivo se compagina con el fenómeno de “estigmatización” que el CNMH ha resaltado y conceptualizado a través de diferentes trabajos, como factor “legitimador” del cual se sirvieron los diversos actores armados para perpetrar afectaciones violentas sobre la población civil. En la Comuna 13 de Medellín, además de dar cuenta de una forma particular de desplazamiento forzado (intraurbano) y de desnaturalizar la violencia e introducir la comprensión de sus significados en tiempos y por actores distintos (que deje de prevalecer la afirmación: “estamos viviendo lo mismo”), se busca también levantar los estigmas sufridos por la Comuna como espacio urbano y por los jóvenes como generación, en un contexto violento.

Los casos de San Carlos y Granada hacen especial énfasis en la visibilización de sus respectivos escenarios, en los cuales fue central *la resistencia civil en medio de la confrontación armada, el papel de los aprendizajes en los procesos de reparación integral y la capacidad de la solidaridad y el trabajo colectivo en la búsqueda de la paz en el territorio.*

Otros estudios tienen como propósito *el aporte más directo a la acción de la justicia y de la normatividad públicas*. El estudio de Arauca se orientó por la orden del Tribunal Superior de Bogotá al CNMH de documentar “los crímenes sexuales como crímenes de

guerra y de lesa humanidad” del bloque paramilitar Vencedores de Arauca (BVA), haciendo posible la comprensión de episodios de violencia sexual como crímenes internacionales, desde el diálogo entre las categorías jurídicas y la perspectiva de memoria histórica. El estudio de Tibú se inscribe en el marco de un compromiso del Gobierno nacional con la Corte Constitucional dirigido a la superación del estado de cosas inconstitucional que persiste en varios territorios, por cuenta del desplazamiento forzado. Tibú forma parte de ese propósito, al ser un caso de éxodo masivo generado por las masacres (30 masacres, que en menos de 7 años provocaron el desplazamiento de más de 30.000 personas). El caso de El Castillo, Meta, busca conceptualizar y sustentar un fenómeno bastante extendido en la geografía nacional pero no reconocido como específico por la normativa del Estado: el desplazamiento forzado que, por masivo, sistemático y logrado a través de diversos tipos de violencia y miedos, tiene como efecto el “arrasamiento” de la población y el “vaciamiento” del territorio. Con ello se le plantea al Estado la necesidad de reconocerlo como un tipo de desplazamiento específico sujeto a una “atención diferencial y especializada”.

LAS GEOGRAFÍAS

El ámbito espacial abordado por los estudios de MH tiene dos facetas:

De una parte, el foco puede pensarse desde *el punto de vista del ordenamiento territorial*. Este se despliega en diferentes escalas: desde una inspección (El Placer), una bahía-puerto (Bahía Portete), un corregimiento (El Salado), una comuna urbana (Comuna 13), un municipio (Trujillo, Buenaventura, El Castillo, Granada, San Carlos, Bojayá y Tibú), un par de municipios (Remedios y Segovia) y un departamento (Arauca).

De otra parte, la geografía de las memorias regionales abarca todos *los puntos cardinales y está referida a territorios excluidos de los beneficios del desarrollo y el bienestar*, con una muy precaria

presencia Estado. Se proporciona una geografía diferenciada en el siguiente sentido:

- a. *Territorios de asentamientos campesinos que datan inclusive del siglo XIX e insertos en las redes de los partidos tradicionales:*
 - Donde entran las guerrillas más tardíamente, como guerrillas endurecidas y solo con motivaciones militares (a partir de la década de 1990) (El Salado).
 - Donde entra el narcotráfico como principal actor de violencia (fines años ochenta y comienzo década de 1990) (Trujillo).
 - Donde están en juego infraestructuras de importancia nacional -hidroeléctricas y ejes viales- (Granada y San Carlos).
- b. *Territorios de piedemonte llanero y de colonización campesina de mediados siglo XX:*
 - Donde confluyen procesos colonizadores de fuerte influencia del Partido Comunista y emparentados con los orígenes de la guerrilla (El Castillo).
- c. *Territorios de frontera internacional asociados a enclaves petroleros y a la expansión de la coca:*
 - El Placer, Tibú y Arauca.
- d. *Territorios de la frontera étnica de la nación:*
 - Territorio de población indígena situado en una “frontera étnica” de la nación, sin presencia previa de guerrilla. La llegada de los paramilitares es impulsada por una estrategia de expansión territorial dirigida a la explotación de economías ilegales (aun después de iniciar procesos de desmovilización, en la década de 2000) (Bahía Portete).
 - Territorio de población afrodescendiente e indígena con presencia previa de guerrillas, donde se privilegia las economías legales e ilegales, que perpetúan las condiciones de exclusión histórica de las comunidades (Buena-ventura y Bojayá).
- e. *Territorios urbanos:*
 - Territorio urbano construido a lo largo del siglo XX, con población migrante y desplazada de áreas rurales y urbanas, con presencia de milicias y donde otros actores armados in-

cursonian para controlar economías ilegales y corredores entre la ciudad y regiones de acceso al mar (Comuna 13).

- Buenaventura, como ciudad-puerto desarrollada especialmente en la segunda mitad del siglo XX, y que también comparte el ser territorio étnico.

LAS TEMPORALIDADES

Todos los trabajos realizan un minucioso “análisis de contexto” de la trayectoria de los conflictos sociales, políticos y armados en la mediana duración —distintos cortes de tiempo entre 1980 y 2013—, con lo que no solamente es posible darle el sentido territorial, político y de violencia al evento específico enfocado en cada caso, sino que además le aporta a las víctimas y a toda la sociedad colombiana la memoria de las dinámicas, orientaciones e impactos de las violencias vividas en los distintos territorios. Las temporalidades cambian según el enfoque temático y el carácter y significado del evento violento que se estudia. Se encuentran tres maneras de abordar la temporalidad:

- Una masacre como evento puntal y nodo a partir del cual la dinámica de los actores se inscribe en un contexto más amplio —un antes y después—. Se privilegia la corta duración (horas o días) y una narración minuciosa y detallada de repertorios de violencia y se la acompaña de una contextualización de un antes y un después que puede extenderse entre un quinquenio o una década respectivamente (El Salado, Bahía Portete, Bojayá).
- Un conjunto de masacres como hitos que abarcan hechos conexos y que se extienden en una mediana duración entre 9 y 15 años (Trujillo y Remedios y Segovia).
- Procesos de desplazamiento forzado en períodos de confrontación entre actores armados, o períodos de sucesión de hegemónías o disputas de actores armados, en lapsos que pueden extenderse entre 10, 15 o 20 años (San Carlos, Comuna 13, Granada, Tibú, El Castillo, Arauca, el Placer, Buenaventura).

LOS FOCOS TEMÁTICOS

Los trabajos suelen focalizarse en un evento o una serie de eventos violentos que se piensan como “casos emblemáticos” y que, por sus características, aportan elementos específicos a la comprensión de la complejidad de los aspectos que configuran los hechos violentos asociados al conflicto armado en Colombia. Al respecto, se presentan tres clases de focos temáticos:

- a. El carácter y el significado de las masacres. Casos: Trujillo, El Placer, El Salado, Bahía Portete, Bojayá, Remedios y Segovia.
- b. El carácter y el significado del desplazamiento forzado. Casos: El Castillo, San Carlos, Granada, Tibú, Comuna 13 y Buenaventura.
- c. El enfoque de género y la violencia sexual. La violencia sexual del Bloque Vencedores de Arauca se convierte en el objetivo central del estudio en esa región. El estudio de El Placer distingue según género las maneras en que el Bloque Putumayo de las AUC ejerció la violencia y las formas en que la población la vivió. En Bahía Portete el estudio de la violencia sexual es el eje del estudio de los repertorios y del análisis de la desestructuración de la comunidad, hasta tal punto que la violencia sexual acaba siendo también violencia étnica.

LOS ACTORES VICTIMIZANTES

Generalmente el foco de la violencia estudiada se sitúa en los paramilitares (masacres de El Salado y Tibú; masacre y violencia de género en Bahía Portete; violencia sexual ejercida por los bloques BVA y Bloque Sur Putumayo; arrasamiento y vaciamiento en El Castillo; desplazamiento forzado en la Comuna 13, Tibú y San Carlos). La mayoría de los informes se centran en la incursión de grupos paramilitares en territorios con presencia previa de guerrillas, donde estas habían logrado establecer por un período significativo dominio o hegemonía (El Salado, San Carlos, Granada, Comuna 13, Tibú, Arauca, El Castillo, El Placer) o inclusive, en

territorio donde ni siquiera habían tenido presencia alguna (Bahía Portete). Se trata de un actor armado que cambió el balance de fuerzas y propició una degradación o profundización de las acciones violentas contra de la población civil a través de masacres, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y toda clase de sevicias adjuntas.

La fuerza pública es otro de los actores victimizantes presente en todos los relatos. Su participación como actor victimizante se evidencia bajo tres modalidades. La primera tiene que ver con la manera como miembros del Ejército y la Policía se involucraron en estructuras criminales compuestas además por narcotraficantes, sicarios y grupos paramilitares locales, propias de un paramilitarismo “de primera generación”, entre la década de 1980 y finales de la década de 1990. La segunda se refiere a las modalidades en que por acción o por omisión la fuerza pública fungió de aliada de los grupos paramilitares “de segunda generación”. La tercera está directamente relacionada con hechos violentos ligados al desarrollo de operaciones militares de gran envergadura y a las ejecuciones extrajudiciales.

Las guerrillas aparecen como el principal actor victimizante solo en contados casos: cuando hicieron uso de armas no convencionales y fueron los directos responsables de una masacre (Bojayá); cuando protagonizaron la destrucción del casco urbano con carro bomba (Granada); cuando en el período de disputa con paramilitares se visibiliza el uso de masacres, asesinatos selectivos y siembra de minas antipersonales (Tibú y San Carlos). Es preciso señalar que, en los demás casos, la visibilización de su protagonismo es secundaria y está referida como antecedentes o contexto de los hechos violentos focalizados; la generalidad de las veces se alude a su responsabilidad en los hechos violentos de manera indirecta: como comprometida en la estigmatización de la población (y por tanto en volverla objeto de la violencia paramilitar o de la fuerza pública).

Las estructuras criminales conformadas por narcotraficantes y grupos armados denominados bandas criminales aparece también como actores victimizantes de la siguiente manera: En el caso

de Trujillo y en tiempos de los carteles de la droga, con la ejecución de asesinatos selectivos, torturas, masacres y desapariciones forzadas, con el fin de consolidar el negocio del narcotráfico mediante el control de rutas de transporte y el despojo de tierras y de empotrarse en el poder local. En los casos de Tibú y Buenaventura se hace especial énfasis en el papel jugado por los grupos armados que se conforman o adquieren protagonismo después de la desmovilización de los bloques paramilitares y el repliegue de las guerrillas a partir de 2003. Aunque en la mayoría de los territorios analizados persisten situaciones de violencia en manos de estas estructuras, solo en los casos de Tibú y Buenaventura hacen parte del foco como actores victimizantes, pues la temporalidad de estos estudios abarca el conflicto que persiste asociado al control del territorio y de las economías legales e ilegales —especialmente de cultivos ilícitos, narcotráfico y contrabando— hasta nuestros días.

EL MODELO ANALÍTICO DEL GMH - CNMH EN LAS MEMORIAS REGIONALES

Todos los trabajos realizan un minucioso “análisis de contexto”. Este hace referencia a la descripción, análisis y planteamientos que los estudios realizan sobre: a) los antecedentes socioeconómicos, políticos y culturales que las sociedades muestran antes que el conflicto armado se cerniera sobre ellas; b) los distintos actores civiles y armados comprometidos en el conflicto armado y la trayectoria de las acciones y confrontaciones armadas con sus respectivas periodizaciones; y c) la manera como involucran y vulneran a las poblaciones. Con lo anterior, los estudios buscan mostrar el sentido territorial, económico, social, político y armado que tiene los intereses comprometidos en las violencias emblemáticas que se enfocan en cada estudio, y aportarle a las víctimas y a toda la sociedad colombiana, la memoria de las dinámicas, orientaciones e impactos de las violencias vividas en los distintos territorios en los respectivos lapsos abordados. En los casos en que se presentan tensiones internas a las comunidades por haber miembros de las mismas involucrados como perpetradores de los hechos violentos, se busca también aportar el contexto suficientemente amplio y complejo para que las generaciones presentes y siguientes estén en capacidad de “comprender cuáles son los factores que llevan a que algunos seres humanos (vecinos, prójimos, paisa-

nos, *arijunas*¹, funcionarios estatales, hombres armados) cometan atrocidades en contra de otros que se encuentran en estado de indefensión” (CNRR-GMH, 2010, página 196) y, con ello, poder desactivar factores que puedan obstaculizar la no repetición.

Los informes responden a objetivos específicos que hacen que, en la estructura general de los textos, el lugar que ocupa el desarrollo del “contexto” del conflicto armado varíe de uno a otro caso. Sin embargo, el GMH y luego el CNMH han seguido desde su origen un modelo de análisis a propósito de esos “contextos” y del análisis general del conflicto armado en los territorios, el cual se puede caracterizar como:

- Caracterización de los hechos a propósito del tema-foco del estudio.
- Descripción y análisis del cuadro de conflictos sociales y violentos antecedentes al período del conflicto armado abordado en cada región.
- Descripción y análisis del cuadro de conflictos que configuran el nodo del conflicto armado analizado.
- Descripción y análisis de la trayectoria de los conflictos, actores, motivaciones y repertorios que configuran el conflicto armado en la región; con base en ella se puede diferenciar procesos, hitos y consecuencias de las violencias en el territorio.
- Descripción y análisis de las dinámicas nacionales y macro-regionales del conflicto armado tanto como de las políticas del Estado que han estado directamente asociadas a los vaivenes del conflicto armado en cada lugar.

Esos contenidos, suelen estar distribuidos en la introducción, los hechos, el contexto, las memorias y las conclusiones.

ÉNFASIS Y DIFERENCIAS EN LA APLICACIÓN DEL MODELO

Si bien la lectura de los estudios permite establecer el modelo de análisis anteriormente enunciado, cada estudio sigue sus propios ritmos, énfasis y particularidades. Aquí se destacarán dos

1 "Hombres blancos y fuerzas extrañas" (CNRR-GMH, 2010).

asuntos acerca de los cuales se muestran algunas peculiaridades: el que toca con los componentes del modelo y el relacionado con la construcción y uso de conceptos.

- a. Un grupo significativo de los estudios tienen la “marca” del modelo analítico enunciado. Son los que hacen un énfasis sobresaliente en “el contexto”, para el que juegan papel central tanto los procesos antecedentes y del propio conflicto violento en cada lugar y su entorno inmediato, como el análisis de las dinámicas y lógicas del conflicto y la política del nivel nacional. Los dos estudios hechos sobre la región Pacífico (Bojayá y Buenaventura) incluyen un ingrediente adicional y clave para ese par de casos, y es una exposición amplia a propósito del carácter del territorio, como territorio de exclusión histórica de la nación, al tiempo que base de la tríada territorio-naturaleza-cultura propia de las comunidades étnicas que lo habitan, que luego servirá de base a la comprensión del papel jugado por el Estado y los actores económicos y armados de carácter nacional y las resistencias agenciadas por las comunidades afrodescendientes y sus acompañantes. Hay otros estudios que no tienen la “marca” del modelo. Son de dos tipos: a) los que hace Corporación Región (Granada, San Carlos y Comuna 13), que profundizan en el caso local y hacen una contextualización regional, pero que no incluyen contextualizaciones fuertes del nivel nacional; y b) el caso de Arauca, es necesario decirlo, muestra vacíos en la contextualización del conflicto regional, tanto como en la caracterización general de la economía y la sociedad regionales².

2 Para este balance tal cosa se hizo especialmente notoria a la hora de caracterizar la sociedad regional antes y después del conflicto. Tiene generalizaciones sobre lo ganadero y las tradiciones comunales en las sabanas, pero sobre la economía campesina del piedemonte no hay desarrollo (distinto a la colonización del Sarare que es apenas una esquina de Arauca y una coyuntura específica). Tampoco hay referencias a qué transformaciones acarrió el conflicto armado en el territorio. Y con respecto al propio conflicto armado, el foco se concentra en las AUC y las FARC, dejando un gran vacío sobre el ELN (solo menciones puntuales), guerrilla que tuvo en Arauca uno de sus nichos históricos de control, dominio y de exacción de rentas.

- b. El GMH y el CNMH han aportado a través de los estudios una serie de categorías conceptuales que son resultado del conocimiento paulatino que han logrado construir a lo largo del tiempo sobre ciertos procesos claves. Sin embargo, se encuentra una cierta intermitencia o discontinuidad en su uso. Tal cosa se explica porque cada estudio está a cargo de un grupo de responsables específico, cada uno con sus propios enfoques y conceptos. Ellos, aunque sujetos a las pautas generales requeridas por todos los estudios, no necesariamente mantienen el mismo interés en el desarrollo de conceptos particulares. No obstante esa intermitencia en la aplicación de los conceptos, este balance los resalta, se apoya en ellos a la hora de analizar los procesos de reconfiguración territorial resultantes del conflicto armado, y los rescata en los casos que no se mencionan pero que sí son pertinentes. Esto sucede en especial con los conceptos que denotan procesos bastante extendidos en el territorio nacional, como los de “arrasamiento por vaciamiento” y “descampesinización”.

LOS CASOS COMO ESTRATEGIA

Los estudios de MH que alimentan las memorias regionales del conflicto armado están hechos generalmente sobre casos locales, los cuales van desde una inspección o un corregimiento a un municipio la mayor parte de las veces. Son unidades espaciales muy pequeñas para la envergadura del territorio nacional que se quiere abarcar en el trabajo de memoria histórica. No obstante, esta estrategia parece bastante acertada:

En primer lugar, porque cada caso, por pequeño que sea, es tratado con una contextualización del conflicto armado que no solo incluye los entornos subregionales más cercanos, sino también los regionales y macrorregionales, al igual que el nacional, todos ellos tratados por lo general con precisión. Eso garantiza que la comprensión de los hechos puntuales sobre los cuales se centran los trabajos de memoria se extienda también a los de la dimensión regional.

En segundo lugar, porque el abordaje local garantiza el que se pueda profundizar en la complejidad —en número e interacciones— de los factores que operan en la configuración de los hechos emblemáticos de la violencia que se convierten en los hitos de la memoria colectiva y, por tanto, garantiza el esclarecimiento de los hechos violentos focalizados y la manera como impactaron en sus víctimas y su entorno.

En tercer lugar, porque el tratamiento según casos posibilita una selección suficientemente diferenciada de manifestaciones sobre el qué, el cómo y el porqué de ese conflicto armado, sobre las maneras de afectar territorios y víctimas y sobre las formas como estas se sobrepone, resisten y reconstruyen sus vidas y comunidades. Cada caso se constituye en la práctica como en “una excusa” para profundizar alguna característica importante de conocer en detalle, sin que todos ellos, en conjunto, dejen de mostrar lo que atraviesa al territorio nacional: los horrores de los asesinatos, las masacres, las desapariciones, los desplazamientos, la degradación de la guerra, más los actores, espacialidades y temporalidades bajo las cuales desplegaron sus violencias.

La particularidad que sobresale en cada caso estudiado es:

- El Placer: se profundiza la estigmatización —analizada en hechos y lenguajes (hablados y corporales)— sufrida por hombres y mujeres bajo las sucesivas “leyes” de guerrillas y paramilitares, las respectivas normatividades impuestas en la vida cotidiana y las resistencias silenciosas pero cotidianas que hombres y mujeres desplegaron frente a las mismas. Se trata del examen de la vida cotidiana, desde un enfoque de género aplicado a la estigmatización, fenómeno que golpeó a todas las comunidades del país que habitaron territorios dominados por unos y otros armados ilegales a través de los tiempos.
- El Castillo: profundiza un triple proceso asociado al conflicto armado: el arrasamiento de la izquierda democrática, el vaciamiento del territorio y la descampesinización, en un territorio de histórica presencia de autodefensas de izquierda, de influencia originaria del Partido Comunista (PC), de

guerrillas liberales y de íntima relación con Casa Verde, refugio y base general de las FARC hasta 1990. Es un territorio en el que asesinatos, masacres y desplazamientos tienen una orientación política muy definida.

- Tibú: profundiza también los procesos de arrasamiento con vaciamiento del territorio y de descampesinización, en un territorio de importante influencia del Partido Comunista, de organización y movilización social y de presencia guerrillera. La particularidad de Tibú radica en que la orientación de arrasamientos, vaciamientos y descampesinización es el interés “rentista” de guerrillas, paramilitares y bandas criminales que se disputan el control de los cultivos y del narcotráfico en zona de frontera internacional y punto culminante del corredor que atraviesa el norte de Colombia: Urabá-Tibú.
- El Salado: evidencia cómo se asocian los procesos de arrasamiento con vaciamiento y descampesinización con la manera en que se engancha “el paramilitarismo de primera generación” —sustentado en grupos armados por las mismas élites locales y regionales— con “el paramilitarismo de segunda generación” de las AUC y la imbricación con la parapolítica. Además muestra cómo después de la barbarie de la masacre en El Salado y las masacres en serie en su entorno regional, las FARC siguieron impertérritas con el control del territorio casi 10 años más.
- Remedios/Segovia: profundiza un caso de arrasamiento de la izquierda democrática en un territorio de tradición del Partido Comunista, presencia del ELN, intensa movilización social, en el que la violencia se asocia a un proceso paralelo de configuración del “paramilitarismo de primera generación” que no emerge de élites locales o regionales sino directamente de las fuerzas militares del Estado, que lo articulan a lo largo de 14 años.
- Trujillo: muestra la violencia política y el despojo de tierras, donde la violencia es ejercida por “el paramilitarismo de primera generación”, pero esta vez agenciado por grupos armados de narcotraficantes en asocio de las fuerzas armadas del Estado.

- Arauca: focaliza la atención en la violencia sexual ejercida por las AUC durante el período que dominó en este territorio y analiza y documenta con detenimiento y precisión algunos casos a partir de los cuales es posible conocer diferenciadamente los repertorios que en este campo utilizan los distintos actores armados (guerrillas, paramilitares y el mismo Ejército). La contextualización que hace de este problema en la región también permite mostrar cómo “la violencia sexual no emerge como una forma novedosa de violencia ejercida exclusivamente por los actores armados, sino que hace parte de un continuum de violencias contra ellas que puede llegar a exacerbase en escenarios de conflicto armado” (CNMH, 2015d, página 116).
- Bahía Portete: aquí también se profundiza en la violencia sexual, pero en esta ocasión en un contexto en el que esta asume todas las características de una violencia étnica ejercida por los paramilitares de las AUC (que entran al territorio sin que haya siquiera guerrillas) y que escogen fríamente como repertorio central de su violencia, la sexual contra mujeres líderes de la comunidad wayúu, dadas las consecuencias desestructurantes que la misma tiene sobre el conjunto de la sociedad, incluidos muy especialmente los liderazgos femeninos y la capacidad guerrera de los hombres. Este caso también permite profundizar en la manera como se relaciona la violencia paramilitar “de segunda generación” con la “violencia posdesmovilización” en la que los primeros siguen su camino de violencia y actividades económicas ilegales sin solución de continuidad.
- Bojayá: profundiza en el caso de “una guerra sin límite” (caso de extrema crueldad en el que después de cometida la masacre, la confrontación se prolonga por 5 días más por encima físicamente de los mismos muertos y de la comunidad). La víctima fue un grupo étnico, sujeto colectivo, en un territorio caracterizado por una violencia estructural e histórica. Como “guerra sin límite” provee el caso en que se condena por “crímenes de guerra” a ambos bandos de la confronta-

ción (FARC y paramilitares) y en el que el Estado no queda exento de responsabilidad en función de ese abandono histórico del territorio. También provee un caso de análisis sobre el uso político de una masacre (“una de las mayores tragedias humanitarias en Colombia”), por parte de actores tan variados como el mismo Estado (contra las FARC), y las organizaciones de derechos humanos (contra el Estado).

- Buenaventura: también un territorio de violencia estructural e histórica y de comunidad étnica afrocolombiana; aquí se profundiza en la manera como se ligan la violencia paramilitar “de segunda generación” con la “violencia pos-desmovilización”, y se evidencia la doble condición paramilitar-mafiosa de los actores “sin rostro” que han agenciado la violencia urbana en este puerto. Por centrarse en el período más tardío de la violencia en Colombia (2000-2013), permite conocer los casos de crueldad extrema y más degradada en que han caído nuestras guerras.
- Granada y San Carlos: proporcionan casos que permiten apreciar lo común y lo diferente que en términos violencias y resistencias plantea el conflicto armado en periferias de regiones centrales y territorios muy cercanos a una ciudad metropolitana y a infraestructuras de movilidad y de energía del nivel nacional.
- Comuna 13: permite conocer cómo se configura y desarrolla el conflicto armado en la periferia de una urbe colombiana, en donde los operativos militares por parte del mismo Estado se constituyen en el hito de la violencia y de las memorias que asumen el primer plano en este territorio, que tuvo desde los años 1980 actores armados.

3

CONFLICTO Y TERRITORIO

Este capítulo se concentra en la relación “territorio y conflicto armado”. Se trata de identificar cómo se imbrican los factores socioespaciales en las dinámicas y orientaciones que toma el conflicto y sus violencias a través de los tiempos y el territorio nacional, así como también los efectos socioespaciales que tal conflicto produce sobre el mismo territorio. Para ello se retomaron dos grandes líneas de análisis: a) la que focaliza el análisis en los factores que están en la base del *desencadenamiento de las violencias* estudiadas por MH, desde una perspectiva que permite dilucidar las tendencias en la manera como los factores de carácter nacional se imbrican (o no) con los factores locales; b) la segunda línea de análisis se centra en los resultados territoriales que esos conflictos y violencias tienen en las localidades y regiones abordadas, desde una perspectiva que pone en evidencia dos cosas: los procesos de los niveles nacional y local que intervienen como desencadenantes de las reconfiguraciones territoriales, y *el resultado socioespacial de tal reconfiguración*.

EL DESENCADENAMIENTO DE LAS VIOLENCIAS EMBLEMÁTICAS: ENTRE LO LOCAL Y LO NACIONAL

Todo lugar se construye con base en la confluencia de procesos de diferente condición socioespacial: los propios y particulares del

lugar y los que desde otras escalas más amplias (regionales, macro-regionales, nacionales o internacionales) inciden en su producción, orientación y dinámica. A su vez, no hay dinámica social exenta de conflicto. De ahí que en los casos de violencia abordados por MH ocupe un papel muy especial la relación entre lo local y lo nacional en *el desencadenamiento* de los hechos de violencia emblemáticos.

Dentro de la variedad de factores que intervienen en el desencadenamiento de las violencias, este balance analiza las diferentes combinaciones que los casos presentan a propósito de esa relación entre factores locales y nacionales. Desde el ángulo de lo local, se observan los conflictos locales tal como se presentan en cada dinámica territorial; ellos pueden jugar o no en el desencadenamiento de las violencias emblemáticas; además si juegan, no necesariamente lo hacen de la misma manera y con el mismo significado. Desde el ángulo de lo nacional, se identifican las orientaciones o virajes más generales que, desde dos clases de fuerzas, pueden incidir en cada dinámica local: a) las que proceden de las decisiones estratégicas en la racionalidad de los actores armados nacionales comprometidos; y b) las que provienen de las decisiones de política pública nacional (como producto de las presiones del mismo conflicto, o de los convencimientos colectivos sobre transformaciones a introducir en los modelos económicos, políticos o sociales que estructuran nuestra forma de ser nacional).

Con base en un análisis comparado de los 13 casos abordados, se señalan a continuación los cuatro tipos de vectores que se muestran relevantes como tendencias de esa interacción; al final, se expondrán las conclusiones que se infieren a propósito de la relación conflicto y región.

1) **Tendencia uno.** Casos en los que se presenta una coyuntura nacional que catapulta un cuadro de conflictos locales antecedentes transformándolos y produciendo los hechos de violencia emblemáticos focalizados por MH. Dentro de esta característica común —compartida por Remedios/Segovia, El Castillo 1 y El Castillo 2, El Salado y Granada— es interesante resaltar diferencias con respecto al carácter político o militar de la coyuntura nacional y a la temporalidad de la misma.

- En los casos de Remedios/Segovia y de El Castillo fase 1³, *la coyuntura nacional tiene un carácter político y es más temprana* (son los años 1980 con los diálogos de paz, la apertura democrática y la elección popular de alcaldes), y *los conflictos locales históricos* (configurados por la competencia política liberal/conservadora/comunista de antes de 1980) *se transforman por el reto electoral que plantea la Unión Patriótica (UP)*. Como resultado de ello —por reacción— se producen sucesivas y sistemáticas acciones paramilitares (en la modalidad que se ha denominado “de primera generación” en la que la fuerza pública asume un papel protagónico, aunque oculto) y acciones guerrilleras que de manera coercitiva intervienen en las dinámicas democráticas de las gestas electorales y de la movilización social de protesta, profundizando con ello la estigmatización de civiles y líderes de izquierda. En ambos casos regionales el blanco de la victimización es igualmente político —el arrasamiento de la izquierda democrática y de la movilización social— y se cuenta con fuertes vínculos local-regionales. El arrasamiento de la izquierda democrática es el resultado.
- En los casos de El Salado y Granada, *la coyuntura nacional tiene un carácter político-militar y se da en una temporalidad intermedia* (es la época del cambio de siglo, finales de los años 1990 y principios de los años 2000) cuando es el “paramilitarismo de segunda generación” el que se configura y arremete (las AUC). *Los conflictos locales* que también inciden en el desencadenamiento de los hechos emblemáticos de violencia (HEV) son *exclusivamente coyunturales y asociados a las acciones guerrilleras* en el plano extorsivo y de violencia (a élites locales-regionales en El Salado), o a sabotaje y afectación de infraestructuras nacionales (energéticas y viales en Granada) y sustentan el apoyo al nuevo actor AUC

3 Se ha analizado El Castillo en las dos fases del conflicto armado que el estudio de caso permite diferenciar: antes y durante el “desplazamiento duro”. Separarlos analíticamente es muy productivo, pues permite ver dos momentos diferentes tanto de la acción de factores desencadenantes de violencias, como de resultados en los sucesivos momentos de su reconfiguración territorial. La anterior decisión se apreciará a lo largo de este acápite y del siguiente.

(por llamado de las élites en El Salado, o apoyo o connivencia de las Fuerzas Armadas en Granada), que convierte en el blanco de la victimización a la población civil. Su interés es el control del territorio. El vaciamiento del territorio es el resultado.

- En los casos de Comuna 13 (Medellín), San Carlos, y Tibú, *la coyuntura nacional también tiene un carácter político-militar y se da en una temporalidad intermedia* (es la época del cambio de siglo, finales de los años 1990 y principios de los años 2000) cuando es el “paramilitarismo de segunda generación” el que se configura y arremete (las AUC). Por contraste con la tendencia anterior, *los conflictos locales*, que de alguna manera se engarzan en la coyuntura nacional en que se desencadenan los HVE, *son de dos tipos*:
 - a) Los de la misma coyuntura, que se asocian a las acciones guerrilleras en el plano extorsivo y de secuestro, de sabotaje a infraestructuras y elecciones, o al aprestamiento de los ejércitos para “la guerra urbana” que se cierne en el horizonte (caso Medellín); y b) Los que denominamos “históricos”, que vienen de tiempos anteriores y que son de variada especie según el lugar⁴.
- En el caso de El Castillo fase 2 (2002-2005), *la coyuntura nacional es también de carácter político-militar y se da en una temporalidad intermedia* (la arremetida de las AUC al final de la zona de distención). Los conflictos locales antecedentes (los propios de la fase 1) ya están violentamente “resueltos” (arrasamiento izquierda democrática a favor de las élites políticas y mafiosas locales). El nuevo actor (AUC) entra con una lógica exclusivamente militar y de doble propósito: anti-insurgente y para extender territorios de control del narcotráfico. La población civil es el blanco de la victimización. El vaciamiento del territorio es el resultado.

4 Asociados a la presencia temprana de las guerrillas y su demostración de control territorial -como en la Comuna 13- o a su impacto sobre las dinámicas de movimientos cívicos locales, su represión y consiguiente engrosamiento de las filas armadas con antiguos líderes cívicos -como en San Carlos-; asociados también a la imposición de una economía basada en la coca y el narcotráfico -como en Tibú-, o a la intervención del Estado en el desencadenamiento de conflictos locales con la vulneración de los territorios y la comunidad étnica Barí -también en Tibú.

2) **Tendencia 2.** Caso en el que lo determinante es una coyuntura local de conflictos políticos, económicos y militares en una temporalidad temprana (fines de los años 1980 y principios de la década de 1990) y cuyos protagonistas armados (el naciente cartel narcotraficante del norte del Valle) se valen de una coyuntura nacional como “contexto de oportunidad”⁵ (la ideología de la seguridad nacional y la lógica antiinsurgente de las FF. AA.) para poner a su servicio una alianza con las FF. AA. locales y desencadenar la violencia en la localidad con fines políticos, económicos y militares. Es el caso de Trujillo. Allí, sin arrasar población ni vaciar el territorio pero con una masacre y asesinatos selectivos, los narcotraficantes logran el control político local; con el despojo de tierras cambian el uso de la misma; y mediante la confrontación al ELN logran desplazarlo y controlar el Cañón de las Garrapatas.

3) **Tendencia 3.** Casos en los que es exclusivamente una coyuntura político-militar nacional en una temporalidad intermedia (el cálculo estratégico de las AUC en su arremetida a las retaguardias de las FARC en el oriente de Colombia —Amazonía y Orinoquía— y el Caribe), la que determina la producción de los hechos de violencia emblemáticos estudiados por MH, sin que los conflictos locales allí precedentes determinaran o se engarzaran de alguna manera con los componentes de la coyuntura político-militar de finales de los años 1990.

- En el caso de El Placer (una inspección), los conflictos antecedentes estaban relacionados con los grupos comprometidos con el negocio de la droga: los hubo entre narcotraficantes (Gacha contra el Cartel de Cali, y entre Gacha y las FARC en los años 1980; y luego entre Masetos —grupo paramilitar traído por Gacha— y las FARC a principios de la década de 1990). El objetivo de las AUC era lograr el control del territo-

5 Es diferente la calificación y significado de una coyuntura nacional como desencadenante de procesos de violencia, a una coyuntura nacional que opera como contexto de oportunidad. En la primera, el factor referido juega dentro de una cadena directa de causalidad; en la segunda juega como un contexto que —en sus cálculos racionales— los actores aprovechan (para “justificar” su acción, para intentar ganar en posibilidades de éxito de su acción).

rio y la población y, por tanto, también y, en primer lugar, del negocio del narcotráfico y los cultivos de coca. El Placer les sirvió de “base paramilitar” en el bajo Putumayo. El resultado es el sometimiento total de la población por medio del terror.

- En el caso de Arauca (un departamento), tampoco parecen contar los conflictos sociales antecedentes en el desencadenamiento de la incursión paramilitar y sus violencias, en tanto se trataba de un territorio donde la hegemonía de las guerrillas ELN y FARC se sustentaba en la alianza y aquiescencia de las élites locales. Lo único reportado eran los enfrentamientos militares entre FF. AA. y guerrillas donde los muertos eran combatientes (CNMH, 2015d, páginas 98-99 y 160-161)⁶. Los objetivos de las AUC fueron dos: el antiinsurgente y el acceso y control del negocio del narcotráfico y los cultivos de coca en manos de las guerrillas. El resultado es el control del 60 por ciento del territorio, ejercicio del terror sobre la población civil y de violencia sexual contra mujeres como crimen de guerra (documentada y judicializada).

4) **Tendencia 4.** Casos en los que el desencadenamiento de los hechos emblemáticos de violencia estudiados se produce en función de *la asociación entre una coyuntura nacional de carácter político militar* por parte de guerrilleros y paramilitares (convertir el Pacífico colombiano en corredor estratégico de acceso sur-norte de Colombia y occidente-mar), y la condición que el propio territorio aporta en tanto territorio de población étnica ancestral sometido a una “violencia estructural” e “histórica” y, por tanto, “facilitador” del proceso de su conversión en “frontera de guerra”.

- El caso de Bojayá *no presenta conflictos locales antecedentes que participen o se engargen* en la disputa armada mayor que se desencadena con la irrupción paramilitar y la contraofensiva guerrillera. Es un territorio en el que los actores legales e ilegales (los no

6 Las violencias contra la población civil parecieran no haber contado en la configuración de un campo de conflicto de defensa de la vida y los derechos humanos durante la hegemonía guerrillera. Y la violencia contra la UP fue ejercida en los años 1990 por grupos paramilitares y bandas de sicarios muy en alianza con las FF. AA., “que surgieron y naufragaron”.

armados: los escasos y precarios institucionales y las compañías madereras; y los armados: las guerrillas) convivieron y se aprovecharon históricamente de la condición reinante de ilegalidad.

- Los casos de Buenaventura y Bahía Portete *sí aportan un conflicto local que se engarza con la acción de la coyuntura político militar del nivel nacional* (irrupción de las AUC) *y la condición de violencia estructural del territorio* que la facilitan. En Buenaventura, son las élites empresariales y narcos locales y regionales (interesados en el fin de la intervención guerrillera en los negocios del puerto) quienes llaman y apoyan a los paramilitares. En Bahía Portete es una de las dos familias en conflicto por el control ancestral del puerto natural en manos de los wayúu, a la que los paramilitares manipulan para lograr sus propios fines.

Los casos de Buenaventura y Bahía Portete muestran algo más: la irrupción abrupta de las AUC en la alta Guajira *se produce en la coyuntura más tardía en la que raya el fin de las AUC y se revela la transformación de los paramilitares en bandas criminales (bacrim)* (como se denominarán posteriormente los grupos armados que no se identifican en absoluto con una lucha anti-insurgente y que se dedican exclusivamente a los negocios del narcotráfico y de un amplio portafolio de negocios ilegales). ¡En Bahía Portete y alta Guajira jamás hubo guerrillas! En Buenaventura, el terror y la violencia se instauraron con las AUC, pero continuaron en la posdesmovilización, poniendo en evidencia directa cómo su Frente Pacífico no se entrega y se convierte (sin identificarse, “sin rostro”) en banda armada dedicada exclusivamente a los negocios ilegales. El resultado en ambos casos es el arrasamiento con vaciamiento.

Por último, se destaca un único caso en el que *un proceso de violencia local incide de manera directa e inmediata en la transformación de condiciones políticas frente al conflicto armado en el orden nacional e inclusive internacional*. Se trata de la masacre de Bojayá, a partir de la cual las FARC quedan definitivamente al descubierto como perpetradoras de crímenes de lesa humanidad y son declaradas por la Unión Europea como “terroristas”.

La Tabla 1 ilustra lo expuesto:

Tabla 1. Entre lo local y lo nacional: lo que pesa en el desencadenamiento de los hechos emblemáticos de violencia

Casos emblemáticos	Conflictos locales	Conflictos locales y coyuntura nacional de política pública	Conflictos locales de coyuntura y coyuntura nacional de conflicto armado	Conflictos locales históricos y de coyuntura y coyuntura nacional de conflicto armado	Peso exclusivo de la coyuntura nacional del conflicto armado	Coyuntura nacional de conflicto armado y de territorio de violencia "estructural"
Trujillo (masacre)	x					
El Salado (masacre)			x			
El Castillo (arrasamiento - vaciamiento)		x1			x2	
Remedios - Segovia (4 masacres)		x				
Granada (tierra arrasada)			x			
San Carlos (tierra arrasada)				x		
El Placer (masacre)					x	
Arauca (violencia sexual)					x	
Bojayá (masacre)						x
Bahía Portete (masacre)						x
Buenaventura (tierra arrasada)						x
Comuna 13 (desplazamiento)				x		
Tibú (tierra arrasada)				x		

Fuente: elaboración propia con base en la información de los 13 estudios de MH. Información más detallada puede verse en Anexo 2.

Para concluir:

La mayor parte de las veces (10 casos de 14)⁷, hay una fuerte imbricación entre las dinámicas locales y las nacionales en la base del desencadenamiento de las violencias emblemáticas, siempre asociadas a los períodos de mayor intensidad y crueldad de la violencia sobre la población. Dentro de ellos, las diferencias más importantes están entre: a) 2 casos marcados por una coyuntura nacional de carácter político (El Castillo 1 y Remedios/Segovia); en ellos la condición de los conflictos y la victimización también son abiertamente políticos (arrasamiento de la izquierda política y de la movilización y organización social); b) 5 casos en los que en el desencadenamiento de las violencias, cuenta la interacción entre una coyuntura nacional de carácter político-militar creada por los actores armados ilegales y conflictos locales de carácter más instrumental: en dos casos, los conflictos locales tienen que ver con la afectación de la infraestructuras del Estado (Granada) y la extorsión económica de las élites (El Salado); y en 3 casos con una condición consuetudinaria de violencia estructural sobre territorios étnicos (Buenaventura, Bojayá y Bahía Portete); dos de estos últimos, muestran además conflictos específicos entre actores presentes que tocan con el interés de dominar el territorio para el cabal funcionamiento de los negocios ilícitos (control de puertos marítimos en Buenaventura y Bahía Portete); y c) 3 casos en los que para el desencadenamiento de las violencias, cuenta la interacción entre una coyuntura nacional de carácter político-militar creada por los actores armados ilegales y la combinación de conflictos locales “históricos” y “coyunturales” de diversa especie (San Carlos, Comuna 13 y Tibú).

La interacción de contenido político se relaciona con una época más temprana —la de violencia política contra la UP— que es adelantada por los grupos paramilitares de “primera

7 Recuérdese que el caso de El Castillo se analiza en 2 momentos diferentes (El Castillo 1 y El Castillo 2), cada uno con sus características particulares. Por eso nos referimos a 14 “casos”.

generación”. La interacción de contenido más instrumental (intereses económicos legales en primera instancia, y luego de los puramente ilegales) se relaciona con una época posterior, cuando se organizan las AUC —paramilitares de “segunda generación”— comprometidas supuestamente con la lucha antisubversiva, pero que en los hechos muestran su faceta narcotraficante y su transición-mimetización en estructuras criminales dedicadas exclusivamente a los negocios ilegales. *Sólo en el oriente antioqueño* (Granada y San Carlos) la relación entre conflictos locales y coyuntura nacional pareciera mostrar *inicialmente una faceta político-militar más contundente* como vocación antisubversiva de las AUC, además de *conflictos locales asociados a un territorio con infraestructuras nacionales y al ser el entorno directo de la segunda ciudad capital del país*.

Los 3 casos que muestran lo nacional como determinante exclusivo y sin conflictos locales engarzados, tienen como característica común el ser territorios de hegemonía prolongada de la guerrilla en zonas de retaguardia (Bojayá y El Placer) y en una zona donde hasta entran en alianza con las élites locales (Arauca).

El caso que muestra lo local como determinante (Trujillo) tiene como característica particular el configurarse por la época como territorio narco, en el contexto de la formación del Cartel del Norte del Valle, un territorio que los narcotraficantes lograron mantener más “en exclusiva”, que en la otra gran mayoría de casos en los que “compartieron” territorio con guerrillas y luego con paramilitares AUC. Inclusive más tarde, cuando se forman las AUC y el Bloque Calima entra al Valle del Cauca, este territorio del norte del Valle se mantiene narco gracias al pacto que hicieron para que el Bloque Calima no entrara allí.

CONFLICTO Y RECONFIGURACIÓN REGIONAL

Al igual que el conflicto acompaña siempre la constitución y devenir de cualquier sociedad, la reconfiguración de regiones

es un proceso consustancial a la vida social, pues los espacios son abiertos en tanto lugares de interacciones sociales intra e interescales y donde están en permanente juego las relaciones de poder de las sociedades que los configuran. Los espacios son por tanto dinámicos y están sujetos a transformaciones en el tiempo. Por ello la reconfiguración de las regiones a partir del conflicto armado ha ocupado lugar central en los estudios de MH. En este balance se destacarán dos dimensiones de este proceso: los desencadenantes y los resultados en los procesos de reconfiguración territorial, puntualizando particularidades y tendencias.

Anotaciones metodológicas previas

Una cosa es pensar la reconfiguración de una región en particular, otra muy distinta es pensar las reconfiguraciones de las regiones (en plural) a lo largo y ancho del país en una perspectiva comparada que permita comprender diferencias y similitudes entre ellas. Como tratamos con territorios, estamos lejos de poder realizar relaciones simples y unidimensionales, como tampoco relaciones que impliquen la asociación de un mismo conjunto de variables con el mismo resultado en el tipo de reconfiguración. No. En cuestiones territoriales debemos ser claros en que tratamos con la “complejidad”, lo cual significa:

- a. No hay relaciones unicasales; siempre nos enfrentamos a un complejo conjunto de factores que, en su interacción, produce el resultado que intentamos comprender.
- b. De un territorio a otro varía el “complejo conjunto de factores”; y no siempre se repite la misma combinación para producir un mismo resultado.
- c. Pueden establecerse ciertas “tendencias” acerca de la manera como se asocian determinados factores en la producción de algún tipo de resultado; pero son tendencias parciales, que asocian uno o dos factores claves —y hacen abstracción de otros— en la producción de un resultado

determinado. Y ello solo referido cada vez a un grupo reducido de casos regionales.

Para emprender entonces el balance de los procesos de reconfiguración territorial que MH esboza en cada caso regional estudiado, se adoptan las siguientes consideraciones:

1. Se aborda el análisis en términos de reconfiguración del *territorio*: esto porque generalmente los casos de MH están referidos a una localidad específica de diferente envergadura (inspección, corregimiento, comuna, municipio, par de municipios, departamento) con referencias a las subregiones que pertenecen (El Castillo en el Ariari, El Placer en bajo Putumayo, Remedios/Segovia en el nordeste antioqueño, Granada y San Carlos en el oriente antioqueño, El Salado en Montes de María, Bahía Portete en alta Guajira, Tibú en Catatumbo y Bojayá en Atrato) y con alusiones de mayor o menor detalle a lo regional o macro-regional. De ahí que se adopte “lo territorial” para poder manejar esas diferencias de escala entre los estudios, sin hacer generalizaciones sobre lo regional, cuando este no fue el foco; sí se destaca lo regional en los casos en que sea posible.
2. Se hace una descripción sucinta de la *particularidad de los componentes comprometidos en la reconfiguración de cada caso*. Estos se sintetizan en la Tabla 2, que relaciona: a) los factores desencadenantes de la reconfiguración del territorio; y b) la reconfiguración territorial resultante. La información aportada por cada estudio de MH sobre las sociedades locales antes y después del conflicto armado podrá revisarse en el Anexo 3.
 - Se incluyeron como factores desencadenantes de los procesos de reconfiguración territorial, factores clave del conflicto armado y de la economía nacional/internacional. Al señalar solo factores clave como desencadenantes no se pretende reducir la reconfiguración territorial a una “causalidad” simple. Todo proceso territorial es por principio complejo y encadena variados

factores en la historia de larga, mediana y corta duración y que, en la exposición detallada de cada estudio publicado por MH, se desarrollan. Pero para identificar las lógicas más generales del proceso que puedan ser comparadas es indispensable atenerse a lo fundamental: actores y dinámicas que marcaron la inflexión en la manera de reconfigurarse la geografía del poder que se señala como la más característica del territorio estudiado por MH.

- *El resultado de la reconfiguración* se identifica y nombra a partir del proceso macro que lo define y de las dimensiones de la sociedad local que en cada caso fueron resaltadas en los estudios como parte sustantiva de las transformaciones.

A esa relación básica le sigue luego un análisis complementario hecho sobre dos dimensiones que sobresalen también dentro del conjunto complejo de factores que inciden en el proceso de reconfiguración territorial. Estas son:

- *El papel del Estado nacional*: tanto en su faceta de actor militar y parte del conflicto, como en su faceta de actor político-institucional que interviene en el devenir de variados planos de la vida social nacional y que, por ello, también incide, directa o indirectamente, en las decisiones estratégicas de los actores armados y en el devenir de las transformaciones territoriales.
- *El papel que jugaron actores sociales locales*: tanto los que lo hacen como factor de violencia desestructurante, como los que lo hacen como factor de contención de esa desestructuración o como factor de reestructuración.

Este es entonces el modelo de relaciones que este balance construyó, y que, sin omitir la complejidad de factores comprometidos, establece en un marco comparable, una relación fundamental entre conflicto y reconfiguración de territorios, en medio de las escalas espaciales y temporalidades diversas que los estudios de MH manejó.

Desencadenantes

Todos los territorios analizados en este balance hacen parte de la “periferia”, entendida esta como territorialidades muy precariamente articuladas a la nación por el nivel de exclusión al que sus pobladores se han visto históricamente sometidos con respecto de los beneficios del desarrollo, el bienestar y la participación política agenciadas a través de los tiempos por el Estado central. No obstante, ese carácter periférico muestra diferencias notables en su interior. Para efecto de este balance se distinguen:

- Periferias situadas en regiones centrales⁸, que muestran una trayectoria más consolidada de poblamiento campesino y de redes político-partidistas establecidas que remontan al siglo XIX. Son los casos de Granada y San Carlos en el Oriente antioqueño, Remedios/Segovia en el Nordeste antioqueño, El Salado en Montes de María en la costa Caribe y Trujillo en el norte del Valle.
- Periferias situadas en regiones del piedemonte llanero, de procesos de colonización menos lejanos en el tiempo (El Castillo y Arauca).
- Periferias situadas en las fronteras de la nación (Tibú-El Placer-Arauca)⁹.
- Periferias situadas en las fronteras étnicas de la nación (Bahía Portete, Bojayá y Buenaventura).
- Periferia urbana de ciudad metropolitana (Comuna 13).

El conflicto armado se ensañó igualmente en cada uno de estos territorios. Muchos tienen historia de actores armados desde los años 1970 (por la presencia de narcotraficantes y guerrilleros) e inclusive alguno desde los años 1960 (El Castillo con autodefensas campesinas procedentes del Sumapaz y las guerrillas liberales del Llano). En todos los casos la historia abierta y

8 Regiones articuladas económica, política e institucionalmente a la nación.

9 Arauca tiene una doble condición: contar con una importante porción de su territorio en piedemonte llanero y también ser frontera internacional.

contundente del conflicto armado en sus territorios arranca en los años 1980, mediante violencias de baja intensidad que en décadas posteriores se agudizan, o de violencia de alta intensidad desde sus inicios.

Para poder establecer las principales tendencias del proceso de reconfiguración del territorio de estos lugares, se construyó primero, una relación básica: *el proceso violento desencadenante* de esa reconfiguración y la manifestación más general y drástica como en la sociedad local/regional esta *vulneración* se resiente. En segunda instancia, agregamos —como parte de la combinación compleja que siempre está presente en cualquier proceso socioespacial— el papel de la intervención del *Estado nacional* y el de las *élites locales*. Es importante tener en cuenta que esas reconfiguraciones se establecen de acuerdo con los períodos de conflicto tratados en específico en cada caso regional y con el momento en que MH realizó los estudios. Son desiguales y la extensión del análisis puede iniciar en los tempranos años 1980 o en la década de 2000 y se puede extender hasta 2009 o el 2014.

Para comenzar, se presenta en la Tabla 2, la relación básica encontrada entre los factores desencadenantes de las reconfiguraciones del territorio y la reconfiguración territorial resultante.

Tabla 2. Desencadenantes y reconfiguraciones territoriales por localidad

LOCALIDAD	FACTORES DESENCADENANTES DE LAS RECONFIGURACIONES DEL TERRITORIO			RECONFIGURACIÓN TERRITORIAL RESULTANTE	
	Factor económico nacional / internacional	Factor conflicto	Vulneración general	Manifestación general de reconfiguración territorial	Dimensión de la reconfiguración
Caso		Conflicto armado			
Todos			Estigmatización		
El Castillo 1		Violencia grupos paramilitares locales contra efectos apertura democrática	1984 - 2001 Arrasamiento izquierda y oposición política	Cierre democratización "Sepultados" Estado local, movilización social y democracia representativa local	Política
Remedios / Segovia		Violencia paramilitar FF. AA. (local) a los efectos de la apertura democrática de los ochenta y violencia guerrillera	1983 -1997 Arrasamiento izquierda y oposición política	Cierre democratización "Sepultados" Estado local, movilización social y democracia representativa local	Política
El Castillo 2	Noventas-años dos mil Apertura económica y explotación de rec. naturales	Irupción paramilitar AUC territorios FARC y fin zona de distensión, sumada a viraje militar FARC	2001 - 2005 Arrasamiento por vaciamiento del territorio	Descampesinización	Socioeconómica y política
El Salado	Años dos mil Apertura económica y explotación de rec. naturales	Irupción paramilitar (AUC) en retaguardia FARC-Caribe- disputada (Recomposición territorialidades narcotráfico fines de los 1990)	1999 - 2006 Arrasamiento con vaciamiento territorio	Descampesinización*	Socioeconómica y política

LOCALIDAD	FACTORES DESENCADENANTES DE LAS RECONFIGURACIONES DEL TERRITORIO		RECONFIGURACIÓN TERRITORIAL RESULTANTE		
	Factor económico nacional / internacional	Factor conflicto Conflicto armado	Vulneración general	Manifestación general de reconfiguración territorial	Dimensión de la reconfiguración
Caso Trujillo	Noventas Crisis del café	Violencia de narcotráfico y FF. AA. en contexto regional de radicalización guerrillera	1986 - 1995 Terror difuso y despojo de tierras	Cierre democratización Se acallan fuerzas sociopolíticas alternativas y se coopta el poder local del Estado y Descampesinización.	Todas las dimensiones
Granada		Irrupción paramilitar AUC y disputa entre AUC/guerrillas/FF. AA. en “santuario guerrillero” (“La guerra total”)	1997 - 2005 Arrasamiento y vaciamiento territorio	Reconstrucción estable • Intervención temprana del Estado -con la recuperación del control militar del territorio, la implementación de proyectos públicos nacionales y departamentales-. • Emprendimiento individual y colectivo de la población y la administración local para el retorno y la reconstrucción.	
San Carlos		Irrupción paramilitar AUC y disputa AUC/guerrillas “La guerra contra <i>todos</i> ” (Actores armados en disputa inter e intra bandos)	1998 - 2005 Arrasamiento con vaciamiento “El éxodo total”	Reconstrucción limitada de lazos sociales e institucionalidad • Límites de la capacidad institucional	

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

LOCALIDAD	FACTORES DE ENCADENANTES DE LAS RECONFIGURACIONES DEL TERRITORIO		RECONFIGURACIÓN TERRITORIAL RESULTANTE	
	Factor económico nacional / internacional	Factor conflicto Conflicto armado	Vulneración general	Manifestación general de reconfiguración territorial
Caso				Dimensión de la reconfiguración
El Placer		Coca - conflicto armado	1990 - 2006 Imposición de órdenes de violencia sucesivos	Cocalización campesina, casco urbano como centro mercadeo y capital ilegal; militarización del territorio Economía de la coca en Convivencia con Militarización FF. AA.
Bahía Portete	1980-1990-2000 Megaproyectos de Economía extractiva: carbón-gas-energía eólica	Irrupción abrupta, tardía y de intenso accionar violento de los paramilitares -AUC (sin guerrillas) - economía ilegal (por control narco de rutas y puertos)	2000 - 2004 Violencia étnica mediante violencia sexual	Afectación grave y riesgo de exterminio de pueblo indígena (profundo desequilibrio sociocultural) En general, todas las dimensiones
Bojayá		Frontera de guerra definida en función de los intereses macro- regionales y nacionales narcos, guerrilleros, paramilitares y del Estado	1997 - 2006 Crimen de guerra contra sujetos colectivos	Reconstrucción local frágil, modificada y en "suspense" , en medio de un entorno de economía ilegal y orden de violencia

LOCALIDAD	FACTORES DESENCADENANTES DE LAS RECONFIGURACIONES DEL TERRITORIO		RECONFIGURACIÓN TERRITORIAL RESULTANTE		
	Factor económico nacional / internacional	Factor conflicto Conflicto armado	Vulneración general	Manifestación general de reconfiguración territorial	
Buenaventura	1990-2000 Privatización puerto y megaproyectos de infraestructura sin beneficios urbanos regionales con vulneración a cosmovisión y lazos de afrocol.	Imposición y mantenimiento de un orden de violencia y de economía ilegal sostenidos por Grupos armados ilegales (GAI) (guerrilla - AUC - grupos posdesmovilización) apoyados por red de narcotraficantes, empresarios locales y funcionarios públicos	2000 - 2013 Arrasamiento con vaciamiento ¹ - desplazamiento <i>intra-urbano</i>	2000 -2013 Afectación grave de ordenamientos socioterritoriales y matrices de pervivencia cultural de comunidades afro urbana y Profundización fractura	En general, todas las dimensiones
Comuna 13		"Urbanización de la guerra" (insurgencia defendiendo posiciones urbanas y Estado y AUC planteando expulsión insurgente de la ciudad)	2001-2003 Desplazamiento masivo <i>intra-urbano</i> (desalojar territorios- des-terrorar personas "enemigas")	2004 – 2010 Reconstrucción limitada de lazos sociales e institucionalidad - dominio territorial de las bandas criminales	En general, todas las dimensiones

LOCALIDAD	FACTORES DESENCADENANTES DE LAS RECONFIGURACIONES DEL TERRITORIO		RECONFIGURACIÓN TERRITORIAL RESULTANTE	
	Factor económico nacional / internacional	Factor conflicto	Manifestación general de reconfiguración territorial	Dimensión de la reconfiguración
Caso Tibú	1990 - 2000 • Reactivación exploración-explotación petrolera • <i>Boom</i> concesiones mineras -carbón	1999 - 2004 • Irrupción AUC contra retaguardia militar y económica FARC (por recomposición territorialidades narcotráfico fines de los noventa) • Construcción corredor Urabá-Catatumbo • Fortalecimiento economía AUC: control coca y narcotráfico y expansión monocultivo palma de aceite	2005 -2013 Descampesinización y Recomposición orden de violencia actores ilegales	
Arauca		2001-2005 ¹⁰ Irrupción paramilitar (AUC) en retaguardia FARC en el oriente colombiano y disputa por recomposición territorialidades narcotráfico a fines de los noventa	Con la información disponible en el estudio es imposible de establecer	

Fuente: elaboración propia con base en información de los estudios de MH. Para información detallada de las condiciones de las sociedades locales antes y después de las violencias emblemáticas en sus territorios, véase Anexo 3.

*Nota aclaratoria: MH no aplica exactamente el concepto de “descampesinización” para El Salado y Trujillo, pero dada la caracterización de las transformaciones que hace, es pertinente aplicarlo con los fines comparativos. Al igual que el concepto de “arrasamiento por vaciamiento” en el caso de Buenaventura; MH solo aplica el de “tierra arrasada” (177), pero como las descripciones de los procesos violentos en esa localidad, se ajustan al “arrasamiento por vaciamiento”, se aplicó a Buenaventura.

10 Se focaliza en la violencia sexual del Bloque Vencedores de Arauca.

El proceso violento que reconfigura territorios

Este proceso tiene dos caras: a) la irrupción de un actor violento en el territorio (en los casos estudiados el paramilitar), que recompone las condiciones de la guerra; y b) la manera extrema bajo la cual esa acción violenta se manifiesta y que MH caracteriza o conceptualiza mediante nociones que condensan el significado que esa violencia adquiere como vulneración más general sobre la población y el territorio. Este balance rescata esas nociones y sintetiza un par de caracterizaciones a manera de “factor desencadenante” de las reconfiguraciones del territorio.

Como se puede apreciar en la Tabla 2, el desencadenante está asociado siempre a la acción de paramilitares, bien sea en períodos tempranos, cuando esta se realizaba por grupos locales y/o se agenciaba en las sombras por la propia fuerza pública, o bien en períodos posteriores, cuando el paramilitarismo adquiere forma organizada con mandos y estrategia nacionales y frentes regionales y entabla una disputa abierta con las guerrillas por todo el territorio nacional. Solo un caso se sale de este patrón: El Placer, por aludir su violencia a diversas épocas y hegemonías armadas engarzadas en disputas por el control del negocio del narcotráfico y los cultivos de coca.

El factor de conflicto desencadenante en los casos de violencia estudiados por MH muestra entonces cuatro cosas: a) que la acción violenta desencadenada en los tres casos del paramilitarismo en su fase temprana, suele estar dirigida contra la posibilidad de crecimiento e influencia de líderes, grupos o movimientos políticos alternativos al bipartidismo político tradicional o de la izquierda democrática (Remedios/Segovia, El Castillo 1 y Trujillo); b) que en diez casos (incluye El Castillo 2), las violencias que desconfiguran territorios están referidas a la coyuntura que se abre a partir de 1997 con la irrupción de las AUC y del endurecimiento y violencia guerrillera contra la población y que, según decisiones de estrategia nacional (momento de irrupción en el territorio), golpea a unos territorios más temprana o más tardíamente (1997 - 2004); c) que a pesar de la

desmovilización paramilitar (entre 2003 y 2006), las violencias en los territorios suelen continuar, pero las reconfiguraciones territoriales comienzan a dimensionarse; dichas reconfiguraciones (salvo en el caso de Granada y en alguna medida en San Carlos y Bojayá), suelen mostrar transformaciones como afectaciones sustantivas y negativas de la población; y d) que en el caso de El Placer la reconfiguración que sufre el territorio por cuenta del conflicto armado se gesta desde los tempranos años 1980 en que se perfila la tendencia que convertirá a este territorio en uno de los principales productores de coca del país.

La forma en que se manifiesta la vulneración violenta que produce la reconfiguración de los territorios, se puede categorizar en *siete modalidades*, una de las cuales es común a todos los casos (la estigmatización), una segunda a dos casos (arrasamiento izquierda política), una tercera a siete casos (arrasamiento con vaciamiento territorio); cuatro modalidades adicionales se asocian a cuatro casos diferentes respectivamente. El caso referido a una vulneración puntual (la violencia sexual) se sale de la posibilidad de analizar la reconfiguración del territorio. Las modalidades y los casos enunciados son los siguientes:

- *Arrasamiento izquierda política y bases locales de la democracia.* Remedios/Segovia y El Castillo 1.
Este proceso alude al violento y sistemático exterminio de los agentes individuales y colectivos comprometidos en el ejercicio democrático de la representación y la movilización política de oposición o reivindicación.
- *Arrasamiento por vaciamiento del territorio.* El Castillo 2, Granada, San Carlos, El Salado, Buenaventura, Comuna 13 y Tibú.
Este proceso alude al “ejercicio de una violencia que no solo aniquila a las personas, sino que destruye su entorno material y simbólico, de manera que el territorio se vuelve inhabitable por la propagación de las huellas de terror, lo que fuerza el éxodo de la población” (CNMH, 2015c, página 28). En particular “el vaciamiento ha sido definido como la pérdida de 50 por ciento de la población de una unidad de análisis sociodemográfico por desplazamiento forzado. Es un

desplazamiento forzado masivo, pero que va mucho más allá de este” (CNMH, 2015c, página 118) Se asocia con pérdidas demográficas ligadas a la violencia (y no a la táctica militar) (CNMH, 2015c, página 28).

Esta modalidad tiene manifestaciones específicas:

* Buenaventura y Comuna 13 como entornos urbanos, muestran un arrasamiento ligado principalmente a una condición de *desplazamiento intraurbano*. En este tipo de desplazamiento la población se vio durante los primeros años doblemente vulnerada: por el despojo, desenraizamiento y desestructuración de su comunidad producidos por todo tipo de desplazamiento, y por la negación del Estado a reconocerla como “desplazada” y cobijarla con las normas de protección y atención que la ley establecía para los desplazados rurales. A partir de 2003 esta modalidad de desplazamiento y de víctimas son reconocidos.

* Tibú muestra un arrasamiento con vaciamiento asociado a lo que MH denomina un “*éxodo rentista*” (acogiendo el concepto de Garay) que, en este caso, denota un desplazamiento producido en función exclusiva de intereses económicos ilícitos y lícitos de alto valor, como son los cultivos de coca, las rutas de narcotráfico y el establecimiento de monocultivos agroindustriales.

- *Despojo de tierras y terror difuso*. Trujillo.

El terror difuso alude a que “el grueso de la violencia que se concentra y se produce en acciones continuas pero individualizadas, generan la impresión de que son hechos aislados y dispersos” (CNRR-GMH, 2008, página 63). Priman la “discontinuidad espacial y [la] continuidad en el tiempo” (página 64), se ocultan cadáveres (página 65), se ejecutan torturas y homicidios en lugares privados (página 66), se eliminan sistemáticamente los testigos (página 73).

El despojo de tierras alude a la apropiación de la tierra campesina por la fuerza de la intimidación y el amedrentamiento, las cuales garantizan que sus legítimos propietarios o poseedores abandonen la tierra o la vendan a muy bajo precio o se sometan a negociarla por medios revestidos de tintes jurídicos y testaferrato (CNRR-GMH, 2008, páginas 115-120).

- *Imposición sucesiva de órdenes de violencia diversos.* El Placer.
Alude a la *sucesión de distintos órdenes* sociales que se imponen a una población que se mantiene en un territorio donde la confrontación armada *no implica “el vaciamiento” del territorio*. Estos órdenes se configuran con normatividades violentas — diversas según el actor armado dominante de turno— que tocan con el funcionamiento de las distintas dimensiones de la vida cotidiana y con la rutinización de las modalidades de amedrentamiento y de los castigos tendientes a garantizar el control de la población.
- *Violencia étnica mediante violencia sexual.* Bahía Portete.
Alude a los repertorios de violencia y tortura sexual sobre los cuerpos de las mujeres, mediante los cuales los victimarios “castigan e intentan establecer un dominio sobre las identidades de género y étnicas” a la manera de “ataques públicos e intencionados que trastocan la cultura y el mundo cotidiano de los y las wayúu” (CNRR-GMH, 2010, páginas 90-91). Esta violencia “buscar arrasar el territorio (lógica de exterminio y subordinación) de un grupo étnico específico que se constituía en obstáculo para alcanzar los fines paramilitares sin importar que ello propiciara la desaparición del pueblo y su cultura” (página 90).
- *Crimen de guerra en contra de sujetos colectivos.* Bojayá.
Alude a la transgresión “de todos los principios de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario” perpetrada sobre grupo étnico, sujeto colectivo. En ella “la población civil en estado de indefensión, quedó como escudo ante la total indiferencia de los señores de la guerra que atacaban blancos civiles de manera indiscriminada, recurriendo repetidamente al lanzamiento de armas no convencionales, tales como cilindros bomba con metralla, e impidiendo la atención y auxilio médico a las personas heridas” (CNRR-GMH, 2010b, 27 y 14).
- *La estigmatización.* En todos los casos.
Este proceso alude a un “sistema de terror selectivo y codificación de la población” que borra las fronteras entre com-

batientes y población civil, que se aplica a la vida cotidiana y a los cuerpos, que convierte los señalamientos y castigos en rutinas diarias y que suele afectar de manera diferenciada a hombres y mujeres (CNMH, 2012, página 131).

En todos los casos, *la estigmatización de la población* hizo parte sustantiva y sirvió de “justificación” al victimario en el adelanto de la modalidad específica del proceso violento que estuvo en la base de cada una de las reconfiguraciones territoriales estudiadas.

El proceso económico nacional/internacional que reconfigura territorios

No solamente el proceso relacionado con los conflictos violentos es el único que está en la base de las reconfiguraciones de los territorios. La acción de las fuerzas de la economía del nivel nacional —en general asociadas a tendencias internacionales— también lo *están y suelen actuar en el mismo sentido en que lo hicieron los procesos violentos*, en especial allí donde la estructura agraria o un puerto estuvieron comprometidos. En los casos estudiados por MH se muestra que los efectos desestructurantes del conflicto armado y de las tendencias de la economía nacional/internacional se refuerzan de hecho mutuamente. Son seis los casos en los que los estudios de MH señalan la acción de este tipo de factor: El Castillo, El Salado, Trujillo, Bahía Portete, Buenaventura y Tibú. El desarrollo puntual de esta incidencia se hará en acápite posterior, cuando se analice el papel del Estado nacional en las reconfiguraciones territoriales.

La reconfiguración territorial resultante

Como se puede apreciar en la Tabla 2, no hay patrones de relación entre desencadenantes y resultados generales de la reconfiguración de los territorios, porque el resultado depende más del

tipo de sociedad local que se afecta, que del factor que la desencadena. Se encuentran cuatro casos de descampesinización, tres de cierre de la democratización¹¹, tres de reconstrucción de sociedad local, dos de afectación grave de pueblos y culturas ancestrales, uno de cocalización campesina.

“Los resultados” en los procesos de reconfiguración del territorio se categorizan así bajo seis modalidades, que —al igual que con los “desencadenantes”— rescatan nociones o sintetizan caracterizaciones planteadas por MH en sus estudios.

- *La descampesinización.* El Castillo 2, El Salado, Trujillo y Tibú. MH ha hecho especial énfasis en este tipo de resultado. Lo define así: “el conjunto de prácticas que tienen como finalidad la marginalización negativa de la vida campesina y que producen un daño significativo. Se trata de (...) una narración más precisa de la violencia desde una perspectiva ampliada que centra su atención en el campo y la forma de vida campesina, e identifica a esta población como víctima central del conflicto armado. Más exactamente como víctima de la violencia material y simbólica de un tipo de proyecto político y económico amparado por el Estado. (...) En Colombia la integración de los campesinos al Estado se ha realizado a través de una marginalización negativa que hace que sean vistos como una población en transición entre el pasado primitivo, el presente subdesarrollado y el futuro como “desarrollo”. Por esta razón, a los campesinos se les ha dado el tratamiento de una población que no debe ser sujeto de protección y cuidado especial, como el que se les da a las comunidades étnicas, sino frente a los cuales se debe esperar el paso del tiempo para que termine su proceso de integración a la ciudad, o si es del caso, acelerar este proceso, lo que justifica la intervención de los territorios por ellos habitados” (CNMH, 2015c, página 31).

11 Uno de ellos (Trujillo) comparte descampesinización y cierre democratización, y otro de ellos comparte descampesinización y reconfiguración orden de violencia actores ilegales (Tibú).

En general, las violencias perpetradas sobre esos territorios han tenido como efecto que “las actividades económicas y el modo de vida campesino antes predominantes [hayan] sido reemplazados, o [estén] en peligro de serlo”. No obstante, en cada caso territorial esta descampesinización se manifiesta de manera particular.

* En el caso de El Castillo 2 la violencia política también atentó “contra el proyecto de vida campesina de diferentes maneras.... [al convertir a líderes campesinos, familias y entornos vecinales] en víctimas de masacres, homicidios, tortura, desaparición y desplazamiento forzados. Sus manifestaciones sociales fueron silenciadas mientras ocurrió la consolidación de un modelo de explotación económica. De esta forma, el desplazamiento forzado, el vaciamiento de las veredas y otros hechos victimizantes favorecieron la modernización y la entrada de grandes capitales a las tierras más productivas del municipio, y en épocas recientes, están permitiendo la privatización de las fuentes hídricas” (CNMH, 2015c, 32). Así, la economía campesina fue reemplazada por cultivos comerciales de plátano, sorgo y maíz, la expansión de la ganadería genética y siembra de pastos por propietarios nuevos venidos de otros lugares, la minería y la privatización de las fuentes hídricas y por una “nueva dinámica ganadera [que] transformó los usos del suelo, las relaciones sociales ligadas al territorio y la producción agrícola.” Además, el “miedo al castigo político no solo hizo casi nula la participación política, sino que también reconfiguró el mapa político de El Castillo” (CNMH, 2015c, 201).

* En el caso de Trujillo, la violencia narcotraficante produjo desplazamiento y desarraigo en muchas veredas, destrucción e incluso liquidación de núcleos familiares, desarticulación de las organizaciones campesinas, y otras formas de acción colectiva. La concentración de la propiedad se comenzó a dar paralelamente al deterioro de la economía del café en los años 1990, época en que también incursiona el narcotráfico. La “tierra comenzó a transformar su función social,

convirtiéndose en un medio de representación social que posibilita el reconocimiento y posicionamiento del narco-trafficante en el conjunto social. La tierra, ya no como valor económico, sino como símbolo, parece ser el resultado de este proceso, ligado al poder adquisitivo del narcotráfico y el consumo suntuuario, el cual complementa (o incrementa) el valor sociocultural de la tierra” (CNRR-GMH, 2008, página 120). Además, se ocasiona una “alta preponderancia del uso en pastos en una localidad que en otros tiempos dedicó gran parte de sus tierras al cultivo del café y a la producción de especies transitorias” (páginas 108-109).

* En el caso de El Salado, con la violencia paramilitar: desapareció el pueblo y sus veredas y con ello se produjo “la pulverización de una larga historia y del proyecto colectivo”. En Montes de María “se dislocó la coexistencia entre los grandes latifundios ganaderos en las zonas planas y los pequeños minifundios de la zona montañosa y las tradicionales dependencias de los campesinos con los poderes locales y regionales. El accionar paramilitar creó las condiciones para desarticular la existencia y la viabilidad de la economía campesina, y transformó completamente la estructura agraria preexistente en la región de los Montes de María” (CNRR-GMH, 2009, página 82). Por el “vaciamiento del territorio”, pequeños y medianos propietarios vendieron a bajo precio; arrendatarios y aparceros perdieron el acceso a esas tierras; los nuevos propietarios consolidaron latifundios ganaderos o implementaron proyectos de agricultura comercial; los poseedores de hecho se enfrentaron a la legalización o despojo; los nuevos ocupantes usurparon los derechos de todos los anteriores (páginas 82-83).

* En el caso de Tibú, con la disputa que las AUC le planteó a las FARC (en la cual se cometieron 30 masacres en Tibú y 66 en el Catatumbo), se desocupó el 19 % del municipio. Se aniquilaron cooperativas y asociaciones gestadas por las Juntas de Acción Comunal con apoyo de instancias internacionales (Asociación de Juntas de La Gabarra, Corpora-

ción de Productores de Yuca, Cooperativa de San Martín y Cooperativa Motilón Barí —compuesta por indígenas y campesinos—). Además, y a pesar de que las hectáreas abandonadas fueron amparadas con medidas de protección, el despojo masivo de tierras sobrevino a partir de 2004, cuando los propios paramilitares asumen la expansión de los cultivos de palma (iniciados con el Plan Colombia en 2000), a través de “cooperativas de paramilitares y trabajadores de la palma, provenientes de la Costa Atlántica; personas supuestamente vinculadas al narcotráfico e integrantes de las llamadas bandas criminales (Unidad de Restitución)” (CNMH, 2015b, página 170).

El *modus operandi* se dio mediante: firmas bajo amenaza armada, búsqueda de víctimas en lugares de recepción de desplazamiento y ofrecimientos por debajo del precio, “el ‘ocultamiento’ de escrituras o actos administrativos con los que se legalizaba el despojo para inscribirlos meses o años más tarde” (CNMH, 2015b, página 172). En ello “intervinieron funcionarios públicos de los comités municipales para la atención integral a la población desplazada; notarías, registradurías e Incoder” (página 173). Así, de una economía campesina heterogénea en agricultura y ganadería de los años 1980, se pasó a los monocultivos: primero con la coca impuesta inicialmente por las FARC y los narcotraficantes, y a partir de la desmovilización paramilitar, con su mayor expansión y el incremento de los cultivos de palma (página 176).

- *El cierre de la democratización.* El Castillo 1, Remedios/Segovia y Trujillo.

Con dos casos, MH focaliza la manera como se reconfigura el orden político mediante una violencia sistemática y arrasadora sobre los liderazgos políticos alternativos y la movilización de protesta social agenciada en territorios donde la izquierda y oposición políticas tuvieron un arraigo histórico territorial y —en la coyuntura de la apertura democrática

en Colombia— un impacto remarcable como fue transformar la correlación de fuerzas político-electorales a favor de la recién creada UP. En un caso local adicional (Trujillo), MH también ilustra la manera en la que —a pesar de no preexistir una tradición comunista ni riesgo guerrillero inminente— grupos armados narcos con intenciones de convertirse también en poder político local logran, mediante la estigmatización política y la violencia, transformar el orden político local acallando las fuerzas sociales y políticas que con anterioridad sustentaban proyectos socioeconómicos alternativos (cooperativas campesinas) y tenían cabida de alguna manera en la representación del poder político local.

* En el caso de Remedios/Segovia, el exterminio de la izquierda política iniciado con la masacre de 1983 “se extendió hasta aniquilar el último vestigio de pervivencia de oposición política y organización social con la masacre de agosto de 1997”. El paramilitarismo de “primera generación” —íntimamente ligado a las FF. AA. — aunó los efectos de su guerra a la acción del ELN y FARC que con “la ‘combinación de todas las formas de lucha’ [expusieron] a la izquierda social y política a la acción represiva de los sectores radicales de la fuerza pública, especialmente cuando superpusieron sus iniciativas político–militares con la movilización popular y la participación electoral de la izquierda” (CNMH, 2014, página 231). Así, en el caso del alto nordeste antioqueño se alteró la “trayectoria de cambio político que se venía forjando a partir de las oportunidades creadas por las aperturas políticas, las reformas democráticas del Estado y el auge de la movilización social y política de la izquierda” (página 233). Con ello: a) se restringieron los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y se imposibilitó la expresión electoral de las preferencias políticas disidentes; b) no hubo garantías de gobierno para quien es elegido con una identidad política de izquierda; c) se instauró un Estado militarista que negó el fortalecimiento de una institucionalidad civil y democrática; y d) se ahogó y desnaturalizó el repertorio de la movilización

social. “Esta situación se agravó con la continuación de la guerra derivada de la incursión y competencia de nuevas estructuras paramilitares (AUC) desde el año 1999. Su efecto fue la instalación permanente del terror en la cotidianidad, la profundización de los daños ocasionados previamente y la dificultad duradera para superar la victimización” (páginas 233-234). De 2008 en adelante, los nuevos actores armados (Los Rastrojos y Los Urabeños) mantienen la imposibilidad de reconstrucción democracia y movilización social.

* En el caso de El Castillo 1 la violencia política de paramilitares y guerrilla FARC reconfigura el orden político mediante: a) el cierre democrático en elecciones, representación política y expresión y movilización social en el espacio público; b) la eliminación o desestructuración de organizaciones sociales y políticas antes existentes en el territorio (se eliminó la participación a través del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta (Sintragram), la Unión de Mujeres Demócratas, la Unión de Pioneros José Antonio Galán o las Juventudes Comunistas); c) la desestructuración de los liderazgos y las apuestas políticas que hacen parte de la cultura campesina, la instalación del miedo y la desconfianza y ocultamiento o renuncia de las identidades políticas; y d) después de haber llegado a ser una fuerza política mayoritaria, la UP desapareció totalmente del mapa político de El Castillo.

* En el caso de Trujillo la violencia política que adelantaron los grupos de narcotraficantes en alianza con las FF. AA. asentadas en la región, reconfiguró el orden político local mediante: a) la desarticulación de las organizaciones campesinas y otras formas de acción colectiva (las organizaciones promovidas por la Iglesia y las surgidas del trabajo de la Federación Agraria Nacional (Fanal), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y las mismas Juntas de Acción Comunal, generadas por la institucionalidad nacional, que se fueron debilitando y desapareciendo progresivamente); b) la eliminación de

las posibilidades de organización social de la población civil, el crecimiento de las bandas sicariales del narcotráfico; y c) la apropiación del aparato público mediante la cooptación local del Estado.

- *La reconstrucción de la sociedad local.* Granada, Bojayá, San Carlos, Comuna 13.

Después del proceso de desmovilización paramilitar (2006) y de retoma militar por el Ejército colombiano del territorio (2007 en adelante) suelen iniciarse o fortalecerse (en los casos regionales donde había habido iniciativas desde los tempranos años 2000) procesos de retorno y proyectos de diverso tipo y envergadura agenciados por las mismas comunidades víctimas, el Estado (local, departamental y/o nacional), organizaciones no gubernamentales (ONG) y agencias internacionales, tendientes a la reconstitución de las comunidades en sus territorios, al apoyo de proyectos productivos, de reconstrucción de los lazos sociales y las confianzas, al fortalecimiento institucional en los territorios, al empoderamiento de líderes y organizaciones sociales y comunitarias, además de la búsqueda y garantía de los derechos de verdad, justicia y reparación de los millones de víctimas. A pesar de esto, tres factores principales obstaculizan o limitan los alcances de este proceso: a) la continuidad de las violencias en la gran mayoría de los territorios por parte de los desmovilizados rearmados y de las bandas que emergieron y se fortalecieron al calor de los negocios de la coca y el narcotráfico y del abanico cada vez más diverso de actividades ilegales y legales que articularon; b) la precariedad del Estado que no demuestra ni capacidad de copamiento integral de los territorios, ni siquiera de control cuando sí los copa militarmente; y c) el alcance de la reconfiguración alcanzada de muchos de los territorios, esto es, de la restructuración de las economías y los poderes locales y regionales. Los procesos de descampesinización anotados con anteriori-

dad y los demás casos que seguirán a este acápite, son una muestra de ello.

A pesar de lo anterior, dentro de los casos estudiados por MH se presentan cuatro que podemos categorizar como procesos en los que la pauta más notable es el logro o avance significativo en la reconstrucción de la sociedad. Como siempre que tratamos con territorio, cada lugar muestra sus particularidades y en este caso también es importante señalar lo que distingue el carácter del logro alcanzado en esta materia. Son cuatro los casos: Granada, San Carlos, Comuna 13 y Bojayá.

* *La reconstrucción estable.* Granada.

El caso de Granada aporta una oportunidad importante para develar las condiciones en que, a pesar de haber sido una localidad —y todo su entorno regional— muy fuertemente afectados por los estragos del conflicto armado (arrazamiento con vaciamiento, como en tantos otros lugares del país), se observa una reconfiguración territorial “exitosa”, en términos de “fin del conflicto” y de reconstrucción general —física, social, política y cultural— de la comunidad campesina y comerciante que siempre habitó el lugar.

La reconfiguración se puede sintetizar así: a) el restablecimiento del control militar del territorio y de la movilidad por la autopista Medellín-Bogotá, seguidos de un retorno importante de la población desplazada y el repoblamiento de las veredas; b) la reactivación de la dinámica económica campesina y comercial del municipio y de su entorno regional; c) la presencia institucional nacional y departamental con proyectos y programas de atención a la población que retorna e inversión para la reconstrucción del pueblo; programa de titulación de predios baldíos; d) el empuje autónomo de la institucionalidad local; e) la aplicación de la justicia a mandos medios y altos militares implicados en ejecuciones extrajudiciales (a partir de 2008); trabajo de exhumación de restos de personas asesinadas; y f) la reconstitución y fortalecimiento de las organizaciones socia-

les, de los espacios de representación y participación social y del ejercicio del poder político y la democracia local.

* *La reconstrucción local frágil, modificada y “en suspenso”*. Bojayá. Bojayá aporta, en términos de reconfiguraciones territoriales, un caso en el que interactúan *un entorno regional* donde impera un orden de violencia y de economía ilegal, con *un lugar puntual* donde las acciones públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales logran restablecer físicamente el casco urbano, los medios para el retorno de la población y la recomposición del ser comunitario.

Por constituir “una de las mayores tragedias humanitarias de Colombia” (cuantitativa y cualitativamente, en tanto víctima de “una guerra sin límites” en palabras de MH) y por haber sido perpetrada sobre una población étnica (afrodescendientes e indígenas en convivencia interétnica), Bojayá obtuvo una atención excepcionalmente rápida enfocada al retorno, reconstrucción del pueblo y lazos comunitarios, por parte de las agencias internacionales, las instituciones públicas nacionales y un apoyo interno (local y regional) de la Iglesia tradicionalmente ligada al territorio. Se logra entonces: a) reconstruir el pueblo, pero cambiando el lugar de vivienda y por consiguiente la forma de vivir y de habitar. El diseño del nuevo asentamiento (Bellavista) transformó el paisaje municipal y cambió la condición ribereña del pueblo y con ello, lo que el río aportaba a la autodefinición, pertenencia y clasificación de las relaciones sociales y espaciales y al desarrollo de las actividades cotidianas de sus pobladores. Hasta la condición del cementerio se transformó: en un entorno ruidoso para el descanso de los muertos y los rituales y con mucho deterioro y abandono en contraste con el nuevo pueblo a su alrededor; b) el retorno de la mayoría de desplazados cuatro meses después de la masacre; c) la resignificación de todo: los espacios, las relaciones, los rituales, las expresiones estéticas, las formas de resistencia; d) la recomposición de procesos organizativos y formas de intervención

en el territorio; y e) además, Bellavista se convirtió desde el 2002 en lugar de recepción para los desplazados procedentes de los corregimientos cercanos. No obstante, prevalece una seguridad frágil que desaparecerá cuando el Ejército se retire, tal como lo percibe la población.

Entre tanto, a todo lo largo y ancho del entorno regional (alto, medio y bajo Atrato) guerrillas, paramilitares y bacrim vinculados hasta hoy con el narcotráfico en la región asolan el territorio y la población con la violencia de sus enfrentamientos y con las prácticas de deforestación y de uso de agroquímicos lesivos para el ecosistema asociados a los cultivos de coca, que afectan la seguridad alimentaria de afrodescendientes e indígenas. Además, en la economía maderera las bacrim reproducen el esquema de explotación y vinculación laboral que impusieron los paramilitares, disminuyendo al mínimo los ingresos de trabajadores y obligando a las comunidades a traspasarles un porcentaje del pago que por ley las empresas madereras les pagan. Continúa también la economía extractiva y la utilización instrumental del territorio para megaproyectos pensados desde y para el centro por actores económicos privados apoyados por el Estado. Finalmente, el medio Atrato —como corredor estratégico de río y mar—, sigue hasta el presente cobrando víctimas de la disputa armada. De ahí lo frágil y “en suspenso” que demuestra ser la reconstrucción de la localidad.

* *La reconstrucción limitada.* San Carlos.

San Carlos es municipio vecino de Granada en el oriente antioqueño y comparten la misma subregión de Embalses donde se asienta el complejo hidroeléctrico. En términos de la reconfiguración del territorio comparten también el poder mostrar notables procesos de reconstrucción local, inclusive sendos Premios Nacionales de Paz, en reconocimiento a sus respectivos procesos. También comparten importantes procesos de retorno y apoyo institucional para la reconstrucción física, económica y social de la localidad. En San Carlos (municipio que

se desocupó en un 70 %) ese retorno se inició sin apoyo institucional en 2001 y el desminado (también artesanal adelantado por los propios interesados). De ahí en adelante fueron varias las oleadas de retorno espontáneo (individual y masivo), unos al casco urbano, otros a la zona rural. En 2007 la Alcaldía declara “emergencia por retorno” y en 2009 la Alcaldía de Medellín apoya un retorno masivo. El desminado “humanitario” (según protocolos oficiales) también tuvo en San Carlos su centro de atención. Las tierras abandonadas no fueron apropiadas por extraños y poco a poco se integran de nuevo a proyectos productivos. El apoyo institucional ha sido amplio y variado; solo señalamos el de la Presidencia con “Retornar es vivir”, que priorizó a San Carlos y otros municipios del oriente antioqueño (Cocorná, Granada, San Rafael, San Francisco y San Luis) para la primera fase, y que posibilitó procesos de desminado, acceso a proyectos de mejoramiento de viviendas, inicio de proyectos productivos y mejoras en la infraestructura vial y escolar en las poblaciones retornadas. La fuerza pública también logró retomar el control del territorio.

No obstante, hay dos diferencias importantes de destacar que operan como grandes limitaciones que frenan y desvirtúan el proceso. La primera es lo enorme de la tarea de reconstrucción de infraestructuras y equipamientos colectivos en todo el territorio (puentes derribados, caminos veredales desaparecidos, redes eléctricas destruidas, tanques de agua dinamitados, escuelas derrumbadas y centros de salud destruidos) que excede los esfuerzos hechos. En medio de ello, el “98 % de las familias caracterizadas [desplazadas] en el municipio de San Carlos se encuentran por debajo de la línea de pobreza al no tener ingresos por persona que superen los \$ 238.500 pesos colombianos” (CNRR-GMH, 2011b, páginas 383-384). La segunda es el fuerte ingrediente endógeno que tuvo el paramilitarismo en esta localidad: de San Carlos era oriundo Doble Cero, comandante del Bloque Metro; además, los bloques que allí operaron tuvieron también reclutas nativos en número importante y jefes que siguieron

influyendo después de la desmovilización, lo que dificultó y ralentizó la recuperación de la democracia local. Además, también se expandieron cultivos de coca en el territorio.

* *La reconstrucción limitada.* Comuna 13.

La Comuna 13 se convirtió en centro de atención institucional, primero como nodo urbano de operativos militares para expulsar la guerrilla, y luego como blanco de la avalancha de atención institucional que sobrevino con posterioridad a la Operación Orión —dada la necesidad política de dar respuesta a la vulneración que los mismos operativos militares tuvieron sobre la población y la responsabilidad de haber operado en alianza con los paramilitares—, además del drástico viraje en la política local que Sergio Fajardo y Alonso Salazar imprimieron con “el urbanismo social”. Es así como las obras que se emprenden transforman físicamente el entorno, conectan la comuna a la ciudad y mejoran la calidad de vida de la población (metro cable, parque biblioteca y escaleras eléctricas, entre otros). El Gobierno nacional —en asuntos de seguridad— conforma el Centro Integrado de Intervención Social e invierte en infraestructura: (Centro de Atención Inmediata -CAI periférico-, estaciones de Policía, un Fuerte de Carabineros y dotación en movilidad). A pesar de todo ello, las violencias y el desplazamiento forzado no cesan.

Los desmovilizados rearmados y las bandas criminales emergentes siguen imponiendo un orden de violencia en la comuna: continúan los asesinatos selectivos de líderes y se incrementa la desaparición de personas consideradas “colaboradores de la guerrilla” o testigos de hechos de violencia; y siguen su curso el desalojo forzado de viviendas en varios barrios por no pagar vacuna de “seguridad” a los paramilitares, el funcionamiento de un “cepo” urbano (para “castigar” a quienes se salían de los códigos de conducta impuestos), los ajustes de cuentas y el reclutamiento de menores. El microtráfico pulula. También hay casos reportados de ejecu-

ciones extrajudiciales por la fuerza pública (2004 y 2006). El barrio El Salado es su epicentro.

En la Comuna 13 el tejido social se reconstituye en medio de ese contexto tenso entre los factores de violencia que perviven en el territorio y dominan varias esferas de la vida social y los factores de reconstitución física del hábitat, de la presencia institucional y de la recomposición de las organizaciones sociales, que resisten a las violencias y que entran en interlocución con las instituciones públicas y desarrollan programas de beneficio comunitario.

- *Cocalización campesina, casco urbano como centro de mercadeo y de capital ilegal y militarización del territorio.* El Placer.

El Placer aporta el caso de una localidad y un entorno regional cuya reconfiguración está determinada por un conflicto armado marcado desde el inicio (años 1970) por el narcotráfico y la coca, de tal manera que todos los actores armados en sucesión (carteles del narcotráfico, guerrillas, paramilitares y grupos armados posdesmovilización) se han incrustado en el territorio y en la disputa violenta en función de tal negocio. Independientemente de la manera como cada actor ejerció su dominio y adelantó sus guerras, la reconfiguración del territorio tomó una misma dirección. En 2012 se la aprecia con las siguientes características: a) la coca se convirtió en renglón central de la economía de la región y El Placer se convirtió en centro de mercadeo de la pasta de coca y de gran movimiento de capital; b) la ofensiva estatal contrainsurgente, acompañada de las fumigaciones aéreas, especialmente desde 1996, amplió la cobertura de la Policía y del Ejército tanto que la Brigada 27 tiene en el bajo Putumayo 12 batallones de diferente especie (CNMH, 2012, página 61), c) “las FARC no consideran la neutralidad frente al conflicto armado como una alternativa posible para la población” y como “el puesto de Policía está situado frente a la escuela primaria de El Placer (...) aún se continúa exponiendo a los niños a sufrir las consecuencias de los enfrentamien-

tos armados” (página 239); y d) “algunos de los delincuentes ya conocidos en la región han seguido cometiendo infracciones a la ley. Solo que esta vez usan nombres diferentes —Los Rastrojos y Las Águilas Negras— grupos que también han perseguido a líderes comunitarios sindicados de ser cómplices de la guerrilla, contraviniendo así la idea de que son solo grupos delincuenciales ligados al negocio del narcotráfico; los Rastrojos tienen mayor presencia en el Departamento, especialmente en los municipios de Puerto Asís, San Miguel y Valle del Guamuez” (página 339).

- *Afectación severa de comunidades étnicas.* Bahía Portete y Buenaventura.

Las violencias perpetradas en las fronteras étnicas de la nación, cuando no cuentan con acciones de mitigamiento y reconstrucción por parte del Estado como en el caso puntual de Bojayá, ponen en riesgo la pervivencia de los patrones socio-culturales centrales a la reproducción de estas comunidades —una indígena, la otra afrodescendiente—. Estas afectaciones subrayan elementos específicos de la manera de constituirse dichas comunidades; además, en el caso de Buenaventura, el factor urbano añade ingredientes adicionales a este tipo de afectación.

- * *Afectación severa y riesgo de exterminio de comunidad indígena.* Bahía Portete.

Bahía Portete aporta el caso en el que la violencia paramilitar se ejerce expresamente sobre los componentes y símbolos directamente asociados a los códigos más profundos de la identidad cultural y los sentidos de pertenencia de un grupo étnico y que tocan con aspectos tan diversos como las maneras de resolver conflictos, de ejercer autoridad, de mediar con los actores externos a la comunidad, de enterrar sus muertos, de establecer las relaciones de género. A partir de allí se busca destruir su capacidad de resistencia e inclusive su existencia del pueblo, pues para el ataque paramilitar no

mediaba siquiera la preexistencia de relaciones o presencias guerrilleras en el territorio.

La reconfiguración territorial, por tanto, subraya la dimensión cultural de cada uno de los componentes claves de la existencia de la etnia Wayúu. Se produce un profundo desequilibrio socio-cultural, manifiesto en: a) la imposibilidad de cumplir con los reclamos de justicia por parte de los muertos ni con los rituales que garantizan la no repetición y el tránsito por el “camino de los indios muertos” a Jepira, la tierra de los wayúu muertos; todo ello se genera con la prohibición de recoger los cuerpos de los muertos y enterrarlos; b) el ataque al honor masculino, a su identidad guerrera y a su resistencia histórica a través de la tortura sexual y el asesinato de mujeres como acto bandera; c) la transgresión de la normatividad que regula las guerras y las disputas entre los wayúu, mediante la manipulación de un conflicto interno entre familias y su transformación en un conflicto armado que trastocó todas las normas de la guerra entre los wayúu; d) la normatividad que regula la autoridad y el papel mediador de las mujeres, mediante la violencia ejercida contra las autoridades y líderes mujeres; e) los arreglos de género se transformaron con el desplazamiento y la migración a centros urbanos, al dificultar la continuación de actividades de subsistencia alrededor del pastoreo o las huertas y al incorporar arreglos de género característicos de las familias nucleares colombianas; y f) el sentido y los límites de la acción de los grupos armados wayúu se trastocaron cuando, a partir de la intervención paramilitar, las armas comenzaron a mediar en la regulación de la vida social y se impuso el sistema de alianzas, cooptaciones y sometimientos de los contrabandistas y narcotraficantes regionales, de sus estructuras armadas y de sus diferentes circuitos, a la lógica narcotraficante mayor.

Por lo demás, en 2010 el puerto de Bahía Portete permanecía inactivo, las viviendas e infraestructura educativa y de salud de la comunidad desvalijadas y destruidas por la acción

vandálica, el paso de los años y la incidencia de las condiciones climáticas. La gran mayoría de la comunidad Wayúu de Bahía Portete continuaba en situación de desplazamiento en Maracaibo, Uribia y Maicao.

Se afectaron así las bases de la identidad étnica de esta comunidad Wayúu como sujeto colectivo. “Las representaciones del mundo wayúu sobre la vida, la muerte, la guerra se rompieron” y “se fractura el sentido de unidad y de cohesión social”. El desplazamiento afectó “el referente simbólico primordial asociado a la naturaleza y a la vida: el territorio” (CNRR-GMH, 2010, página 21). Se amenazó así el patrimonio histórico, cultural y mítico de estos pueblos.

** Afectación severa de ordenamientos socio-territoriales y de matrices de pervivencia cultural de comunidades afrodescendientes, además de profundización de fractura urbana. Buenaventura.*

Buenaventura aporta el caso de *una reconfiguración territorial producida por la acción de factores económicos agenciados por intereses nacionales e internacionales con relación al puerto, y de una violencia articulada en torno a la economía ilegal*¹² que se perpetra en un territorio que es al mismo tiempo una ciudad-puerto marítimo internacional y el hábitat de un grupo étnico perteneciente a una periferia histórica de exclusión y violencia estructural. De ahí que la reconfiguración territorial tenga dos grandes dimensiones: la que toca con la estructura física y de poder urbanos y la que toca con la comunidad étnica en su esencial relación con el territorio.

a. La reconfiguración de los ordenamientos socio-territoriales y de pervivencia cultural de la comunidad afrocolombiana muestra principalmente dos grandes aspectos. En primer lugar, con los desplazamientos en el entorno rural aunados a

12 Para el caso de Buenaventura, el circuito económico ilegal está integrado principalmente por las siguientes actividades: narcotráfico, tráfico de armas, contrabando, microtráfico, extorsiones, lavado de activos, cultivos ilícitos y minería criminal (CNMH, 2015, página 126), además del robo de gasolina.

los desplazamientos intraurbanos, se rompen los *continuos* rural-urbanos —muy ligados a los ríos y caños— característicos del hábitat afrocolombiano, y a partir de los cuales se estructuran y fluyen sus relaciones parentales, sus circuitos económicos, sus autoridades, su forma de vida y la reproducción de su cultura. En segundo lugar, con la colisión que se produjo en el tiempo, entre el proceso de construcción de los territorios colectivos como Consejos Comunitarios y el arrasamiento por la violencia efectuada sobre los territorios rurales y urbanos de Buenaventura, se vulneraron las condiciones para el cabal ejercicio de los derechos territoriales de autonomía y autodeterminación que adquirieron las comunidades étnicas en los años noventa.

- b. *La reconfiguración de las geografías del poder que constituyen al espacio urbano* se manifiesta a través de tres aspectos: como primera medida, y a partir de 1993, se produce *una fractura creciente ente el puerto y la ciudad*. En primera instancia, por el bloqueo que acarreó la privatización del puerto en la estructura de participación y movilidad social en la que la comunidad afrocolombiana estaba inserta. En segunda instancia, por la segregación económica y espacial paulatina a la que dicha comunidad se ha visto sometida por cuenta de los megaproyectos sobre el puerto¹³, tanto como por las disputas violentas en el territorio, los cuales —en conjunto— obraron con mucha mayor intensidad sobre las comunidades asentadas en los “barrios de baja-mar” o “la tierra ganada al mar”, como ellos la denominan, expulsándolos de allí y acentuando la fractura urbana. Por otra parte, y también desde los años noventa, *los poderes armados en la ciudad asumen una territorialización microfocalizada* a partir

13 Varios puertos privados que se construyen, el malecón turístico, la megaciudadela de interés en las afueras de la ciudad construida para la población reubicada, sacada de sus territorios ancestrales.

de la manera como bandas locales y grupos armados nacionales se relacionan y operan en ella. No en vano puede incluirse dentro del proceso general de territorialidades microfocalizadas en que se convirtió la ciudad, lo que desde el lugar inverso al armado, desde las resistencias de las comunidades afrocolombianas- se gestó entre 2014 y 2015 como Zonas Humanitarias, dos dentro de la ciudad. Por último, se destaca *el reforzamiento de las históricas relaciones centro/periferia, en las que los intereses nacionales sólo profundizan segregaciones y fracturas* con megaproyectos y con la sola conexión entre política local y política nacional mediante la política para-mafiosa.

La afectación de las comunidades afrocolombianas es de tal magnitud en Buenaventura que la Corte Constitucional ha debido pronunciarse ya en dos ocasiones. El Auto 005 de 2009 en el que plantea que “uno de los factores que ha contribuido a aumentar la violencia en contra el pueblo afrocolombiano en su territorio ha sido las presiones legales e ilegales para promover patrones de desarrollo que desconocen sus cosmovisiones” (CNMH, 2015, página 79). Y cuatro años después —con el Auto 234 de 2013— se pronuncia a raíz del estado de cosas inconstitucional que se venía presentando por los procesos de despojo en la zona urbana que afectaba directamente a los territorios ganados al mar (página 387).

A manera de cierre de este acápite se puede afirmar que *el resultado específico* bajo el cual puede caracterizarse *el tipo de reconfiguración territorial depende más del tipo de sociedad local que se afecta que del factor que la desencadena*. Así se pudo observar en la exposición anterior; su resultado final se puede sintetizar así:

- a. La reconfiguración del territorio que toca en lo fundamental con *el orden político* por cuenta de una violencia que en los años 1980 y principios de la década de 1990 y que explícitamente se dirigió al *cierre de la democratización*, al igual

que aquella que se centra en la *descampesinización* (con fuerza inusitada a partir de los años 1990), son reconfiguraciones asociadas a las periferias de regiones centrales o de piedemonte llanero que, aunque periferias, tienen una densidad demográfica y una construcción de redes económicas y partidistas tradicionales que cuentan para el modelo de desarrollo hegemónico de la nación y para las fuerzas políticas del *statu quo*.

- b. La reconfiguración del territorio que toca en lo fundamental con *el riesgo de exterminio o la alta vulneración de patrones socioculturales y pervivencia de pueblos étnicos enteros*, se asocia a las periferias étnicas de nuestra nación, las del Caribe y las del Pacífico, por ser ellas justamente habitadas por comunidades ancestrales —para las que la cultura y la relación con el territorio son su esencia—, comunidades y rasgos que nada importan al resto de grupos sociales que componen la nación y menos aun a los grupos de poder. En esas periferias, para el centro (en términos de actores públicos y privados, legales e ilegales) solo se juega la instrumentación del territorio.
- c. La reconfiguración del territorio que toca en lo fundamental con un proceso de *reconstrucción física y social de la localidad previamente arrasada*, muestra diferencias entre sus casos, diferencias basadas en la condición del territorio del cual se trata: en Bojayá la reconstrucción es frágil, modificada y en suspenso, por tratarse de un territorio de periferia étnica (entorno sujeto a la continuidad de intensas violencias y de un Estado que solo interviene, física y socialmente, de manera puntual y oportunista -utilización política de la masacre de las FARC). En Granada la reconstrucción es sólida y sustentable en el tiempo, por tratarse de la periferia de una región central, en la que por ello mismo, el Estado interviene de manera contundente y se sella con un “fin del conflicto” (además de contar con capital social local y regional). En San Carlos y Comuna 13, también periferias de región central, la reconstrucción se da también, aunque con sus limitaciones.

d. La reconfiguración del territorio que toca en lo fundamental con una periferia de frontera internacional que por tradición fue territorio de proyecto de enclave petrolero y de asentamiento originario de guerrillas y narcotraficantes (se alude a El Placer¹⁴) está marcada de inicio a fin por la coca y por tanto por la transformación del colono campesino llegado de la zona Andina en *campesino cocalero* y en la configuración de redes de economía y de poder directamente ligadas al narcotráfico. Tibú, además de la descampesinización señalada atrás, muestra -como El Placer- el peso tan contundente del carácter de frontera en la que los intereses de todos los grupos armados ilegales están vinculados a la coca y el narcotráfico y por tanto también a la transformación de una parte de la sociedad de colonos campesinos en campesinos cocaleros.

A continuación la exposición centrará la atención en dos actores —uno del orden nacional y el otro del orden local— que hacen parte del conjunto de factores que, en su interacción compleja, también juegan papel en la reconfiguración de los territorios. Son ellos: el Estado y las élites locales.

El papel del Estado en las reconfiguraciones territoriales

El Estado central a través de la emisión de leyes y de la implementación de política pública juega también papel importante en las reconfiguraciones del territorio, a lo largo del tiempo y del desarrollo del conflicto armado. Al examinar los diversos estudios de MH es posible establecer los dos campos en que lo hace —el militar y el institucional—, los diferentes aspectos sobre los cuales actúa en esta materia y el efecto territorial obtenido en los hechos.

14 Se recuerda que Arauca no cuenta dentro del cuadro de reconfiguraciones por la insuficiencia de la información al respecto.

Como actor militar

El Estado, como actor militar, interviene directamente en el desarrollo del conflicto armado por acción y por omisión y con ello incide en la modificación de las territorialidades del conflicto y en las virulencias del mismo.

- a. Como actor militar de carácter nacional, el Estado tuvo tres momentos claves en los que por su intervención decidida en la lucha antidroga afectó territorialidades específicas de control del narcotráfico (llámense carteles de Medellín y Cali a finales de las décadas 1980 y 1990, o llámense narcotraficantes, paramilitares y guerrillas de mediados de los años noventa en adelante). Esa intervención hizo dar un viraje a las decisiones estratégicas de los actores armados, que tuvo claros efectos en las recomposiciones territoriales del conflicto armado y del narcotráfico.

En la primera coyuntura, cuando atacó a los carteles originarios de la droga (en Magdalena Medio y en el Meta y Caquetá), los narcotraficantes se expandieron hacia otras selvas (Putumayo, por ejemplo), iniciándose allí historias del conflicto armado como la del caso de El Placer; o cuando desarticuló el Cartel de Cali, y nuevos capos configuran la territorialidad narco del norte del Valle y se instalan en Trujillo con las consecuencias de violencia y reconfiguraciones territoriales que ya se expusieron.

En la segunda coyuntura, a partir de 1994 y años siguientes, cuando atacó y fumigó territorios con extensos cultivos de coca, como Guaviare y Caquetá, los actores armados —esta vez insurgentes y antiinsurgentes— recomponen las territorialidades de sus dominios para lo cual reorientan los blancos territoriales de sus disputas y escalan su violencia. En este contexto se suceden hechos emblemáticos de violencia como las masacres y los arrasamientos de El Salado, El Placer, El Castillo 2 y sus consiguientes reconfiguraciones territoriales. En una tercera coyuntura, cuando con el Plan Colombia seguido de la seguridad democrática, el Estado redobla su

lucha antidroga —tiñéndola decididamente de lucha anti-subversiva— militariza territorios enteros, donde al lado del escalamiento de la disputa paramilitar-guerrilla que allí se daba, su presencia como fuerza pública se acompañó de represión a la población civil y de violaciones a los derechos humanos, de manera tal que se acabó asociando en la mente de los pobladores “la militarización del territorio” a la profundización de las vejaciones a civiles. Esa militarización acaba produciendo con posterioridad al 2007, reconfiguraciones en el orden militar del territorio en los casos de Arauca, Montes de María y oriente antioqueño, donde acaba debilitando sustantivamente a la guerrilla o incluso expulsándola del territorio.

Así, la intervención militar del Estado enmarcada en una política pública que pretende controlar la economía ilegal y violenta en los territorios y recuperar el monopolio de la fuerza, más allá de resultados parciales —unos muy transitorios, otros más estables— no deja de ser factor que incide en los virajes que se dan en la dirección territorial y en el escalamiento del conflicto armado desplegado por décadas en el país.

- b. Como actor militar local, esto es, como actor que con sus diversas unidades militares tiene asiento y permanencia en territorialidades concretas, establece relaciones específicas con los poderes locales y regionales y se convierte a sí mismo en factor de poder en el territorio. Su presencia tiene incidencia específica en las reconfiguraciones de los poderes locales, al convertirse —a lo largo de todas las épocas que abarcan los estudios de MH (1980 - 2014) — en aliado de las fuerzas ilegales (paramilitares o narcotraficantes).

Esa posición le ha valido al Estado el que se afirme que tal alianza pueda ser interpretada como “una política de Estado”. MH se aleja de esa posición y afirma, en cambio, tres factores que condicionan la acción militar del Estado como una acción proclive a la alianza con los actores ilegales en el territorio. Ellas son:

- La “precariedad histórica en la formación estatal en Colombia” y la prevalencia del “divorcio existente entre el Estado central y sus políticas y las estructuras del poder local encargadas de implementarlas” y, por tanto, una condición que fácilmente tiende a “una ‘cooptación’ regional y local del Estado”, que hace que sus estructuras locales y regionales sean permeadas por los distintos actores de la guerra (CNRR-GMH, 2008, página 158).
- La incidencia de coyunturas nacionales en las que es el mismo Estado central el que entra en crisis, hasta el punto en que MH lo califica como “colapso parcial del Estado”¹⁵, al referirse a la coyuntura al fin de la década de 1980 y principios de la de 1990, que luego se prolonga con la desinstitucionalización del proceso 8000 y que: “favoreció la desinstitucionalización de la lucha contra-insurgente, lo que implicó desde la privatización de sus actores (expansión de la primera generación paramilitar) hasta la desregulación de los métodos de guerra (masacres, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales)” (CNRR-GMH, 2008, página 159).
- La incidencia de coyunturas nacionales en las que también juegan papel las ideologías que estimulan en el estamento militar la comisión de excesos en la acción contrainsurgente. MH se refiere a la Doctrina de Seguridad Nacional impartida desde los años 1960 en América Latina y que los militares colombianos en funciones continuaron aplicando en la coyuntura de finales de los 1980 y principios de los 1990 (CNRR-GMH, 2008, páginas 159-60). De ahí que la fuerza pública también incida en las reconfiguraciones del territorio como actor de poder directo en localidades y regiones (caso Remedios/Segovia), o

15 Retomando el concepto de Paul Oquist y aplicado a ese final de los años 1980 y principios de los años 1990, en que se vive “la desestabilización política e institucional provocada por el efecto simultáneo del narcoterrorismo y el agravamiento de la guerra con la insurgencia” (CNRR-GMH, 2008, página 159).

mediante su cooptación por los poderes armados ilegales (paramilitares, narcotraficantes o esmeralderos) que reordenan las estructuras de poder local a su antojo (casos de Trujillo y El Castillo 1, por ejemplo).

Como actor de transformaciones institucionales

En su faceta de hacedor de política pública, emitiendo leyes y decretos y agenciando su política en los territorios, el Estado también incide en la reconfiguración de las regiones por dos vías distintas: a) por las transformaciones sociales, políticas o económicas pensadas y logradas; y b) por los efectos no deseados pero contundentes que tales políticas tienen en la dinámica de los conflictos sociales y armados en los territorios. Así, los estudios de MH muestran incidencias en las reconfiguraciones de los territorios tan variadas como las siguientes:

- La coyuntura de apertura democrática que propició el Estado nacional en los años ochenta y que posibilitó la transformación política de muchas localidades y regiones, tuvo un efecto no deseado pero contundente: en aquellos territorios donde especialmente la UP logró cambiar la correlación de fuerzas electoral y de influencia política, se desencadenó el genocidio político de dicha agrupación y, a través de ello, se abortaron las transformaciones del orden político (en Segovia/Remedios y El Castillo 1, como ventana de lo que aconteció en las regiones respectivas, y Trujillo, como caso puntual).
- Las coyunturas en que el Estado, con sus políticas de diálogo y negociación con actores armados (guerrillas al principio de los años noventa y paramilitares entre 2003 y 2006) impulsa transformaciones institucionales tendientes desarmar actores ilegales (M-19, EPL, AUC) y —en el caso de las guerrillas— a neutralizar factores que alimentan el conflicto armado (las condiciones para la participación política), este mismo Estado logra efectos no deseados, pero también decisivos, en la continuación del conflicto armado: a) el que en los territorios

“periféricos”, localidades y regiones dejadas por las guerrillas desmovilizadas sean copadas por las no desmovilizadas, por incapacidad de construir presencia institucional y militar (El Placer, El Salado); y b) el que los territorios donde las AUC se desmovilizaron hayan quedado en manos de los grupos armados posdesmovilización —que hoy son los que mantienen la violencia sobre la población en vastísimos territorios de la nación— por los criterios ambiguos con que el Estado negoció con los paramilitares y por su incapacidad en la neutralización de su transformación en “bandas criminales” (Buenaventura, alta Guajira, Atrato, norte del Valle, Putumayo, Meta).

- Las transformaciones institucionales impulsadas en la coyuntura de los años noventa, con las que el Estado reconoce los derechos étnicos y de actores colectivos (la delimitación de sus territorios colectivos, el ejercicio de su autonomía y autodeterminación como comunidades, y el respecto a sus cosmovisiones), transcurren paralelamente a la escalada y extensión del conflicto armado en esos territorios. Frente a ella, el Estado no solo muestra su incapacidad para controlar los efectos arrasadores sobre este tipo de comunidades y derechos recién logrados, sino que participa a su manera de esa devastación mediante el tipo de acción militar que también agenció sobre tales territorios y comunidades (Bojayá y Buenaventura).
- Cuando el Estado central impulsa políticas económicas neoliberales, de hecho fomenta —en especial sobre territorios periféricos y de frontera históricamente sometidos a lo que sus comunidades perciben como “violencia estructural”— una intervención excluyente de megaproyectos o de economía extractiva y de enclave que ahonda la inequidad y esas “violencias estructurales” (Bojayá, Buenaventura, Bahía Portete). De otra manera operan estas políticas neoliberales en territorios más integrados a la economía nacional como son los de periferias del piedemonte llanero o de regiones centrales, con los efectos de descampesinización que allí se dan —reforzados por los respectivos procesos del conflicto armado— (El Castillo, Trujillo, El Salado).

En síntesis, ciertas medidas de política pública han tenido, en diversas coyunturas y sobre variados territorios, efectos no deseados (por incapacidad en el control de como tales medidas se engarzan en los conflictos locales) o efectos conocidos por devastadores sobre la población campesina, pero sobre los cuales prima la total indiferencia social y política. En otras palabras, hay intervenciones de política pública del Estado que, de manera directa o indirecta, inciden en las reconfiguraciones de los territorios a la manera de quien da “dos pasos adelante y uno atrás”, para parafrasear una conocida descripción acerca de cómo operan a veces los actores políticos. Así, y a pesar de todas las políticas públicas, ¡las periferias siguen siendo periferias!

El papel de las élites locales

En las periferias abordadas por los 13 estudios objeto de este balance es diferente la manera como se engarzan los grupos de poder local en el conflicto armado que se cierne en su territorio y por tanto esa especificidad será también arte y parte del tipo de reconfiguración producida en el territorio. Su actuación en el conflicto armado tiene *efectos directos y específicos sobre las estructuras de poder local, y en buena parte de las veces, sobre el cataclismo que por violencia se desencadena contra la población en los territorios*. El interés a continuación es el de resaltar las diferencias a partir de las cuales se definen esas élites:

- *Élites políticas locales y regionales asociadas a la tierra y al comercio, y élites políticas locales asociadas a las esmeraldas, que reaccionan contra la extorsión, secuestros y/o asesinatos hechos contra sus miembros por las guerrillas y forman grupos armados paramilitares, primero privados locales y luego llamando y apoyando a las AUC, con el objeto de contrarrestar el poder de afectación de las FARC a sus vidas y bienes y de neutralizar la afectación de la correlación de fuerzas político-partidistas por la UP (El Salado, El Castillo).*

- *Grupos de narcotraficantes que devienen élites políticas y sociales locales* que se valen de su asociación con las FF. AA. para lograr su cometido por medio de la violencia contra líderes sociales y políticos locales (Trujillo).
- *Élites locales y regionales empresariales, terratenientes y narcos* que llaman expresamente a las AUC para que ingresen al territorio con su apoyo y financiación, le disputen a la guerrilla su poder territorial y su capacidad de extorsión, secuestro y asesinato en contra de sus respectivos grupos de poder y desencadenen los procesos de tierra arrasada que faciliten la implementación de sus intereses económicos en el territorio (Buenaventura).

Hasta aquí los casos documentados por MH en los que las élites locales y regionales cumplen un papel directo en el desencadenamiento de los procesos violentos y por tanto en todas las consecuencias que luego —por el desenvolvimiento de los hechos, con o sin su aquiescencia directa— se cernirán sobre los territorios. No obstante, es importante también señalar otro tipo de combinaciones que se dan entre grupos de poder locales y regionales y grupos armados y comprometidos o no en el desencadenamiento de las violencias en el territorio. Dentro de los casos documentados por MH resaltan:

- *Donde no hay élites locales* por tratarse de una sociedad poco diferenciada socioeconómicamente, pero donde las localidades no quedaron exentas de las reacciones violentas agenciadas por parte de otro tipo de poderes locales y dirigidas tanto contra las guerrillas (secuestros y extorsiones) como contra el cambio de correlación de fuerzas políticas con la influencia de la UP en el territorio. Es el caso de Remedios/Segovia, en el que son las propias FF. AA. asentadas en el territorio y devenidas autoridad local, las que hicieron directamente el oficio.
- *Donde las élites locales y regionales se alían con los grupos guerrilleros*, jugando así su papel en el fortalecimiento de estos actores armados y sus dominios en el territorio, al garantizar el entronque de FARC y ELN como poderes político-electorales (a través de la UP y del Partido Liberal respectivamente)

y la ocupación directa o mediada de cargos de representación ciudadana y de gobierno municipal y departamental y el manejo de los recursos públicos. Tal fue durante décadas el caso de Arauca.

Finalmente, hay casos locales en los que el compromiso local no es con el desencadenamiento de la violencia arrasadora sobre el territorio. Aquí se observan 2 variantes:

- *Donde las élites locales también son extorsionadas por las guerrillas, pero no acuden a las AUC.* Tal es el caso de la baja y media Guajira, cuya economía local está vinculada al comercio de contrabando (hasta finales de los años 1990) y al pastoreo y ganadería de los wayúu, y donde no se presenta la hegemonía de una o dos familias en la política. Aquí (media Guajira) los afectados por las guerrillas arman sus propios ejércitos privados para defenderse directamente, sin implicar a su propia población. En el caso de la alta Guajira, en Bahía Portete, una de las dos familias en disputa por el puerto natural es manipulada por los paramilitares en su propósito de control del puerto y de las rutas del narcotráfico. No se trata de un llamado desde lo local. Las AUC entran a la Guajira por su propia iniciativa e interés: “los paramilitares tienen entre sus metas controlar las relaciones políticas clientelistas con la población nativa y la administración pública, además de acceder a las jugosas regalías que llegan al departamento, en su gran mayoría por la explotación de los recursos mineros del carbón y la sal”¹⁶.
- *Donde las élites locales se comprometen con la resistencia local* contra las violencias de insurgentes y contrainsurgentes —élite local comerciante poderosa con fuertes redes con sus colonias de otras localidades y ciudades del país— y donde gracias también al movimiento local y regional de pobladores y víctimas, más la excepcional y contundente intervención del Estado departamental y nacional se obtienen resultados relativamente rápidos de reconstrucción (Granada).

16 Citando a Duncan y Guerra, 2006 (CNRR-GMH, 2010, página 114).

- *Donde no hay élites locales por tratarse de una pequeña comunidad étnica rural* y donde en el entorno regional no hay sino economías de enclave que han convivido con los poderes armados dominantes de turno, y la irrupción de la guerra tuvo su propia lógica interna macro-regional. Allí también se observa a la localidad en pleno comprometida en la resistencia y actividad de reconstrucción (Bojayá).

4 RESISTENCIAS

Las resistencias tienen un espacio importante en los estudios de MH. No obstante, su abordaje sigue un camino muy diferente al que se hace con el conflicto armado. Este último, además de tener toda su importancia como memoria (en los capítulos de memoria y de “los hechos”), también lo tiene con el desarrollo de una narrativa académica analítica (en el capítulo de contexto, en introducciones y a veces en las partes finales). Eso hace que haya en los estudios una gran diferencia en el alcance analítico y de sustentación empírica entre el tema del conflicto armado y el de resistencias.

La exposición de los procesos de resistencia en los casos estudiados no sigue un patrón común ni en la temporalidad abarcada, ni en la lógica narrativa, ni en el foco resaltado, ni en la utilización de los conceptos. No obstante esa heterogeneidad en el tratamiento, la riqueza de la memoria rescatada por MH sobre este tema en la geografía nacional permite a las víctimas hacer memoria de su capacidad de agencia en los momentos más aplastantes y diversos de las violencias perpetradas sobre ellas y, con ello, viabilizar también el fortalecimiento de los procesos de dignificación subjetiva individual y colectiva (después de los procesos de des-subjetivación que las violencias implicaron), y de acción colectiva con que reclaman e implementan sus derechos como víctimas y ciudadanos y reconstruyen los lazos sociales, arraigos e identidades colectivas de sus respectivas comunidades.

La exposición de este capítulo de balance sobre las memorias regionales de las resistencias se dividirá en dos partes: la primera identificará las características generales que muestran los estudios sobre las resistencias locales y regionales; la segunda abordará los rasgos de las resistencias que los estudios de MH resaltan como conocimiento académico y como memoria histórica del período de conflicto armado en el país, en términos de la relación resistencias y territorio.

Se acoge la conceptualización general aportada por MH para entender “los procesos de resistencia” como “el conjunto de acciones y estrategias a través de las cuales individuos y colectivos intentan modificar el dominio de un actor externo o de una institución, subvertir el orden y sobrevivir con dignidad” (CNRR-GMH, 2011, página 288).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es importante anotar que —como los casos estudiados por MH son muchas veces casos locales— en el desarrollo de los procesos de resistencias al conflicto armado, unas veces estos se refieren al caso puntual y otras se contextualizan y muestran la dinámica resistencia en el ámbito regional que rodea el caso local. En cada ocasión precisaremos a cuál de los dos ámbitos espaciales se está haciendo referencia.

Las temporalidades

Se encuentran cuatro tipos de abordaje temporal de las resistencias: el que destaca las resistencias de los pobladores en la mediana duración que incluyen resistencias a conflictos sociales antecedentes; el que se focaliza en las resistencias de un período de conflicto temprano (año 2000 y anteriores) y sus desarrollos posteriores; el que se refiere a una temporalidad muy puntual del conflicto armado; y el que focaliza una resistencia al conflicto armado en la mediana duración.

El interés por la mediana duración que incluye resistencias a conflictos sociales antecedentes

Los estudios que destacan las resistencias antecedentes al conflicto armado, generalmente muestran la configuración de rasgos que más adelante —frente las violencias— seguirán jugando papel. Por lo regular, estas resistencias antecedentes forman parte de los capítulos dedicados al contexto general del conflicto armado. Es en los capítulos de memorias y en especial de resistencias donde se desarrollan las que corresponden a los períodos de violencia. Los casos son:

- El estudio de Bahía Portete y alta Guajira, con la resistencia del pueblo Wayúu a la intervención e instauración en su territorio, de megaproyectos (carbón) a partir de los años 1980. En este caso, se hace mención fugaz a la resistencia histórica que ha caracterizado a este pueblo, el cual, desde los tiempos de la Corona española no se sometió al dominio militar, religioso, político ni cultural que se le quiso imponer. Se concentra luego el estudio en las resistencias de las familias de Bahía Portete a partir de la llegada de las AUC en 2001 hasta 2010.
- El estudio de Bojayá muestra la resistencia que en el medio Atrato agenciaron la etnia indígena, desde mediados de los años 1970, y los campesinos afrocolombianos desde los años 1980 ante la intervención en su territorio de empresas madereras y en función del inicio de la defensa de su autonomía y autodeterminación. Muestra luego las resistencias a los embates del conflicto armado que irrumpe a finales de los años 1990 y que no cejan hasta hoy, más las resistencias que en específico adelantó la comunidad de Bojayá, víctima de la masacre y la “guerra sin límites” durante los días de la masacre (2 al 6 mayo 2002) y luego con las iniciativas de memoria hasta 2009.
- El estudio de El Castillo describe, para el Ariari y desde los años 1950, la intensa agencia colectiva que los campesinos adelantaron frente al Estado, mediante reclamos

y organizaciones sociales como las Juntas de Acción Comunal, las comisiones y el sindicato agrario, y bajo la influencia del Partido Comunista. En adelante prosigue con las resistencias desencadenadas por el conflicto armado hasta nuestros días, en las que incluye las resistencias a las nuevas formas de intervención de empresas avaladas por el Estado sobre los recursos mineros y de agua.

- El estudio de Buenaventura se remonta a los años 1930 y 1970 con los sindicatos de pescadores y a los ochenta con las organizaciones campesinas (de componente reivindicativo más racial que étnico contra la discriminación) y con la Iglesia en cabeza de su obispo, siempre como actor clave, para luego centrarse en las resistencias ante el conflicto armado que allí irrumpió a partir del año 2000 y que aún se mantienen.
- Los casos de Granada y San Carlos tratan las resistencias campesinas a la instalación del complejo hidroeléctrico en sus territorios y las movilizaciones cívicas por tarifas eléctricas (décadas de 1970 y 1980), para luego desarrollar las resistencias al conflicto armado (con violencia política en los años 1980 en San Carlos y a partir de la disputa entre guerrillas y AUC desde 1997 hasta el fin del conflicto, más las iniciativas de memoria que se dan hasta la actualidad).

El foco de la mediana duración exclusivamente frente al conflicto armado

En el caso de El Placer, MH desarrolla un capítulo dedicado a la resistencia protagonizada por las mujeres de un municipio vecino —Puerto Caicedo— que remonta sus orígenes a los años 1970 ante las restricciones a las cuales se ven sometidas las comunidades campesinas por cuenta de la presencia de actores armados dedicados al cultivo y tráfico de droga. Esta resistencia cobra envergadura regional (Putumayo).

El foco temporal en el conflicto armado “temprano” (2000 para atrás) y desarrollos posteriores

En este rango de temporalidad están:

- El caso de Trujillo focaliza el estudio de las resistencias a la coyuntura marcada por “la masacre de Trujillo” (1986-1994) y en mayor medida, la del período posterior: 1995 - 2008.
- El caso de Remedios/Segovia focalizado en el estudio de las masacres y primera generación de grupos paramilitares (1982-1997) centra su atención en las resistencias del período de conflicto estudiado, para extenderla luego hasta nuestros días.
- El caso de El Salado focalizado en la masacre de 2000 y los desarrollos posteriores hasta 2010.

El foco puntual

- El caso de Arauca solo se interesa por la resistencia frente a la violencia sexual contra la mujer durante los cinco años de dominio del Bloque Vencedores de Arauca (2001-2005).
- El Placer se interesa por la resistencia específica en la Inspección de Policía en el período de dominio del bloque de las AUC (1999-2005).

Las lógicas narrativas

Los estudios regionales presentan una diversidad amplia en la lógica narrativa por la que sus autores optan. Solo un grupo de cuatro casos sigue una lógica narrativa similar; el resto, desarrolla lógicas narrativas heterogéneas entre sí.

- El caso de El Castillo opta por una exposición de lo que consideran los diversos “mecanismos de afrontamiento”, pero sin una definición con criterios precisos de diferenciación y con una notoria falta de sistematicidad en el manejo de

las temporalidades (se mezclan tiempos y en ocasiones ni siquiera se distinguen). Es solo con un trabajo adicional, a partir del cual se pueden sacar claras las características y modalidades de las resistencias en El Castillo, y asociarlas a los tiempos diferentes del conflicto armado para que adquieran su real significado.

- El caso de Arauca solo se interesa por la violencia sexual perpetrada por el Bloque Vencedores de Arauca y como la pesquisa no arroja referencias acerca de una resistencia dirigida a ese tema, entonces más que una narrativa, lo que el estudio presenta es una conclusión: no hay resistencias ante la violencia sexual contra las mujeres.
- El caso de El Placer tiene también un enfoque de género pero manejado de manera muy diferente al de Arauca. Allí en el capítulo pertinente a las resistencias se desarrollan en detalle las resistencias cotidianas y silenciosas de hombres y mujeres al dominio y violencias paramilitares de diverso tipo. Sorpresivamente para el lector, una vez terminado el estudio del caso y a manera de “epílogo” se aporta un extenso y detallado capítulo sobre la resistencia colectiva y pública adelantada por mujeres en el municipio vecino de Puerto Caicedo, resistencia que se extiende en el tiempo y en el espacio mucho más allá de los límites locales y subregionales.
- Bahía Portete es el otro estudio con enfoque de género. En él el lector encuentra un estudio sistemático de los efectos diferenciados de la violencia para hombres y mujeres y sus respectivas maneras de resistir a ellas. Todo lo anterior sustentado en un análisis preciso de las dimensiones culturales que están en la base de la explicación del origen y significado de dichas resistencias y de la manera como las AUC de forma premeditada le hace explotar en mil pedazos a los guerreros hombres wayúu las bases que sustentan su capacidad de resistencia a esa violencia.
- El caso de Trujillo se concentra en las resistencias como iniciativas de memoria frente al olvido y la impunidad. La

lógica narrativa adoptada acoge como hilo conductor la trayectoria histórica de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) que llega al territorio desde 1990.

- El caso de Granada desarrolla extensamente la resistencia efectuada en la localidad y en sincronía con la resistencia que se adelantaba en el entorno regional. Es más: uno de los objetivos centrales del estudio es poner de relieve el caso de esta resistencia local por su potencia y alcance (Premio Nacional de Paz). No obstante la lógica narrativa no sigue un marco muy preciso, pues expone las formas de resistencia, unas según objetivo, otras según actor que la impulsa, otras según el momento, sin aportar un marco general de relación entre momentos de conflicto y tipos de resistencia o alternativamente —como sí se hace en San Carlos (el municipio vecino) — según criterios conceptuales previamente establecidos.
- El caso de San Carlos aporta un análisis bastante sistemático y detallado de las resistencias en la localidad, acogiéndose al hilo conductor que le proporciona el marco conceptual a partir del cual distingue diversos tipos de resistencias; a estas las sustenta mediante una investigación empírica exhaustiva y remarcable.

Los siguientes cuatro casos tienen una lógica narrativa similar, en el sentido de que exponen las resistencias siguiendo el marco de la temporalidad del conflicto armado y sus transformaciones. Resaltamos lo siguiente en cada caso:

- En el caso de Remedios/Segovia se parte inclusive de la tesis de que la resistencia es moldeada por el conflicto armado: “La dinámica regional del conflicto armado (...) moldeó la movilización popular, pues impuso formas organizativas como los comités de derechos humanos y de víctimas con sus respectivas agendas; determinó coyunturas y formas de protesta como los “éxodos campesinos”, las marchas e incluso los paros cívicos. El conflicto armado produjo una secuencia que empezaba con el enfrentamiento armado, seguía con la movilización y se cerraba

con el desplazamiento y el asentamiento en las invasiones, proceso que supuso la circulación regional de los líderes sociales, quienes continuaron animando la movilización” (CNMH, 2014, página 167).

- El caso de Buenaventura presenta también una narrativa sistemática y remarcable acerca de las resistencias. En primer lugar, parte de unos conceptos previamente definidos. En segundo lugar, la narrativa la articula relacionando la periodización del conflicto armado a las distintas formas de resistencia que se desarrollan o emergen; y como es caso que toca con población étnica en un territorio especialmente afectado por megaproyectos, la narrativa de las resistencias articula los dos ejes de conflicto (el armado y el de los megaproyectos) y lo contextualiza con el marco común que los dos comparten: la reivindicación étnico-territorial que encuadra las dos luchas.
- El caso de Bojayá rescata el concepto de “resistencia histórica” que portan las comunidades negras e indígenas en su conciencia histórica y a partir de la cual explican su pervivencia en el territorio pese a la esclavitud, la marginalidad y la violencia sistémica que han tenido que afrontar desde siempre. A partir de allí el estudio despliega el detalle de las resistencias en dos ámbitos escalares: las características de las resistencias desarrolladas en lo local —exclusivamente frente a la masacre y las condiciones del retorno—; y las resistencias en el plano regional con relatos desde cuando los conflictos solo eran sociales (frente a las empresas madereras), hasta nuestros días signados por el conflicto armado.
- El caso de El Salado: aporta al lector, y guarda como memoria para las víctimas, la narración de las resistencias a partir de un hilo conductor: “la memoria como proceso”. Con base en ello recoge las narrativas de memoria sobre las resistencias durante los hechos de la masacre, sigue con las memorias en torno a los procesos de retorno y culmina con las iniciativas de memoria de los últimos tiempos.

La riqueza que aportan los casos, si se revisan desde la condición socioespacial de los procesos, es posible dilucidarla a partir de dos líneas de análisis: la que subraya lo particular que presenta en cada caso la relación resistencias-territorio y la que destaca las tendencias transversales posibles de identificar en medio de lo particular de los casos. Son ellas las que se desarrollarán en los siguientes acápite.

TERRITORIOS Y RESISTENCIAS: PARTICULARIDADES Y TENDENCIAS

En este acápite se destacará la riqueza que aflora, cuando se relacionan los territorios y los respectivos procesos resistentes. Si bien cada caso aporta sus particularidades, también es posible identificar cinco rasgos que, como factores articuladores, permiten establecer tendencias. La exposición los ordena según esas agrupaciones, pero rescata la riqueza cultural, social y política de la agencia en cada uno de los casos incluidos.

Tabla 3. Factores centrales en la articulación de las resistencias

Factor central en la articulación de la resistencia	Casos
El capital social antecedente	El Castillo, Tibú, Granada, San Carlos
La condición étnica y el valor sociocultural del territorio	Bojayá, Buenaventura, Bahía Portete
La estigmatización política de la memoria y las memorias violentadas	Remedios/Segovia, Trujillo
La economía del narcotráfico	El Placer
La condición urbana	Buenaventura, Comuna 13 - Medellín

Fuente: elaboración propia con base en la información de los estudios de MH.

El capital social acumulado previamente

Tres casos locales de resistencia colectiva a los embates y efectos del conflicto armado muestran el papel central que juega un rasgo —“el capital social antecedente” al conflicto armado— en la dinámica, orientación y capacidad de la resistencia. Lo interesante es observar en qué consiste ese “capital social antecedente” en los tiempos del conflicto armado y cómo juega en las posibilidades y despliegue de las resistencias, en contextos sociales diferentes.

Los cuatro casos implicados son: El Castillo, en la subregión del Ariari, Meta; Tibú, en la subregión del Catatumbo, Norte de Santander; y Granada y San Carlos, en la subregión del oriente antioqueño, Antioquia.

El Castillo

MH histórica plantea que “durante la colonización del Alto Ariari, junto a las que podrían denominarse solidaridades originarias, se fueron tejiendo densas redes de capital social, que posteriormente, en los años del desplazamiento silencioso y del desplazamiento “duro”, se convirtieron en un recurso de poder fundamental para afrontar el conflicto armado, la violencia socio-política y el vaciamiento” (CNMH, 2015c, página 212). Ese papel del capital social antecedente se puede apreciar en la síntesis que se hace a continuación de los procesos comprometidos.

Este territorio tiene una ubicación estratégica entre La Uribe (sede del Secretariado de las FARC por años) y el páramo del Sumapaz (donde tuvieron su origen las autodefensas campesinas y de donde salieron las columnas de marcha hacia el páramo de Sumapaz y sur del Tolima y oleadas de colonización hacia el Ariari); allí también nace endógenamente un frente de las FARC (26) a finales de los años 1970. De ahí que la región del Ariari —especialmente el alto Ariari— se construya al son de la colonización campesina y bajo una fuerte influencia del Partido Comunista. De ahí también que proliferen desde tempranas

épocas diversas modalidades de organización campesina, tales como las comisiones de baldíos (para regular la colonización) y las comisiones sindicales (para regular entrada de gentes a la región y para actuar como “autoridad”). Con el Frente Nacional desde los años 1960, “las Juntas de Acción Comunal, las comisiones y el sindicato se convirtieron en las organizaciones sociales de base que comenzaron a hacer públicos los reclamos” campesinos (CNMH, 2015c, página 57).

El arrasamiento perpetrado en los años 1980 sobre liderazgos políticos y comunitarios y la población en general, inhibe la dinámica organizativa y de movilización social. No obstante, con la entrada en la zona de la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz (CIJP) en 1995 y con la Misión Claretiana en 2000, se comienza el acompañamiento a las experiencias de resistencia comunitaria impulsadas por las organizaciones locales y se articula la resistencia colectiva en varios sentidos: a) para impedir asesinatos selectivos, realizar levantamientos de los campesinos asesinados, hacer acompañamiento psicológico; b) para orientar a las víctimas en las rutas de denuncia y exigibilidad de sus derechos; y c) para denunciar en el ámbito nacional e internacional las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Cuando se desencadena la época del “desplazamiento duro” (AUC al fin de la zona de distención) las acciones de resistencia toman otro cariz. Unas son las que se realizan *en el mismo territorio*, que son de dos clases: la reconstrucción de redes de apoyo y de espacios de confluencia política para las organizaciones sociales, y la acción de las familias e individuos, que de todas maneras se apoyan en las redes. Otras acciones son las que se realizan *en el territorio ampliado* (Villavicencio, Bogotá y otras ciudades de recepción de los desplazados). Sobresalen acciones como: las mujeres del Ariari que reactivan la Unión de Mujeres Demócratas en Villavicencio y participan de colectivos de víctimas; los desplazados castillenses de Sintragram en las ciudades promueven organizaciones que mantienen vínculos entre los expulsados y quienes permanecen en el territorio y se asocian a un abanico de organizaciones de apoyo, como la Mesa Humanitaria del Meta, el Movimiento de

Víctimas Nacional, el Banco de Datos Regional. Además se organizó en Villavicencio un Asentamiento de desplazados (Civipaz) —a la manera de una Zona Humanitaria— con la intención de retornar al corregimiento de Puerto Esperanza (El Castillo) y lograr protección especial.

De 2008 en adelante se despliegan dos nuevas formas de acción colectiva relacionadas con: a) las nuevas reivindicaciones sobre el territorio con el proceso de adjudicación y titulación de tierras baldías, la defensa del derecho al agua y la protección del territorio frente a la minería, en las cuales la CIJP y la Misión Claretiana siguen siendo los acompañantes; y b) las iniciativas de memoria.

Tibú

El estudio de MH sobre Tibú resalta la importante actividad organizativa y de movilización social que campesinos y trabajadores de las petroleras tuvieron desde los años 1950. Es un territorio que se construyó a partir de esa época al son del boom petrolero con la atracción de trabajadores para esa actividad y la apertura de tierras por colonos campesinos, y la influencia que luego adquieren el Partido Comunista y el sindicalismo. En los años de 1980 y 1990, con la presencia del ELN y las FARC y antes de la llegada de las AUC, se despliega una significativa movilización social: paros y marchas jalonados macro-regionalmente, que fueron “acompañadas por agrupaciones de izquierda que tenían afinidades ideológicas y políticas con las guerrillas (Unión Patriótica y Partido Comunista Colombiano y FARC, A Luchar y ELN y Partido Comunista-ML y Frente Popular y EPL)” (CNMH, 2015b, página 153). Fueron movilizaciones orientadas al reclamo por la entrega y formalización de la tierra; la provisión de bienes y servicios públicos (luz, vías, educación y salud), y la participación de las comunidades en las regalías de la explotación petrolera, y luego por el derecho y protección de la vida.

Todo lo anterior es el capital social acumulado con que Tibú contó a la hora de enfrentar la escalada de violencia desatada

por la incursión de las AUC, la disputa con los grupos guerrilleros y la intervención de las FF. AA. del Estado con el Plan Colombia y las fumigaciones a los cultivos de coca, muy extendidos en la zona. Es un capital social inserto en la influencia de la izquierda política y las guerrillas armadas. ¿Cómo se manifiesta en la época de masacres y desplazamientos desencadenada a partir de 1999?

A pesar de la violencia desatada y del desplazamiento forzado masivo consecuente a partir de 1999 y de las vulneraciones por las fumigaciones a los cultivos de coca a partir de 2001, se dan marchas para reclamar proyectos alternativos para el campesinado y el cumplimiento por el Estado de los pactos anteriores (desde 1987); ante los asesinatos, también se hacen marchas reclamando la vida y la protección de los distintos sectores de la población.

Cuando la desmovilización paramilitar se produce (2004) y llegan agencias internacionales acompañantes, resurge una intensa actividad organizativa ahora enfocada en desplazados, víctimas, mujeres y jóvenes y se inician los trabajos de memoria con caminatas, jornadas, museos itinerantes, galerías, marchas, festivales, encuentros culturales campesinos, peregrinaciones por los ríos, procesiones, alboradas y con nuevas organizaciones y colectivos de víctimas. Pero allí las ONG que acompañan a las víctimas marcan un distanciamiento con el proceso de Justicia y Paz, que “menguó la posibilidad de construir una memoria polifónica y una verdad judicial más holística” (CNMH, 2015b, página 209) En 2006 las movilizaciones reivindican el empleo y los programas que permitan a los retornados “volver a sembrar”. Nacen también espacios donde se integran varias organizaciones sociales.

En 2009/10, cuando se escalan los enfrentamientos entre guerrillas y FF. AA., las nuevas victimizaciones sobre la población y los desplazamientos, los campesinos mantienen y renuevan sus resistencias: crearon la zona de refugio humanitario “por la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y la permanencia en el territorio”, “y activaron sus reclamos por el cum-

plimiento de los viejos acuerdos con el Estado. Y en 2013, ante las novedades del “boom agroindustrial, minero energético y de infraestructura, componentes de la *Estrategia de Desarrollo Integral de la región del Catatumbo*” (DNP, 2013), campesinos y campesinas de Tibú y otros municipios del Catatumbo propusieron la creación de la Zona de Reserva Campesina” (CNMH, 2015b, página 49).

Granada

MH plantea que “el tejido social granadino es un factor (...) fundamental para entender (...) la capacidad de respuesta de la sociedad local a los estragos de la guerra. Esto comprende la existencia de un amplio y variado tipo de organizaciones (Juntas de Acción Comunal, organizaciones productivas, religiosas, culturales y artísticas, deportivas, de víctimas, entre otras) y prácticas solidarias desde el convite comunitario hasta el cooperativismo — Coogranada y Creafam— e incluso la alianza de instituciones público-privadas como el Comité Interinstitucional que procuraban ser escenarios no solo de participación sino también de cohesión social y cultural” (CNMH, 2016, página 41). Las movilizaciones cívicas locales vinculadas a un fuerte movimiento regional en los años 1980 también forman parte de ese acervo.

Son tres las claves que fundamentan esas capacidades de respuesta local: por una parte, las resistencias locales fuertemente articuladas a las que se dan en el plano regional; de otra parte, la alianza público-privada que, desde los años 1980 se inauguró en Granada como Comité Interinstitucional, en la cual confluyen las iniciativas, acuerdos y acciones mancomunadas de las organizaciones locales de diverso tipo, la participación de los funcionarios locales y el apoyo de instituciones regionales públicas y privadas, así como de la Iglesia católica; por último, las redes de comercialización de los productos locales que operan desde el nivel micro rural, pasan por el local, se extienden al regional y se afincan en diversos lugares del espacio nacional.

Ese “capital social” jugó en los diferentes momentos del conflicto armado y bajo el despliegue de diversas modalidades de acción: durante el escalamiento de la confrontación entre grupos armados (1997-2003) Granada participa y se alimenta de un fuerte movimiento regional liderado a tres bandas por la Iglesia (Diócesis de Sonsón-Rionegro), la Asamblea y el Consejo Provinciales (como movimiento por la participación ciudadana y la autonomía territorial) y el movimiento de los alcaldes del oriente antioqueño (que abogan por los acercamientos humanitarios con los grupos armados). Todos se dirigen a humanizar el conflicto y propenden por las soluciones dialogadas, a liberar secuestrados; además, la acción también se orienta al empoderamiento como actor regional y a la autonomía territorial. La resistencia local de Granada muestra, por su parte, acciones de supervivencia y de resistencia a la guerra (por civiles, funcionarios, párroco, médicos, maestros), y llamados y denuncias ante las autoridades locales, departamentales y nacionales; también se adelanta acompañamiento a desplazados; todo, con fuerte incidencia de la acción del Comité Interinstitucional (privados y públicos). A partir de 2000, ante la destrucción del pueblo y el vaciamiento del territorio, la resistencia local toma mucha fuerza y se enfoca en “la reconstrucción del pueblo”; la movilización de las colonias de comerciantes granadinos en todo el país, el comité interinstitucional local, pobladores, campesinos autoridades locales, con apoyo de Iglesia, Gobernación y movimiento social regional.

A partir de 2003, con la desescalada del conflicto armado, la resistencia se asocia a los retornos y a las políticas de memoria, primero con el acompañamiento de ONG regionales y una nacional que focalizan el trabajo con las víctimas en lo socio-afectivo, la memoria y la reapropiación y resignificación del territorio; también está la acción de los retornados y sus demandas a la institucionalidad. A partir de 2007, cuando se consolida en la región el fin del conflicto armado, la resistencia de las víctimas comienza a contar con su propio actor en lo local: Asovida, parte de Aproviaci la organización regional de víctimas.

San Carlos

Esta localidad muestra un caso de importantes antecedentes en la formación del capital social, al tiempo que violentos golpes —desde su origen— a sus posibilidades de acción (exterminio del movimiento cívico local entre 1985-1988). Pero tales experiencias en acciones colectivas sociales y de participación política local jugaron tan intensamente en la construcción de la identidad local y en el auto-reconocimiento de sus pobladores como actor político, que —cuando el conflicto armado se cernió sobre el territorio— tales memorias impulsaron con renovada fuerza, la capacidad para la resistencia.

Desde 1977 se forjó la experiencia local en movilización social de protesta y reivindicación (por las afectaciones de la construcción del complejo hidroeléctrico), que acabó convirtiéndose en experiencia de participación política local y reto a la hegemonía conservadora en los años 1980. Este fuerte movimiento cívico local participó también en el movimiento regional por tarifas eléctricas. Como localidad San Carlos muestra para la época y su entorno regional, un nivel muy alto de organización, movilización social y transformaciones en la correlación política de fuerzas, y una correlativa y radical violencia de los poderes locales y el exterminio del movimiento local.

La resistencia local que en San Carlos se desplegó a lo largo del conflicto armado muestra modalidades muy variadas, pero todas ancladas en ese capital social forjado con anterioridad y que en las memorias aflora como referente siempre presente. Se destaca lo siguiente:

En los años 1990 con el dominio guerrillero, hay una actividad intensa por parte de líderes sociales con la Casa de la Cultura y de la acción de la parroquia con los jóvenes en toda la zona rural y en la cabecera. Cuando a partir de 2000 las AUC escala la violencia, son tres los frentes de resistencia que se abren: la parroquia (obligada a suspender su trabajo con jóvenes en la ruralidad), abre “en un acto de profundo desafío simbólico, el centro pastoral” frente al centro paramilitar; los líderes deportivos organizan

en ese mismo año “los juegos de paz” como manera de romper la aplastante incomunicación entre veredas y entre municipios vecinos; y los desplazados, en conexión con la colonia de comerciantes del “El Hueco” de Medellín, organizan “el tejido social distante” y reproducen en el entorno urbano una dinámica asociativa en diez núcleos (semejante a la que los campesinos tenían en San Carlos con los centros zonales); se organiza también la asociación de desplazados local, y en 2002 se inician los primeros retornos. La Gobernación de Antioquia participa en los dos últimos frentes de acción. Las resistencias de pobladores y jóvenes a través de la actividad cultural y deportiva no cesan en los años siguientes. Desplazados, jóvenes, líderes sociales, Iglesia y Casa de la Cultura son los protagonistas de esas “resistencias directas contra la guerra”. Entre tanta multiplicidad de “resistencias indirectas, cotidianas y silenciosas” se despliegan por doquier, a través de las estrategias de sigilo y los lenguajes cifrados, las prácticas de encuentro, reunión y supervivencia de quienes se rehusaron a desplazarse; y la determinación de maestros, conductores de transporte público y sacerdotes, para mantener o recrear espacios públicos como las escuelas, las iglesias o los caminos y sus tácticas de circulación.

Cuando la violencia comenzó a ceder (de 2003 en adelante) se desplegaron también las iniciativas de las víctimas en la búsqueda de los desaparecidos, en la ayuda mutua de apoyo sicosocial, en el empoderamiento de mujeres, en la reconstrucción de lazos, en las memorias para la verdad, la justicia y la reparación y hasta en propuestas para la reconciliación con los 47 desmovilizados que se asentaron en el municipio. En esta materia son las mujeres las protagonistas quienes, con apoyo institucional, crean el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE). Las actividades culturales continúan.

Comentario final: Nótese la diferencia en cómo juega el capital social local entre las localidades de El Castillo y Tibú, y las de Granada y San Carlos. Las primeras son territorios que se construyeron a mediados del siglo XX con una importante influencia de fuerzas de la izquierda política, las acciones y presiones de las guerrillas y la poquísima institucionalidad aparte de la militar.

Las segundas son territorios que, aunque también contaron con la fuerte presencia guerrillera en su territorio e influencia sobre sus gentes, son territorios construidos de más vieja data y con influencia importante —a pesar de ser periferias regionales— de la Iglesia católica conservadora, de los partidos tradicionales y de algunas instituciones, todo lo cual también aporta al capital social y también se refleja en la diferencia de las resistencias a la hora de la andanada paramilitar y de la Fuerza Pública a partir del fin de los años 1990. En las dos primeras localidades la resistencia continúa siendo muy antiestatal y muy ligada a movilizaciones y organizaciones macroregionales; en las dos últimas localidades, las resistencias, además de sus redes regionales, muestran también iniciativas locales autónomas (el Comité Interinstitucional y los comerciantes en Granada; la parroquia, los líderes deportivos, y CARE en San Carlos) y las resistencias, más que confrontar, cuentan con el apoyo institucional departamental y nacional.

La condición étnica y el valor del territorio

Tres casos locales (Buenaventura, Bojayá y Bahía Portete) muestran el papel central que juega un rasgo específico en la dinámica, orientación y capacidad de la resistencia: la condición étnica y el valor colectivo del territorio. Se señalará a continuación en qué consiste ese rasgo y cómo juega en las posibilidades y despliegue de las resistencias en contextos sociales diferentes.

Buenaventura y Bojayá comparten una misma condición étnica y territorial: la dinámica de exclusión construida desde el centro del país sobre el Pacífico colombiano, que “responde a una historia de larga duración que se inició durante la época de la colonia y que persiste como factor que le confiere identidad a la historia de este territorio”. Una vez libre de la esclavitud, la población afrodescendiente se estableció a lo largo de los ríos y las costas y formaron veredas de tipo parental —veredas fluviales o costeras— caracterizadas por la inexistencia de límites precisos y donde “el territorio está con el mar, no solo es la tierra que la

gente pisa sino también la marea que le moja los pies” (Mama Cuama, citada en CNMH, 2015, páginas 154 y 155). En las partes altas de las cuencas de los ríos se asentaron los indígenas. Así, por una historia ya de siglos, se consolidó una convivencia interétnica entre las dos poblaciones, paralelamente a la del olvido e indiferencia o a la de la simple instrumentalización del territorio por parte de los poderes nacionales.

Solo hasta 1993 con la expedición de la Ley 70 fue reconocido el proceso histórico de apropiación territorial y etnogénesis que construyeron los afrodescendientes en el Pacífico, sin que ello trajera aparejada la configuración de una relación diferente a la de la exclusión y la manipulación instrumental de ese mismo territorio por parte de poderes económicos y públicos con interés en megaproyectos, y por parte de los actores armados con la frontera de guerra que en ella agencian.

Buenaventura

Al carácter étnico y territorial de las resistencias en Buenaventura se aúna la condición urbana de las mismas. Esa complejidad y particularidad hace especialmente prolífico y significativo su caracterización.

La situación particular de Buenaventura como puerto internacional le ha conferido a las luchas de los pobladores dos frentes: el de la defensa de sus derechos frente a los megaproyectos en torno al puerto y el de la defensa de sus derechos y de la vida frente a los actores armados que irrumpen con una virulenta disputa desde los años 2000. Y como transversales a los dos campos de las resistencias afrodescendientes, se plantean los ejes de etnicidad y territorio. Territorialmente las luchas también reflejan la exclusión y la segregación urbanas: desde principios del siglo XIX los poderosos intentaron desalojar a pescadores y agricultores de la Isla Cascajal (donde queda el puerto). En el siglo XXI es también en los lugares de baja marea, o “territorios ganados al mar” de la isla, donde la población afrodescendiente se asentó, mantiene relaciones con

sus comunidades rurales de origen, y habita el territorio de acuerdo con sus tradiciones. Son justamente esos territorios donde se presentan los mayores impactos del conflicto armado en la ciudad, y es “sobre la imbricación rural-urbana desde donde se configura la radiación colectiva que tienen los impactos de la victimización generada por el conflicto armado después del año 2000” (CNMH, 2015, página 45).

Entre 2000 y 2004 se producen 14 masacres en Buenaventura y la ciudad recibe la avalancha de desplazados de las zonas rurales. Desde esa época organizaciones sociales, ONG e iglesia local “le apuestan a la presencia en organismos internacionales y en foros mundiales para denunciar la guerra, solicitar el apoyo de la comunidad internacional, de las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y de la Iglesia para que tengan presencia en los territorios colectivos” (páginas 380-381). El Proceso de Comunidades Negras (PCN) inicia el primer trabajo de incorporación del espacio urbano en el discurso del territorio como espacio vital y extensión del espacio rural.

A partir de 2003 se consolida una resistencia enfocada en la “reterritorialización”, esto es, a la rehabilitación de los lugares y a la resignificación de los espacios, como manera de enfrentar las “geografías del terror” y el despojo por los megaproyectos.

Frente al terror, sobresalen acciones como:

- Desobedecer las restricciones impuestas por los actores armados frente al control del tiempo y a la movilidad de las personas de un sector a otro: caminatas colectivas, reuniones en lugares públicos como parques, canchas de fútbol, esquinas de los barrios, kioscos, cruce colectivo de fronteras invisibles, asistencia de líderes y lideresas a reuniones pese a las amenazas (CNMH, 2015, página 392).
- Ocupar colectivamente los espacios controlados militarmente y resignificar los lugares relacionados con la muerte y la barbarie (página 390) y restablecer las redes de solidaridad y parentesco.
- Construcción de límites simbólicos para que los miembros de grupos armados no puedan ingresar a las casas, ni esta-

blecer relaciones con las niñas o las mujeres (página 393). *Buenos días, ¿me regala un vaso de agua? ¡No hay!, cómprese el agua* (página 393).

- Realización de conciertos, documentación de los casos y la preparación de la denuncia (página 395).
- Mantenerse en el territorio, organizaciones, líderes y la comunidad migran transitoriamente dentro de la misma ciudad (casas de familiares, amigos o vecinos, gracias a las redes de parentesco y de solidaridad que aún se mantienen) (página 397). Frente al despojo de los megaproyectos, sobresalen acciones como:

- No vender los predios, no desalojar, defender los espacios públicos y realizar migraciones colectivas y transitorias dentro de la misma ciudad, reafirmando lazos de solidaridad y fortaleciendo las redes de parentesco sin desocupar el territorio, para tener la posibilidad de retornar una vez se percibe que la amenaza cesa (página 390).
- Denunciar el impacto de los proyectos de expansión portuaria impulsados por el Gobierno nacional (Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBUEN) y por la construcción de la vía Interna-Alternativa), implementar la territorialidad “ancestral” contra los títulos de propiedad y entablar proceso de exigencia jurídica para la titulación de sus predios.
- Documentar casos, ocupar espacios y confrontar a actores armados o funcionarios de la administración local.
- Resignificar el territorio que habitan en las tierras de baja mar, al que denominan “territorios ganados al mar”, carga simbólica y política que evidencia la lucha histórica de estas comunidades; *nosotros empezamos la lucha a tiro de basura, de piedra y de cemento. Y ubicamos estos territorios que antes eran agua, ahora son tierra; son de nosotros (...). Porque nosotros lo hicimos, son nuestros* (páginas 396-397).

A partir de 2005 se da un fortalecimiento de las organizaciones juveniles, las cuales, desde el arte y la cultura, defienden territorios urbanos y sus derechos como víctimas. También son protagonistas las mujeres con acciones de acompañamiento emocional y de defensa de derechos como víctimas.

En Buenaventura es bien importante la particularidad urbana de su territorio y dos tipos de resistencia específicas a esta ciudad:

- La que incorpora el espacio urbano al discurso de los derechos territoriales colectivos (fue el PCN el que lo inició en 2002/3), resistencia que da frutos en 2010 y 2013 con los Autos que la Corte Constitucional emite especiales para Buenaventura, ante los procesos de despojo en la zona urbana que afectaba directamente a los territorios ganados al mar. Los Autos plantean “los riesgos que acarrea el desarrollo de los megaproyectos para las comunidades asentadas en sus zonas de influencia” y reafirman “la necesidad de dar cumplimiento al derecho a la consulta previa que tienen las comunidades étnicas que viven en esta región del Pacífico” (página 388).
- La resistencia que —en 2014 y 2015 y frente a los actores armados— construye dos Zonas Humanitarias urbanas, con el apoyo de variadas agencias nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, la Iglesia y las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Iglesia católica, en cabeza de la Diócesis regional y de la comunidad de Claretianos, que por más de un siglo han acompañado a las comunidades étnicas en el Pacífico, juega también en estas resistencias un papel central de apoyo, impulso y acompañamiento.

Bojayá

En Bojayá, al igual que en Buenaventura, la movilización por los derechos étnicos y territoriales se ve obligada a virar en función de la guerra que irrumpe a final de los años 1990 a todo lo largo de la cuenca del Atrato.

¿Cómo resiste la población afrocolombiana de una pequeña aldea situada en medio de la selva pacífica, que apenas empezaba organizarse en términos de los derechos colectivos e identidad étnica recién adquirida y que únicamente contaba con el apoyo de los misioneros claretianos, fieles acompañantes de las comunidades del Pacífico desde principios del siglo XX?

Si en el bajo Atrato sus paisanos ya habían formado comunidades de paz y Zonas Humanitarias para resistir a los armados y poder retornar y mantenerse en el territorio, en Bojayá (medio Atrato) sus pobladores — además de acudir a las denuncias por violaciones sobre derechos humanos y alianzas entre FF. AA. y AUC—, elaboraron en 1999 una “Declaración por la vida y por la paz”, en la que manifiestan su autonomía cívica frente a las presiones de los actores armados. El derecho a la vida, a la neutralidad, a la libre movilización, al no involucramiento de la población, son sus lemas. En noviembre de 2001 se la anteponen a la guerrilla y en abril de 2002 a los paramilitares cuando llegan al pueblo.

El día de la masacre y durante los seis días de la “guerra sin límites” que se perpetró sobre sus cabezas fueron innumerables las acciones de supervivencia por parte del párroco, la enfermera, los pobladores: las que en medio de los enfrentamientos garantizaron el desplazamiento de los sobrevivientes a la otra orilla del río; los actos de ayuda humanitaria en medio de las balas; las exigencias a la guerrilla para que dejara llegar la brigada de salud y liberar a un joven que iba a ser asesinado; el volver al pueblo, en medio del enfrentamiento, para remover escombros y poder identificar muertos y personas desaparecidas. Comunicación y presión a las FARC para que se retirara después de 5 días de combates.

A los cuatro meses después de la masacre y de haberse desplazado hacia poblaciones vecinas y hacia Quibdó, los pobladores retornan para continuar viviendo en medio de una zona de guerra. La diferencia con otros vecinos fue el apoyo que el Estado brindó de manera tan pronta y eficaz. ¿La razón? Haber sido una masacre de las FARC. Mientras en el resto del país las autoridades no autorizaban retornos sino varios años después, aquí el Estado lo autorizó y lo apoyó y además reconstruyó el pueblo en tres años.

Para habitarlo y para superar los traumas y el dolor, los pobladores desplegaron todo su acervo cultural y organizativo, con el apoyo y motivación del párroco y de los equipos de misioneros de la Diócesis de Quibdó. Resaltan las siguientes acciones: fortalecer los procesos grupales de trabajo del duelo, afianzar los lazos y la solidaridad familiar y vecinal; en estos procesos mujeres y jóvenes

jalonan y transmiten así esa historia más amplia de resistencia y permanencia en el territorio ancestral (CNRR-GMH, 2010b, página 272). Las artesanías y bordados, las artes de versar, componer, cantar y bailar de las comunidades afrodescendientes se recrean con nuevas palabras y significados (página 281). También expresan los procesos organizativos de solidaridad y apoyo mutuo (página 283). Además, documentan la guerra, la violencia y los daños que ella produce (página 282). Las conmemoraciones han sido también espacio central.

En Bojayá la población tuvo que adaptarse a la nueva concreción urbana del poblado reconstruido por el Estado. El rasgo más dramático: el río les quedó lejos y a los indígenas, aún más lejos que a los afrodescendientes, porque se los reubicó en las márgenes urbanas más alejadas. Los segundos dejaron de realizar tantas actividades que realizaban en el río; los indígenas siguen trasladándose a sus riberas cada día para el baño diario.

Bahía Portete

Al carácter étnico y territorial de las resistencias en Bahía Portete se aúna la condición de género implicada en ellas. De esa complejidad y particularidad destacamos lo siguiente:

La Guajira no solo es parte de las territorialidades étnicas ancestrales e históricamente excluidas, sino que representa a un pueblo históricamente resistente en el más radical de los sentidos: ha sostenido su autonomía y su resistencia a la dominación de todos los poderes centrales, desde épocas de la colonia hasta hoy.

Varios rasgos únicos y particulares resaltan en la resistencia wayúu a la violencia de las AUC, que penetran el territorio de la alta Guajira cuando ya estaban negociando su desmovilización:

- Las mujeres se convierten en los blancos centrales de la violencia paramilitar, justamente por ser ellas las líderes que —desde los años 1980— agencian las resistencias frente al Estado y las empresas (megaproyectos de explotación de recursos naturales, carbón inicialmente; luego gas

y energía eólica), y por tanto por cumplir papel central en las resistencias wayúu.

- Las mujeres no solo son los blancos centrales de la violencia paramilitar por su condición de líderes en las resistencias frente a los *arijunas*; también por el lugar y significado que su condición de género adquiere en la cultura y comunidad Wayúu. Eso induce a las modalidades específicas de la atrocidad con que los victimarios las violentan a ellas y así, a toda la comunidad, incluida la potencialidad de la resistencia masculina: esta es vuelta pedazos después de la masacre y la violencia sexual ejercida sobre sus mujeres.
- La fortaleza histórica de la resistencia wayúu, que además es condición de su propia identidad étnica, se manifiesta en algo insólito dentro del panorama de resistencias en el resto de las regiones: sus actores colectivos han sido siempre los mismos, independientemente del período y del tipo de conflicto que enfrenten con los *arijunas*. Esto se materializa en dos campos muy diferentes: en el de los conflictos con los actores centrales de poder (Estado y empresas multinacionales) y en el del conflicto armado que plantean los paramilitares. En el primer caso, se observa que —desde los años 1980— adelantan las reivindicaciones frente al Estado y a las compañías que explota el carbón con el mismo tipo de organizaciones: de mujeres y de autoridades indígenas. En el segundo caso hay una expresión de resistencia de las organizaciones armadas ancestrales de los indígenas wayúu (que solo intervienen en las guerras y que operan según sus propios códigos y cánones) cuando en vísperas de la masacre le hacen una emboscada al grupo paramilitar, sin imaginarse jamás cuál iba a ser la respuesta de estos, totalmente por fuera de todos los códigos y, por tanto, con toda la eficacia desestructurante de su condición de masculinidad y de guerreros.
- La resistencia a conflictos internos entre familias y la acción de las mujeres cerrando el puerto para confrontar a sus propias familias enfrentadas y presionar el arreglo del conflicto interno.

- Lo único que se potencia de manera cualitativa con el avance de los tiempos es que las resistencias wayúu se articulan a las redes étnicas regionales, macroregionales e internacionales, redes también lideradas por mujeres y orientadas a la interlocución con el Estado y a presionar a sus instituciones por las vías jurídicas (denuncias, reclamos, comunicados).
- Por último, si bien frente al conflicto armado y sus estragos se introducen los trabajos de memoria como parte de las resistencias de las comunidades en todo el país, en Bahía Portete ese recurso a la memoria tampoco es nuevo: la tradición oral, las conmemoraciones y los rituales simbólicos son parte sustantiva de la vida en sociedad de los Wayúu. Lo que cambia no es la modalidad de la resistencia; lo que cambia es lo que la motiva: la intensa vulneración de su dignidad, de su identidad y de sus derechos y los agentes de violencia que las originan.

Estigmatización política de la memoria y las memorias violentadas

Dos casos locales de resistencia colectiva a los embates y efectos del conflicto armado muestran un rasgo común: la memoria como resistencia que se estigmatiza y se violenta. ¿En qué contextos de conflicto le sucede eso a las iniciativas de memoria de las víctimas del conflicto?

Remedios/Segovia

En estas localidades la violencia ejercida por el paramilitarismo (“de primera generación”) estuvo orientada al arrasamiento de una izquierda política que, en el segundo quinquenio de los años 1980 y el primero de los años 1990, alcanzó a mostrar las posibilidades de un cambio en la corre-

lación local de fuerzas alterna al bipartidismo. Hasta 1988, la resistencia se expresó como acciones de denuncia y protesta, de reivindicación contra la guerra y por el respeto a los derechos humanos, aunadas generalmente a reivindicaciones por servicios e infraestructura. En la ruralidad lo hicieron como “éxodos campesinos”, y en los cascos urbanos como “paros y movilizaciones cívicas”. La mayoría de las veces fueron resistencias integradas a la movilización regional y nacional de la época. A partir de la masacre de 1988 —que se convierte en un “hito” de la memoria colectiva—, se instauran, por parte de organizaciones de víctimas y derechos humanos (DH), las iniciativas de memoria como formas de resistencia. Pero en estas, a diferencia de la mayoría de los 13 casos regionales que aporta MH, la función de dignificación de las víctimas, la búsqueda de la verdad, la reparación y la justicia adquirió una connotación más: la de jugar a favor de la memoria de un proyecto político alternativo —el arrasado— y de la identidad política de sus víctimas, al tiempo con la interpelación a la fuerza pública como victimaria. Las peregrinaciones y conmemoraciones acompañadas por ONG y organizaciones defensoras de DH del nivel nacional fueron sus repertorios. En el marco de las mismas se realizaron marchas y elaboraron murales, una valla alusiva a la paz, al derecho a la justicia y a la no impunidad en la entrada del pueblo, ceremonias religiosas y ofrendas florales; discursos conmemorativos ofrecidos en reuniones públicas y en los volantes de invitación, así como en las imágenes y textos elaborados y expuestos como marcas de memoria. Pero esta memoria sobre las violencias se convirtió en una memoria violentada: entre 1997 y 2006 (época de las AUC): gestores y actividades de la memoria fueron atacados, las víctimas desarticuladas y suspendidas por tanto todas las iniciativas de memoria.

Después de más de diez años de silenciamiento por la fuerza, en 2008 resurgen las actividades de memoria. Por su intermedio se vuelve a privilegiar el daño político como su centro de atención y el regreso simbólico de la UP a la región.

Trujillo

En Trujillo las resistencias que se desarrollan en extenso se refieren a las iniciativas de memoria, como resistencias frente al olvido y a la impunidad. Una vez terminado el período de la masacre (1986-1994) se da inicio a este tipo de resistencia, que consistió en un “acompañamiento y trabajo silencioso” de “recopilación de testimonios, documentación, clasificación y archivo sistemático de los casos, hechos y circunstancias de desaparición, tortura y muerte de las víctimas que como bases de información, sustentan las labores de esclarecimiento histórico adelantado por la Comisión de Trujillo y la Comisión Interamericana”, para lo cual la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz jugó papel central (CNRR-GMH, 2008, página 207).

También se han adelantado “acciones y eventos que buscan legitimar y posicionar en el registro público las versiones sobre la masacre y el pasado”, peregrinaciones anuales al monumento, las marchas, la presencia en audiencias públicas, los testimonios públicos y las relaciones con otras comunidades en resistencia y con organizaciones de derechos humanos y de acompañamiento internacional”. Igualmente se han hecho actividades de “transmisión intergeneracional en el ámbito familiar, de las organizaciones de las víctimas y ocasionalmente en el ámbito escolar (...)” (página 207).

Las gestiones de la CIJP logran en 1995 la creación de la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo (CISVT) y el reconocimiento del Estado de su responsabilidad en la masacre, aunque tal cosa no redunde en una reparación integral (página 174).

No obstante, lo que aquí se quiere subrayar es cómo las víctimas, los gestores de memoria y sus acompañantes se han visto sometidos a la estigmatización de su trabajo y de sus personas. Al igual que en Remedios/Segovia, en este caso las memorias también interpelan a la fuerza pública como responsable de los actos violentos rememorados. Así, “desde que se inicia la construcción del Parque Monumento en 2001, cuatro atentados directos a los

símbolos, objetos y actores de la memoria han tenido lugar. Los dos incendios en 2005 y 2006, los disparos y destrucción de los nichos del muro *La sombra del amor* en 2006 y la profanación de la tumba del padre Tiberio en 2008, evidencian que las marcas y símbolos de la memoria se encuentran bajo ataque”. El padre Javier Giraldo ha trabajado bajo amenaza, y “varias de las personas que han asumido liderazgo en la recopilación de información y recuperación de la memoria para sustentar las demandas y procesos judiciales han tenido que salir de Trujillo hacia el exilio, como lo han tenido que hacer quienes fueron testigos de la masacre o ayudaron en la recolección de cadáveres en el río Cauca” (página 209). “La memoria en Trujillo es una memoria amenazada”.

Economía del narcotráfico y resistencia

De los casos estudiados solo uno entra bajo esta categoría. No obstante, debe constituir una muestra de un espectro más amplio de casos en el país.

El Placer

MH dedica un capítulo a las resistencias que mujeres despliegan desde tempranas épocas —años 1970— hasta nuestros días en el bajo Putumayo; son resistencias que nacen en una localidad vecina de El Placer (Puerto Caicedo), pero que extienden su campo de influencia a la región y a la macro-región, e inciden inclusive en procesos de resistencia del orden nacional. Lo interesante de resaltar en este caso es la fuerte relación que guardan esas resistencias con el narcotráfico y los cultivos de coca tan determinantes en el conflicto armado en este territorio.

La resistencia de estas mujeres se origina a mediados de los años 1980 como proceso organizativo que un párroco impulsa entre las mujeres de su localidad para contrarrestar los problemas de seguridad alimentarias que se avistaban, en virtud del cultivo

de coca que se implantaba y se convertía en monocultivo para la economía regional. Al lado de la seguridad alimentaria se promueve la salida de la mujer a la esfera pública, asunto que se volverá central en la medida en que la violencia del conflicto arrecia cobrando víctimas sobre todo en la población masculina. Por lo demás, las capacitaciones del padre Alcides también apuntaron —en el plano de la vida doméstica— a que las mujeres fueran rompiendo sujeciones con la planificación familiar y la exigencia del no maltrato.

Es a mediados de los años 1990, cuando el conflicto armado, dinamizado al son de las confrontaciones entre el Estado (con su política antidroga) y guerrillas (que defienden territorio de dominio cocalero), que las mujeres de Puerto Caicedo adquieren protagonismo en las resistencias regionales. Después de ir en 1995 a Beijing e insertarse en las redes de mujeres a nivel nacional e internacional, participan en las marchas cocaleras de 1996. Además, estas mujeres con la Asociación de Mujeres de Puerto Caicedo (ASMUN), van a un encuentro en Mutatá (Urabá) donde se crea La Ruta Pacífica de Mujeres, en adelante con acciones de impacto nacional. A partir de allí, introducen en su propia región (Putumayo) nuevos significados y principios de acción, además del feminismo, la no violencia, el pacifismo y el antimilitarismo. Su discurso de neutralidad les crea tensiones tanto con las FARC como con los paramilitares que recién llegan a finales de la década de 1990. Con una emisora comunitaria hacen resistencia a la vinculación de jóvenes a grupos armados, al monocultivo y promueven alternativas productivas organizadas.

Sufren, como en tantos otros lugares del país, el silenciamiento de su movimiento entre 1998 y 2003, al final del cual la Ruta Pacífica de Mujeres y ASMUM organizan para el 25 de noviembre de 2003 en Puerto Caicedo una movilización “contra las fumigaciones, la guerra y por la desmilitarización”, y en la cual participan “tres mil quinientas sesenta mujeres provenientes del Putumayo, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Caquetá, Risaralda, Tolima, Huila, Santander, Barrancabermeja, Bolívar, Atlántico, Chocó, Antioquia y Bogotá” (CNMH, 2012, página 363). Con la

fuerza demostrada, organizan en 2003 la Alianza Departamental de Organizaciones de Mujeres del Putumayo, “Tejedoras de Vida”, con el propósito de acceder a los recursos que el Plan Colombia brindaba a las organizaciones formales. Y en 2007, cuando las comunidades pudieron volver a salir a las veredas “las líderes de ASMUM reanudaron el trabajo que caracterizó a esta organización en sus inicios. En memoria del padre Alcides retomaron la “filosofía del campo” y empezaron a trabajar con Comités rurales en las veredas”.

Así, para defenderse de los problemas de seguridad alimentaria que el monocultivo de coca impone, para defenderse de los estragos que la lucha antidroga que el Estado produce en sus territorios con las fumigaciones y la criminalización de la lucha social, para defenderse de las violaciones a los derechos que se dan con la confrontación entre actores armados que defienden territorios cocaleros, o para insertarse en la posibilidad de adquirir recursos para el desarrollo de programas productivos y sociales en sus localidades y región que el Plan Colombia (dedicado a la lucha antidroga) proporciona, por todos lados y a lo largo del tiempo, estas mujeres vieron determinada la orientación de sus resistencias por la condición particular que articula el conflicto armado en su territorio: el narcotráfico y los cultivos de coca.

La condición urbana en las resistencias

MH desarrolla dos casos urbanos: Buenaventura (ciudad-puerto, ciudad intermedia) y Comuna 13 (sector urbano de ciudad metropolitana). Son grandes las diferencias que las separan: la escala espacial tratada; la condición étnica que caracteriza a una de ellas; las condiciones del conflicto armado que las compromete (Buenaventura con dos frentes de batalla: el de los megaproyectos y el del conflicto armado, ambos cruzados por el significado de las vulneraciones étnicas; Comuna 13 solo con conflicto armado; Buenaventura con una violencia que desde 2000 se escala, y que desde la desmovilización paramilitar aumenta y degrada; Comuna 13 con

una violencia que se escaló paulatinamente desde mediados de los años 1980 y tiene su punto culminante en 2002, cuando en Buenaventura apenas comienza el ciclo de violencia); el tipo de resistencias que desarrollan a lo largo de los tiempos (las de Buenaventura de la mano de la Diócesis y los misioneros claretianos, ligada muy estrechamente a los procesos organizativos y de movilización de la región Pacífico y en la localidad a los continuos rural-urbanos propios de las comunidades afrodescendientes, además de estar atravesadas por lo que significa la defensa de los territorios colectivos y la autonomía; la de la Comuna 13 de carácter totalmente urbano). Todo lo anterior no permite afirmar que sea la condición urbana que comparten la que aporta en ambas el factor articulador de sus resistencias.

No obstante, *hay dos asuntos que sí se destacan y son comparables a partir de la condición urbana* y que merecen ser expuestos en este capítulo. Uno tiene que ver con el carácter microfocalizado del conflicto armado y de las resistencias y el otro con las resistencias que implican al proceso de construcción de Estado.

Microfocalización y resistencias

El primero tiene que ver directamente con una característica central al conflicto armado en las dos ciudades: los grupos armados ilegales de carácter nacional, tienen en las bandas delincuenciales locales su punto de afincamiento territorial. Para Buenaventura, MH lo ilustra con precisión: “desde la incursión paramilitar en el año 2000 hasta 2004, en las versiones libres de *HH* se sostiene que el Frente Pacífico consolidó presencia en una gran cantidad de barrios de Buenaventura, “para cada barrio existía un comandante paramilitar en alianza con miembros de bandas de delincuencia común propias de Buenaventura (...). La modalidad de inserción de los grupos armados ilegales con presencia nacional a través del anudamiento que hicieron de las bandas adjudicó al conflicto violento de Buenaventura un carácter diferenciado, por comuna, de acuerdo a las particularidades

que las bandas tenían en cada uno de los territorios” (CNMH, 2015, páginas 98-99). “De esta manera, desde el año 2000 hasta la fecha la disputa en Buenaventura tiene un carácter microfocalizado que se inserta al conflicto nacional a través de la capitalización del dominio de diversas rutas de economías ilegales que hacen los GAI con presencia nacional, dominando las bandas existentes en el territorio. Esta capitalización ha sido funcional a la labor de financiadores de sus ejércitos que han cumplido coincidentalmente tanto los frentes guerrilleros como paramilitares que han tenido presencia en el puerto” (página 99).

Este rasgo no es desarrollado en el estudio por MH en el caso de la Comuna 13, pero, por otras investigaciones hechas sobre la ciudad de Medellín¹⁷, es importante señalarlo en este balance: Medellín muestra exactamente el mismo *modus operandi* de los grupos armados ilegales nacionales para su implantación, control, guerras y expansiones en la territorialidad urbana. Esa modalidad se generaliza y cubre buena parte de las comunas y de los municipios de área metropolitana, especialmente a partir del montaje de La Oficina de Envigado por Don Berna a mediados de los años 1990, modalidad que es mantenida en adelante por los demás actores de violencia que se insertan hasta hoy en la ciudad.

Esa modalidad le imprime un carácter “microfocalizado” a las dinámicas del conflicto armado en las ciudades: la territorialidad urbana muestra un carácter espacial diferenciado en términos de dominios, de funciones y de modulaciones de la violencia en el tiempo. Esa microfocalización también tiene consecuencias sobre las resistencias que adelantan los habitantes, pues dados tales contextos, las capacidades de la agencia mostrarán según el lugar, unos y otros acompañamientos e influencias políticas, unos y otros énfasis en el tipo de acciones colectivas, unos lugares más silenciados que otros según actor y período de dominación.

17 Especialmente la más reciente, también promovida por el CNMH y financiada por Colciencias. Véase Capítulo 1. García, Domínguez, Burbano y Marín (2018).

Resistencias y construcción del Estado

El segundo aspecto que se quiere destacar aquí en relación con las resistencias en un medio urbano, es el de un tipo de luchas que la propia condición urbana imprime y que tienen que ver con las presiones al Estado para que ajuste su legislación a lo que implican los estragos del conflicto armado en las comunidades urbanas y para reconocimientos especiales de protección a población urbana. De ello tenemos tres ejemplos salidos de los estudios de MH sobre Medellín y Buenaventura:

El desplazamiento intraurbano

Fueron los desplazamientos intraurbanos acaecidos en la Comuna 13 por cuenta de los operativos paramilitares y militares (Operación Orión) en 2002 los que ejercieron la presión definitiva al Estado para que revisara sus anteriores sentencias y aceptara de una vez por todas que el desplazamiento intraurbano era tan desplazamiento como el rural y el rural/urbano. Por el hecho de que dentro del mismo territorio urbano “la distancia” recorrida por los desplazados no parecía significar “abandono del lugar”, el Estado era remiso a aceptar que en ese tipo de espacialidad también hubiera “desplazamiento forzado”.

Este caso sirve *para ilustrar los caminos tan paradójicos que recorre el proceso de construcción del Estado en Colombia al son del conflicto armado*: acostumbrado por décadas a que el conflicto armado era cosa de la ruralidad, los códigos mediante los cuales el Estado clasificó los hechos y emitió conceptos, leyes, decretos, sentencias e institucionalidad que cubrieran a las víctimas del desplazamiento forzado de las zonas rurales, chocaban con las novedades que imponía el intenso conflicto armado que se cernió en las ciudades desde finales de los años 1990. Sus códigos de referencia le impedían el reconocimiento de los mismos hechos en espacialidades diferentes a las tradicionales. Lo paradójico del caso es que en el siglo XXI fuera “la lógica rural” la que impedía avan-

zar en la legislación para hechos “urbanos”. Esto remite a épocas pasadas, cuando era “la lógica urbana” la que obstaculizaba el avance en la resolución de conflictos en las periferias rurales de la nación. Como ejemplo está el proporcionó Urabá tres décadas antes, cuando las instituciones forjadas para tramitar conflictos y procesos en el campo de la construcción de vivienda social en zonas urbanas de invasión, se vieron expuestas a la sin-salida: el Instituto de Crédito Territorial (ICT) a finales de los años 1970 acabó por renunciar y salir de Urabá, cuando quiso intervenir en las invasiones urbanas que configuraban a Apartadó; pues no pudo, en razón de que eran “tierras rurales” las que se habían urbanizado y no había quién emitiera las titulaciones requeridas para la adjudicación de vivienda y de los créditos correspondientes y así, acabar con el estado de ocupación ilegal de los predios y dar solución de vivienda a miles de migrantes. El ICT quiso ayudar él mismo en la titulación, pero chocó con la ley y tuvo que abandonar el campo (García, 1996, página 66).

La protección de territorios urbanos de comunidades negras

En Buenaventura el desplazamiento intraurbano es continuo desde hace 17 años. Pero esa ciudad contó con el reconocimiento de esas víctimas por parte del Estado gracias al logro de las presiones hechas en su homóloga Medellín. Pero a Buenaventura y a sus víctimas y organizaciones acompañantes les tocó presionar otro tipo de reconocimiento y de ley: la que protege los territorios de las comunidades afrocolombianas en zona urbana. En los años 2000 el Proceso de Comunidades Negras (PCN) comenzó a incorporar el territorio urbano en “el discurso del territorio como espacio vital, visualizándolo y ubicándolo como una extensión, de carácter simbólico, del espacio rural” (CNMH, 2015, página 381). Primero lo sustentó conceptualmente; y apoyándose en la Ley 70 de 1993, pasó luego a las presiones jurídicas para la defensa de las comunidades negras que habían construido los “territorios ganados al mar”, que los habitaban y a partir de los cuales mantenían

sus redes parentales y continuos rural-urbanos propios de su colectividad. Eran las territorialidades urbanas más intensamente afectadas por los actores armados ilegales en sus disputas y por los actores económicos legales e instituciones públicas que empujaban megaproyectos sobre ellos.

Así es como, en 2009 la Corte Constitucional emite el Auto 005 que plantea que “uno de los factores que ha contribuido a aumentar la violencia en contra del pueblo afrocolombiano en su territorio ha sido las presiones legales e ilegales para promover patrones desarrollo que desconocen sus cosmovisiones” (Corte Constitucional, 2009, Auto 005 T-025/04, página 24). En 2010 y 2013, ante la continuidad de las vulneraciones a estas comunidades urbanas, se presiona al Estado, y la Corte Constitucional emite nuevos Autos especiales para Buenaventura, el primero “a raíz del Estado de Cosas Inconstitucionales que se venían presentando por los procesos de despojo en la zona urbana que afectaba directamente a los territorios ganados al mar” (página 387) y un nuevo Auto (el 234 de 2013), en el que sale a “la defensa de los territorios urbanos, puesto que plantea los riesgos que acarrea el desarrollo de los megaproyectos para las comunidades asentadas en sus zonas de influencia y reafirma la necesidad de dar cumplimiento al derecho a la consulta previa que tienen las comunidades étnicas que viven en esta región del Pacífico” (CNMH, 2015, página 388).

Buenaventura tiene una segunda manifestación de los retos que las resistencias de las comunidades negras le plantean al Estado. Se trata de las dos Zonas Humanitarias que en 2014 y 2015 que se conforman en la zona urbana. Esta es una figura propia del derecho internacional humanitario (DIH) que en Colombia se ha puesto en práctica en zonas rurales de Urabá, del Atrato, y del Ariari como manera extrema de proteger comunidades acosadas sistemáticamente por los actores armados. En Buenaventura, “se inició con el desmonte de una de las “casas de pique” bajo la premisa de no permitir el ingreso de ningún actor armado a este espacio de paz”. “Las 290 familias, aproximadamente 1.000 personas entre niñas, niños, jóvenes,

hombres y mujeres que luego de desmontar la casa de “Pique” que tanto terror y daño causó en nuestra calle, decidimos erradicar la violencia y las estructuras paramilitares de nuestro espacio ancestral, desde el 13 de abril, constituyendo el Espacio Humanitario de Puente Nayero, en el Barrio La Playita de Buenaventura” (CNMH, 2015, página 421).

No sobra remarcar que estas Zonas Humanitarias en áreas urbanas son también una manifestación más de los impactos de la microfocalización del conflicto armado de las ciudades sobre las formas de resistencia que se desarrollan en ellas y referidas más atrás.

5 MEMORIAS EN TENSIÓN

Este capítulo centra la atención sobre una de las premisas fundamentales de los trabajos de memoria histórica, que es la de posibilitar la expresión de las múltiples voces. Lo anterior, en razón de que no todos viven ni recuerdan de la misma forma los mismos hechos, por la sola disparidad en la percepción y subjetividad personal, por los diferentes lugares de poder desde donde los viven, como también por las distintas posiciones que como víctimas o gestores de memoria se pueden adoptar frente al futuro por construir a partir del esclarecimiento de los hechos.

A la hora de plasmar las memorias en narrativas, de liderar procesos de memoria y darles significado específico, y de lograr impactos sociales, políticos y/o judiciales con la producción de esas memorias, se ponen en evidencia tensiones entre esas diversas voces. En siete de los 13 casos estudiados esas diferencias y tensiones son manifiestas y significativas.

Este balance se propone abordar estos casos, aprovechando las posibilidades analíticas que la dimensión territorial aporta a la complejidad de los trabajos sobre memoria. Para tal fin este capítulo hará primero una breve descripción de las tensiones de memoria encontradas en cada contexto territorial del conflicto armado, identificando en ellas los contrincantes y las motivaciones involucradas. A partir de allí se analizarán los alcances y significa-

dos de esas tensiones según las tendencias encontradas en torno al factor clave articulador de las mismas. Finalmente se plantearán las preguntas que, a partir de las reflexiones anteriores, quedan abiertas con respecto de los trabajos de memoria histórica y las tensiones que en él se producen.

TERRITORIOS Y TENSIONES POR LA MEMORIA

Se puntualizan a continuación las tensiones sobre la memoria encontradas en cada caso estudiado:

El Salado

El caso de El Salado muestra dos facetas de estas tensiones por la memoria. Una configurada sobre la tendencia a puntualizar la memoria en el hito de violencia mayor, dejando de lado otra serie de hechos violentos que antecedieron y sucedieron posteriormente al mismo. La otra, más radical, se forma a partir de la confrontación entre “las verdades” que los victimarios pretenden construir a propósito de los hechos que ellos perpetraron, y los hechos violentos vividos por sus víctimas.

El hecho emblemático de violencia que convoca el trabajo de memoria y que se materializa en un Monumento a las Víctimas de El Salado es el de la masacre cometida por los paramilitares en el corregimiento de El Salado y en la vereda La Sierra en el año 2000. Pero esa masacre es apenas un hito dentro de un conjunto prolongado en el tiempo y padecido por los habitantes del corregimiento y de sus lugares vecinos por cuenta del enfrentamiento que el Bloque Norte de las AUC le planteó a las FARC y a toda la población que consideró como “guerrillera”. Es por ello que “la comunidad de El Salado reclama que no todas las víctimas han sido incorporadas en las iniciativas de memoria, incluyendo las que fueron desaparecidas forzosamente antes y después de la masacre de 2000, así como las que fueron asesinadas en el casco

urbano de El Carmen de Bolívar después de la masacre, lo cual es percibido por los dolientes como una doble invisibilización de sus víctimas (CNRR-GMH, 2009, 113-114). El CNMH entra entonces a llenar ese vacío, reconstruyendo “el universo de esas víctimas fatales reclamadas por la memoria colectiva, incorporando a los desaparecidos de El Salado, los desplazados asesinados en El Carmen de Bolívar en el 2000 y las víctimas de la masacre del 19 de enero de 2000 en la vía El Salado-El Carmen de Bolívar, el cual se extiende a 107 víctimas en un lapso que se prolongó más allá del año 2003, con nuevas modalidades como las detenciones arbitrarias y las amenazas. En rigor, las víctimas sobrevivientes que han retornado consideran que el último hito de victimización de su comunidad fue el exilio de su líder comunitario Luis Torres en el año 2006” (CNRR-GMH, 2009, página 114).

De otra parte, el estudio de MH también pone en evidencia el tipo de “verdades” que los victimarios tratan de establecer a través de sus versiones sobre los hechos. Pero, precisamente son “interpretaciones” —no reconstrucción de los hechos— a través de las cuales “pretenden extender la duda” sobre los acontecimientos (nombrar como “combate” u “operación militar” una masacre perpetrada con la máxima sevicia y barbarie sobre pobladores inermes), “imponer un olvido” (negar “el uso de la motosierra, las decapitaciones, la mona y el uso de las cabezas para jugar fútbol; y silencian las torturas con cuerdas para estrangulamiento, el empalamiento, el sorteo, la oreja cortada y la bolsa en la cabeza”) (página 177) e intentar así poner “en cuestión la fiabilidad de las versiones de las víctimas y la misma existencia social de aquella” (página 112). A esas versiones se contraponen justamente las memorias de las víctimas.

Trujillo

El caso de Trujillo muestra otras dos facetas diferentes en las tensiones por la memoria. En primer lugar, la que se produce entre los actores que se platean los contenidos de la memo-

ria a preservar con *respecto de los efectos jurídico-penales*. En este sentido se encuentran: por un lado, el Estado —avalado por la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo (impulsada gracias a la presión de la Corte Internacional de Derechos Humanos en 1995)— que reconoce como “sucesos violentos de Trujillo” los cometidos “entre el 29 de marzo y el 17 de abril de 1990”. Por el otro lado están MH junto con las víctimas, que consideran y reivindican —sin desconocer lo anterior— que hay que ir más allá y reconocer como “crímenes de lesa humanidad en el carácter generalizado y sistemático de las acciones de violencia” perpetradas entre 1986 y 1994 en Trujillo y nombrarla como “la masacre continuada de Trujillo” reconociendo así “la dimensión colectiva y prolongada de los crímenes”. Se trata de qué hechos abarcar y cómo reconocerlos: puntuales y “violentos” o extendidos en el tiempo, y como “sistemáticos y crímenes de lesa humanidad”. De otro lado, se encuentra también una tensión entre la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (principal agente de la memoria en Trujillo después de 1995) y la fuerza pública, que se oponen en la manera de nombrar unos hechos de violencia: la primera afirma un “ataque de las FF. AA. a un grupo de trabajadores más un enfrentamiento FF. AA.-guerrilla”; la segunda lo afirma como “combate o emboscada”. En ambos casos, lo que se está jugando, además de “la memoria de las víctimas”, son las implicaciones penales que los hechos de violencia adquieren, según sean estos reconocidos de una u otra manera.

En segundo lugar, en Trujillo también se dan tensiones con relación a la manera de orientar el trabajo de memoria entre las víctimas por parte de los diferentes agentes que lideran dicho proceso: la CIJP impulsa un trabajo de memoria para proyectarlo más allá de la localidad (nacional e internacionalmente, con todo el significado político que conlleva la denuncia de la violación a los DH por parte del Estado y sus FF. AA.); la Asociación de víctimas de Trujillo (Afavit) prefiere centrarse en el trabajo “hacia adentro”, hacia la comunidad víctima y trabajar las dimensiones de su dolor y de las posibilidades de reconstrucción

del tejido comunitario. La CIJP acaba por salir de la localidad en 2005. Se trata de quién y con qué contenidos se delimita el alcance del trabajo de memoria: su envergadura social o política.

Remedios/Segovia

El caso de Remedios/Segovia ilustra dos facetas adicionales de las tensiones por las memorias que se forjan en los territorios. El origen de ambas radica en el alto contenido político que desde sus inicios tuvieron las prácticas sobre la memoria de los acontecimientos violentos en la localidad y sus consecuencias.

De las cuatro masacres que marcan el período 1982-1997 estudiado por MH, solo una —Segovia 1988— acaba convirtiéndose en el símbolo de la violencia y de los hechos que se rememoran y conmemoran. Esa delimitación es consecuencia de la misma dinámica que produce la primera faceta de las tensiones por la memoria que se quiere destacar aquí: la que se produce entre los gestores y los silenciadores de la memoria. Entre 1989 y 1995 las iniciativas de memoria se convirtieron para quienes las agenciaron en una estrategia de movilización y lucha social en la que al tiempo que se aludía “a la responsabilidad institucional de la fuerza pública en los hechos violentos, cuestionando con ello su legitimidad (...) se evocaba a algunas de las víctimas de la izquierda social y política que fueron asesinadas, para dignificar su lucha política y social en oposición al régimen vigente” (CNMH, 2014, página 375). Eso incitó a quienes se sintieron confrontados, a activar la lógica del silenciamiento y a aplicar la misma lógica de la guerra en contra de tales iniciativas. Esa tensión terminó por silenciar del todo la expresión de la memoria, en especial a partir de las masacres de 1996 y 1997.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, se produce un segundo tipo de tensión por la memoria, visible en la mediana duración (20 años y más): las iniciativas de la memoria en Remedios/Segovia pasaron de ser expresión de múltiples sectores de víctimas a centrarse en la actualidad en un solo sector: la

UP; en el imaginario colectivo se conmemora ahora la masacre de 1988 de Segovia como “la masacre de la UP”. Si en la primera etapa de las conmemoraciones participaban el Comité de Derechos Humanos, los sindicatos de la región y organizaciones sociales como una asociación campesina, el sindicato de la Frontino Gold Mines, el sindicato del municipio, y hasta 3 cultos religiosos, más la Corporación Comité de Damnificados de Segovia y Remedios “Once de noviembre” y el Comité de Derechos Humanos de Segovia y Remedios, luego de la etapa del total silenciamiento de las memorias (1996-2007), se reviven las conmemoraciones, pero ahora promovidas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) (en 2008 en Medellín y en 2010 en la misma localidad) centradas en el objetivo político de la masacre y la identidad política de sus víctimas. Ese *paso de una memoria plural a una memoria de un solo sector de las víctimas* tiene su origen en la manera como en el territorio prevalece el temor a mencionar a los responsables de los hechos violentos (la conmemoración que se hizo en la localidad en 2008 no permitía hacer mención de los responsables) y a la fortaleza por recursos y capacidad organizativa de las víctimas de crímenes del Estado.

El Castillo

En esta localidad se manifiesta la tensión entre las *memorias del sector de víctimas predominante y las del sector de víctimas más pequeño, según fueron los actores victimizantes de hechos en lugares específicos*. Fue así como las víctimas de paramilitares y de las violaciones a los DH por parte de las Fuerzas Armadas del Estado que dentro del contexto macro-regional tienen un importante trabajo de memoria (el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Suroriente Colombiano creado en 2008, el impulso desde 2002 a varias publicaciones: *Trochas de la memoria Suroriente colombiano*, libro Ariari: *Memoria y Resistencia* y la elaboración de historias locales), protestaron cuando en el municipio de El Castillo, la Gobernación y el CNMH quisieron construir una casa de

la memoria en el espacio vacío que dejaron los estallidos de los cilindros de gas con que las FARC destruyeron varias cuadras del casco urbano. Reclamaron que “además de recordar los ataques de las FARC al casco urbano, cuando se haga memoria sobre El Castillo se recuerde también la barbarie militar y paramilitar” (CNMH, 2015c, página 236) y la de otros grupos responsables de hechos violentos como narcos y políticos. Se acordó entonces proceder con una planeación participativa de todos los sectores de víctimas, de organizaciones y otros actores para acordar la orientación del Centro de Memoria y su contribución a una memoria “plural, integradora y responsable con las víctimas y con toda la población en general” (página 247).

San Carlos

En esta localidad también se presenta una tensión por la memoria entre dos grupos de víctimas, esta vez no separadas por el tipo de actor victimizante, sino *por su posición frente a cómo tratar los procesos de reconciliación con los paramilitares desmovilizados residentes en la localidad* y por tanto las actividades de memoria que con la participación de ellos se hagan.

En el oriente antioqueño, San Carlos fue el municipio que más desmovilizados paramilitares recibió. Las víctimas organizadas de la localidad resolvieron entablar con ellos relaciones que de alguna manera fueran útiles a la búsqueda de desaparecidos. Por tal motivo, los desmovilizados participan en las actividades organizadas por el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE, fundado en 2006), actividades diversas orientadas a transformar la relación de la población con la guerra y sus memorias. Tal ha sido el caso de la movilización “Siembra una planta cultiva una vida” y “La Mesa de Reconciliación”. Estos espacios y actividades han generado controversia entre un sector de víctimas a las que les cuesta aún compartir espacios con sus victimarios y que guardan dudas sobre las orientaciones efectivas de Justicia y Paz.

Bahía Portete

Este caso local muestra otras dos vías por las cuales se producen tensiones de memoria en los territorios. En primer lugar, se trata de los *reclamos que las autoridades wayúu tienen sobre la manera como la sociedad nacional concibe a ese “otro” —comunidad indígena Wayúu— y por tanto como malinterpreta, divulga y trata con el significado de los hechos de violencia perpetrados sobre ellos*. Este reclamo se produce cuando los medios de comunicación y algunas instituciones nacionales caracterizaron la masacre cometida por los paramilitares sobre los miembros de una de las familias wayúu de Bahía Portete como “el resultado de un conflicto entre clanes”, como “enfrentamiento entre grupos al margen de la ley” o como “venganza por el robo de una mercancía a *Jorge 40*”, todo ello basado en las preconcepciones acerca de la idiosincrasia indígena.

En segundo lugar, se manifiesta también públicamente la tensión que *enfrenta las memorias de las familias de las víctimas de la masacre y las de la familia del victimario wayúu que se alió a los paramilitares: hay hijos e hijas de los unos y de los otros*. La hija del jefe de familia que se convirtió en victimario y hoy paga cárcel, circula comunicados reclamando la difusión de sus “verdades” a propósito de la alianza de su padre con ese grupo y de la propuesta de una conmemoración en el puerto de Bahía Portete de una masacre acaecida en Maicao (donde muere un hijo del wayúu encarcelado). Las autoridades wayúu consideran todo ello una afrenta a “las verdaderas víctimas”. Este enfrentamiento por las memorias de Bahía Portete tiene consecuencias “hasta el presente afectando tanto el proceso de retorno de la comunidad de Bahía Portete como los diversos escenarios de relación con instituciones regionales, nacionales e internacionales que tienen intereses de desarrollo (ambiental, minero, turístico) sobre este territorio y que de diversas formas han aprovechado el conflicto para sus propios proyectos e intereses” (CNRR-GMH, 2010, página 195).

Bojayá

Esta localidad muestra otra faceta más en la configuración de tensiones por la memoria en los territorios. En este caso se trata de los *diferentes énfasis que se le quiere imprimir a las ceremonias e iniciativas de memoria, por parte de distintos grupos generacionales.*

Tanto los desplazados en la ciudad de Quibdó como los retornados en Bellavista han retomado la realización de diversas iniciativas de memoria encaminadas a “fortalecer la identidad y la pervivencia en su territorio mediante la expresión de sus actividades culturales” (CNRR-GMH, 2010b, página 294). Sin embargo “desde el año de 2009 ya no se habla de días de luto, y la música y la venta de alcohol se han vuelto a permitir. El 1 y 2 de mayo transcurren ahora entre actos litúrgicos, expresiones culturales de danza, versos y alabaos, y música en establecimientos públicos del pueblo” (página 295). Lo anterior ha provocado diferencias marcadas: “entre los jóvenes es habitual escuchar que es necesario “botar el duelo” como premisa para seguir viviendo; lo cual contrasta con quienes están vinculados a procesos organizativos que les permiten emprender año tras año actos de conmemoración mediante la danza, la música y el teatro. Para algunos adultos y especialmente los más viejos, la postura de los jóvenes es muy difícil de entender, pues se resisten a olvidar y consideran que es una obligación seguir en luto. Dicha opción coincide con la de algunos líderes y organizaciones acompañantes de la zona, quienes en cabeza de los equipos misioneros conmemoran cada año la tragedia” (página 295).

ALCANCES Y SIGNIFICADO DE LAS TENSIONES

Los trabajos de memoria en los territorios están encaminados a la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación que la ley estipula para las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, más allá de esa búsqueda, esos trabajos se asocian también a otras tres dimensiones de la vida social. En primer lugar, a los

procesos de resistencia que las comunidades suelen anteponer a los actores de la guerra. En segundo lugar, a los procesos de reconstitución de los lazos sociales y de las subjetividades individuales y colectivas destruidos por el conflicto armado. En muchos casos las memorias encaminadas a la resistencia y las dirigidas a la reconstitución de la comunidad pueden obrar en simultánea, dada la continuidad de los conflictos violentos en los territorios que, con la desmovilización paramilitar no se desactivaron. Finalmente, los trabajos de memoria pretenden promover el reconocimiento de la sociedad colombiana en general sobre las víctimas y los hechos violentos y atroces que las golpearon, por tratarse tantas veces de víctimas y hechos acaecidos en territorios de periferia muy alejados y desconocidos para la gran mayoría de la población, y lo que es peor, para las instituciones mismas.

Estos trabajos dependen de variado tipo de factores: a) de las iniciativas que emerjan de las propias comunidades; b) del tipo de acompañantes que las rodean y por tanto, de la posición política con que estos orienten el trabajo y de los recursos con que cuenten (fortaleza política, escala socioespacial en que la despliegue y redes sociales con las que trabaje mancomunadamente); c) del contexto de violencia que perviva o no en el territorio y por tanto de los riesgos y amenazas que subsistan sobre dicho trabajo o no; y d) de los apoyos institucionales vinculados en específico a los territorios o de los apoyos institucionales que emerjan coyunturalmente como reacción específica con respecto al tipo de víctimas vulneradas o al tipo de actor victimizante (por ejemplo: los grupos étnicos cuentan con especial acompañamiento de redes nacionales e internacionales, en contraste con las comunidades campesinas; hay violencias atroces perpetradas por las FARC que de manera oportunista —en comparación con hechos similares de los paramilitares— son cubiertos y publicitados con más ahínco por el Estado nacional).

Además, y por principio, en cualquier trabajo por la memoria se compromete la construcción de una “verdad” sobre los

hechos, sobre las vulneraciones, sobre las responsabilidades y por tanto, todos ellos están inmersos en “una lucha por la memoria”, en una lucha política por la imposición del discurso sobre la historia de la comunidad o la sociedad que ha de prevalecer a través de los tiempos.

Con base en los anteriores rasgos enunciados, es posible entonces comprender la complejidad de fuerzas y circunstancias que se mueven en torno a los trabajos por la memoria en los distintos territorios de la nación. Son muy variados los actores involucrados, los énfasis, los intereses, las orientaciones y las tensiones que se desprenden durante su implementación.

A partir de las consideraciones anteriores y de la caracterización que se hizo en la primera parte de este capítulo acerca de la diversidad de tensiones por la memoria en siete de los casos revisados, se elaboró la Tabla 4. En esta se resalta el tipo de conflicto que produce la tensión, para lo cual se asocian el tipo de actores involucrados y la orientación de la misma. Si bien los casos sobre los cuales se construye esta tipología son siete, su importancia está en que reflejan lo que en muchísimos otros lugares del país sucede y se juega en las luchas por la memoria.

Tabla 4. Tensiones por la memoria

Actores en tensión	Orientación
<p>Entre víctimas incluidas/excluidas en un monumento de memoria Puntualizar en un hito y dejar por fuera víctimas de antes y después de la masacre (El Salado)</p>	<p>Abanico de víctimas y hechos de violencia abarcados</p>
<p>Entre memoria plural víctimas / memoria un solo sector víctimas Memoria activa plural / memoria UP “masacre UP” (Remedios/Segovia)</p>	<p>Abanico de víctimas abarcado</p>
<p>Entre víctimas de diferentes victimarios Víctimas paras y FF. AA. / víctimas FARC (El Castillo)</p>	<p>Abanico de víctimas abarcado</p>

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

Conflicto	Orientación
Entre gestores de memoria CIJP / ASAVIT - Por DH y confrontar al Estado en niveles nacional e internacional / nivel interno a comunidad, por el dolor y el tejido social (Trujillo)	Orientación social/ política
Entre diferentes grupos de víctimas frente a desmovilizados Víctimas vinculadas a CARE / otras víctimas - En pro de actividades reconciliación / no compartir espacios (San Carlos)	Orientación política frente desmovilizados abierta/cerrada
Entre generaciones Jóvenes / viejos y claretianos - No más duelo / sí duelos (Bojayá)	Orientación duelo/ no duelo
Entre nación / comunidad étnica Instituciones y medios / autoridades wayúu (Bahía Portete)	Malinterpretaciones/ significados
Entre víctimas y victimarios Víctimas / miembros AUC - interpretación paramilitares en versiones libres frente a justicia y víctimas (El Salado)	Reconocer/no reconocer
Entre víctimas y victimarios Entre familias comunidad: víctimas / familiares victimario (Bahía Portete)	Reconocer/no reconocer
Entre gestores y silenciadores Reivindicación identidad víctimas y confrontación Estado responsable (Remedios/Segovia)	Reconocer/silenciar por amenaza y homicidio
Entre víctimas y Estado Manera de nombrar y consecuencias penales - “Masacre continuada” 1986-1994 contra “hechos violentos” 29 marzo-28 abril 1990 -“Combate” “masacre” (Trujillo)	Reconocer/no reco- nocer Reconocer/no reconocer

Fuente: elaboración propia con base en la información de los estudios de MH.

Son entonces cuatro los tipos de conflicto que subyacen a las memorias en tensión observadas:

En primer lugar, se destacan *las tensiones que se producen por parte de las mismas víctimas y en función del alcance en el abanico de víctimas a ser incluidas o excluidas en los trabajos de memoria que se adelantan en las localidades*. En El Salado la tensión se da por centrar el trabajo

de memoria en un hito cuando ese no abarca ni los únicos hechos de violencia atroces sufridos por la comunidad, ni constituye el único sitio en el entorno inmediato en el que se sucedieron. En Remedios/Segovia se da por la paulatina reducción a lo largo de los tiempos, del foco de víctimas a rememorar (las de la UP), cuando en la masacre se vulneraron víctimas de diferentes procedencias políticas y sociales. En El Castillo se da por la intención original de hacer una casa de la memoria en un lugar asociado a la destrucción de uno de los tres grandes victimarios en la localidad y de que ello se pudiera interpretar sólo como rememoración de las víctimas de ese actor armado.

Este tipo de tensiones se tramitan y resuelven dentro de las mismas dinámicas de los trabajos de memoria en las comunidades y con el acompañamiento de los agentes gestores de la memoria en ellos. La de Segovia/Remedios sí depende del cambio en las condiciones productoras de los estigmas, temores y restricciones a la expresión sin riesgos, que aún imperan en la localidad y que hacen que esas voces menos organizadas —y por tanto menos protegidas frente a los “silenciadores” locales— puedan reivindicar lo suyo.

En segundo lugar, se presentan *tensiones que emergen en función de la orientación a dar a los trabajos de memoria*. En este plano se observan tres diferentes: aquella que, por diferencias generacionales, impulsa o rechaza iniciativas que renuevan los énfasis en las conmemoraciones (duelo/no más duelo, Bojayá); aquella que en función del reto que implica en la localidad convivir con paramilitares desmovilizados, lleva a unos a promover espacios y maneras de reconciliación y a otros a no aceptar aún la participación en tales iniciativas (San Carlos); y aquella que se produce entre los agentes gestores de los trabajos de memoria —el uno local y el otro extralocal— que abogan respectivamente por contenidos más sociales y locales o más políticos y con alcances extralocales (Trujillo). En los dos primeros casos las tensiones se tramitan y resuelven sin mayores consecuencias; en el tercero, el gestor extralocal decide salir del escenario.

Hay un tercer tipo de *tensiones por las memorias que se genera en la gran distancia que hay entre el centro de la nación y la periferia étnica*

y en el consiguiente desconocimiento que en el primero se da sobre lo que es la comunidad indígena y sus características sociales y culturales. A la hora de las interpretaciones que medios de comunicación e instituciones públicas hacen sobre los hechos de violencia perpetrados sobre las víctimas indígenas, se producen diferencias notables y ofensivas sobre éstas últimas. En este caso las autoridades indígenas se pronuncian públicamente sentando sus reclamos.

Finalmente se encuentra un cuarto campo en el que emergen tensiones por la memoria. Este involucra *conflictos entre memorias “antagónicas”, por enfrentar a víctimas y victimarios o a víctimas y Estado*. En los casos vistos, se encuentran tres modalidades de este tipo de tensión: a) la que enfrenta directamente víctimas y victimarios. En El Salado se evidencia la manera como el victimario niega los hechos para absolver sus responsabilidades (borran los hechos, los dan como inexistentes o los nombran de tal manera que los tergiversan); se alejan así de cualquier posición de arrepentimiento y de perdón, e intentan desvirtuar con ello la versión de los hechos dada por las víctimas. En Bahía Portete se expresa un enfrentamiento al interior de la misma comunidad, en la que la familia del victimario local trata de reivindicar el nombre del mismo proponiendo versiones que el resto de la comunidad no admite. En este caso las consecuencias no son penales sino de lazos comunitarios: las contradicciones son fuertes e inciden en que hasta el presente (2010) Bahía Portete siga siendo un lugar al que no han regresado los desplazados; b) en Remedios/Segovia se produjo un antagonismo mayor, pues los victimarios silenciaron mediante el amedrentamiento y la violencia las voces de quienes impulsaron iniciativas de memoria que los confrontaban y por más de diez años estas iniciativas se vieron obligadas a callar; y c) en Trujillo la tensión se produce entre las víctimas y sus gestores de memoria, y el propio Estado a propósito del período a incluir y el carácter a dar a los hechos violentos. A través de esas tensiones por la memoria, se expresan conflictos en los que está en juego el reconocimiento o no de los hechos (qué se reconoce, cómo se nombra). En algunos de los casos, según lo que el juego de fuerzas decida, se desprenden consecuencias sobre qué entra y con qué alcances en el campo de

los hechos jurídicos y penales que el Estado se ve obligado a reconocer y admitir y por tanto también en el tipo de derechos con que se deben cobijar las víctimas.

INTERROGANTES QUE EMERGEN

Sobre la temporalidad y la espacialidad en los trabajos de la memoria

Es claro que cada proceso territorial sobre la memoria tiene fuentes, agentes, motivaciones y dinámicas diferentes. No obstante, quedan sobre el tapete preguntas a propósito de lo que significa la heterogeneidad en el tratamiento de la memoria a lo largo y ancho del país. Cuando se contrastan tres ejemplos desarrollados por MH, emergen algunas preguntas:

La que surge de los ejemplos de El Salado y Trujillo:

- El Salado. El hito del hecho violento en torno al cual se articularon los iniciales trabajos de memoria y que produjeron los reclamos de las víctimas (por delimitar un territorio y una temporalidad restringida 16-21 febrero 2000) se contraponen con el territorio y el período más amplio reclamado por las víctimas para sus ejercicios de memoria, y de hecho al aún más amplio que el mismo CNMH reivindica en la memoria de su estudio escrito: desde la masacre de 1997 hasta julio 2006, en el que se incluyen las violencias paramilitares, guerrilleras y de la fuerza pública.
- Trujillo. El hito en torno al cual víctimas y gestores de la memoria trabajan, incluye un período prolongado de 9 años (1986-1994), en contraposición al estrecho que reconoce el Estado.

La pregunta que surge es: ¿qué determina las temporalidades y las espacialidades que se van a cubrir en los trabajos de memoria, cuando estos proceden de un mismo agente-gestor? ¿Por qué en unas ocasiones el mismo GMH aboga por un período de 9 años en un sitio donde, inclusive el gestor de la memoria original

fue un actor conocido por su posición radical frente al Estado; y en otras partes son las víctimas las que lo presionan para que abarque período, hechos y espacialidad menos estrecha a la originalmente propuesta?

Una segunda pregunta que también surge:

- El Salado/Montes de María, Tibú/Catatumbo, son entornos subregionales de los casos estudiados por MH asolados por un número de masacres que no caben en la imaginación de quienes leen los informes (en Montes de María, se registraron 20 masacres solo en 2000, y entre 1999 y 2001, 42 masacres (CNRR-GMH, 2009, página 203). En Tibú fueron 30 las masacres entre 1999 y 2004 y cerca del doble en el Catatumbo) (página 20).

La pregunta es: ¿Qué pasa en esas subregiones en términos de trabajos por la memoria? ¿Y en lo que estos implican con respecto de las responsabilidades imputables al Estado?

Sobre los acompañamientos

Los gestores acompañantes de los procesos de memoria en los diversos territorios cumplen papel fundamental como impulsores, orientadores y defensores de la memoria de las víctimas, en lugares donde la mayoría de las veces se sigue bajo el dominio de actores armados ilegales y sujetos a la continuidad de sus vulneraciones. Para los procesos que tienen que ver con iniciativas de la comunidad en términos de resistencias, reivindicaciones, defensa de los territorios y de autonomías y reconstrucción de lugares y de comunidades, el propio capital social acumulado es central para los procesos de articulación y sostenimiento de las mismas a través del tiempo. No obstante, en unos lugares el carácter de la violencia y el aislamiento de la comunidad vulnerada alcanza a silenciar toda posibilidad de acción y expresión, y en otros, el capital social acumulado es apenas incipiente. De ahí que los gestores de la memoria sean fundamentales para que estos procesos se den y pervivan.

Sin embargo, lo que por un lado significa posibilidad para las comunidades, puede convertirse —según el caso— en fuente de desconcierto o de fracturas para la misma comunidad. Esto sucede allí donde entre los gestores predomina el interés por imponer una orientación determinada, más que el de acompañar y promover el crecimiento de la propia voz de las comunidades.

También puede darse el caso de que esos agentes acaben convirtiéndose en los determinadores del tipo de memoria que las comunidades construyen. Ese resultado lo ilustra MH en Trujillo, cuando al profundizar en las narrativas expuestas por las víctimas, se observa que estas reproducen más el discurso impulsado por los agentes que las han acompañado; que no se muestra un escenario de expresión de vivencias y sentimientos alternos al discurso oficial más politizado y menos proclive a la expresión de sentimientos, dolores, diferencias de género.

Sobre la reconciliación

La reconciliación es uno de los pasos más difíciles de lograr después de un conflicto armado tan violento, prolongado y degradado como el que ha vivido el país, de la cantidad de víctimas implicadas, de la inmensa cantidad de casos de revictimizaciones sufridas en virtud de la sucesión de actores violentos que a lo largo del tiempo infligieron sus violencias en un mismo territorio, o en virtud de que quienes emprenden el desplazamiento, no garantizan quedar por fuera del alcance de viejos o nuevos victimarios: en el primer caso, porque la saña es tal que hay víctimas a las que han perseguido hasta encontrarlas; en el segundo, porque llegan a otros territorios igualmente sujetos a hechos de violencia. Es demasiado el dolor, las pérdidas y la destrucción que han soportado las víctimas y es enorme también la dificultad de las instituciones para someter a la justicia a los victimarios y lograr en ellos el reconocimiento de los hechos, el arrepentimiento, la solicitud del perdón y la no repetición.

De los casos expuestos por MH, hay dos que suscitan reflexiones especiales acerca de las tensiones y las implicaciones que ello tiene para los trabajos de memoria, cuando la reconciliación está en juego. Son ellos los casos de San Carlos y de Bahía Portete. El primero de ellos expone la tensión entre *grupos de víctimas de la misma comunidad* que se diferencian por su posición frente a los desmovilizados reinsertados en su localidad. El segundo expone la tensión directa *entre víctimas y victimarios, cuando estos —como familias— forman parte integral de la misma comunidad*. El primero da la oportunidad de reflexionar acerca de las diferencias que se plantean cuando un mismo problema es pensado desde una escala socioespacial mayor, a cuando lo hace desde una escala local. El segundo aporta la ocasión para pensar los retos de la reconciliación entre los tiempos históricos de más mediano plazo y los presentes inmediatos.

San Carlos muestra la enorme distancia que hay entre los procesos de reconciliación pensados desde los centros —organizaciones de víctimas regionales o nacionales— y desde las víctimas en las localidades específicas que deben afrontar los retos de la reinsertión de los desmovilizados. Para las primeras, cuenta la elaboración reflexiva sobre el significado de los procesos en el nivel nacional; se refieren al proceso de sometimiento a la justicia de los paramilitares de las AUC a Justicia y Paz y a las grandes dudas que este siempre les suscitó por las ambigüedades que el proceso de desmovilización demostró y el mantenimiento de actividades ilegales y violentas de encarcelados y desmovilizados en los territorios. Para las víctimas que viven y se ven compelidas a convivir en su localidad con los desmovilizados —como es el caso de San Carlos, municipio con el mayor número de desmovilizados recibidos en el oriente antioqueño— la reconciliación tiene otro color: la urgente necesidad de encontrar sus desaparecidos y la posibilidad de entrar en diálogo con quienes están desmovilizados en su localidad y tienen la información. Ese criterio pragmático pero vital cambia la perspectiva y permite emprender el acercamiento; y este acercamiento, el conocimiento mutuo y los pequeños logros permiten pensar en que el mantenimiento de esa comunicación e in-

tercambio puede obrar como un camino en la transformación de las subjetividades de esos desmovilizados (sin desconocer las presiones a las que seguían sometidos desde Itagüí) y a la construcción de algunos ámbitos locales de entendimiento y convivencia.

La pregunta que se suscita es entonces: ¿Cómo aprovechar el conocimiento y la experiencia de esos “pequeños” pero enormes aprendizajes locales sobre cómo construir paz en los territorios?

Bahía Portete plantea otra clase de reto a los procesos de reconciliación. Aquí el enfrentamiento es entre las propias familias que se sitúan en las orillas opuestas de víctimas y victimarios. Se trata de la lucha que a través de la memoria entabla la hija de Chema Bala para que ella y sus hijos y descendientes dejen de ser estigmatizados por su propia comunidad; reconoce la equivocación de su padre al asociarse con *Jorge 40*, pero trata de justificarla en la misma tradición wayúu y reclama una memoria “sin exclusiones” y un “trato simétrico” a todas las víctimas del conflicto armado en la comunidad Wayúu (o sea una memoria que oiga la versión del victimario y un reconocimiento que ellos como familia también tienen víctimas de violencias ejercidas en contra de ellos).

La pregunta la plantea el mismo CNRRH: ¿Cómo asumir el reclamo de la estigmatización que sufren las generaciones siguientes, familiares de quien se involucró en hechos atroces contra su propia comunidad? (CNRR-GMH, 2010, página 195). ¿“Cómo afrontar la situación de los herederos del horror, si se quiere desde otro lado romper el círculo de la violencia, y sin sacrificar al mismo tiempo el irrenunciable compromiso con la justicia”? (página 28).

La posición de MH es la de tener muy claro el papel que “los informes y procesos de memoria histórica tienen en la transmisión intergeneracional de la memoria”. Ese papel es el de aportar el contexto amplio de poderes e intereses sociales, económicos, políticos y armados en los que estos hechos tuvieron lugar” de tal manera que hagan posible “empezar a comprender cuáles son los factores que llevan a que algunos seres humanos (vecinos, prójimos, paisanos, arijunas, funcionarios estatales, hombres armados) cometan atrocidades en contra de otros que se encuentran en estado de indefensión” (CNRR-GMH, 2010, página 196).

Lo anterior es correcto *en la dimensión histórica*. Pero surge otra pregunta: *¿Cómo lograr efectos de reconciliación en el plano del presente de los hijos y nietos del victimario? ¿Qué otras actividades es posible adelantar para colaborar en la resolución del conflicto interno a las familias wayúu? ¿Hasta dónde eso depende de la autonomía indígena y del manejo interno de sus códigos ancestrales para la resolución de sus conflictos, cuando en esta comunidad intervino, de manera tan arrasadora y desequilibrante de esas maneras de relacionamiento, la sociedad mayor con sus códigos de guerra degradada, atroz y manipuladora?*

RECOMENDACIONES

En esta parte final del balance expondremos a manera de recomendaciones lo que, desde nuestro punto de vista y con base en la puesta en relación de los 13 estudios regionales de MH es pertinente subrayar si se piensa en el proceso de construcción de paz en el que el país compromete sus esperanzas de futuro, y en particular, si se considera que el territorio es determinante en la forma heterogénea como el conflicto armado se configura e impacta, y cómo, en consecuencia, juega su papel en la “paz territorial”.

Los estudios de MH revisados centran el foco justamente en el “territorio”, por cuanto la especificidad de los hechos y el significado que los mismos tuvieron para cada comunidad, se consideran indispensables de establecer en función de la dignificación, verdad, justicia y reparación de las víctimas. Sin embargo, el aporte adicional que estos estudios hacen al combinar memorias de las víctimas e investigación social regional es *lograr contextualizar esos hechos, vivencias y significaciones particulares de tal manera que ellos se comprendan en la complejidad de los factores* subjetivos y estructurales, locales, regionales y nacionales *que intervienen en la producción de esas violencias, y las responsabilidades variadas que los determinaron.* Al mostrar la complejidad de factores que están en la base de la producción e impactos de las violencias, se plantea también la necesidad de considerar la complejidad de lo que implica la acción social e institucional requerida para la construcción de paz.

Desde una panorámica muy general, en esta parte final se resaltarán cuatro facetas territoriales de esa complejidad: a) la heterogeneidad de los territorios; b) las diferencias y relaciones entre los territorios rurales y urbanos; c) las dimensiones locales y nacionales en el conflicto y en una política pública territorial; d) algunos asuntos transversales al territorio.

1. LAS DIFERENCIAS TERRITORIALES EN LA PRODUCCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

La variedad de los factores que intervienen en la producción de las violencias no se combinan ni actúan de igual manera de unos territorios a otros. Lo territorial por definición confronta con la necesidad de asumir las diferencias, la particular manera como los distintos factores participan o no en cada lugar y el peso con que cada uno lo hace en la interacción de conjunto. De ahí la riqueza de cada uno de los estudios hechos por MH. De ahí también, el esfuerzo hecho en este balance por destacar —a propósito de las dinámicas del conflicto, de las resistencias y de las memorias en tensión— las claves de relacionamiento de esa filigrana de diferencias a la luz de tendencias mayores. Aquí y desde una perspectiva de conjunto, se subrayarán las diferencias más gruesas planteadas por los procesos de reconfiguración territorial y las consideraciones que de allí se desprenden para la intervención institucional.

El tipo de reconfiguración al que se vieron sometidos los territorios por cuenta del conflicto armado dependió menos de las modalidades de acción violenta y más de las particularidades de cada territorio y de los aspectos más estructuralmente implicados en las afectaciones de un conflicto armado que tuvo en la población civil su principal blanco. Sobre las cuatro tendencias se puede afirmar:

- La descampesinización impactó periferias de regiones centrales (Caribe y Andina), de piedemonte llanero y de frontera andina con Venezuela, colonizadas de vieja data o a mediados del siglo pasado. En ellas actuó una nefasta confluencia de fuerzas del mercado y del conflicto armado des-

estructuradoras del campesinado. Son las poblaciones sobre las cuales recaerá lo fundamental de la política agraria integral de los acuerdos.

- Las afectaciones a la pervivencia de los grupos étnicos con sus identidades, arraigos y formas de relacionamiento con el territorio, derechos y autonomías se concentraron en las fronteras étnicas de la nación. Son comunidades frente a las cuales la intervención pública tiene que implementarse según consideraciones y objetivos específicos, acordes con el carácter de las vulneraciones culturales y socioterritoriales colectivas a recomponer y según los derechos específicos que amparan a dichas comunidades.
- Los cierres democráticos afectaron muy especialmente aquellos territorios donde en los años 1980-1990 se abrían especiales posibilidades para la izquierda democrática que crecía. En la actualidad se revive ese mismo riesgo en aquellas zonas donde las condiciones del posconflicto con las FARC plantean similares potencialidades a fuerzas políticas y electorales alternativas a los partidos tradicionales y sus facciones y allí donde el despojo de tierras y el movimiento de restitución está a la orden del día y por el cual también hay liderazgos alternativos comprometidos y en alto riesgo. En esos territorios se requieren especiales énfasis de la política pública en la seguridad de los desmovilizados y de los líderes comunitarios, tanto como en la transformación institucional y de cultura política que garanticen la convivencia y la participación política.
- La cocalización de la economía regional y la configuración de un campesinado cocalero que en dicho cultivo afinca su supervivencia, afecta también regiones específicas del país. Las intervenciones institucionales en ellas tienen que considerar igualmente condiciones particulares con relación al manejo de la política antidroga y a la manera como se construye institucionalidad, infraestructuras y alternativas económicas efectivas en territorios imbuidos por décadas en los cultivos de coca y la economía ilegal sin más alternativas.

- El potencial que han mostrado algunas localidades o regiones en términos de los procesos de reconstrucción de las infraestructuras, los lazos comunitarios y la institucionalidad, debe ser objeto especial de observación para el aprendizaje de cuáles son los factores que cuentan en dicha potencialidad y para no descuidar las debilidades que también a su interior se muestran con respecto a su sostenibilidad en el tiempo.

2. LAS TERRITORIALIDADES RURALES Y URBANAS BAJO LA INTEGRALIDAD DE UNA POLÍTICA DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Si bien lo grueso del conflicto armado se ha desarrollado en la ruralidad del país y es a ella a la que está dirigida una de las facetas centrales de la política del posconflicto (desarrollo agrario integral), la “paz territorial” no se reduce a la ruralidad; requiere también —y de manera fundamental— lo urbano, sobre todo pensando en aquellos nodos urbanos que le han servido al gran motor de transformación, expansión y escalamiento del conflicto armado como es el narcotráfico. El caso de Buenaventura estudiado por MH muestra cómo juega esta espacialidad urbana (que no es la única; Cali y Medellín lo son también de manera significativa) en la territorialización de las estructuras nacionales del crimen organizado en dichas urbes, proporcionándoles el manejo directo de importantes porciones del mercado de consumo nacional, el acceso a otras nutridas fuentes de financiación de sus actividades y oportunidades de acceso al lavado de activos. Son la miríada de bandas locales las que viabilizan el ejercicio de esos poderes ilegales nacionales en las ciudades mencionadas y son esas bandas locales, por lo general las encargadas directas del ejercicio de las variadas violencias a las que las comunidades urbanas asentadas en las periferias de la ciudad están sometidas.

La violencia en la ruralidad no se termina sin terminar también con la violencia afincada en el narcotráfico que domina espacialidades urbanas; y viceversa. Si bien la acción institucional y

social en la ruralidad tiene especificidades bien diferentes a las requeridas en los ámbitos urbanos, unas y otras intervenciones tienen que ser tan decididas como coordinadas y eficaces, si se quiere realmente lograr la tan anhelada paz. ¡La paz territorial incluye a las ciudades!

3. LA INTERACCIÓN ENTRE LO LOCAL Y LO NACIONAL COMO CLAVE EN EL DESENCADENAMIENTO DEL CONFLICTO ARMADO EN LOS TERRITORIOS Y COMO BASE DE UNA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL

El balance mostró la fuerte imbricación que se presenta entre los conflictos locales y las dinámicas nacionales del conflicto armado para el desencadenamiento de las violencias emblemáticas asociadas a los períodos de mayor intensidad y crueldad de la violencia sobre la población. Sin embargo, también mostró que son muy variadas las modalidades de esa imbricación y sus significados. La principal diferencia se encuentra entre los territorios donde se juega *la disputa por el poder político* desencadenada en las épocas tempranas del conflicto armado por poderes políticos alternativos a los partidos tradicionales *durante una coyuntura política de carácter nacional* y asociada al tipo de paramilitarismo “de primera generación”, y los territorios en los que, en una etapa posterior asociada al paramilitarismo “de segunda generación”, se cernió una verdadera máquina de guerra completamente instrumental (así se tiñera de discurso antiinsurgente) articulada en la *disputa por el control de territorios y del negocio y las ganancias asociados a los cultivos de coca y al narcotráfico*. En estos últimos, fue *una coyuntura nacional de carácter político-militar* la que se ligó a los conflictos locales en los territorios y estos conflictos locales fueron determinados por criterios más “instrumentales” y no por el poder político: reacción frente a secuestros, robos y extorsión planteados por las guerrillas, o frente a atentados en contra de infraestructuras nacionales de diverso tipo, o frente al control de un puerto (en micro y en macro). Y allí donde no hubo conflictos locales engarzados, la máquina de

guerra actuó igualmente, determinada de manera exclusiva por esa misma coyuntura nacional de carácter político-militar.

Lo que la anterior relación hace resonar para los tiempos presentes es que *hoy, de nuevo, predomina una coyuntura nacional de carácter político* (con los acuerdos de paz con las FARC) *y de nuevo se esbozan los síntomas de una violencia de carácter político* sobre todo lo que tenga color a alternativo al estatu quo electoral y de partidos políticos tradicionales y sus facciones. Y también *vuelven a ser los territorios específicos asociados a fuerzas alternativas*: de los desmovilizados de las FARC, o de liderazgos sociales y comunitarios que sin tener nada que ver con las FARC son estigmatizados como guerrilleros. ¡La estigmatización que en el país se sigue indefectiblemente heredando y reproduciendo!

Por su parte, la máquina de guerra ha sido desactivada por las políticas del Estado (desmovilización paramilitar —con todas sus limitaciones— y de las FARC, apenas en ciernes), pero no así su principal motor: el narcotráfico. De ahí la continuidad de las violencias en los territorios.

La continuidad de la violencia en la inmensa mayoría de los territorios, después de la desmovilización paramilitar y la seguridad democrática, es puesta en evidencia en los estudios de MH, como violencias agenciadas por los actuales actores nacionales del crimen organizado y articuladas en torno a la actividad del narcotráfico y demás negocios ilegales concentrados por ellos. El narcotráfico, como actividad que se instaló desde mediados de los años 1970, se convirtió desde los años 1980 en uno de los factores determinantes de las dinámicas del conflicto armado: incidió en la transformación de los propios grupos armados, en sus lógicas de inserción en los territorios y en los virajes territoriales de sus disputas, al igual que en las políticas de la lucha antidroga del Estado que, como se vio, no afectaron para nada su existencia y fortalecimiento a través de los tiempos, mas sí tuvieron efectos en la militarización de territorios y la criminalización de movilizaciones sociales, en el evidente sesgo antiinsurgente y no paramilitar de sus acciones, en la modificación (muy transitorias disminuciones) de las territorialidades del conflicto y en las virulencias del

mismo. La continuidad de las violencias mantendrá su curso de no actuarse de manera contundente contra las estructuras criminales asociadas al narcotráfico.

En este ámbito es sustantiva también la interacción decidida entre las intervenciones del nivel nacional del poder público y las de los gobiernos locales contra las estructuras criminales y de las organizaciones sociales que en los territorios inventan y desarrollan toda clase de alternativas para neutralizar la fuerza de atracción y coerción que tienen las estructuras criminales sobre la juventud. El ejemplo más evidente lo aportan las ciudades en las que este flagelo es apabullante y que, por tener gobiernos locales con cierta capacidad de acción, muestran la limitación de sus esfuerzos en neutralizar la acción de dichas estructuras cuando tratan de perseguir o de negociar con las bandas locales (logros muy coyunturales en la baja de tasas de homicidios pero la persistencia y fortaleza del control territorial de las estructuras criminales y de la agencia de otra variada gama de violencias). No hay acción del Estado local tendiente a la desactivación de las bandas locales, sin la acción decidida del Estado nacional en el ámbito nacional e internacional en materia de narcotráfico. Y no hay acción del Estado nacional en su lucha anti droga que perviva, sin una acción determinante de los poderes locales —públicos y privados— que busquen darle salida con educación, capacitación y empleo productivo y formal y alternativas deportivas y culturales a los contingentes de jóvenes que engrosan las filas de la delincuencia local y viabilizan con ella la territorialización de las estructuras criminales nacionales.

Si se pasa a otros temas, como los que en la construcción de la paz territorial propugnan por el reconocimiento y promoción de los actores locales políticos, sociales y comunitarios en capacidad de apuntalar alternativas inventadas y aprendidas sobre la marcha de los procesos locales, la historia también muestra la necesidad de los acompañamientos nacionales o internacionales que fortalezcan los empoderamientos y del apoyo del Estado nacional para convertirlos en iniciativas de amplia cobertura territorial y de permanencia en el tiempo.

Aquí se hace énfasis en cómo todo lo que se adelante en “los territorios” teniendo en cuenta voces, organizaciones y particularidades locales no tiene posibilidades de fortalecimiento, expansión y permanencia sin el aval y apoyo institucional del Estado central. Y tampoco hay que olvidar que todo lo que se construye en los territorios en la escala local y subnacional no es otra cosa que la manera de construirse también el Estado central. Lo que este haga o deje de hacer en ellos revierte directa y proporcionalmente sobre la institucionalidad y legitimidad central.

4. DOS ASUNTOS TRANSVERSALES A RESALTAR

Hay dos asuntos vinculados a la manera como en Colombia se ha construido el Estado, que son transversales al conjunto del territorio nacional: la pervivencia de una enorme periferia y la continuidad de la acción de una fuerza pública seriamente implicada en las distintas generaciones de paramilitarismo.

- La enorme periferia, que ha servido de nicho a la implantación y fortalecimiento de actores armados ilegales de diverso tipo a través de los tiempos no ha cambiado en su condición de periferia a lo largo de las décadas de conflicto armado; y seguirá siéndolo si no se transforma la manera como el centro —tanto desde los intereses públicos como privados— se relaciona con ella. Se trata del viraje a darle al proceso de construcción de Estado, en especial a la manera como este construye esos ejes radiales mediante los cuales se interpenetran sociedad y Estado en los territorios.
- La alianza que los miembros de la fuerza pública han mantenido con los diferentes grupos paramilitares a lo largo de las 4 décadas estudiadas, se manifestó tanto para impedir la emergencia y fortalecimiento de fuerzas políticas alternativas al establecimiento, como para el adelanto de la lucha antiinsurgente; y también y paralelamente, para mezclarse y aprovechar los beneficios de los negocios del narcotráfico. Esta constante es otra de las facetas del propio Estado cen-

tral y de su manera de estar presente en los territorios que merece atención prioritaria en una política que pretende construir paz territorial.

NOTA FINAL PARA EL CNMH

Queda una pregunta acerca del propio trabajo de memoria histórica sobre el conflicto armado. Si este es en general sobre “el conflicto armado”, ¿por qué se nota en los estudios adelantados un énfasis en los paramilitares como actores victimizantes y un cierto desdibujamiento de los dos principales grupos guerrilleros, que también a lo largo de décadas fueron responsables de coerción armada sobre la población, escalamiento de las violencias y ejecución de hechos atroces?

Ya en el primer capítulo de este balance se hizo esta anotación: “Las guerrillas aparecen como el principal actor victimizante solo en contados casos: cuando hicieron uso de armas no convencionales y fueron los directos responsables de una masacre (Bojayá); cuando protagonizaron la destrucción del casco urbano con carro bomba (Granada); cuando en el período de disputa con paramilitares se visibiliza el uso de masacres, asesinatos selectivos y siembra de minas antipersonales (Tibú y San Carlos). Es preciso señalar que, en los demás casos, la visibilización de su protagonismo es secundaria y está referida como antecedentes o contexto de los hechos violentos focalizados; la generalidad de las veces se alude a su responsabilidad en los hechos violentos de manera indirecta: como comprometida en la estigmatización de la población (y por tanto en volverla objeto de la violencia paramilitar o de las fuerza pública)”. Además, como guerrilla, la protagonista en los estudios ha sido en lo fundamental las FARC; el ELN está más desdibujado aun.

Entendemos que MH asume la responsabilidad de reconstruir la memoria de las víctimas a partir de los procesos de Justicia y Paz a los paramilitares. Pero ahora que se hace un balance y que se inicia una etapa de reintegración y también de justicia -y por

tanto de memoria y verdad para las víctimas de las FARC- es indispensable poner de presente el vacío que tienen los estudios hasta ahora realizados en este respecto. Es importante realizar también en profundidad lo que le compete a los dos principales grupos guerrilleros en su responsabilidad frente al conflicto armado, sus dinámicas, territorialidades y escalamientos, y frente a las víctimas en tantos y tan variados territorios a través de 50 años.

BIBLIOGRAFÍA

- Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH (2012). *El Placer. Mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo*. Bogotá: CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH (2014). *Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia, 1982 - 1997*. Segunda edición. Bogotá: CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH (2015). *Buenaventura: un puerto sin comunidad*. Bogotá: CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH (2015b). *Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo*. Bogotá: CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH (2015c). *Pueblos arrasados. Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)*. Bogotá: CNMH, UARIV.
- Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH (2015d). *Crímenes que no prescriben: la violencia sexual del Bloque Vencedores de Arauca*. Bogotá: CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH (2016). *Granada: memorias de guerra, resistencia y reconstrucción*. Bogotá: CNMH, Colciencias, Corporación Región.
- García, Clara Inés (1996). *Urabá. Región, actores y conflictos 1960-1990*. Bogotá: CEREC.
- García, Inés; Domínguez, Martha; Burbano, Alejandra y Marín, Nathalia (2018), "Ciudad, violencia, memorias y políticas de

- seguridad: Medellín (1980-2013)”, en Álvaro Guzmán (ed.), *Ciudad y violencia: cinco ciudades colombianas a finales del siglo XX y principios del XXI*, Cali, Universidad Autónoma de Occidente.
- Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación-Grupo de Memoria Histórica (2008). *Trujillo. Una tragedia que no cesa*. Bogotá: CNRR-GMH.
- Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación-Grupo de Memoria Histórica (2009). *La masacre de El Salado: Esa guerra no era nuestra*. Bogotá: CNRR-GMH.
- Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación-Grupo de Memoria Histórica (2010). *La masacre de Bahía Portete: mujeres Wayúu en la mira*. Bogotá: CNRR-GMH.
- Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación-Grupo de Memoria Histórica (2010b). *Bojayá: la guerra sin límites*. Bogotá: CNRR-GMH.
- Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación-Grupo de Memoria Histórica (2011). *La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13*. Bogotá: CNRR-GMH.
- Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación-Grupo de Memoria Histórica (2011b). *San Carlos: memorias del éxodo en la guerra*. Bogotá: CNRR-GMH.

ANEXOS

ANEXO 1

FICHA GENERAL POR CASO

Caso	Trujillo
Referencia bibliográfica	CNRR - Grupo de Memoria Histórica (2008). <i>Trujillo. Una tragedia que no cesa</i> . Bogotá: CNRR / Planeta.
Objetivo	<ul style="list-style-type: none">• <i>Hacer visible una violencia que queda opacada por hechos de violencia de alto impacto</i> que concentran la atención de los medios de comunicación y la opinión pública nacional: magnicidios, atentados terroristas y masacres (página 63). Y convocar la solidaridad ciudadana y mostrarle al país que los hechos de Trujillo pertenecen al pasado nacional. <i>Trujillo es, en más de un sentido, Colombia</i> (página 11).• Interpelar no solo al Estado, sino también a toda la sociedad por los silencios y los olvidos que prosperaron en torno a la masacre (página 11).• <i>Volver a Trujillo porque aún no se ha hecho justicia</i>. A casi 20 años de la masacre y 10 de la aceptada responsabilidad del Estado en los hechos y la violencia sigue (página 12).
Foco temático	Masacre

Caso	Trujillo
Tiempo	<p>Antecedentes fines del siglo XIX hasta mediados de la década de 1980: proceso de poblamiento, violencia partidista, movimiento campesino e inserción ELN.</p> <p>Foco La masacre de 1990, con todos los hechos conexos entre 1986 y 1994. El Grupo de Memoria Histórica reivindica la apuesta ética de las víctimas, que han denominado “masacre” a una secuencia de desapariciones forzadas, torturas, homicidios selectivos, detenciones arbitrarias y masacres, de carácter generalizado y sistemático, ocurridas en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar entre 1986 y 1994, perpetradas por una alianza regional y temporal entre las estructuras criminales del narcotráfico y miembros de la fuerza pública. Estos hechos hacen parte de una persecución política con tintes antinsurgentes en un contexto de crecimiento de bandas sicariales del narcotráfico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1986-1990: articulación de conflictos que precipitan la masacre. • 1990-1994: aunque durante este período hay una disminución del número de víctimas de violencia, se acentúa el despojo de tierras y se consolida el narcotráfico. <p>Posterior 1995-2008: Incursión del Bloque Calima de las AUC, crecimiento cultivos de coca y narcotráfico, presencia y enfrentamientos entre Rastrojos y Los Machos, violencias contra las iniciativas de memoria y sus líderes.</p>
Espacio	<p>Foco: municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrío. Contexto: Norte del Valle del Cauca y Cañón de Garrapatas (Chocó).</p>
Actores victimizantes	<p>Foco: narcotraficantes, fuerza pública (Ejército y Policía). Otros: ELN, M-19.</p>

Caso	El Salado
Referencia bibliográfica	<p>CNRR - Grupo de Memoria Histórica (2009). <i>La masacre de El Salado: Esa guerra no era nuestra</i>. Bogotá: CNRR / Ediciones Semana.</p>
Objetivo	<ul style="list-style-type: none"> • Resolver el reclamo de las víctimas sobrevivientes que sienten la necesidad confrontar el estigma que pesa sobre ellas y su población, mediante el esclarecimiento histórico de de las relaciones entre los actores armados, la población y el territorio y que “se visibilice la coacción y la amenaza que imperaban en la relación entre el actor armado y la población”. Esperan que ello forme parte de la reparación, de las garantías de no repetición y de la restitución de la dignidad de las comunidades afectadas (páginas 215; 226). • Dar cuenta del punto de vista de las víctimas y realizar mediante ella un esfuerzo por la individualización de los sujetos golpeados por la violencia (página 16). • Hacer comprender el dolor como el resultado de procesos sociales y políticos identificables (página 29).

Caso	El Salado
Foco temático	Masacre
Tiempo	<p>Antecedentes Movilizaciones campesinas de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, línea Sincelejo en la década de 1970 en Montes de María. Inserción del ELP y el ELN. En El Salado la única experiencia previa de presencia guerrillera fue Patria Libre, que tuvo acciones esporádicas y marginales.</p> <p>Foco Masacre perpetrada por las AUC entre el 16 y el 21 de mayo de 2000 en el corregimiento El Salado y desplazamiento consecuente de cuatro mil personas.</p> <p>Contexto 1991 - 1998: incursión y dominio FARC en Montes de María; ensañamiento contra las élites locales (asesinatos, secuestros, robo de ganado); las élites reaccionan formando grupos paramilitares locales y comienzan las masacres. En El Salado la primera masacre se llevó a cabo en marzo de 1997. 1999 - 2006: Inserción de las AUC en Montes de María, arrasamiento de población en territorios retaguardia FARC y desplazamiento masivo. (Entre 1999 y 2000, las AUC realizaron 16 masacres de tipo tierra arrasada en los Montes de María). Las FARC siguen en el territorio. Y con la declaración de los Montes de María como Zona de Rehabilitación y Consolidación en 2002, la Fuerza Pública escaló la vulneración sobre la población (detenciones arbitrarias, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y amenazas).</p> <p>Posterior 2007-2009: las FARC mantuvo su poderío militar en el territorio hasta 2007, año en el que se produce cambio el balance de fuerzas entre las Fuerzas Armadas y las FARC.</p>
Espacio	<p>Foco: Corregimiento El Salado en el municipio de El Carmen de Bolívar y veredas y corregimientos en jurisdicción de los municipios de Ovejas y Córdoba, en los Montes de María.</p> <p>Contexto subregional: Montes de María y su entorno. Macro regional: Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena y Atlántico.</p>
Actores victimizantes	<p>Foco: AUC (Bloque Norte con el Frente Rito Antonio Ochoa, comandantes de las AUC en Cesar y Magdalena. Frente Héroes de Montes de María –creado después de la masacre–).</p> <p>Otros: estructura paramilitar local asociada a élites locales/regionales, FARC (Frentes 35 y 37); Fuerzas Armadas (Infantería de Marina).</p>

Caso	Bahía Portete
Referencia bibliográfica	CNRR - Grupo de Memoria Histórica (2010). <i>La masacre de Bahía Portete: mujeres Wayúu en la mira</i> . Bogotá: CNRR-GMH.
Objetivo	<ul style="list-style-type: none"> • Responder al reclamo de la memoria que hacen los pueblos Wayúu contra las interpretaciones equivocadas acerca de la masacre. Visibilizar los eventos de la violencia política contra el pueblo Wayúu y hacerlos comprender como hechos articulados a las dinámicas de violencia estructural del conflicto y no como se presenta por parte de las instituciones gubernamentales y los medios de comunicación: asuntos de guerras intraétnicas o que responden más bien a eventos propios de su comportamiento delictivo (robos, secuestros) (páginas 33, 137). • Comprender el impacto de la masacre de Bahía Portete en el pueblo Wayúu a partir del acervo cultural de la propia comunidad afectada (página 21). • Conocer y comprender las variadas formas de vinculación y afectación de las mujeres en la violencia de la guerra, desde una perspectiva de género, en el escenario del conflicto armado interno (página 15). • Alimentar la línea de investigación de memoria histórica sobre los diferenciados roles de las mujeres en medio del conflicto, como víctimas, combatientes y resistentes en el Caribe colombiano (página 26).
Foco temático	<ul style="list-style-type: none"> • Masacre • Violencia sexual • Violencia étnica
Tiempo	<p>Antecedentes Décadas 1980-1990: Procesos de organización y movilización wayúu contra la intervención de megaproyectos en su territorio. Conflictos entre familias wayúu por el control del puerto natural.</p> <p>Foco Masacre perpetrada por las AUC entre los días 18 y 20 de abril del año 2004 (6 víctimas fatales, 4 de ellas mujeres). Una masacre que ilustra la confluencia entre violencia contra las mujeres, violencia sexual y violencia étnica en la meta de ocupación territorial de los paramilitares en la alta Guajira.</p> <p>Contexto 2000- 2004. La alta Guajira no registraba presencia de grupos guerrilleros. A inicios del año 2000, los habitantes de Bahía Portete comenzaron a percibir signos de presencia paramilitar. En 2002, se conformó el Frente Contrainsurgencia Wayúu, como parte del Bloque Norte de las AUC.</p> <p>Posterior 2005 en adelante. El Frente Contrainsurgencia Wayúu no participó en el proceso de desmovilización de las AUC y permanece activo en el tráfico de drogas, la extorsión a comerciantes y el control de la comercialización de gasolina. Para el año 2010 su poderío militar y de hombres ha aumentado significativamente. El territorio permanece inhabitado y las amenazas a líderes continúan y obstaculizando el retorno de los desplazados.</p>

Caso	Bahía Portete
Espacio	Foco: Bahía Portete (Uribia) y alta Guajira. Contexto: Baja Guajira (dinámica de grupos paramilitares); Uribia, Maicao y Maracaibo (desplazamiento forzado).
Actores victimizantes	Foco: AUC (Bloque Norte y Frente Contrainsurgencia Wayúu), miembro de la comunidad Wayúu (José María Barros, <i>Chema Bala</i>).

Caso	Bojayá
Referencia bibliográfica	CNRR - Grupo de Memoria Histórica (2010). <i>Bojayá: la guerra sin límites</i> . Bogotá: CNRR / Ediciones Semana.
Objetivo	<p>1. “Romper con la visión fragmentada de los hechos que aísla la masacre del entramado de actores y confrontaciones que estuvieron en el origen y desenlace de lo sucedido el 2 de mayo de 2002 en Bojayá” (página 17). Y así poder:</p> <p>a. Dimensionar y visibilizar las responsabilidades de las FARC (actor directo de la masacre), la de los paramilitares (arte y parte de los hechos que configuraron “una guerra sin límites”), así como la del Estado colombiano (por omisiones y acciones y por el histórico “incumplimiento” en “su responsabilidad de integrar la región al proyecto de nación”). Visibilizar también cómo la situación de exclusión histórica “ha creado condiciones para la conversión del territorio en zona de ilegalidad y refugio” y la consecuente potenciación de las <i>ventajas competitivas</i> que ello genera para guerrillas, paramilitares y narcotraficantes en términos de su presencia y accionar ilegal y de violencia (páginas 151-162).</p> <p>b. Evidenciar especialmente tres cosas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • que “las condenas a miembros de las FARC no son cierre del proceso judicial por la masacre y no pueden convertirse en una especie de salvaguarda que neutralice la condena pública y la exigencia de justicia con respecto a la responsabilidad de los paramilitares” (página 17). • que la responsabilidad de los agentes de la fuerza pública está “todavía pendiente y sobre la cual hay celosa reserva en la Jurisdicción Penal Militar” (páginas 18-19). • que se debe lo que significa —en una región periférica— la ausencia histórica del Estado o su intervencionismo más reciente pero carente de consideraciones para revertirlo en bienestar para la población. <p>2- Responder a la memoria del pueblo de Bojayá, volviendo “la mirada a las comunidades de las múltiples periferias sociales y geográficas del país y a los complejos retos que esto supone, para que dejen de existir sólo cuando la guerra nos habla cruelmente de ellas” (página 23).</p>
Foco temático	Masacre

Caso	Bojayá
Tiempo	<p>Antecedentes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Históricos: siglo XIX – hasta la década de 1960. El Atrato y la población afrocolombiana son sometidos a violencia estructural y exclusión histórica. • 1960 en adelante. Estado y empresas madereras intervienen territorio con proyectos de carácter extractivo y sin beneficio para la región. 1970 - 1995: presencia guerrillera, zona de retaguardia FARC. <p>Foco Masacre del 2 mayo de 2002, producida con la explosión de un cilindro bomba lanzado por las FARC sobre la iglesia de Bellavista, en la que la comunidad se resguardaba de los combates entre las AUC y las FARC. Causó la muerte a 98 civiles —79 como víctimas directas de la explosión, las demás murieron en hechos precedentes y posteriores—. A pesar de la magnitud de la tragedia los enfrentamientos se prolongaron por 5 días más. Utilizaron a la población como escudo humano.</p> <p>Contexto 1997-2004: antes y después de la masacre. El Atrato se convirtió en una frontera de guerra donde colisionaron la ofensiva paramilitar —que pretendía consolidar a Urabá como zona de retaguardia estratégica— y una contraofensiva guerrillera de recuperación territorial. 2002-2004: cuatro meses después de la masacre la población retornó, a Bellavista llegaron dos caravanas de retorno en septiembre de 2002. La confrontación armada continuó en la región y se impusieron restricciones a la circulación por el río.</p> <p>Posterior 2005 en adelante. En 2005 se desmovilizó el Bloque Pacífico y en el 2006 el Bloque Élder Cárdenas. Los desplazamientos en la zona continuaron sucediendo. En 2010 persisten las confrontaciones entre guerrilla y otros actores armados (paramilitares, narcotraficantes y bandas criminales) en las cabeceras de los ríos, las ciénagas y las zonas rurales.</p>
Espacio	<p>Foco: Bojayá y Medio Atrato. Contexto: Alto y bajo Atrato, Quibdó, Urabá, Antioquia y Córdoba.</p>
Actores victimizantes	<p>Foco: FARC (Frentes 5, 32 y 57 del Bloque Móvil José María Córdoba), AUC (Bloque Élder Cárdenas), Fuerzas Armadas.</p>

Caso	Remedios y Segovia
Referencia bibliográfica	CNRR - Grupo de Memoria Histórica (2010). <i>Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia</i> . Bogotá: CNRR / Ediciones Semana.
Objetivo	<p>Propender —a través de la memoria— “por el rescate y la reivindicación de los discursos e ideas de quienes fueron masacrados, y por la denuncia y desenmascaramiento de la lógica de la victimización. Silenciar fue un objetivo explícito que se impuso violentamente no sólo a las víctimas sino a los sobrevivientes y a los testigos. Por eso, es preciso recobrar la memoria de lo que se quiso acallar” (páginas 31-32). La misma práctica de la memoria ha sido violentada (supresión del duelo, prohibición de denuncia, proscripción del ejercicio ciudadano), en 15 masacres registradas durante el período 1998–2012. Hasta el mismo equipo investigador fue amenazado durante el proceso de investigación (página 34).</p> <p>Aportar un texto como “un reconocimiento no sólo a los que decidieron confiarnos su palabra, sino también a aquellos, muchos, que todavía no pueden hablar” (página 35).</p> <p>Reconstruir con la memoria un caso emblemático que ilustra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “una democracia violentada, una negación del ejercicio de la ciudadanía y una presencia institucional precaria. Aquí se devela la naturaleza de una guerra por la política más que por el territorio, un conflicto marcado por la exacerbación ideológica de todos los actores armados que vieron amenazas por doquier, convirtiendo a la democracia en una de ellas” (página 38). • “una trayectoria particular del paramilitarismo en la que no se conformaron comandos armados o ejércitos privados implantados territorialmente, sino que se desarrollaron acciones perpetradas por redes criminales funcionales y coyunturales, que cambiaron parcialmente entre los ataques y que fueron articuladas y promovidas por miembros de la fuerza pública que operaban en la región” (páginas 38-39). • un caso de iniciativas de memoria cuyos contenidos se centraron en la reivindicación de un proyecto político alternativo y en la identidad política de las víctimas. Estas iniciativas se construyeron en medio de la guerra y fueron borradas y silenciadas. La memoria se convirtió en la continuación de la política para una izquierda que buscaba en esta una forma de resistir a las embestidas de la guerra y el terror; en un contexto en el que la supresión de tales iniciativas ha sido parte central del exterminio del proyecto político alternativo (página 39).
Foco temático	Masacres

Caso	Remedios y Segovia
Tiempo	<p>Antecedentes De la década de 1960 en adelante imperó en las Fuerzas Armadas la Doctrina de Seguridad Nacional, con la cual la estrategia contrainsurgente dejó de diferenciar entre combatientes y población civil. Entre 1970 y 1982 crece la influencia del Partido Comunista en la organización social. Hay también algún trabajo organizativo del MOIR. La izquierda fue electoralmente marginal en estos años. El ELN se inserta y mantiene una presencia belicosa e intimidante (reagrupamiento después de la Operación Anorí de las Fuerzas Armadas). Las FARC llegan en 1979 al alto nordeste antioqueño con acciones de depredación económica, secuestros (como el del padre de los hermanos Castaño entre 1980-1981) y asesinatos.</p> <p>Foco 1982-1997 Reconstrucción de cuatro masacres (1982, 1988, 1996, 1997), en las que participaron miembros de la fuerza pública que vieron en la movilización y participación política de la izquierda la materialización de la amenaza comunista.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1982-1983: masacre como retaliación por el secuestro y la muerte del padre de los Castaño, puso fin del ciclo de veinte años de organización social liderada por dirigentes del Partido Comunista. Miembros de la fuerza pública participaron como planeadores y perpetradores. • 1984-1996: actividad paramilitar sostenida y ciclo más dinámico de la movilización social regional (hasta 1995). En las masacres de 1988 y 1996, miembros de la fuerza pública participaron como planeadores. La primera se inscribe en una coyuntura electoral en la que la Unión Patriótica obtuvo la mayoría de los Concejos municipales y las Alcaldías de Segovia y Remedios. • En 1997, con el emplazamiento de un grupo paramilitar (Grupo de Autodefensas del Nordeste - GAN) el papel de la fuerza pública en la violencia fue haciéndose progresivamente menos directo y visible. Acciones orientadas a castigar a la izquierda social y política, y clausurarle su expresión en el espacio público. Se dirigieron contra quienes habían sido parte de la movilización social y política por la izquierda: PC, MOIR, UP, A Luchar, militantes del Partido Liberal, el Comité de Derechos Humanos y las Juntas Cívicas. Una de cada tres víctimas era portadora de una identidad social y política de izquierda en la región. <p>Contexto La notoria y beligerante presencia de las FARC y el ELN alimentó la estigmatización de los movimientos políticos de izquierda. Al amparo de los diálogos de paz a mediados de los años 1980, las FARC realizan un trabajo político de convocatoria a la población. El ELN entre 1987 y 1988 crea el Frente María Cano, que operará junto con el Frente José Antonio Galán y las compañías Anorí y Cimarrones, y establece relaciones flexibles y convergentes con movimientos políticos como A Luchar, movimientos cívicos y regionales. A finales de la década de 1980 y primera mitad de siguiente se escala la violencia guerrillera con asesinatos selectivos, emboscadas, incursiones, ataques a objetivos militares, ataques contra el oleoducto y la infraestructura eléctrica, secuestros, actos de pillaje y extorsiones.</p>

Caso	Remedios y Segovia
Tiempo	Posterior 1998-2010 La violencia continúa; en 1999 incursiona el Bloque Metro de las AUC y aparecen los cultivos de coca; se registraron 15 masacres entre 1998 y 2012. El Bloque Central Bolívar impuso una nueva hegemonía paramilitar en la región y sus fuentes de financiación fueron la minería de oro, el comercio y el narcotráfico. Después de 2008, Los Urabeños, Las Águilas Negras, Los Paisas, Los Rastrojos se disputan el dominio territorial.
Espacio	Foco: Municipios de Remedios y Segovia y subregión del nordeste antioqueño. Contexto: Magdalena Medio, Córdoba y Urabá (dinámica de guerrillas y grupos paramilitares).
Actores victimizantes	Foco: Fuerzas Armadas (Batallón Bomboná), grupos paramilitares de Córdoba y Magdalena Medio, y variedad de actores civiles aliados coyunturalmente con miembros de la fuerza pública y/o grupos paramilitares extralocales. Otros: FARC (Frente IV), ELN.

Caso	Comuna 13
Referencia bibliográfica	CNRR - Grupo de Memoria Histórica (2011). <i>La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13</i> . Bogotá: CNRR / Ediciones Semana.
Objetivo	<ul style="list-style-type: none"> • Responder a la petición de las víctimas, en dos sentidos: para que “se sepa lo que pasó y lo que sigue pasando y para que aporte a la justicia, al no olvido, a la reparación y a la adopción de medidas para la no repetición” (página 12); y para que “se levanten los estigmas, se proteja con vigor a las comunidades amenazadas y se creen las condiciones de reinversión de la esperanza” (página 18). • Entender las dimensiones de lo ocurrido, focalizando especialmente cuatro cosas: a) la enorme carga de responsabilidad que le corresponde a los actores armados y el entrecruzamiento de ejércitos ilegales, crimen organizado y pandillismo; b) el impacto del desplazamiento intraurbano que en la Comuna 13 tiene su expresión más contundente e invisibilizada, y que, por ser en un contexto urbano, esa modalidad de violencia mantuvo un bajo perfil por ocurrir entre espacios muy delimitados como barrios o localidades; c) la complejidad de la condición de los jóvenes que tienen múltiples roles, simultáneos o sucesivos, y a menudo contradictorios, y así evitar los señalamientos dicotómicos con que se suele calificar a este sector poblacional; d) la continuidad de críticas situaciones de violencia y violaciones a los derechos humanos que siguen generando desplazamiento forzado y otras formas de victimización (páginas 16-42). • “Generar un espacio de reflexividad y reinterpretación colectiva sobre lo sucedido”, para que —ante el peso de la violencia y el miedo que continúan—, dejen de prevalecer en los relatos de memoria afirmaciones como “estamos viviendo lo mismo” (página 43).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

Caso	Remedios y Segovia
Foco temático	Desplazamiento forzado urbano e intraurbano
Tiempo	<p>Antecedentes 1985-2000: Dominio miliciano y desplazamiento gota a gota. La Comuna 13 no fue epicentro del narcotráfico ni tuvo presencia de la fuerza pública hasta que comenzó el siglo XXI, lo que favoreció el arraigo de las milicias. Estas lograron ejercer una hegemonía casi absoluta sobre la Comuna 13 hasta finales de la década 1990.</p> <p>Foco 2001-2010 - 2001-2003: “urbanización de la guerra”. Incursión de bloques de las AUC, desarrollo de operaciones militares (11 en total solo en el año 2002, entre ellas Mariscal y Orión) y confrontación entre grupos armados (milicias, guerrillas, paramilitares y Ejército). El desplazamiento masivo ocurrido en el barrio El Salado en junio de 2002 fue el desplazamiento forzado intraurbano más visible en este período en Medellín y el resto del país. Este período se cierra con la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara (BCN). - 2004-2010: continuidad del desplazamiento después de la desmovilización del BCN. Disminuyen las cifras hasta 2006, pero repuntan en 2007. Denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Repliegue de las milicias y guerrillas. A partir de 2008 (con la extradición de <i>Don Berna</i>) se reconfigura la conflictividad y aumentan los desplazamientos en Medellín por disputa entre los nuevos competidores por el dominio del territorio y del negocio del narcotráfico (facciones de Oficina de Envigado, Rastrojos y Urabeños). Durante el 2009 y los cuatro primeros meses de 2010, el desplazamiento forzado intraurbano en Medellín fue el más crítico del país.</p>
Espacio	<p>Foco: Comuna 13 de la ciudad de Medellín. Contexto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, oriente antioqueño y Urabá (dinámica de grupos paramilitares y guerrillas).</p>
Actores victimizantes	<p>Foco: AUC (Bloque Metro y Bloque Cacique Nutibara); fuerza pública. Otros: Milicias - Comandos Armados del Pueblo, Milicias Bolivarianas de las FARC, ELN.</p>

Caso	San Carlos
Referencia bibliográfica	CNRR - Grupo de Memoria Histórica (2011). <i>San Carlos: memorias del éxodo en la guerra</i> . Bogotá: CNRR / Ediciones Semana.
Objetivo	La magnitud del desplazamiento forzado hace de San Carlos “uno de los casos más dramáticos de violencias superpuestas en nuestra era contemporánea”, e ilustra la especificidad y gravedad del delito del desplazamiento forzado y su relación con las lógicas e impactos más generales del conflicto armado en Colombia (página 41).

Caso	San Carlos
Objetivo	<p>Busca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentar de manera sistemática el desplazamiento forzado como proceso y en la heterogeneidad de los daños que causó, para dar cuenta de la capacidad devastadora de nuestra guerra actual y diseñar medidas efectivas de reparación integral, así como poner de relieve lo que dejamos de ver, comprender y atender en nuestras viejas guerras, cuando no se contaba con marcos normativos ni culturales para medir la gravedad de lo que significaba (páginas 17-18). • Develar —desde la memoria de los sancarlitanos— los hilos explicativos y las relaciones paradójicas y complejas de la realidad local durante las últimas décadas y construir una narrativa que permita avanzar en el esclarecimiento de la verdad y la justicia para no repetir una historia ya vivida (página 103). • Contarle al país —también desde las vivencias y memorias sancarlitanas— “las posibilidades, el alcance, el sentido y las formas de resistencia civil en entornos sociales marcados por el desplazamiento forzado, la confrontación armada y la disputa por los territorios” (páginas 287-288). • Poner de presente las responsabilidades que por obligación debe asumir el Estado en su deber de reparar y evidenciar los retos de reconstruir una sociedad devastada por la guerra (página 32). • Lograr con este relato que el país tenga la capacidad para escuchar y comprender que lo sucedido —por momentos ciertamente inimaginable— en este hermoso y cálido pueblo hace parte también de lo que somos como país y como sociedad. Y, por tanto, que avanzar en la perspectiva de verdad, justicia y reparación para San Carlos compete a muchos más y no sólo a su población (página 36).
Foco temático	Desplazamiento forzado
Tiempo	<p>Antecedentes 1965-1997</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construcción de 3 centrales hidroeléctricas y desplazamiento negociado de más de dos mil personas. • Violencia política y exterminio de la dirigencia del movimiento cívico local. Desplazamiento individual y familiar. • Inserción y consolidación de hegemonía guerrillera (ELN y FARC). Se da un desplazamiento preventivo y silencioso de líderes políticos y sociales. <p>Foco 1998-2005</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1998-2002: irrupción de las AUC. Confrontación entre paramilitares y guerrillas y luego entre bloques paramilitares y grupos guerrilleros entre sí. Incremento de acciones contra la población civil e intenso desplazamiento forzado (“éxodo total”). Más del setenta por ciento de la población se vio obligada a huir, 30 de 76 veredas quedaron deshabitadas y 20 más fueron abandonadas parcialmente. • 2003-2005: con la desmovilización de los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara en 2003 y su sustitución por el Bloque Héroes de Granada y la entrada en vigencia de la política de seguridad democrática, hay una relativa disminución de la violencia y, por ende, del desplazamiento. A partir de este momento se llevan a cabo procesos de retorno y surgen iniciativas comunitarias (resistencias).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

Caso	San Carlos
	<p>Total de masacres en el período 1998-2005: 23 masacres por paramilitares y 6 masacres por guerrillas.</p> <p>Posterior: 2006-2010 Progresiva disminución del desplazamiento forzado. Se dan procesos de retorno. Las FARC se repliegan.</p>
Espacio	<p>Foco: Municipio de San Carlos y subregión de Embalses en el oriente antioqueño.</p> <p>Contexto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá (trayectorias del desplazamiento); nordeste antioqueño y Magdalena Medio (dinámica de grupos paramilitares).</p>
Actores victimizantes	<p>Foco: AUC (Bloque Metro, Bloque Cacique Nutibara, Bloque Héroes de Granada); FARC (Frente IX) Otros: ELN (Frente Carlos Alirio Buitrago), fuerza pública (Batallón Barbacoas).</p>

Caso	El Placer
Referencia bibliográfica	Centro Nacional de Memoria Histórica (2012). <i>El Placer. Mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo</i> . Bogotá: CNMH.
Objetivo	Reconstruir la historia del conflicto armado que durante más de dos décadas ha marcado las vidas de hombres y mujeres que quisieron narrar su historia y hacer memoria de lo ocurrido para romper el estigma de pueblo “cocalero”, “guerrillero” y, luego, “paramilitar” que la guerra les ha heredado (página 23).
Foco temático	<ul style="list-style-type: none"> • Estigmatización • Violencia con enfoque de género
Tiempo	<p>Antecedentes 1960-1990 Inicio de la explotación petrolera; entrada de los carteles de la droga a fines de la década de 1970. En los años de 1980 entrada de guerrillas (M-19, EPL y luego FARC) y primeros paramilitares (Masetos y combos). Entre 1985 y 1994 se consolida la economía cocalera en el valle del Guamuez y San Miguel (bajo Putumayo).</p> <p>Foco 1990-2006 Período de hegemonía FARC (expulsión Masetos y combos), irrupción AUC —su base es El Placer— e intensificación de violencia por disputa entre las AUC y las FARC, inicio del Plan Colombia y fumigaciones; desmovilización Bloque Sur de las AUC.</p> <p>Posterior 2007- 2011: crecimiento de los cultivos de coca y militarización del territorio. En 2011, Putumayo, junto con Guaviare y Nariño, concentran el 54 por ciento de los cultivos de coca del país. Las FARC y Los Rastrojos mantienen presencia en el territorio.</p>

Caso	El Placer
Espacio	Foco: Inspección El Placer en el municipio del valle del Guamuez y subregión del bajo Putumayo. Contexto: Putumayo, Amazonía, frontera Ecuador (conflicto armado, narcotráfico, desplazamiento forzado y resistencia de mujeres); Nariño (poblamiento).
Actores victimizantes	Foco: AUC (Bloque Sur Putumayo); FARC (Frente 48); Fuerzas Armadas. Otros: narcotraficantes.

Caso	Buenaventura
Referencia bibliográfica	Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). <i>Buenaventura: un puerto sin comunidad</i> . Bogotá: CNMH.
Objetivo	Responder a la demanda de las organizaciones étnicas, eclesiásticas y sociales de Buenaventura quienes a través de la plataforma Minga por la Memoria le solicitan al CNMH emprender un proceso de reconstrucción de memoria que posibilite ampliar la comprensión y la explicación de las razones que han conducido a la continuidad y degradación actual de la disputa armada en la ciudad puerto, así como comprender desde la voz de sus víctimas el significado atribuido al contexto y el impacto generado en sus vidas (página 16). Abordar analíticamente en un ámbito urbano, conformado principalmente por afrodescendientes, la forma como esta población ha sido afectada (página 17).
Foco temático	La continuidad, degradación y el escalamiento de la disputa armada
Tiempo	Antecedentes Históricos: el puerto e impactos de su privatización. Población afrocolombiana y movimiento étnico. Conflicto 1980 - 1998: entrada y dominio de las FARC. Foco 2000 - 2013 <ul style="list-style-type: none"> • 2000 - 2004: entra el Bloque Calima —a través del Frente Pacífico— apoyado por grandes y medianos empresarios. La disputa con las FARC escala la violencia. Bajo el terror de las masacres y la desaparición forzada el Frente Pacífico se posiciona en casi todas las comunas de Buenaventura. En 2004 se desmoviliza el Bloque Calima, sin un desarme efectivo e incluyendo narcotraficantes como <i>Gordolindo</i>. • 2005 - 2013: reacomodos, rearmes y aumento del número de grupos armados ilegales. Se radicalizan y degradan las modalidades de victimización. Se da “una guerra sin rostros y sin cuerpos” (por las identidades ambiguas de los victimarios y las modalidades de victimización respectivamente).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

Caso	Buenaventura
Espacio	Foco: Municipio de Buenaventura, ciudad-puerto. Contexto: Valle del Cauca y región Pacífica.
Actores victimizantes	Foco: AUC (Bloque Calima y Frente Pacífico), grupos armados ilegales posdesmovilización. FARC (Frente 30 y Frente Manuel Cepeda Vargas). Otros: Actores económicos nacionales e internacionales, élites locales y regionales, Estado, parapolíticos, narcotraficantes.

Caso	Tibú
Referencia bibliográfica	Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). <i>Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo</i> . Bogotá: CNMH.
Objetivo	<ul style="list-style-type: none"> • Responder al compromiso asumido por el Gobierno nacional con la Corte Constitucional en 2011 en el marco del proyecto Construcción de Memoria Histórica sobre el Desplazamiento Forzado en Colombia, dentro de la estrategia Diseño de medidas para la construcción de la memoria histórica, del subcomponente del derecho a la verdad de la política de Verdad, Justicia y Reparación (Auto 008 de 2009). Esta política responde a la persistencia de un ECI (estado de cosas inconstitucional) en la situación de la población desplazada por la violencia, declarado por la Corte en la Sentencia T-025 de 2004, y define 5 dimensiones de análisis y cinco regiones donde realizarlo: fronteras (Sarare – Arauca y Tame, Arauca), pueblos arrasados (Ariare-Guayabero - El Castillo, Meta), desplazamiento intraurbano (andén pacífico sur - Buenaventura, Valle del Cauca), retornos (Urabá - Turbo, Antioquia) y masacres (Catatumbo - Tibú, Norte de Santander) (páginas 17-18). • Avanzar en la superación del ECI, aportando —mediante la memoria de las víctimas— al esclarecimiento de los impactos del desplazamiento en las víctimas y en los territorios; las causas, motivaciones y repertorios empleados por los responsables y los contextos estructurales y coyunturales que propiciaron el éxodo forzado; las dinámicas y los trayectos recorridos en las migraciones; el proceso de restablecimiento de los derechos de las víctimas, y las respuestas desde el Estado, la comunidad internacional, las víctimas y la sociedad civil (páginas 17-18). • Reconocer la responsabilidad del Estado en las reivindicaciones de verdad, paz, justicia y reparación y en demandas para sanar las huellas del horror, reconstruir el tejido social, fortalecer la institucionalidad estatal, revisar el modelo de desarrollo económico y recuperar el territorio y la cultura; reconocer la ciudadanía plena a los “raspachines” y dar a conocer en todo el país el horror vivido en el Catatumbo (página 25).
Foco temático	Desplazamiento forzado y masacres

Caso	Tibú
Tiempo	<p>Antecedentes</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1930-1970: explotación petrolera y conflictos con comunidades indígenas por parte de empresas y Estado. • Años 1960 se inserta el ELN y adelanta acciones contra infraestructura petrolera y afecta a la población civil. • 1980-1998: incursión y presencia de otros grupos guerrilleros (EPL y FARC) y de narcotraficantes. Se inician los cultivos de coca, cuya economía fue —desde sus inicios— fundamental para las FARC. Incursionan esporádicamente grupos de justicia privada que arremeten contra líderes y dirigentes sociales y políticos. Con la expansión de la coca se instalaron y fortalecieron los carteles de la droga (como el Cartel de Cali) y aumentó la presencia de grupos de autodefensas (un grupo conocido como Los Pepes, Los Masetos y la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam). Desde finales de la década de 1980 hasta 1997 escaló la violencia. <p>Foco 1999-2013</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1999-2004: Incursión de las AUC (Bloque Catatumbo); disputas por el negocio del narcotráfico entre guerrillas y paramilitares, se cometen 30 masacres (página 20) que generan el éxodo de la población. Política antidroga financiada con Plan Colombia (fumigación de cultivos de coca). • 2005-2013: A pesar de los procesos de desmovilización y la militarización de la zona, acompañada con la erradicación forzada de cultivos de coca, las guerrillas, bandas criminales y las mafias nacionales e internacionales continúan actuando y disputándose el control del territorio y sus economías lícitas e ilícitas. Aunque las masacres y los éxodos disminuyeron, se recrudecieron el reclutamiento de menores de edad, la siembra de minas antipersonales, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. El Gobierno nacional con recursos del Plan Colombia ha favorecido la implantación de un modelo de producción agroindustrial (cultivo de palma), la explotación petrolera, minera y maderera que ha ido en detrimento de la economía campesina.
Espacio	<p>Foco: Municipio de Tibú y subregión del Catatumbo.</p> <p>Contexto: Norte de Santander, Arauca, Caribe y Venezuela (dinámica de grupos armados, narcotráfico y trayectorias de desplazamiento forzado).</p>
Actores victimizantes	<p>Foco: AUC (Bloque Catatumbo); FARC (Frente 33, Columna Móvil Arturo Ruiz, Compañías Resistencia Barí y Móvil 29 de Mayo); ELN; bandas neoparamilitares, fuerza pública.</p> <p>Otros: narcotraficantes, mafias nacionales e internacionales, parapolíticos.</p>

Caso	El Castillo
Referencia bibliográfica	Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). <i>Pueblos arrasados. Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)</i> . Bogotá: CNMH / UARIV.
Objetivo	<ul style="list-style-type: none"> • El CNMH se propone un nuevo abordaje del desplazamiento forzado donde se reconozca que este puede, incluso, ser más generalizado que el desplazamiento masivo actualmente reconocido por la normativa. De esta forma, cuando la mayoría de las personas de una vereda, corregimiento, resguardo indígena, tierra de la comunidad negra, zona de reserva campesina, casco urbano, barrio, entre otros, hayan sido forzadas a migrar, el Estado debe aceptar la ocurrencia de un fenómeno diferente: el vaciamiento, y generar a favor de las personas y comunidades que lo padecieron una atención diferencial y especializada para evitar que ocurra el arrasamiento o para repararlo si ya ocurrió (página 29). Para tal efecto propone una nueva categoría: “arrasamiento por vaciamiento” (página 22). • Reconstruir el proceso de arrasamiento ocurrido en El Castillo. (página 22).
Foco temático	Desplazamiento forzado
Tiempo	<p>Antecedentes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Históricos: siglo XVI, fines siglo XIX y primera mitad del XX. • Conflicto 1948-1984: Olas colonizadoras, divisiones político-territoriales; 1976 primeros asesinatos y 1978 primeras masacres bajo el Estatuto de Seguridad. A finales de la década de 1970 las FARC consolidaron su presencia en el territorio convertido en nodo asociado a La Uribe; El Castillo se convirtió en zona de retaguardia para las FARC; crean el Frente 26 como parte de la estrategia de protección de la sede de su Secretariado ubicado en La Uribe. <p>Foco 1984-2005</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1984-2001: como reacción a la apertura democrática, la formación y fortalecimiento electoral de la UP y la elección popular de alcaldes, se produjo una violencia política orientada al arrasamiento izquierda y al cierre democrático; las masacres se comenzaron a suceder a partir de 1986 y a partir de 1988 el desplazamiento forzado se disparó. Lo agencian grupos paramilitares locales (de Carranza, de Gacha y de terratenientes). Las FARC endurecen sus acciones y contribuyen a la estigmatización de la izquierda democrática y al cierre democrático. • 2002-2005: terminada la Zona de Distensión, las Fuerzas Armadas y las AUC (Bloque Centauros) arremeten contra las FARC y contra la población, que vive la etapa del “desplazamiento duro” y el vaciamiento del territorio (19 de 43 veredas y 4 centros poblados de El Castillo). El pico de desplazamiento rural entre 2002 y 2004 y urbano entre 2004 y 2005. Las AUC crean además el Frente Alto Ariari y adelantan operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares locales. <p>Posterior 2006- 2013</p> <p>Continuidad de las violencias, con los enfrentamientos entre las FARC y las Fuerzas Armadas, y la acción de las bandas criminales.</p>

Caso	El Castillo
Espacio	<p>Foco: Municipio de El Castillo y subregión del Alto Ariari (especialmente: municipios El Dorado, Lejanías, San Luis de Cubarral, San Martín, Acacías y Granada)</p> <p>Contexto: Meta, Caquetá y zonas de Cundinamarca, Tolima y Boyacá (conflicto armado), Villavicencio, Bogotá, Soacha (desplazamiento forzado).</p>
Actores victimizantes	<p>Foco: grupos paramilitares primera generación; AUC (Bloque Centauros y Frente Ariari); Fuerzas Armadas.</p> <p>Otros: FARC, empresarios irregulares de la explotación de esmeraldas de Boyacá, narcotraficantes.</p>

Caso	Arauca
Referencia bibliográfica	Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). <i>Crímenes que no prescriben: la violencia sexual del Bloque Vencedores de Arauca</i> . Bogotá: CNMH.
Objetivo	<ul style="list-style-type: none"> • Responder al requerimiento de la sentencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 1 de diciembre de 2011 en contra de los antiguos integrantes del BVA (Bloque Vencedores de Arauca) de las Autodefensas Unidas de Colombia, que le ordenó al CNMH llevar a cabo “la documentación de los crímenes sexuales como crímenes de guerra y de lesa humanidad (...)” (Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 2011, diciembre 1, página 408). [Sentencia por dos casos. Es la primera sentencia del sistema de justicia transicional de Justicia y Paz, de las cuatro que se habían proferido hasta entonces, en la que hubo una condena por un crimen de género] (página 13). • Doble propósito de este trabajo: a) ser —en su proceso mismo— una medida de reparación simbólica y b) como ejercicio investigativo, buscar la comprensión de episodios de violencia sexual como crímenes internacionales desde el diálogo entre las categorías jurídicas y la perspectiva de memoria histórica (página 14). • Hilar este caso dentro de un entramado más amplio de utilización de la violencia sexual y de género en contra de mujeres por parte de los grupos armados (legales e ilegales) que tienen presencia en Arauca, con el propósito de empezar a entender las diferentes maneras en que cada uno de los grupos ha utilizado esta violencia (página 14). • Desde el lado del proceso investigativo se abarcaron más casos, además de los que aparecen en la sentencia, para poder comprender estos casos “dentro del contexto en el que se insertan, desde las dinámicas culturales que definen los arreglos de género en la región hasta la manera como los demás actores del conflicto utilizaron la violencia de género y la violencia sexual” (páginas 16-17).
Foco temático	Violencia sexual por actores armados

Caso	Arauca
Tiempo	<p>Antecedentes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Históricos: desde la colonia hasta la primera mitad del siglo XX: poblamiento a través de exclusión, etnocidio y violencia y consolidación de la ganadería llanera en sabanas comunales y cultura llanera. • Colonización del Sarare de la década de 1960 (proyecto Gobierno nacional y el Banco Mundial); los colonos canalizaron en los años 1970 sus reivindicaciones a través de paros cívicos y ANUC. Inserción guerrillera del ELN con la fundación del Frente Domingo Laín. <p>Foco</p> <p>2001-2005: las AUC irrumpen en Arauca a través del Bloque Vencedores de Arauca en 2001, conformado a petición de Castaño por <i>Los Mellizos</i>, conocidos narcotraficantes de la región. Los cultivos de coca fueron determinantes en la disputa territorial entre FARC y BVA. Las AUC y las Fuerzas Armadas arremeten contra las FARC y logran transitoriamente su repliegue. Arauca se convierte en el primer escenario documentado y juzgado de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. El BVA se desmoviliza en 2005.</p> <p>Contexto 1980-2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antes del BVA, 1980-2000. En los años 1980 se implanta la industria petrolera (yacimientos y oleoducto Caño Limón-Coveñas); se fortalece el ELN y se insertan las FARC (Frente 10). Las guerrillas se fortalecen al canalizar reivindicaciones campesinas, al proveer seguridad a los hacendados y jugar en la política local —el ELN con sectores del Partido Liberal y las FARC con la UP—. Al final de la década de 1990, las FARC participan en la regulación y control del negocio del narcotráfico. En esa década surgieron y naufragaron varios grupos paramilitares y bandas de sicarios, que nunca pudieron afincarse, pero sí adelantaron masacres puntuales y otras vejaciones. La presencia del Estado fue predominantemente militar para proteger la industria petrolera. Se presentan enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y las guerrillas. • Después del BVA, 2006-2014. Confrontación y pacto entre guerrillas y violencia ejercida por bandas criminales como Águilas Negras, Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC) y grupos con miembros del BVA que no se desmovilizaron, todos con el propósito de controlar las rutas de narcotráfico hacia Venezuela y Brasil, además de los campos petroleros. Al final del período, hay un decaimiento y desaparición de la coca y salida de las bandas criminales de Arauca.
Espacio	<p>Foco: Departamento de Arauca.</p> <p>Contexto: Meta, Casanare (dinámica de las AUC); frontera con Venezuela (Apure) (dinámica guerrillera, tráfico de armas y narcotráfico).</p>
Actores victimizantes	<p>Foco: AUC (Bloque Vencedores de Arauca con 3 compañías: Cravo Norte; Furia y Gavilán (Tame) y Ballesta (Puerto Rondón)).</p> <p>Otros: AUC (Bloque Centauros); FARC (Frente 10); ELN (Frente Domingo Laín); Fuerzas Armadas.</p>

Caso	Granada
Referencia bibliográfica	Centro Nacional de Memoria Histórica (2016). <i>Granada: memorias de guerra, resistencia y reconstrucción</i> . Bogotá: CNMH / Colciencias / Corporación Región.
Objetivo	<ul style="list-style-type: none"> • Dar respuesta a lo que la población granadina considera necesario: a) Reconocer y comprender el conflicto armado en su municipio, y para ello, saber qué pasó, por qué pasó lo que pasó, quiénes fueron los responsables y qué hicieron, además de los daños diferenciales que causaron. Todo ello para que lo sucedido no se repita; b) Visibilizar este escenario local en el que procesos de reparación integral ofrecen enormes aprendizajes sobre el sentido y los retos de la paz desde los territorios (página 334). Visibilizar en especial “la fuerza y la fe profunda de la sociedad granadina en las bondades del trabajo colectivo, en la solidaridad y en el valor de la vida, además de su persistencia en la búsqueda de la paz desde el territorio” (página 30).
Foco temático	<ul style="list-style-type: none"> • Conflicto armado y desplazamiento forzado • Resistencias
Tiempo	<p>Antecedentes 1980-1996</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participación en los movimientos cívicos por tarifas eléctricas en la región. • Hegemonía guerrillera, ELN y FARC. <p>Foco 1996 – 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1997-2005: prima la confrontación entre grupos guerrilleros, Ejército y paramilitares por el control del territorio. En 1997 incursionan varios bloques paramilitares; los grupos guerrilleros declararon el proceso electoral como objetivo militar en Granada y municipios aledaños, el ELN secuestra funcionarios de la OEA. El conflicto se escala por la disputa entre actores armados. Las Fuerzas Armadas inician operativos militares en 1999; al tiempo, FARC y ELN se confrontan entre sí. Los secuestros masivos, la toma de la autopista Medellín-Bogotá y el sabotaje a la infraestructura eléctrica son cotidianos. En el año 2000 se dan la masacre paramilitar y la retaliación de las FARC con toma y destrucción de pueblo. La reconstrucción comienza ese mismo año. • En 2002 empiezan ejecuciones extrajudiciales (19 ejecuciones, con un marcado acento territorial). Las Fuerzas Armadas adelantan 10 operaciones militares entre 2000 y 2005. En 2003, se desmoviliza el Bloque Cacique Nutibara y se siente el desescalamiento del conflicto y el control del territorio por parte del Ejército. Las guerrillas se repliegan a partir de 2004. • 2006 en adelante: “fin del conflicto”. Entre 2012 y 2015 retornaron aproximadamente 7.484 personas (2.138 familias).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

Caso	Granada
Espacio	<p>Foco: Municipio de Granada y subregiones de Embalses y Bosques en el oriente antioqueño.</p> <p>Contexto: Oriente antioqueño, área metropolitana del Valle de Aburrá, Magdalena Medio y nordeste antioqueño (dinámica de guerrillas y grupos paramilitares).</p>
Actores victimizantes	<p>Foco: AUC (Bloque Metro, Bloque Cacique Nutibara, Bloque Héroes de Granada); FARC (Frentes 9 y 47); ELN (Frente Carlos Alirio Buitrago); Fuerzas Armadas.</p>

Fuente: elaboración propia con base en informes publicados por el Grupo de Memoria Histórica (GMH) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

ANEXO 2

ENTRE LO LOCAL Y LO NACIONAL: LO QUE PESA EN
EL DESENCADENAMIENTO DE LOS HECHOS EMBLEMÁTICOS
DE VIOLENCIA

Caso	Hechos violentos emblemáticos (HVE)	“Violencia estructural” ¹⁷ e histórica ²	Conflictos en la localidad antecedentes que NO condicionan los HVE	Conflictos en la localidad que SÍ condicionan		Coyuntura nacional como condicionante	Coyuntura nacional como contexto de oportunidad
				Históricos	Coyuntura		
El Placer	Masacre AUC, FF. AA. 1999		- Entre narcos (Gacha y Cartel de Cali) - Narcos (Gacha) contra FARC			1999 Expansión AUC al sur del país para tomarse zona de retaguardia de FARC y negocio narcotráfico	
El Saldado	Masacre AUC, FF. AA. 2000		Movimiento Campesino ANUC	Década 1990 Llegada de las FARC (copando territorios EPL y formando retaguardia Caribe) de manera militar y extorsiva		1999 Arremetida de AUC en la retaguardia Caribe FARC y tomarse territorio clave para acceso-exportación droga	
			Presencia política EPL y PRT que se desmovilizan en 1990		Élites locales-regionales forman grupos paramilitares locales		

17 Estado precario, profunda inequidad social, exclusión política y la discriminación social desarrollo de mega-proyectos que no mejoran condiciones de comunidades negras e indígenas.

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

Caso	Hechos violentos emblemáticos (HVE)	“Violencia estructural” e histórica ²	Conflictos en la localidad antecedentes que NO condicionan los HVE	Conflictos en la localidad que SÍ condicionan		Coyuntura nacional como condicionante	Coyuntura nacional como contexto de oportunidad
				Históricos	Coyuntura		
El Cas-tillo 1	Arrasamiento de la izquierda democrática Grupos paramilitares y FF. AA. y FARC 1984-2001		Conflictos violentos por poder local-electoral entre partidos: Comunista, Liberal y Conservador	Conflictos por poder político anteriores a los que se suma la competencia UP	1984 - 1988 Acuerdo de La Uribe, formación de la UP y elección popular de alcaldes	1990 Toma de Casa Verde por las FF. AA. y endurecimiento FARC	
				Élites locales- regionales, mafia narco y esmeraldera forman grupos paramilitares locales			
				FARC vive endurecimiento militar, boicot electoral y condicionamiento de votos			
El Cas-tillo 2	Vaciamiento territorio AUC-FF. AA. 2002-2005			Solicitud élites regionales de creación Bloque AUC	Fin Zona de Distensión (Caguán) e intensificación acción AUC y formación nuevos frentes		
Trujillo	Masacre Narcotraficantes; FF. AA. 1986-1994		Viejas rencillas político-partidistas por el poder local	Intervención político-institucional, secuestro candidato a alcalde	1990 Ofensiva nacional FF. AA. contra ELN (en ese entonces, “la más activa en el ámbito militar y social”)		Lógica antiinsurgente de las FF. AA. marcada por la Doctrina de Seguridad Nacional

Caso	Hechos violentos emblemáticos (HVE)	“Violencia estructural” e histórica ²	Conflictos en la localidad antecedentes que NO condicionan los HVE	Conflictos en la localidad que SÍ condicionan		Coyuntura nacional como condicionante	Coyuntura nacional como oportunidad
				Históricos	Coyuntura		
				Presencia política ELN	<p>Finales década 1980, cambio del ELN de político a extorsivo (contra narcos).</p> <p>1990 Cambio del ELN a la acción militar (contra las FF. AA.).</p>		
					Gestación Cartel Norte del Valle y sus ejércitos privados		
					Proyectos expansivos opuestos (narcos/ELN) hacia el Cañón de Las Garrapatas (Chocó).		
				Movimiento campesino comunitarias)	Vinculación movimiento campesino local (empresas comunitarias impulsadas por padre Tiberio, con paros ANUC + infiltración guerrilla).		

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

Caso	Hechos violentos emblemáticos (HVE)	“Violencia estructural” e histórica ²	Conflictos en la localidad antecedentes que NO condicionan los HVE	Conflictos en la localidad que SÍ condicionan		Coyuntura nacional como condicionante	Coyuntura nacional como contexto de oportunidad
				Históricos	Coyuntura		
Remedios/ Segovia	Masacres FF. AA. Arrasamiento de izquierda democrática 1983-1997		20 años previos de organización social (sindicato agrario, organización de mineros informales y Juntas de Acción Comunal) liderada por el Partido Comunista en territorio electoralmente dominado por el Partido Liberal.	Radicalización militar guerrillera y despliegue de “todas las formas de lucha” FARC y ELN (superpusieron iniciativas político-militares con movilización popular y participación electoral izquierda).	Desde principios 1970, autonomización FF. AA. regionales (poder local contra ELN), impulsa acciones paramilitares en contra de la izquierda.	Lógica anti-insurgente de las FF. AA. marcada por la Doctrina de Seguridad Nacional.	
				Movilización social local y regional fuerte.	Competencia al Partido Liberal por nacimiento y crecimiento rápido de la UP.		

Caso	Hechos violentos emblemáticos (HVE)	“Violencia estructural” e histórica ²	Conflictos en la localidad antecedentes que NO condicionan los HVE	Conflictos en la localidad que SÍ condicionan		Coyuntura nacional como contexto de oportunidad
				Históricos	Coyuntura	
Granada	Destrucción cabecera por FARC 2000 12 masacres paramilitares y guerrillas 1997 – 2003/5			ELN y FARC campamentos (corregimiento de Santa Ana), endurecido presencia militar desde 1988, atentados a infraestructuras nacionales: eléctrica y vial.	1997/99 coyuntura nacional: Disputa guerrillas/ AUC (1997 entrada Bloque Metro y otros dos). Territorio en dinámicas conflicto armado regional y nacional (infraestructura nacional y cercanía con área metropolitana de Medellín).	
San Carlos	“Guerra total” y “Exodo total” 1998 – 2010 ELN, FARC, BM, BCN			Década 1980 Guerrillas pretenden apropiarse de denuncias y reivindicaciones que organizaciones sociales adelantan en movilizaciones cívicas. Conflictos con hidroeléctricas y represión violenta movimiento cívico que entroncan paso de personas civiles a grupos armados.	1997/99: Disputa guerrillas/ AUC (1998 irrupción Bloque Metro, luego Cacique Nutibara y Héroes de Granada). Territorio en dinámicas conflicto armado regional y nacional (infraestructura nacional y cercanía con área metropolitana de Medellín).	

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

Caso	Hechos violentos emblemáticos (HVE)	“Violencia estructural” e histórica ⁴	Conflictos en la localidad que NO condicionan los HVE	Conflictos en la localidad que SÍ condicionan		Coyuntura nacional como condicionante	Coyuntura nacional como contexto de oportunidad
				Históricos	Coyuntura		
Bojayá	Masacre “Guerra sin límite”. FARC, AUC 2002 Consecuencias desde lo local a lo nacional-internacional: FARC: “terroristas”.	Condición estructural e histórica del territorio que facilita la irrupción de la guerra en “frontera de guerra”. Precariedad y abandono institucional, profunda inequidad social, exclusión política y discriminación. Mega-proyectos que no mejoran condiciones comunidades negras e indígenas.	1960 en adelante Conflictos pobladores y compañías madereras. Reclamos por derechos colectivos (indígenas en los años 1970 y afros 1995/96) FARC, madereros y narcos no colisionan: “todos operaban sobre la base de que unos y otros podrían explotar las ventajas comparativas y competitivas que ofrecía el territorio”.			Atrato como frontera de guerra. Guerra por Atrato, inscrita en la guerra macro- regional del noroccidente de Colombia.	

Caso	Hechos violentos emblemáticos (HVE)	“Violencia estructural” e histórica*	Conflictos en la localidad que NO condicionan los HVE	Conflictos en la localidad que SÍ condicionan		Coyuntura nacional como condicionante	Coyuntura nacional como oportunidad
				Históricos	Coyuntura		
Buena-ventura	Tierra arrasada AUC, GAI 2000-2013	Estado que no provee ni regula lo público posibilita el progreso de economía ilegal y de fractura urbana y sus violencias.			<p>Guerrilla hace secuestros y extorsiones.</p> <p>Solicitud élites empresariales y narcotraficantes locales y regionales de crear un bloque AUC.</p>	Arremetida AUC en territorios FARC	
Bahía Portete	Masacre AUC Violencia étnica y sexual 2004	Condición histórica y estructural de exclusión del territorio que posibilita una condición de ilegalidad y conandato de sociedad local y su territorio.			<p>Conflictos entre familias instrumentalizadas por los paramilitares para penetrar en el territorio.</p>	Coyuntura expansión AUC como para-narcos.	

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

Caso	Hechos violentos emblemáticos (HVE)	“Violencia estructural” e histórica ²	Conflictos en la localidad antecedentes que NO condicionan los HVE	Conflictos en la localidad que SÍ condicionan		Coyuntura nacional como condicionante	Coyuntura nacional como contexto de oportunidad
				Históricos	Coyuntura		
Arauca	Violencia sexual AUC (BVA) 2001-2005					Coyuntura expansión AUC por medio de bloques franquicias (“Los Mellizos” crean el BVA. Dos versiones: a) Fiscalía: anti-insurgente; b) información: narcotráfico y coca)	
Comuna 13	Desplazamiento forzado intraurbano Milicias, guerrillas, AUC, FF. AA. 2000-2010			Zona como plataforma de control de otros territorios urbanos, como fuente de abastecimiento de recursos y como corredor estratégico hacia otros cinturones macro-regionales. Dominios milicias-guerrillas.	Década 1980 Frente a hegemonía milicias-guerrillas por 10 años. 1997-2003 Entrada de AUC a Medellín (Bloque Metro y consolidación Bloque Cacique Nutibara — franquicia a <i>Don Berna</i> —). Aprestamiento militar de las partes para la disputa por el territorio: “urbanización de la guerra”.	Intervención FF. AA. del Estado en Medellín (en alianza con AUC): en comunas de dominio miliciano/guerrillero. AUC toman el control de territorios estratégicos para el tráfico de droga y negocios ilegales varios en modo urbano.	

Caso	Hechos violentos emblemáticos (HVE)	“Violencia estructural” e histórica ²	Conflictos en la localidad antecedentes que NO condicionan los HVE	Conflictos en la localidad que SÍ condicionan		Coyuntura nacional como condicionante	Coyuntura nacional como contexto de oportunidad
				Históricos	Coyuntura		
Tibú	“Éxodo ren- tista” FARC, AUC, FF. AA. 1999-2013			<p>Siglo XVII Resistencia Barrí por defensa territorio contra campañas de pacificación.</p> <p>Siglo XX (1930- 1970) Estado y defensa petroleras.</p> <p>Década 1980 “guerra sucia” contra expresiones políticas y socia- les de la apertura democrática.</p> <p>Coca y narcotráfico FARC y narcotraficantes (con grupos de autodefensa).</p>	<p>Incremento acciones milita- res ELN contra infraestruc- tura petrolera. FARC y ELN Incrementan secuestros a políticos, intimidación candidatos elecciones.</p> <p>Incremento acciones FF. AA. contra las guerrillas, criminalización población civil, judicializaciones arbi- trarias líderes, ejecuciones extrajudiciales.</p> <p>Acciones de grupo parami- litar financiado por terrate- nientes de la región.</p>	<p>1999 Arremetida AUC - (Bloque Catatum- bo) en retaguardia militar y económica FARC, inserción economía legal monocultivo palma de aceite y configurar corredor estratégico Urabá-Catatumbo.</p>	

Fuente: elaboración propia con base en informes publicados por el Grupo de Memoria Histórica (GMH) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

ANEXO 3 RECONFIGURACIONES TERRITORIALES

Sociedad local/regional antes del conflicto armado	Factores claves que desencadenan las reconfiguraciones	Sociedad local/regional reconfigurada
EL SALADO		
<p>Sociedad campesina marginal</p> <ul style="list-style-type: none"> • El cultivo del tabaco fue central hasta 1997, cuando las compañías tabacaleras dejaron la región. • Sin experiencias previas de violencia —Caribe—, atravesada por la hacienda y subordinada a los poderes locales y regionales como regla para la subsistencia y como puente entre la comunidad y la acción estatal (páginas 105 y 227). • Coexistencia entre propietarios y no propietarios históricamente exenta de conflictos por la posesión y la explotación de la tierra en el corregimiento El Salado (página 175). Hacendado podía ser comprador, vendedor y/o prestamista del campesino, o su principal fuente de trabajo, y de ese modo, como amo y señor de un corregimiento o municipio, manejaba los hilos de la actividad estatal a su antojo, combinando el poder político, económico y social en la región (página 106). • Campesinado situado en un entorno marcado por las luchas campesinas por la tierra (ANUC, línea Sincelajo) años 1970, pero que en Montes de María luchó por sus derechos en el proceso de explotación tabacalera y la inequidad en los ingresos frente a compañías e intermediarios (página 174). 	<p>Finales década de 1990 y principios 2000.</p> <p>Irrupción paramilitar (AUC) en retaguardia FARC en el Caribe, disputa (por recomposición territorialidades narcotráfico fines de los años 1990) y llamado élites locales/regionales frente a su vulneración por FARC.</p>	<p>2005 – 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Vaciamiento” de los Montes de María, uno de los principales focos de expulsión de población desplazada en Colombia, y de generalización de pueblos fantasma (páginas 107-108) y descampesinización. <p>Orden social</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se dislocó la coexistencia entre los grandes latifundios ganaderos en las zonas planas y los pequeños minifundios de la zona montañosa y las tradicionales dependencias de los campesinos con los poderes locales y regionales. • Despareció el pueblo en 1997 la masacre provocó 7000 desplazados, de los cuales regresaron 4000. La masacre de 2000 vació el pueblo: y de 4000 desplazados han regresado 750 (2009) lo que trajo consigo “la pulverización de una larga historia y del proyecto colectivo”. <p>Economía</p> <ul style="list-style-type: none"> • El accionar paramilitar creó las condiciones para desarticular la existencia y la viabilidad de la economía campesina, y transformó completamente la estructura agraria preexistente en la región de los Montes de María (páginas 107-108).

<ul style="list-style-type: none"> • El grado de desarrollo económico de El Salado casi le permitió su conversión en municipio; el corregimiento era el más importante de El Carmen de Bolívar (que a su vez era el principal centro económico, social y político de la región) (página 176). • Marginalidad del conflicto armado entre 1980 y comienzos de los años 1990 (ELN, EPL y PRT + presencia política). 		<ul style="list-style-type: none"> • Por “vaciamiento del territorio”, pequeños y medianos propietarios vendieron a bajo precio; arrendatarios y aparceros perdieron el acceso a esas tierras; los nuevos propietarios consolidan latifundios ganaderos o implementar proyectos de agricultura comercial; los poseedores de hecho se enfrentaron a la legalización o despojo; los nuevos ocupantes usurparon los derechos de todos los anteriores. <p>Orden político</p> <ul style="list-style-type: none"> • No hay información.
TRUJILLO		
<p>Sociedad campesina (ladera) que producía café y una ganadería muy regular.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con experiencias previas de violencia (político-partidista). • Años 1960: la Iglesia organizó sindicatos del sector azucarero que impulsaron programas comunitarios de construcción de infraestructura y de proyectos productivos (en Trujillo había un sindicato). • Años 1970 y principios 1980 los campesinos apoyaron a la ANUC, epicentro de la agitación campesina: Trujillo, Riofrío y otros. Se forma Junta municipal de ANUC y hay un par de tomas de tierra. • 1985: llega el padre Tiberio y organiza: 45 empresas comunitarias, grupos de la tercera edad, comités de cuadra y otras empresas familiares entre las que se cuentan ebanisterías y panaderías. • Narcotraficantes: finales de los años 1970: compran tierras para controlar el cañón del Garrapatos (salida al mar para armas y droga), y finales de los años 1980, interés por control político local. 	<p>1986-1994 Alianza narcotráfico y FF. AA. en contexto regional de radicalización guerrillera y crisis del café y cambio función social de la tierra.</p>	<p>1995 – 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> • El dominio de lo narco con violencia de baja intensidad pero continua. <p>Orden socio-político.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La destrucción e incluso liquidación de núcleos familiares. • La desarticulación de las organizaciones campesinas, y otras formas de acción colectiva (las organizaciones promovidas por la Iglesia y las surgidas del trabajo de Fanal, la ANUC y las mismas Juntas de Acción Comunal, generadas por la institucionalidad nacional, se fueron debilitando, desapareciendo progresivamente. • La eliminación de las posibilidades de organización social de la población civil, el crecimiento de las bandas sicariales del narcotráfico, la apropiación del aparato público y la instauración de un orden social correspondiente con el tipo de economías ilícitas que perpetró por muchos años la violencia en la región del norte del Valle. • Cooptación local del Estado por narcos.

<ul style="list-style-type: none"> • La organización narcotraficante era fraccionada y en lo militar respondía a necesidades específicas de los capos, a delimitaciones territoriales y a relaciones de patronazgo. Los ejércitos particulares o privados se encargaban de funciones de protección o eliminación de aquello que se considerara tanto competencia como amenaza (página 146). • ELN: su actividad original era política y social por ser una guerrilla conformada por dirigentes sindicales radicalizados del sector cañero; en los años 1980 intentó armar un frente en el cañón del Garrapatas. 	<p>Orden sociocultural</p> <ul style="list-style-type: none"> • La tierra ya no como valor económico, sino como símbolo de reconocimiento y posicionamiento del narcotraficante en el conjunto social. • Ostentación de dinero, ambición de dinero por gentes del común y cambios de actitudes y costumbres, mucho negocio como lavadero de dinero. <p>Economía</p> <ul style="list-style-type: none"> • Despojo de tierras por narcos, característica en los años 1990. • Hoy: gran productor de piña, tomate, lulo, mora, pimentón, frutales en general, buenas razas de ganado tecnificado. • “Una gran actividad comercial, una cantidad de plata que antes no se veía”. • Mucha finca transformada en quintas de recreo. • 2007 registra el incremento de plantaciones de coca en el límite occidental de Trujillo, en especial en Bolívar y la zona del cañón del Garrapatas. <p>Orden socioterritorial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fueron desplazados los frentes guerrilleros por fuera del cañón del Garrapatas. • Los narcotraficantes controlan las rutas de la droga por el cañón del Garrapatas. • La acción contrainsurgente de la alianza narcotraficantes- FF. AA. regional y temporal cesó (a partir 1995). • Se consolidó el dominio narcotraficante del norte del Valle y continuó la violencia, pero sin tintes contrainsurgentes: 2000 - 2001: los índices de violencia derivados de la colisión entre las estructuras criminales de los narcotraficantes Diego Montoya (Los Machos) y Wilber Varela (Los Rastros) se acercaron a los registrados dentro de la Masacre de
---	---

		<p>Trujillo en los años 1989 y 1991. En adelante (2002-2006) mantienen “violencia de baja intensidad pero continua”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Norte del Valle sigue siendo pieza clave del narcotráfico.
EL CASTILLO		
<p>Sociedad de colonización campesina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impulsada por el Partido Comunista (décadas de 1950-1960) (parte alta del Ariari) y Liberal (parte media y baja del Ariari); los municipios de El Dorado, Restrepo, Cumaral, Acacías, Guamal y San Luis de Cubarral lo fueron por conservadores: “distribución partidaria del territorio” (página 18). • “Despensa agrícola” para el centro del país años 1970 (maíz, arroz, plátano y yuca) y de “ganadería artesanal”. • Economía campesina con formas de asistencia y trabajo colectivo e infraestructura comunitaria. • En la zona de influencia comunista se formaron organizaciones campesinas, de mujeres, y un sindicato; una comisión de baldíos para regular la colonización que permitió la equitativa distribución de tierras entre colonos y convirtió el minifundio en el rasgo distintivo de su estructura agraria; el sindicato “actuó como autoridad”, intervino en la solución de conflictos y organizó labores comunitarias para satisfacer las necesidades de alimentación e infraestructura básicas. • A partir de este trabajo colectivo, se afianzaron lazos de identidad y se construyó un tejido social y comunitario. • En los años 1960 se organizaron las Juntas de Acción Comunal que desde entonces abogan por los derechos de los campesinos frente al Gobierno local, regional y nacional. 	<p>1982 -2005 Apertura económica y</p> <p>1982-2001 (El Castillo) violencia grupos paramilitares locales a efectos apertura democrática y</p> <p>2002-2005 (El Castillo) AUC; sumado a viraje militar FARC</p>	<p>2006 – 2013</p> <p>Democratización violenta y democracia violentada (estigmatización, “arrasamiento de la izquierda democrática” y el “vaciamiento” del territorio)</p> <p>Descampesinización</p> <p>“Las actividades económicas y el modo de vida campesino antes redomnantes han sido reemplazados, o están en peligro de serlo” (página 17) por cultivos comerciales de plátano, sorgo, maíz, expansión de la ganadería genética y siembra de pastos por propietarios nuevos venidos de otros lugares, la minería y la privatización de las fuentes hídricas. Y un incipiente proceso de concentración de la propiedad agraria. “La nueva dinámica ganadera transformó los usos del suelo, las relaciones sociales ligadas al territorio y la producción agrícola” (página 149). Lo anterior se produce en virtud del proceso mundial de hegemonía del capital financiero y principales corporaciones transnacionales; y a su inscripción en las estrategias económicas impulsadas por el Estado colombiano a través de los planes de desarrollo, que se aúna a los efectos que paralelamente tuvieron las violencias con que se produjo “el arrasamiento con vaciamiento” en El Castillo.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • En los años 1970 se organizó el Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta (Sintragrim). • El Partido Comunista logra representación en Asamblea departamental en 1970, y la UNO lo hizo entre 1974 y 1984. • Durante el Frente Nacional y bajo la influencia del Plan Laso, se acentuó la estigmatización contra todo lo que no fuera bipartidista y Medellín del Ariari se señaló como “república independiente”, donde el Estado enfocó la “acción cívico-militar”. • Con el Estatuto de Seguridad se produjeron las primeras masacres en veredas de Vista Hermosa contra liderazgos de izquierda. • Desde los años 1970 El Castillo se convirtió en zona de retaguardia de las FARC, y se ubicó en la zona alta del municipio. Por las características del proceso de colonización, las FARC pudieron construir un anclaje originario o endógeno con parte de la población (CNMH, 2013). Aunque muchas personas no apoyaron las actividades de la guerrilla en el territorio, para otras esta gozaba de legitimidad. Sea como fuere, en El Castillo “nació un frente de las FARC” y “muchos muchachos de la región se convirtieron en comandantes de la guerrilla” (página 69). Durante el período de confrontación armada: • Con la formación y rápido fortalecimiento electoral de la UP se intensifica la estigmatización y las desapariciones contra UP y PCC. En 1986 se da primera incursión de un grupo paramilitar. • Década 1990: las FARC se expanden, fortalecen y endurecen su accionar militar, y contribuyen a la estigmatización de la izquierda democrática y al cierre democrático. 	<p>Orden político</p> <ul style="list-style-type: none"> • El capital político que recibe la UP de la tradición comunista regional y que crecienta y convierte en riesgo electoral para los partidos tradicionales, convierte a sus líderes y electores en blanco de violencia. Con ello se da: • Cierre democrático en elecciones, representación política y expresión y movilización social en el espacio público (por acción paramilitar y FARC). • Eliminación o desestructuración de organizaciones sociales y políticas antes existentes en el territorio. Se eliminó la participación a través del Sintragrim, la Unión de Mujeres Demócratas, la Unión de Pioneros José Antonio Galán o las Juventudes Comunistas. • Desestructuración de los liderazgos y las apuestas políticas que hacen parte de la cultura campesina, instalación del miedo y la desconfianza y ocultamiento o renuncia de las identidades políticas. • Se reconfiguró el mapa político de El Castillo. <p>Orden socio-territorial</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Castillo perdió casi la mitad de su población entre 1985 - 2005, y preponderantemente esto ocurrió en la zona rural. • Las poblaciones rurales que habitan la parte alta y los centros poblados que tuvieron que desplazarse y dejar vacíos lugares en los que habían forjado una historia común de construcción social del territorio y de identidad: casas, fincas y calles vacías, escuelas bombardeadas o abaleadas, las obras públicas abandonadas y cuadras enteras destruidas.
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • En 1997 irrumpen las AUC al Meta (masacre Mapiripán) y se articularon con los grupos paramilitares ya existentes en la región: grupo de Carranza, Los Masetos de Gacha y los de terratenientes (Mano Negra y Serpientes Negras). 		<ul style="list-style-type: none"> • Destrucción y abandono de infraestructuras comunitarias que fueron base de la estructuración del tejido social, dinámicas organizativas, proyectos productivos locales y expresiones culturales. • Rompimiento de relaciones familiares o vecinales por miedos y desconfianzas. <p>Actores armados</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continúan las FARC (parte alta municipio) y bandas criminales y del narcotráfico.
EL PLACER		
<p>Bajo Putumayo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sociedad de colonos campesinos —desde los años 1960— procedentes principalmente de Nariño (El Placer años 1970). • Asentamiento disperso. • Subregión (bajo Putumayo) donde se sitúa la explotación petrolera y frontera con Ecuador y que fue desde finales de los años 1970 territorio cocalero. • Finales de los años 1970, El Placer era un pueblo campesino; abundaba la comida; sus habitantes, por la escasez de dinero, se ayudaban intercambiando trabajo, haciendo trueque de productos y mingas para los trabajos comunales; fuertes lazos de parentesco y amistad. • Serruchaban madera para venderla en aserraderos de San Miguel, comerciaban con dificultad sus productos agrícolas; tenían ganadería, cuyes y cerdos. 	<p>1990 - 2005 Coca => conflicto armado</p>	<p>1990 - 2011 Sucesivos ordenes de violencia: “distintas leyes” y la violencia no cesa</p> <ul style="list-style-type: none"> • El territorio como frontera sigue siendo “considerad[o] como un corredor estratégico para los grupos armados no estatales y central, por lo tanto, en la recuperación del dominio territorial por parte del Estado” (página 237). • Su población ha estado sometida por sucesivos actores armados (narcotraficantes, guerrillas, AUC y actualmente a las Águilas Negras y los Rastrojos) a la imposición de sucesivos órdenes de violencia. • La coca se convirtió en renglón central de la economía de la región durante tres décadas. Con la consolidación de la producción de coca, El Placer se convierte en centro de mercado de la pasta de coca y de gran movimiento de capital. • La ofensiva estatal contrainsurgente, acompañada de las fumigaciones aéreas, especialmente desde 1996, amplió tanto la cobertura de la Policía como del Ejército. En Putumayo despliega la acción de 12 Batallones (página 61).

		<ul style="list-style-type: none"> • “Las FARC no consideran la neutralidad frente al conflicto armado como una alternativa posible para la población. Por otra parte, (...) el puesto de Policía está situado frente a la escuela primaria de El Placer, y así como sucedía durante el dominio paramilitar, aún se continúa exponiendo a los niños a sufrir las consecuencias de los enfrentamientos armados” (página 239). • Grupos armados posdesmovilización: “algunos de los delincuentes ya conocidos en la región han seguido cometiendo infracciones a la ley. Solo que esta vez usan nombres diferentes —los Rastrojos y las Águilas Negras— grupos que también han perseguido a líderes comunitarios sindicados de ser cómplices de la guerrilla, contraviniendo así la idea de que son solo grupos delincuenciales ligados al negocio del narcotráfico. En este momento, los Rastrojos tienen mayor presencia en el departamento, especialmente en los municipios de Puerto Asís, San Miguel y Valle del Guamuez” (página 339). • “El reclutamiento forzado y en la vinculación voluntaria de jóvenes a grupos armados es una de las principales amenazas para su comunidad” (página 340).
ARAUCA		
<p>Sociedad de medianos y grandes terratenientes en las zonas planas y sociedad campesina en las laderas y piedemonte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Economía de ganadería extensiva y trashumante y agricultura de subsistencia de origen indígena. El ganado, no la tierra, constituía la base de la riqueza 	<p>2000 - 2005 Irrupción paramilitar (AUC) en retaguardia FARC en el oriente colombiano: disputa por recomposición</p>	<p>2005 - 2014 Con la información disponible en el estudio es imposible de establecer En razón del foco específico y exclusivo en el análisis sobre daños e impactos en violencia sexual. Sólo un aspecto es posible de establecer: la continuidad de la</p>

<p>y era la fuente del poder social y cultural. No existía la propiedad privada sobre la tierra y no había cercas; prevalecían las sabanas comunales sobre las que regían “derechos de sabana”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colonización campesina del Sarare en los años 1960 y movilización cívica años 1970. • La presencia del Ejército desde los años 1980 con objeto de proteger infraestructura petrolera. • Las guerrillas han sido desde los años 1980, y durante largos períodos, la autoridad absoluta sobre territorios extensos; mantuvieron buenas relaciones con la población y con los medianos y grandes terratenientes a quienes les ofrecían seguridad ante el abigeato por parte de delincuencia común. Se insertaron en la organización social y redes de apoyo. Con la elección popular de alcaldes se insertaron en la política local (el ELN a través de sectores independientes del Partido Liberal y las FARC de la UP). En los años 1990 distintos grupos paramilitares “surgieron y naufragaron” y siempre actuaron en convivencia con el Ejército. • Antes del Bloque Vencedores de Arauca (BVA), la violencia era por disputa por el control territorial y poblacional en escenarios de combate entre guerrillas y Ejército (principales víctimas: combatientes). 	<p>territorialidades narcotráfico a finales de los años 1990</p>	<p>violencia en Arauca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2006-2009: confrontación FARC/ELN (índices históricos de violencia más altos). • 2010 en adelante, FARC y ELN: se dividen el territorio del departamento. • Las bacrim son transitorias porque en el 2014 se acaban los cultivos de coca en este territorio.
REMEDIOS/SEGOVIA		
<p>Sociedad minera tradición siglo XIX</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una sociedad de enclave minero, predominantemente urbana de trama social y económica poco diferenciada (paridad y dependencia entre mineros y comerciantes hasta 1996), sin élites locales (página 226). 	<p>1982 - 1997 La reacción paramilitar local (FF. AA.) a los efectos de la apertura democrática en los años 1980 y</p>	<p>1997 - 2010 Arrasamiento de izquierda democrática</p> <p>Orden político 1982 - 1996</p> <ul style="list-style-type: none"> • La izquierda política logró con la apertura democrática intervenir directamente en la construcción del Estado local con proyectos políticos

<ul style="list-style-type: none"> • Precaria construcción estatal. • Auge minero años 1980 y consecuente explosión demográfica, desbordamiento demandas bienes públicos. • Periferia de región central, tradición redes partidistas Partido Liberal (hasta 1985), y trabajo político Partido Comunista en sindicalismo minero y comunidades rurales. • Presencia militar del Estado desde los años 1970 (contra la presencia “histórica” del ELN); era la institución más fuerte en la región a principios de los años 1980; institución reforzada en los años 1990 para protección de Oleoductos Colombia y Ocesa: “la fuerza pública se representaba como la única legítima institución del Estado” y protectora del orden en la región. 	<p>violencia guerrillera (1988-1997) contribuyó con estigmatización y nueva transformación del orden político local</p>	<p>alternativos al bipartidismo. Asimismo, a través de las nuevas formas de organización y protesta social, los individuos y los grupos en la región se convirtieron en un sujeto colectivo que se reconoció y se percibió como parte de los procesos históricos de la Nación (página 235).</p> <ul style="list-style-type: none"> • La movilización social y política por demandas bienes y servicios públicos estructuró lazos sociales y construyó intereses comunes entre nativos y recién llegados, que fortalecieron la movilización y obteniendo logros parciales. 1997 en adelante • El exterminio de la izquierda política “se extendió hasta aniquilar el último vestigio de pervivencia de oposición política y organización social con la masacre de agosto de 1997”. Esta situación se agravó con la continuación de la guerra derivada de la incursión y competencia de nuevas estructuras paramilitares (AUC) desde el año 1999 (páginas 233-234). • La tramitación del conflicto quedó en manos de actores armados y la transformación democrática del Estado local quedó sepultada: Se restringieron los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Se imposibilitó la expresión electoral de las preferencias políticas disidentes. No hubo garantías de gobierno para quien es elegido con una identidad política de izquierda. Se instauró un Estado militarista que negó el fortalecimiento de una institucionalidad civil y democrática. Se ahogó y desnaturalizó el repertorio de la movilización social.
---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • A partir de 1999, primero el Bloque Metro y luego el Bloque Central Bolívar sostienen y profundizan el estado de cosas y expanden los cultivos de coca. • 2008 en adelante: los nuevos actores armados (Los Rastrojos, Los Urabeños) mantienen la imposibilidad de reconstrucción democracia y movilización social. <p>Orden social</p> <ul style="list-style-type: none"> • El desplazamiento de las comunidades rurales hacia las áreas marginales de los cascos urbanos provocó una mayor precariedad de las condiciones materiales de subsistencia de la población: el déficit de vivienda y bienes públicos, así como el conflicto entre la minería informal y la compañía minera Frontino Gold Mines. • Colapso de las relaciones comunitarias como consecuencia del miedo y la desconfianza generalizada. • El crecimiento de la actividad minera informal y la conformación de mercados informales controlados por intermediarios abusivos generan un desorden desventajoso para la población trabajadora.
BAHÍA PORTETE		
<p>Sociedad étnica Wayúu y de convergencia de fronteras políticas, culturales y simbólicas. Comunidades que durante siglos han mantenido altos grados de autonomía frente al poder estatal central y fuertes lazos de intercambio con el Caribe. Bahía Portete (del municipio de Uribe, “capital indígena de Colombia”, donde se ubica el segundo resguardo indígena de mayor extensión en el país). Territorio ancestral de los clanes Epinayú y Uriana. Allí residían aproximadamente ochocientas personas antes de abril de 2004.</p>	<p>2001 - 2004 Irrupción abrupta, tardía y de intensas acciones violentas de los paramilitares AUC (sin haber guerrillas). Economía ilegal (por control narco de rutas y puertos)</p>	<p>2005-2010 Violencia étnica (afectando códigos claves de la identidad y el orden social étnico) – “violencia sexual como instrumento grupal”</p> <p>Orden económico wayúu Alianzas, cooptaciones y sometimientos de los contrabandistas y narcotraficantes regionales, de sus estructuras armadas y de sus diferentes circuitos. Bahía Portete y los otros puertos naturales aledaños como epicentro de esta actividad y el territorio de la Alta Guajira con su red de caminos y pistas aéreas</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Territorio de puertos naturales de manejo autónomo wayúu y de laberinto de caminos a través del desierto, donde se ejerce históricamente el contrabando por un entramado de bandas criminales y ejércitos privados (funciones de cuidado de la mercancía, control de rutas y mercados y protección de los comerciantes e intermediarios del negocio). • El territorio —asociado a la naturaleza y la vida— es referente simbólico primordial que da sentido al orden social garantizando la sobrevivencia y herencia cultural y comunitaria. • Su vida cotidiana se organiza en torno al pastoreo, la pesca, el trabajo en las huertas y la venta de mercancía, víveres y artesanías en las tiendas y el comercio en los mercados de Maicao, Uribia, Riohacha y Maracaibo; las actividades en el puerto y la circulación de mercancía de contrabando. • Prácticas y rituales de la memoria con la transmisión oral de las historias de guerras y sus guerresos, de los arreglos de género y la división sexual del trabajo. • Sociedad segmentada, en la cual las lealtades y solidaridades no son primordialmente transversales. • Prácticas de compensación y modos de resolución de las disputas; rituales de paso y eventos sociales. • Las organizaciones armadas wayúu no se involucraban en la regulación del resto de las transacciones sociales. <p>Los asesinatos y confrontaciones violentas en La Guajira han sido altos desde la década de 1960, pero estuvieron asociadas al contrabando, narcotráfico y ajustes de cuentas entre jefes y familias relacionados con el contrabando y crímenes de la delincuencia organizada.</p>		<p>para la circulación de los mercados de droga, armas y gasolina.</p> <p>Orden político local Manipulación, presión y establecimiento de alianzas con poderes políticos locales para controlar las relaciones clientelistas con la población nativa y la administración pública, y para acceder a las regalías.</p> <p>Orden social y cultural Con las formas y modalidades de violencia ejercidas por los paramilitares se produce un profundo desequilibrio socio-cultural:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con la imposibilidad de recoger los cuerpos de los muertos y enterrarlos no pueden cumplir ni con los reclamos de justicia por parte de los muertos ni llevar a cabo los rituales que garantizan la no repetición y el tránsito por el “camino de los indios muertos” a Jepira, la tierra de los wayúu muertos. • Mediante la tortura sexual y el asesinato de mujeres como acto bandera, se ataca al tiempo el honor masculino y el de un pueblo guerrero; su resistencia histórica y su sentido de cohesión social y equilibrio interno. • Con la violencia ejercida contra las autoridades y líderes y en general contra el universo cultural wayúu y la transgresión de la normatividad que regula las guerras y las disputas entre los Wayúu, se afectaron las bases de la identidad étnica de los Wayúu como sujeto colectivo. Se amenazó así el patrimonio histórico, cultural y mítico de estos pueblos.
--	--	---

<p>Sociedad intervenida a partir de los años 1980 por agentes nacionales internacionales con proyectos de economía extractiva, con afectaciones ambientales y para la salud y la economía de subsistencia wayúu.</p> <p>Sociedad wayúu que ve modificada su estructura organizativa de autoridades tradicionales, a través de la representación política y ocupación de cargos públicos, la recepción regalías como resguardo, y el papel de las mujeres en el ámbito público de la intermediación, representación y enlace entre su comunidad indígena, y el mundo no indígena (después de los años 1990).</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Con el desplazamiento y la migración a centros urbanos los arreglos de género se transformaron: por las dificultades para poder continuar con actividades de subsistencia alrededor del pastoreo o las huertas y también por la incorporación de arreglos de género característicos de las familias nucleares colombianas. • En 2010, el puerto de Bahía Portete permanecía inactivo, las viviendas e infraestructura educativa y de salud de la comunidad desvalijadas y destruidas por la acción vandálica, el paso de los años y la incidencia de las condiciones climáticas. La gran mayoría de la comunidad Wayúu de Bahía Portete continuaba en situación de desplazamiento en Maracaibo, Uribia y Maicao. <p>En lo militar Las armas comenzaron a mediar en la regulación de la vida social.</p>
BOJAYÁ		
<p>Sociedad de contacto interétnico (indígenas Emberá-Wounaan y negros esclavizados traídos de África). Aprendizajes y apoyos políticos y económicos mutuos; y convivencia pacífica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indígenas con sistema de producción tradicional (recolección, cacería de auto subsistencia, pesca artesanal y agricultura en terrenos elevados cercanos a riberas de las cabeceras de los ríos). • Negros con agricultura de autoconsumo, comercio de baja escala y Sostenibilidad ambiental. • Ríos: su principal ruta de transporte, de encuentro, de lugar de actividades cotidianas. 	<p>1996 - 2006 Frontera de guerra definida en función de los intereses macro-regionales y nacionales (narcos, guerrilleros, paramilitares y del Estado)</p>	<p>2006 -2013 “La guerra sin límite” - crimen de guerra contra sujetos colectivos</p> <p>Avalancha institucional Por constituir “una de las mayores tragedias humanitarias de Colombia” y por haber sido perpetrada sobre una población étnica (afrodescendientes e indígenas en convivencia interétnica), Bojayá obtuvo una atención excepcionalmente rápida por parte de las agencias internacionales, las instituciones públicas nacionales y un apoyo interno de la Iglesia tradicionalmente ligada al territorio, enfocada al retorno y reconstrucción del pueblo y de la comunidad.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Organizaciones sociales desde los años 1980, que defienden territorio-cultura-autodeterminación y modelo de desarrollo con perspectiva étnica. <p>Relación centro-región:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Históricamente región periférica desarticulada de la nación y sometida a una condición histórica de violencia estructural: precariedad y abandono institucional, profunda inequidad social, exclusión política y discriminación. Mega-proyectos que no mejoran condiciones de comunidades negras e indígenas. • Bojayá: expresión de un “estado local fallido”. <p>1960 - hoy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervencionismo económico desde el centro nacional con una economía extractiva (forestal y minera) y una relación instrumental con megaproyectos de infraestructura sin beneficios regionales. <p>Durante lo álgido del conflicto en el entorno regional</p> <ul style="list-style-type: none"> • La confrontación colisionó con los procesos organizativos que venían desde mediados de los años 1980 y con las reivindicaciones por el reconocimiento de los derechos colectivos afros más recientes (desplazamientos más fuertes al tiempo con el comienzo de la implementación de la titulación colectiva). • Se lesionó la autonomía territorial: acarrearón profundas modificaciones en la formas de relación de los medioatrateños entre sí y con su territorio: controles militares y de identidad sobre la población civil, circulación por el río, transporte de alimentos, miedo. 	<p>Orden sociocultural local</p> <p>La mayoría de desplazados retornó a los 4 meses. No obstante, “la configuración de la nueva comunidad podría decirse que está todavía en suspenso” (página 22).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambiar de lugar de vivienda y de la forma de vivir y de habitar. • Resignificar todo: espacios, relaciones, rituales, expresiones estéticas, formas de resistencia. • Reconponer procesos organizativos y formas de intervención en el territorio. • El diseño del nuevo asentamiento (Bellavista) transformó el paisaje municipal y cambió la condición ribereña del pueblo y por tanto lo que dicho eje aportaba en la autodefinición, pertenencia y clasificación en las relaciones sociales y espaciales y en el desarrollo de las actividades cotidianas de sus pobladores. Hasta la condición del cementerio se transformó: entorno ruidoso para el descanso de los muertos y los rituales; y mucho deterioro y abandono en contraste con el nuevo pueblo a su alrededor. • Bellavista se convirtió desde el 2002 en un lugar de recepción para los desplazados que han llegado procedentes de los corregimientos cercanos. <p>Orden económico en entorno regional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guerrillas, paramilitares y bacrim vinculados hasta hoy con el narcotráfico y el establecimiento de monocultivos de coca en la región cuya implementación también implica prácticas de deforestación y el uso de agroquímicos lesivos para el ecosistema, lo cual afecta la seguridad alimentaria.
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Paramilitares cooptaron las empresas madereras en la región, instalando el esquema de explotación y de vinculación laboral, disminuyendo la remuneración al trabajador y apropiándose por coerción de un porcentaje del pago que, por ley, debían hacer las empresas madereras con concesión a estas comunidades. • Agroindustria de palma aceitera impulsada por el Estado, apropiada por paramilitares y sus testaferros y extendida en territorios colectivos mediante el desplazamiento masivo de pobladores. • A partir de mayo de 2002: avalancha institucional que no fundamenta una presencia del Estado integral y sólida pasado el impacto. 		<ul style="list-style-type: none"> • Continuación de economía extractiva y utilización instrumental del territorio para megaproyectos pensados desde y para el centro. • Las bacrim reproducen el esquema de explotación y vinculación laboral maderera que impusieron los paramilitares, disminuyendo al mínimo ingresos a trabajadores, obligando a comunidades a traspasar un porcentaje del pago que por ley las empresas madereras pagan a comunidades. <p>En la seguridad</p> <ul style="list-style-type: none"> • En lo local: Prevalce una seguridad frágil, que la población percibe que desaparecerá una vez el Ejército se retire. • En el Atrato: Por un lado, los territorios dejados por las AUC son copados por las BACRIMs. Por otro lado, las confrontaciones siguen (entre guerrilla y BACRIMs), ahora concentradas en las cabeceras de las cuencas de los ríos, las ciénagas y las zonas rurales y los principales afectados han sido los indígenas. Finalmente, el Medio Atrato, como corredor estratégico de río y mar, sigue cobrando víctimas de la disputa armada.
BUENAVENTURA		
<p>Sociedad de población mayoritariamente étnica, principalmente afrodescendiente y en menor medida indígena.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muchas de sus actividades se basan en modelos locales de relación con la naturaleza, de utilización de los espacios en función de los sexos y de relaciones sociales fundadas en el parentesco, así como en todo un universo de representaciones y conocimientos. 	<p>1990 -2013</p> <p>Década de 1990 hasta hoy: Intervencionismo económico desde el centro nacional de enclave portuario y de relación instrumental, megaproyectos</p>	<p>2000 – 2013</p> <p>Ciudad – “puerto sin comunidad” y orden de violencia de la economía ilegal</p> <p>Orden político</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reconfiguración cooptada del Estado local : a) imperio de la narco-para-política, constreñimiento electoral, corrupción armada, reducción mecanismos ascenso y movilidad social para liderazgos y representación política de afrodescendientes

<ul style="list-style-type: none"> • En los años 1960 con la creación Colpuertos había empleo, fuerte organización sindical, surgió clase media y élite política local afrodescendiente. • Principios de la década de 1990 se producen paralelamente: <ol style="list-style-type: none"> 1. Constitución de 1991 y Ley 70 de 1993: reconocimiento afrodescendientes como actor colectivo y derechos éticos y territorios colectivos y el mantenimiento de una población afrodescendiente rural que agencia procesos económicos de minería, pesca, madera y agricultura sustentados por encadenamientos productivos sostenidos por extensas redes de parentesco local y regional y bajo <i>continuums</i> rural-urbanos. 2. Con la globalización y la privatización del puerto se bloqueó la consolidación clase media afrodescendiente y se dividió la ciudad (población afro empobrecida y excluida del poder) del puerto (alta rentabilidad tipo enclave): <i>un puerto sin comunidad</i>. Y una pobreza urbana que alimentó la aparición de bandas delincuenciales barriales. 	<p>de infraestructura sin beneficios urbano-regionales.</p> <p>1995 - hoy: Imposición y mantenimiento de un orden de violencia y de economía ilegal sostenidos por grupos armados ilegales (GAI) (guerrilla - AUC - grupos posdesmovilización) apoyados por red de narcotraficantes, empresarios locales y funcionarios públicos.</p>	<p>y b) ascenso de personajes que acumulan a través del crimen un capital económico y de control armado que se incrustan en el poder local, ahogan la potencial alternativa política del movimiento étnico y establecen las conexiones con los poderes regionales y nacionales; presionan y coartan a organizaciones sociales y comunitarias, suplantando liderazgos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiste el patrón histórico de relación entre los centros políticos-económicos y la región, manteniendo mecanismos institucionales que no proveen ni regulan bienes públicos para la población en seguridad, justicia y bienestar (página 115). • El Estado nacional realiza en 2008 “una Operación Orión” en Buenaventura: militarización de las comunas 3, 5 y 12. <p>Orden económico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implantación de los grupos armados ilegales (GAI) cumplen sus objetivos de financiación desarrollando un portafolio de negocios ilegales que incluye el narcotráfico, tráfico de armas, microtráfico, extorsiones, peajes, control al comercio local, cultivos de usos ilícitos, minería ilegal, lavado de activos y establecimiento de negocios conexos al circuito económico portuario. • Buenaventura como ciudad y puerto se convierte en centro privilegiado para las operaciones económicas ilegales. En ella se ha conformado “una red ilegal que permite realizar este tipo de negocios, y de la cual al parecer hacen parte narcotraficantes, grupos armados ilegales, funcionarios de distintas agencias del Estado y empresarios locales” (página 148).
---	--	--

	<p>Orden socioterritorial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Municipio de Buenaventura: 19 corregimientos, 31 consejos comunitarios de comunidades negras (con titulación constituida en cumplimiento de la Ley 70 de 1993 y del Decreto 1745 de 1995) y por nueve resguardos indígenas pertenecientes a los grupos étnicos Waunan, Embera, Eperara Siapidara, Nasa y Embera Chamí. • Los ordenamientos socioterritoriales de estas comunidades (capacidad de ejercer la autoridad colectiva sobre el territorio y de mantener sus redes de parentesco, los circuitos económicos y los <i>continuum</i>s rural-urbanos como base de la reproducción de su cultura y su forma de vida), así como el desarrollo de condiciones que permitan la pervivencia cultural de afrodescendientes y de indígenas han sido sustancialmente socavados por el intenso conflicto armado y por los antagonismos planteados por la economía portuaria y la economía ilegal que impera en Buenaventura. • Mapa de la violencia generalizada y sostenida por toda la ciudad (mapas 2008 – 2013: páginas 253- 256). • Los agentes de la guerra se insertan y operan en el territorio urbano por intermedio de las bandas barriales previamente establecidas. • Se mantiene el desplazamiento intra-urbano. <p>Orden socio-cultural</p> <p>Afectadas las matrices culturales que orientan la pertenencia y la continuidad de prácticas socioculturales de la población afrodescendientes en este territorio (página 20).</p>
--	--

	<p>Violencia continuada</p> <ul style="list-style-type: none">• Los negocios ilegales (portafolio amplio mucho más allá del narcotráfico) por bandas criminales y FARC mantienen la violencia.• La organización de la violencia a través de mafias fue fundamental para redefinir las relaciones de poder en este orden social y conectar la política local con la política nacional (página 114).• Es de suponer que los grupos armados ilegales seguirán operando en el municipio mientras obtengan rentas importantes producto de sus negocios ilegales. “Independientemente del origen de los conflictos armados internos, su duración está íntimamente ligada con la capacidad financiera de los grupos armados; es decir, la viabilidad económica” (Guáqueta, Alexandra, 2003, página 94) (página 128).• El carácter microfocalizado del conflicto es ahora más generalizado: en todo el casco urbano (página 116).• Una guerra sin rostro, es decir, una guerra en la cual la identidad de sus protagonistas adquiere su carácter más invisible, bien sea porque es confuso ver a los mismos integrantes de los grupos AUC supuestamente desmovilizados, armados y ejecutando actos violentos (página 120) y una guerra sin cuerpos (por la modalidad de los repertorios de violencia).
--	---

GRANADA		
<p>Sociedad campesina, de tradición religiosa y conservadora y de activa dinámica social, organizativa y cooperativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevalencia del minifundio y de la producción de café, caña de azúcar, mora de castilla y frijol, y de una población con muy altos índices de pobreza. • Forma parte de una subregión (Embalses) donde se asienta un complejo hidroeléctrico nacional y de un entorno regional desigualmente integrado al centro metropolitano de Medellín. • Iglesia muy presente y con especial intervención en el ámbito educativo de toda el área municipal. • Por tradición múltiples organizaciones sociales y cívicas y de alianzas público-privadas impulsan el desarrollo del municipio: pobladores, organizaciones comunales, proyectos productivos, colonias, Iglesia e institucionalidad pública local. <p>Durante el período de disputa armada Granada 1997-2005</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nodo regional de control guerrillero y capacidad de acciones de impacto nacional (ELN, en la búsqueda de lograr el sí a una “convención nacional” y en su defecto, a lograr realizar “diálogos regionales”; y FARC, en su fortalecimiento y guerra de posiciones frente al Estado y con especial impacto en el boicot electoral en la región). • Epicentro regional para contactos entre el Gobierno y las guerrillas, para acuerdos. • Afectaciones: el desplazamiento redujo a menos de la mitad a su población, vació varias veredas, imposibilitó las elecciones y desestructuró el tejido social y la dinámica base organizativa de la comunidad. La administración local se vio obligada a trasladarse un tiempo a Medellín. 	<p>2000-2007</p> <p>La intervención del Estado, con la recuperación del control militar del territorio, la implementación de proyectos públicos nacionales y departamentales y</p> <p>el emprendimiento individual y colectivo de la población para el retorno y la reconstrucción.</p>	<p>2005/2008 – 2015</p> <p>“Fin del conflicto” y sensación general de “seguridad” entre los habitantes</p> <p>Orden socioterritorial</p> <ul style="list-style-type: none"> • El restablecimiento del control militar del territorio y de la movilidad por la autopista Medellín Bogotá y resto de vías, seguidos del retorno de la población desplazada y el repoblamiento de las veredas. <p>Orden económico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reactivación dinámica económica campesina y comercial del municipio y de su entorno regional. <p>Orden institucional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presencia institucional nacional y departamental con proyectos y programas de atención a la población que retorna e inversión para la reconstrucción del pueblo; programa de titulación de predios baldíos. • Empuje de la institucionalidad local. • Aplicación de la justicia a mandos medios y altos militares implicados en ejecuciones extrajudiciales (a partir de 2008); trabajo de exhumación de restos de personas asesinadas. <p>Orden sociopolítico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reconstitución y fortalecimiento de las organizaciones sociales, de los espacios de representación y participación social y del ejercicio del poder político y la democracia local.

<ul style="list-style-type: none"> • Afectación intensa de la infraestructura energética nacional y de la autopista Medellín-Bogotá. • Destrucción del pueblo y vaciamiento territorial. 		
SAN CARLOS		
<p>Sociedad campesina de tradicional filiación al Partido Conservador (desde finales del siglo XIX), y con fuerte influencia de la Iglesia católica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Territorio de riqueza hídrica, áreas de reserva, alta proporción de bosques no intervenidos y ecosistemas potencialmente estratégicos para el desarrollo de economías alternativas. Asiento de un complejo hidroeléctrico nacional. <p>Cultivos de café, panela, papa, frijol, maíz y frutales, además de ganado de leche. La ganadería: en la zona del Jordán. Predominó la pequeña y mediana propiedad; con las hidroeléctricas cambiaron usos del suelo y hubo concentración de la propiedad en ciertas zonas. Se desarrolló el comercio y en el sector de servicios (26 por ciento del total de ingresos recaudados). En la zona rural priman los niveles mínimos de desarrollo vial y de servicios.</p> <p>Violencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Década de 1950: el corregimiento de El Jordán fue azotado por violencia bandolera; abandono tierras y emigración colonos hacia Puerto Berrío, Puerto Nare y Puerto Boyacá. • 1965-1977: construcción de hidroeléctricas y llegada de grupos guerrilleros a corregimientos y veredas, así como a sectores cercanos a la cabecera municipal. 	<p>2005 - 2011</p> <p>La política de la Seguridad Democrática (retoma del control militar del territorio 2005).</p> <p>Apoyo institucional para el retorno (administración local 2007; Alcaldía Medellín 2009; Estado nacional 2009).</p> <p>Iniciativas civiles locales para el desminado artesanal, el retorno, el apoyo psicosocial y para la reconciliación.</p> <p>Acción por el desminado de fundaciones nacionales, agencias internacionales y Estado.</p>	<p>2005- 2011</p> <p>Entre la reconstitución de lazos sociales e institucionalidad y los límites de la capacidad Institucional</p> <p>Retorno</p> <ul style="list-style-type: none"> • El retorno se inició de manera voluntaria sin apoyo institucional en 2001. En agosto de 2002 se hizo una caravana con 38 buses llenos de desplazados que fueron a San Carlos en lo que se denominó “fiestas del retorno”. A partir de 2003 comienza el descenso del desplazamiento y fueron más frecuentes los eventos de retorno. • En 2007, el Comité Local y luego la Alcaldía declararon al municipio en estado de emergencia por retornos masivos e individuales (6.400 personas en ese momento) y sistematizaron la información sobre seguridad, salud, educación, vivienda y atención psicosocial de atención, sus necesidades. • En 2009 la Alcaldía de Medellín implementó el “Retorno Colectivo Medellín-San Carlos” y la Presidencia “Retornar es vivir”, lo cual posibilitó procesos de desminado, acceso a proyectos de mejoramiento de viviendas, inicio de proyectos productivos y mejoras en la infraestructura vial y escolar en las poblaciones retornadas. Con “Retornar es vivir” el Gobierno nacional priorizó para primera fase a municipios como San Carlos, Cocorná,

<ul style="list-style-type: none"> • 1977-1988: se desarrolló un fuerte movimiento cívico local (coyuntura movilización cívica nacional) que alcanzó a alterar coyunturalmente la correlación de fuerzas políticas en la localidad. Se desencadenó primera ola de violencia paramilitar (paramilitares del Magdalena Medio en alianza con élites locales conservadoras contra líderes movimiento cívico) y de desplazamiento político. • 1986 - 1997: hegemonía guerrillera que primero no atenta contra la población; pero a partir de 1990 se endurece y la afecta: pretenden apropiarse de denuncias y reivindicaciones de organizaciones sociales, asesinatos selectivos, toma de pueblo, sabotaje elecciones. • 1997 - 2005: “guerra total” y vaciamiento del territorio, la disputa AUC - guerrillas (FARC y ELN) produce un éxodo, un vaciamiento del territorio (70 por ciento de la población). Los daños (de todo tipo) afectaron a la mayoría de las 81 veredas y 13 centros zonales que conforman la extensión rural y urbana del municipio. 		<p>Granada, San Rafael, San Francisco y San Luis del Oriente Antioqueño. Cornare, EPM y Gobernación han sumado finanzas a diversos programas, todo lo cual en su conjunto tiende a restablecer los derechos de la población en su territorio y a potenciar y revitalizar el desarrollo local.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Junio de 2011: alrededor de 9.000 personas y 2.700 familias retornadas (San Carlos principal receptor del oriente antioqueño). <p>Tierras y campesinos</p> <ul style="list-style-type: none"> • La mayoría de los sancarlitinos no perdieron sus tierras, las abandonaron y hoy intentan regresar. • La tenencia de la tierra en el municipio presenta problemas legales no fáciles de resolver. No obstante, la Alcaldía emitió una resolución para impedir cualquier tipo de transacción de los bienes abandonados. Hasta el 2009: cuatro declaratorias de protección de tierras. • En lo agropecuario, los campesinos manifiestan haber perdido autonomía y libertad en sus decisiones sobre cultivos —en dónde y con quién— porque “están totalmente condicionadas por las instituciones”; además, el uso de semillas transgénicas “transforma la economía local, pues muchos de los productos que dejaron de producirse en San Carlos por el desplazamiento masivo y el abandono de cultivos se traen ahora de sectores como el Eje cafetero a un costo menor de los producidos en el presente en la región” (página 284).
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • En general, dado el gran número de personas afectadas, cualquier intervención parece insuficiente. Hay empobrecimiento general. El 98 por ciento de las familias caracterizadas (desplazadas) en el municipio de San Carlos se encuentran por debajo de la línea de pobreza al no tener ingresos por persona que superen los \$ 238.500 pesos colombianos. <p>Desminado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es notable el desminado artesanal desde tempranas épocas y por individuos reconocidos en el municipio por su valentía. • La Alcaldía promovió el desminado humanitario (el que sigue los protocolos oficiales) y se han unido la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), la CNRR, la Fundación Mi Sangre, el Centro Integral de Rehabilitación de Colombia (CIREC) y el Ejército nacional, entre otros. <p>Infraestructura y equipamientos colectivos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puentes derribados, caminos veredales desaparecidos, redes eléctricas destruidas, tanques de agua dinamitados, escuelas derrumbadas y centros de salud destruidos. Es una realidad apabullante para retornados y autoridades locales, como tarea que excede sus posibilidades.
--	--	--

		<p>Seguridad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se fortaleció a partir de la Seguridad Democrática: “especialmente de la fuerte persecución realizada a los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN, de la desmovilización de los grupos paramilitares y de la toma del control de la región por parte de las Fuerzas Armadas. Desde el año 2005, la Fuerza Pública tiene presencia en el 100% del territorio” (página 91). A pesar de que “hoy se respira un ambiente de mayor tranquilidad” persiste la desconfianza hacia la fuerza pública. <p>La reconciliación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con 45 desmovilizados paramilitares en el municipio se adelanta una agenda de reconciliación; su aceptación no es unánime, por los interrogantes acerca de la desmovilización del Bloque Héroes de Granada y el desequilibrio entre el trato y los beneficios que han recibido los desmovilizados y las enormes dificultades que las víctimas enfrentan para acceder a recursos básicos y a la restitución de sus bienes.
		<p>Grupos armados posdesmovilización y coca</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se perciben reclutamientos posteriores a la desmovilización por algunos jefes paramilitares con influencia en el municipio. • Se presenta una disputa por el control de zonas donde se expanden los cultivos de coca y el mercado de distribución de drogas ilícitas (explicación de las muertes y los atentados contra excombatientes en San Roque, San Rafael y San Carlos durante 2010).

COMUNA 13		
<p>Comuna urbana de Medellín. Alberga una tipología diversa de asentamientos humanos: barrios populares antiguos, piratas, de invasión, conjuntos residenciales privados y, desde mediados de los años 1990, asentamientos de población desplazada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Su proceso de formación data desde principios del siglo XX, pero el gran flujo de migrantes se dio entre los años 1950 y 1980. A partir de los años 1990 con población desplazada por el conflicto armado. Su topografía hace que el acceso a una gran cantidad de barrios de las partes altas, sea predominantemente peatonal (cientos de escalas y callejones). • “Los guerreros y los criminales impusieron regulaciones no sólo autoritarias sino violentas y eficaces para sus proyectos de subordinación a las comunidades. Adicionalmente, utilizaron la zona como refugio para actividades delictivas; como plataforma para el control de otros territorios; como fuente de abastecimiento de recursos; y, por último, como corredor estratégico hacia otros cinturones urbanos o incluso como conexión, más allá de la ciudad, a rutas marítimas” (página 14). • La mayoría de la población en la Comuna 13 ha sobrevivido tradicionalmente en condiciones de pobreza. Según datos del Sisbén en junio de 2010 la Comuna 13 tenía 152.312 habitantes, de los cuales el 99,9 por ciento residen en inquilinatos o en viviendas de estrato bajo-bajo (1), bajo (2) y medio bajo (3). 	<p>2004- 2010</p> <p>Expulsión guerrillas de la ciudad mediante Operativos militares y paramilitares.</p> <p>Urbanismo social agenciado por la Alcaldía.</p>	<p>2004 – 2010</p> <p>Entre el dominio de las bandas criminales y la reconstitución de los lazos sociales y la institucionalidad.</p> <p>La desmovilización paramilitar a finales de 2003 en la ciudad y la expulsión de las guerrillas de la comuna y de la ciudad no significan la recuperación de la tranquilidad, la paz y la institucionalidad en el territorio, ni tampoco el fin del desplazamiento forzado intraurbano. La Comuna 13 se ve sometida a la acción de dos fuerzas contradictorias en paralelo.</p> <p>a) La continuidad de la violencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durante la primera etapa de los paramilitares desmovilizados, en la Comuna 13 continúa un orden de violencia ahora impuesto por los desmovilizados rearmados y las bandas criminales emergentes. Siguen los asesinatos selectivos de líderes y se incrementa la desaparición de personas consideradas “colaboradores de la guerrilla” o testigos de hechos de violencia. • El desalojo forzado de viviendas en varios barrios por no pagar vacuna de “seguridad” a los paramilitares, el funcionamiento de un “cepo” urbano (para “castigar” a quienes se salían de los códigos de conducta impuestos), los ajustes de cuentas y el reclutamiento de menores, siguen su curso. También se dan casos reportados de ejecuciones extrajudiciales por la fuerza pública (2004 y 2006).

<ul style="list-style-type: none"> • Fue sólo a mediados de los años 1990 y bajo los auspicios de la Consejería Presidencial para Medellín que se desarrolló un programa pionero de intervención en la infraestructura barrial, especialmente en mejoramiento de vías y viviendas (PRIMED). <p>Actores armados</p> <ul style="list-style-type: none"> • Milicias y guerrillas tuvieron control hegemónico del territorio durante 10 años (finales de los años 1980 y finales de la década de 1990). Fue un período de desplazamiento expulsor individual y de familias enteras. El Estado ni siquiera tenía una estación de Policía en el lugar (sólo la puso en 2002/3). • 2001-2003: “urbanización de la guerra”: ofensiva bloques paramilitares, y desarrollo de operaciones militares. • 2002: 11 operativos militares de FF. AA. y paramilitares en guerra abierta contra la insurgencia, causan desplazamiento forzado masivo e intraurbano, sobre pobladores de más de dos y tres décadas de arraigo urbano y sobre pobladores que se constituían en población “re-desplazada” por haber sido víctimas de otros desplazamientos previos en otros territorios. 	<ul style="list-style-type: none"> • En la Comuna 13 y en el barrio El Salado como epicentro, de 2008 en adelante se escala la violencia con asesinatos y extorsiones, los desplazamientos masivos intraurbanos por disputas en el reacomodo de las bandas criminales que siguen dominando la ciudad y por el control de expendio de drogas o plazas y del control territorial. • “Es doloroso que la intervención del Estado termine en un cambio de dueño en estos barrios” (página 16). Es la percepción de la población para las épocas que siguieron a la Operación Orión. <p>b) La intervención institucional</p> <ul style="list-style-type: none"> • En particular a partir de la alcaldía de Sergio Fajardo (2004-2007) y con más énfasis en la de Alonso Salazar (2008-2011), en la Comuna 13 de Medellín se ha hecho una inversión social sin precedentes como parte de la propuesta de “urbanismo social” implementada. Obras que logran transformación física, posibilidades de conexión a la ciudad y mejoras en la calidad de vida de la población (metro cable, parque biblioteca y escaleras eléctricas, entre otros). • El Gobierno nacional ha enfocado en el tema de seguridad con la construcción del Centro Integrado de Intervención Social y una inversión, también sin precedentes, en infraestructura: construcción de un Centro de Atención Inmediata (CAI) periférico, estaciones de Policía, un fuerte de carabineros y dotación en movilidad. • A pesar de esto, el panorama de violencias y el desplazamiento forzado no cesa (página 58).
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • El tejido social se reconstituye en medio de ese contexto tenso entre los factores de violencia que perviven en el territorio y dominan varias esferas de la vida social y los factores de reconstitución física del hábitat, de la presencia institucional y de la recomposición de las organizaciones sociales, que resisten a las violencias y que entran en interlocución con las instituciones públicas y desarrollan programas de beneficio comunitario.
TIBÚ		
<p>Población indígena ancestral (Motilón-Barí) que fue casi exterminada violentamente en apenas 50 años de explotación petrolera (disminución demográfica del 70 por ciento) y su territorio ancestral reducido en 2.000 km². Colonos campesinos llegados a partir del <i>boom</i> petrolero (década de 1950). Se establecieron cultivos de pancoger y ganadería; se comerciaba además con los madeables y el tártago; hay una franja importante de población flotante llegada a partir de 1985 tras de la economía de la coca.</p> <p>Con el tiempo se desarrollaron cultivos de arroz, ajonjolí, cacao, plátano, yuca, maíz, sorgo, café, fríjol, mandarina y aguacate y de los animales de corral.</p> <p>Explotación petrolera con impacto sobre el poblamiento y la estructuración de conflictos (desde fines los años 1950). Y punto de paso del oleoducto Caño Limón-Coveñas. En los años 1980 el INCORA parcela fincas abandonadas por sus dueños, extorsionados y secuestrados por las guerrillas. Y llegaron los canales de riego, los créditos de la Caja Agraria y capacitaciones del SENA. “Sin embargo, fueron comunes situaciones en las que los beneficiarios de las parcelas</p>	<p>1998- 2004</p> <p>Irrupción AUC retaguardia militar y económica de FARC y fortalecimiento economía AUC (control coca y rutas narcotráfico y expansión monocultivo palma de aceite).</p>	<p>2005 – 2013</p> <p>Arrasamiento con vaciamiento y despojo de tierras – “Éxodo rentista”, descampesinización</p> <p>a) Actores posdesmovilización mantienen orden de violencia</p> <ul style="list-style-type: none"> • A partir de la desmovilización del Bloque Catatumbo, llegan nuevos grupos armados como Los Rastrojos, Los Urabeños, Los Paisas, Los Mellizos —grupo conformado por excomandantes del Bloque vencedores de Arauca—, las Autodefensas Gaitanistas, Los Machos, y a partir de 2012 las Autodefensas Unidas de Norte de Santander Nueva Generación, conformadas por miembros de Los Urabeños. • En Tibú la percepción generalizada es que, sin importar cómo se llamen, al igual que entre 1999 y 2004, en el control de los cultivos, procesamiento y tráfico por la ruta de salida Tibú-Puerto Santander-Cúcuta-Venezuela, “los que mandan son los de Puerto Santander” (página 190). • En 2013, Tibú es “el tercer municipio con mayor superficie sembrada de coca en Colombia” (página 191).

<p>no cancelaron los créditos por incitación de las guerrillas o por la ausencia o insuficiente asistencia técnica y de sistemas de riego y de comercialización, las que fueron aprovechadas por terceros que adquirieron y concentraron parcelas, especialmente en Campo Dos y La Llana” (página 39). La mitad de las tierras del Tibú iniciaron su tradición (desde principios del siglo XX) como baldíos que fueron paulatinamente sujetos a titulación. No obstante dicha titulación decreció, lo cual se convirtió en una de las grandes reivindicaciones campesinas.</p> <p>Guerrillas-Paramilitares, coca y narcotráfico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Más de 15 mil hectáreas de coca bajo control FARC y sus aliados (1999 en Norte de Santander). • Las AUC —a partir de 1999— extendieron y dominaron los cultivos en la parte baja y las FARC en la zona montañosa y selvática. • Las AUC dominaron todo el proceso desde las plantaciones hasta la producción de la base de coca e instalaron laboratorios a los dos lados de la frontera con Venezuela. • Las fumigaciones del Plan Colombia (a partir 2001) “sobre cerca de 48.586 hectáreas de coca entre 2000 y 2004 y el acrecentamiento de la militarización de la Consolidación Territorial” no afectaron en nada la economía de la coca de las AUC (del Catatumbo derivaban el 70 por ciento de sus ingresos), porque “mientras que los sembrados en las zonas controladas por esa guerrilla [FARC] —aún dentro del PNC Catatumbo y los dos resguardos indígenas— fueron objeto de masivas aspersiones adelantadas entre los años 2000 y 2003 en el marco de las Operaciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Desplazamientos sigue habiendo por cuenta de acciones de narcotraficantes y guerrillas para impedir la erradicación de los cultivos de coca. • En el casco urbano de Tibú, milicianos de las guerrillas y miembros de las llamadas bacrim, son mencionados como “los que administran negocios de mototaxismo, expendios de drogas y venta de gasolina, cobran vacunas y cometen hurtos de almacenes y de motos” (página 80). <p>b) Se desestructuró la vida campesina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tibú: desplazamiento individual y masivo de 34.263 personas en el período 1997-2004, en el que se cometieron 30 masacres con un saldo fatal de 280 víctimas. Mientras en Catatumbo fueron desplazadas 76.954 personas y se cometieron 66 masacres con un saldo letal de 467 personas. El éxodo sistemático y masivo en ese período [1997-2004] causó el abandono de 53.259 hectáreas que representan el 19 por ciento de la superficie del municipio, lo que ubica a Tibú en el doceavo lugar entre los cien municipios con mayor afectación por abandono forzado de predios en el año 2010 (Acción Social – PPTP, 2010, páginas 148 y 150). • A pesar de que: “53.259 hectáreas —relacionadas con 1.924 predios y 1.819 personas— fueron amparadas con medidas de protección”, se produjo un proceso de despojo de tierra a través de compra-ventas masivas de tierras desencadenadas a partir de 2004 en la segunda fase de expansión de los cultivos de palma y que quedaron en manos de “cooperativas de paramilitares y trabajadores de la palma, provenientes de
--	--

<p>Motilón y Diamante (Defensoría, 2006-a), no sucedió lo mismo en las zonas de dominio paramilitar, en las que como efecto de las gestiones con “altos mandos [militares en Bogotá] adelantadas por José Bernardo Lozada Artuz, alias Mauro, se logró que “[N]os echa[r]an agua en vez de glifosato” (páginas 180-181).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toma parapolítica del Estado local y departamental. Instancias varias: Fiscalía, DAS, cargos de representación política, funcionarios públicos. El Incora/Incoder, departamental y local. • Disputa: 9 masacres guerrillas (2000-2004) y 14 masacres AUC (1999-2003). 		<p>la Costa Atlántica; personas supuestamente vinculadas al narcotráfico e integrantes de las llamadas bandas criminales” (Unidad de Restitución) (página 170). El <i>modus operandi</i> para lograrlo se dio mediante: “firmas bajo amenaza armada, búsqueda de víctimas en lugares de recepción de desplazamiento y ofrecimientos por debajo del precio, el “ocultamiento” de escrituras o actos administrativos con los que se legalizaba el despojo para inscribirlos meses o años más tarde” (página 172), en lo cual “intervinieron funcionarios públicos de los comités municipales para la atención integral a la población desplazada; notarías, registradurías e Incoder” (página 173).</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Gini de tierras pasó de 0,52 en 2002 a 0,67 en 2011, a su vez que el Gini de propietarios de 0,581 en 2009, pasó 0,731 en 2010 y 0,790 en 2011. • Se aniquilaron cooperativas y asociaciones gestadas por las Juntas de Acción Comunal con apoyo de instancias internacionales (Asociación de Juntas de La Gabarra, Corporación de Productores de Yuca, Cooperativa de San Martín y Cooperativa Motilón Barí —compuesto por indígenas y campesinos—). • “De la heterogeneidad de los bosques y de parcelas destinadas a la agricultura campesina y a la ganadería en los años 1980, se pasó a la homogenización del monocultivo de coca impuesto por las FARC, y a partir de la desmovilización paramilitar por la palma, la que hace de cerca viva de los balancines que extraen el petróleo, y de los desarrollos mineros” (página 176).
---	--	---

	<p>c) Se mantiene el riesgo sobre la pervivencia de la comunidad Barí</p> <ul style="list-style-type: none"> • A partir 2003 se reactivó la actividad petrolera y de gas en el Catatumbo, y más adelante, las concesiones mineras para el complejo carbonífero que profundizan la desestructuración de la vida campesina y la vulneración ambiental en general. En especial son los territorios ancestrales Barí los más amenazados que ponen en riesgo “la pervivencia de la etnia Barí”. <p>d) La acción del Estado no neutraliza el estado de cosas</p> <ul style="list-style-type: none"> • “La percepción generalizada es que la inversión social [del componente social de la Política de Consolidación Territorial] avanza muy lentamente, se hace sin consultar a las autoridades municipales y a las comunidades, y se favorece a algunos sectores con lo que se perciben prácticas de clientelismo y corrupción” (página 76). • “Las reiteradas certificaciones del extinto Ministerio del Interior y de Justicia sobre la no presencia de indígenas en Tibú, además de vulnerar su derecho colectivo al territorio ancestral, propició divisiones entre los indígenas Barí y conflictos interculturales” (página 141). • La militarización de la zona y el Plan Nacional de Consolidación Territorial no ha evitado el aumento de los cultivos de coca: “de las 488 hectáreas en el año 2006, se pasó a 6.345 hectáreas en 2013, de las cuales 1.904 se localizan en Tibú, el tercer municipio con mayor superficie sembrada de coca en Colombia”.
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Se han restituido sólo 118 hectáreas, de “las más de 53 mil hectáreas identificadas en abandono o en riesgo de serlo por el Comité de Atención a la Población Desplazada de Norte de Santander”, y al fenómeno de compraventas masivas (página 228). • Han aumentado las judicializaciones y capturas masivas contra cultivadores y procesadores de pasta básica y líderes de las comunidades, agudizando desconfianzas sobre las acciones estatales. <p>e) Las condiciones de vida en crisis</p> <ul style="list-style-type: none"> • “La crisis alimentaria y de ingresos ocasionada por la erradicación forzada fue uno de los primeros puntos aceptados por el Gobierno nacional al término del Paro del Catatumbo de 2013” (página 77). • Para los 30.059 habitantes de Tibú, en particular el 61 por ciento que habita en las zonas rurales: el 93 por ciento vive en condiciones de pobreza y el 67 por ciento tiene sus necesidades insatisfechas (año 2005).
--	--	---

Fuente: elaboración propia con base en informes publicados por el Grupo de Memoria Histórica (GMH) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

ANEXO 4

TRAYECTORIAS DE LAS RESISTENCIAS (POR CASO)

BOJAYÁ			
Fecha	Actor	Tipo de acción	Evento
1960-1994			Gran parte del Chocó era Reserva Forestal, y por lo tanto se consideraba propiedad del Estado. Frente a dicha situación, las organizaciones desarrollaron acciones de formación, movilización y denuncia frente a las entidades del Gobierno presentes en la zona, como Codechocó, e iniciaron una lucha para acceder a la titulación colectiva de los territorios.
Años 1970			Se formaron los primeros resguardos indígenas del Pacífico (página 275).
1979	OREWA		Se constituyó la Organización Regional Emberá-Wounaan, en defensa del territorio, la autonomía y la autodeterminación de sus comunidades, con el respaldo de la Diócesis de Quibdó. Desde esta fecha hasta 2005 existió como única organización indígena de Chocó: su modelo de organización se convierte en referente importante en el ámbito del movimiento social indígena nacional.
1982	ACIA	Concientización y formación campesina	Como parte del proceso de concientización y formación emprendido por la Diócesis de Quibdó a lo largo del río Atrato.
1982-1986	ACIA	Protección forestal	Entre 1982 y 1986, se dio un proceso de discusión y diálogo con el Gobierno y acuerdo 20 de Buchadó con Codechocó: un primer reconocimiento de los derechos de las comunidades negras sobre los bosques, en lo que se denominó Áreas de Manejo Especial; el Gobierno les reconoce a las comunidades del medio Atrato 800.000 hectáreas para manejo especial (página 275).
1984-1985	ACIA	Presión al Estado y compañías madereras	Primer y Segundo Encuentro Campesino, los minicongresos sub-zonales y la participación en el II Foro Campesino de Pueblos del Norte, eventos donde se presentaron las necesidades de las poblaciones y divulgaron los trámites de concesión de territorio que el Estado estaba desarrollando para favorecer las madereras Triplex Pizano, Cartón de Colombia y Maderas del Darién.
1988	ACIA	Protesta (forestal)	Protesta por los permisos de explotación forestal que solicitaba la compañía Maderas del Darién.
1990 - 1991			Constituyente y Constitución de 1991: los indígenas representaron a las comunidades negras y propugnaron por el reconocimiento de su territorio colectivo

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

1993 - 1995	La disputa por el territorio pasó de su estatus como baldío o reserva forestal, a ser reconocido legalmente como propio de las comunidades negras e indígenas (página 276)		
1995	COCOM ACIA	Cambio: derechos colectivos territorio	Ley 70 de 1993, Decreto 745 de 1995: la ACIA pasó a llamarse Cocomacia y ha promovido el conocimiento de los derechos sobre el territorio y los intereses gestados sobre él. <ul style="list-style-type: none"> • Inició un proceso hacia su consolidación como consejo comunitario.
	OREWA COCOM y ACIA	Nuevas estrategias colectivas	Por los derechos al territorio
1996	OREWA		La elaboración en el año 1996 de su plan de vida titulado “Lo que pensamos y queremos hacer en nuestro territorio”, fue un ejercicio importante de resistencia y consolidación organizativa (...) renovar y ratificar su identidad colectiva en el marco de las relaciones con el Estado y la sociedad en su conjunto. <ul style="list-style-type: none"> • Relación cultura-territorio, la conservación de los ecosistemas y biodiversidad, el fortalecimiento y mejoramiento del sistema tradicional de producción, el reconocimiento, protección y recuperación del conocimiento tradicional, y la defensa por el territorio.
Emergencia nuevas reivindicaciones y resistencias por conflicto armado			

1996/7 en adelante	Organizaciones	Las urgencias	Con el apoyo de Diócesis de Quibdó se concentraron en el acompañamiento y ayuda dada la situación de emergencia provocada por los desplazamientos, amenazas, desabastecimiento alimentario y confinamiento de las comunidades. Postergar sus procesos de construcción de planes desarrollo alternativo y otros planteados a largo plazo.
	Organizaciones y diócesis	Tiendas y bodegas alimentarias - denuncias - acompañamiento	Garantizar la seguridad alimentaria, denunciar las amenazas y acompañar algunos retornos, e impidieron algunos desplazamientos y ayudaron a que otros no fuera más masivos y definitivos (página 278).
	Bajo Atrato	Denuncias	Las cuencas de los ríos [Curvaradó y Jiguanandó] organizaciones de comunidades negras e indígenas con el respaldo de comisiones de verificación conformadas por la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre otras, han denunciado estos modelos de explotación y ocupación territorial (específicamente los de la palma aceitera asociados a paras y testaferros).
1997 en adelante		Comunidad de paz - zonas humanitarias	A su regreso estas se organizaron en experiencias de resistencia civil conocidas como las Comunidades de Paz y las Zonas Humanitarias, a través de las cuales declararon su neutralidad con respecto a todos los actores del conflicto, incluyendo a la fuerza pública (página 172).
1999	Pobladores y autoridades locales de Bojayá	Declaración	Pobladores y autoridades civiles de Bojayá, tras años de confrontación de guerrillas y paramilitares en el medio Atrato, elaboraron en 1999 una Declaración por la vida y por la paz. Fue un memorable manifiesto de autonomía cívica frente a las presiones de los actores armados. Allí se planteaba la exigencia de respeto al derecho supremo a la vida, a la libre movilización, a no ser ni informantes, ni colaboradores, ni financiadores. Se ratificaban igualmente los compromisos de rechazar todo tipo de ofrecimiento o exigencia que pretendiera involucrar a sus habitantes en la guerra. Era la voz de una comunidad local que invocaba y afirmaba su derecho a vivir en paz en su territorio ancestral (página 13).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

	Diócesis y organizaciones	Denuncia	Denunciaron una abierta connivencia entre los grupos paramilitares y la fuerza pública, la cual se hizo evidente por la realización de retenes sobre los ríos, patrullajes en zonas rurales y cabeceras municipales, la restricción a la circulación de alimentos y medicamentos, y el desarrollo de operaciones conjuntas (“Comunicado a la opinión pública”) (página 42).
2003 (nov)	Organizaciones y diócesis	Peregrinación fluvial	Para romper el bloqueo del río (1997-2003) por grupos armados. En defensa de la vida y la paz, adelantada desde Quibdó hasta Turbo del 16 al 21 de noviembre de 2003, que se denominó “Por un buen trato en el río Atrato. <i>Atratiando</i> ” (página 279).
Retomar reivindicaciones étnicas y territoriales (renovadas) y continuar con agendas de paz			
2003 en adelante	COCOMACIA	Plan de etnodesarrollo (titulación colectiva; economía solidaria, medicina tradicional)	Las comunidades negras retomaron el trabajo de Formación y fortalecimiento organizativo y se dedicaron a la formulación de su plan de etnodesarrollo; y para ello realizaron consultas con las 120 comunidades que conforman Comomacia, sobre las facilidades y dificultades de cada una (página 280). Centrado en la titulación colectiva del territorio, en la promoción de experiencias de economía solidaria, el rescate de la medicina tradicional y la alfabetización de adultos (...) lucha por la propiedad del territorio (...) cohesión social y el pronunciamiento político frente al conflicto armado y el abandono del Estado (páginas 280-281).
2005	Organizaciones y diócesis	Minga interétnica	La minga inter-étnica que entre el 28 de abril y el 2 de mayo de 2005 reunió a afro-descendientes e indígenas por la defensa del territorio.
2005	Cabildos Indígenas	Asociarse como Cabildos Indígenas	Un sector mayoritario decide transformarse en “Asociación de Cabildos Indígenas Embera, Tule, Katío, Wounan y Chamí del Choco-ASOREWA”.
2005 - 2010	Organizaciones y Diócesis - Chocó y Apartadó	Espacio articulador interétnico	Se conformó el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), como un espacio articulador indígenas-negros-mestizos. En 2010, dinamizan la Agenda Regional de Paz, cuyo objetivo es la concertación de un Plan de Desarrollo para la región entre comunidades negras, indígenas y mestizas y las instituciones del Estado, actividades de formación, denuncia pública y divulgación, con base en un Observatorio Social sobre el Etnodesarrollo, y un boletín virtual mensual llamado Chocó Étnico (página 281).

BUENAVENTURA			
Fecha	Actor	Tipo de acción	Evento
1930 - 1991	Organizaciones sociales antecedentes		
1930 - 1970	Sindicatos	Reivindicaciones calidad de vida población	Consolidación de los sindicatos.
1970	Primera organización de pescadores	Pescadores	En Buenaventura. En el marco procesos alfabetización monseñor Valencia.
Años 1980	Sobre el legado de monseñor Valencia Cano	Lo étnico - territorial	Construcción de un pensamiento político-territorial desde y con las personas afrocolombianas, en el marco de la teología de la liberación.
1987	ACIA	Campesina	Formación y reivindicaciones contra compañías madereras.
1991	ANPAC Org regional	Pescadores	Corporación para el Desarrollo de la Pesca Artesanal del Litoral Pacífico Colombiano (ANPAC).
Años 1990	A partir de la Constitución de 1991, artículo transitorio 55 y Ley 70 de 1993 proliferan organizaciones desde la perspectiva étnico-territorial que combinan prácticas culturales, procesos de resistencia, demanda de derechos y la búsqueda del reconocimiento como grupo étnico frente al Estado colombiano.		
		Derechos Ley 70 en lo urbano	Muchas de carácter urbano con el propósito central de acceder a los espacios logrados a través de la ley.
1991	PCN	Comunidades Negras	Tránsito del movimiento social de la Coordinadora Nacional de Comunidades Negras (CNCN) al Proceso de Comunidades Negras (PCN). Se tornó en el estructurador de la red de organizaciones, precedentes y emergentes. Ejes: etnicidad y territorio y planificación en territorio, etnicidad y biodiversidad.
1991	CEPAC	Eclesiales afros	Creación de organizaciones eclesiales como la Pastoral Afro (CEPAC).
1997	Asociación de Cabildos del Pacífico	Indígenas	Surgimiento de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca – Regional Pacífico.
1999	AFRODES	Desplazados	Surge la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES).

Años 1990	<p>Pensar el Pacífico como territorio-región</p> <p>El territorio pensado como “el espacio de apropiación eficaz de los ecosistemas por una comunidad dada”, mientras la noción del Pacífico como “territorio-región de grupos étnicos” se consideró una construcción política para la defensa de territorios (página 375). Si el territorio encarna el proyecto de vida de la comunidad, el territorio-región articula el proyecto de vida de la comunidad con el proyecto político del movimiento social (Arturo Escobar, 2010; página 71).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se conformaron organizaciones a partir de una estructuración territorial que remite a códigos culturales en torno al espacio acuático. • La apropiación del territorio se dio por iniciativa local, debido a que esta era una región olvidada. • La noción de pertenencia involucraba una triada parentesco-residencia-trabajo. 		
	<p>Hasta mediados de la década de los años 1990 primó en el Pacífico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un proceso de formación política con las comunidades sobre el significado de la nueva Constitución de 1991, así como de reflexión sobre los conceptos fundamentales de territorio, desarrollo, prácticas tradicionales de producción, uso de recursos naturales y, de reforzamiento de la capacidad organizativa (página 377). • Se profundizó la contradicción por establecer el Pacífico como zona estratégica para la apertura económica en contraposición al modelo de desarrollo y la visión de futuro de los grupos étnicos que habitaban este territorio (página 377). 		
1996 - 2005	<p>Las organizaciones pasaron de construir un proyecto para vivir la vida a enfocarse en su defensa (página 376). “Nosotros siempre decimos que hay dos tipos de organizaciones: las de vivir la vida y las de defender la vida”.</p>		
1999 - 2005	<p>Emergencia de nuevas organizaciones enfocadas en el trabajo de denuncia e incidencia política para hacer frente a la guerra (...) consolidaron nuevos repertorios de acción en lo local para el fortalecimiento y sostenimiento del tejido organizativo, la defensa de la vida y de los derechos de las víctimas (página 378).</p> <p>Los procesos de participación, gestión política e institucional y la organización de consejos comunitarios en la región configuraron nuevos poderes regionales arraigados en los diferentes procesos organizativos que servían para liderar las titulaciones para sus respectivas comunidades.</p> <p>1996-1998: proceso de titulación colectiva.</p> <p>2000-2004: 18 masacres - desplazamiento de los territorios: giro a las discusiones sobre los derechos territoriales de los afrocolombianos, priorizando la necesidad de exigirle al Estado ahora la protección (página 107).</p> <p>El movimiento étnico no logra posicionarse ni ocupar el poder político en los niveles local, regional y nacional (página 109).</p> <p>Los procesos de autonomía y de control territorial (en lo rural y en lo urbano) por parte de organizaciones sociales y la comunidad se vieron afectados por las dinámicas económicas y los diversos intereses en la región, la cooptación de líderes sociales, la disputa por el territorio y los repertorios de violencia utilizados por los diferentes grupos armados (página 382).</p>		
2000- 2005		Rural	Por la disputa armada.

2002 - 2003		Urbano - crisis	Por la afluencia de desplazados rurales a la ciudad, se desbordó la capacidad institucional-organizativa y de redes familiares.
	Organizaciones	Rural y urbano	“Le apuestan a la presencia en organismos internacionales y en foros mundiales para denunciar la guerra, solicitar el apoyo de la comunidad internacional, de las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y de la Iglesia para que tengan presencia en los territorios colectivos” (páginas 380-381). A pesar del énfasis en la defensa de la vida, se mantuvieron en la agenda política los ejes de etnicidad y territorio como elementos transversales a las nuevas luchas (página 381).
	PCN	Urbana	El PCN en la zona urbana de Buenaventura comenzó a incorporar el discurso del territorio como espacio vital, visualizándolo y ubicándolo como una extensión, de carácter simbólico, del espacio rural.
2005 - 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Emergencia en el contexto local de nuevas organizaciones sociales de jóvenes y de mujeres. • Construcción de lenguajes alternativos de resistencia desde el arte y la cultura (se incorpora el arte urbano como el rap, el hip hop, el grafiti y la fotografía). • Los temas: la defensa de los derechos de las víctimas, la recuperación de la memoria para la dignificación de las personas asesinadas o desaparecidas y la apropiación del discurso de defensa del territorio desde una dimensión urbana y la recuperación y re-significación de prácticas tradicionales y ancestrales. • Fortalecimiento de procesos organizativos y de formación de liderazgos para re-territorializar la vida: rehabilitar el tiempo y el espacio afectados por el terror, resistir al despojo y al abandono forzado de sus territorios y recuperar su concepción del “Buen Vivir”, principalmente con los renacientes (página 386). 		
2007	Comité interorganizacional	Confluencia de organizaciones	Consolidar un espacio de confluencia de las organizaciones sociales conformado por el PCN, Rostros y Huellas, Transformando Mentes, el Servicio Jesuita a Refugiados y Fundescodes.
2009	Comité de defensa del agua y de la vida	Confluencia org. Y derecho al agua	Otro espacio de confluencia de organizaciones.
2010		Presión a Corte Constitucional contra megaproyectos	La emisión de un Auto especial para Buenaventura a raíz del estado de cosas inconstitucional que se venían presentando por los procesos de despojo en la zona urbana que afectaba directamente a los territorios ganados al mar (página 387).

2013 (oct)		Presión Corte C. Defensa consulta previa en territorios urbanos	Nuevo Auto: el Auto 005 se convierte en una segunda Ley 70 con la fortaleza de que recoge territorios urbanos y este que está específicamente para Buenaventura y el último Auto que es el 234 de 2013: la defensa de los territorios urbanos, puesto que plantea los riesgos que acarrea el desarrollo de los megaproyectos para las comunidades asentadas en sus zonas de influencia y reafirma la necesidad de dar cumplimiento al derecho a la consulta previa que tienen las comunidades étnicas que viven en esta región del Pacífico (página 388).
2003 - 2005 "los más pesados"	Población	Reterritorialización: rehabilitación de los lugares, resignificación de los espacios frente geografía del terror y despojo por megaproyectos	<p>Frente actores armados</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desobedecer las restricciones impuestas por los actores armados frente al control del tiempo y a la movilidad de las personas de un sector a otro: se realizaron caminatas colectivas, reuniones en lugares públicos como parques, canchas de fútbol, esquinas de los barrios, kioscos, se cruzan colectivamente fronteras invisibles y los líderes y lideresas asistieron a reuniones pese a las amenazas (página 392). • Ocupar colectivamente los espacios controlados militarmente y re-significar los lugares relacionados con la muerte y la barbarie (página 390) y restablecer las redes de solidaridad y parentesco. • Construcción de límites simbólicos para que los miembros de grupos armados no puedan ingresar a las casas, ni establecer relaciones con las niñas o las mujeres (página 293). "Buenos días, ¿me regala un vaso de agua? ¡No hay!, cómprese el agua". • La realización de conciertos, la documentación de los casos y la preparación de la denuncia, utilizando como último recurso la confrontación directa (página 395). • Mantenerse en el territorio: organizaciones, líderes y la comunidad migran transitoriamente dentro de la misma ciudad (casas de familiares, amigos o vecinos), gracias a las redes de parentesco y de solidaridad que aún se mantienen (página 397). <p>Frente al despojo y avance de los megaproyectos</p> <ul style="list-style-type: none"> • No vender los predios, no desalojar, defender los espacios públicos y realizar migraciones colectivas y transitorias dentro de la misma ciudad, reafirmando lazos de solidaridad y fortaleciendo las redes de parentesco sin desocupar el territorio, para tener la posibilidad de retornar una vez se percibe la amenaza cesa (página 390).

			<ul style="list-style-type: none"> • Denunciar el impacto de los proyectos de expansión portuaria impulsados por el gobierno nacional (Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBUEN) y por la construcción de la Vía Interna-Alternativa) (...) Hoy ya no tenemos derecho al mar la territorialidad “ancestral” frente a “los títulos de propiedad” unos documentos que se construyen en cualquier tiempo, en cualquier lugar y no darle validez a la evidencia que está ahí en donde está el cultivo, la vivienda, el trabajo (página 396). • Documentar casos, ocupación de espacios y confrontación directa a actores armados o funcionarios de la administración local: proceso de exigencia jurídica para la titulación de sus predios (página 396). • En los territorios de baja mar, re-significación de su territorio, en el que denominan el lugar que habitan como territorios ganados al mar. Carga simbólica y política, que evidencia la lucha histórica de estas comunidades quienes fueron víctimas del desplazamiento en los años 1990, por construir un nuevo territorio donde pudieran asentarse y mantener sus redes familiares y de parentesco. (...) “Nosotros empezamos la lucha a tiro de basura, de piedra y de cemento. Y ubicamos estos territorios que antes eran agua, ahora son tierra; son de nosotros (...) Porque nosotros lo hicimos, son nuestros” (páginas 396-397).
2005 en adelante	Líderes, iglesia y defensores de derechos humanos	Jóvenes	Fortalecimiento de las organizaciones juveniles y construcción de estrategias desde el arte y la cultura orientadas a la defensa de los territorios urbanos.
2009	Transformando Mentes	Jóvenes	Surge organización
2010	Foro Festival Marcando Territorios	Jóvenes	<ul style="list-style-type: none"> • Declaración pública, con discurso sobre la defensa de los territorios urbanos y el reconocimiento público de que la población juvenil ha sido una de las principales víctimas de los grupos armados. • Temas como: prevenir el reclutamiento y la vinculación de niños, niñas y jóvenes a los grupos armados. • La permanencia en el territorio. • La denuncia frente a los procesos de despojo y desalojo de los habitantes donde se desarrollan megaproyectos portuarios y turísticos.

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

2011	Marcando Territorios	Jóvenes	Fortaleció las iniciativas artísticas juveniles y el auge de la música urbana con contenido social.
2011	Plataforma de Acción Joven	Jóvenes	Dar continuidad al trabajo de denuncia frente a la vulneración de los derechos de la población infantil y juvenil.
2007	Colectivo Madres por la Vida y Grupo de Mujeres de Triana	Mujeres e iglesia acompañamiento emocional	Trabajo de acompañamiento emocional que le permita a las víctimas recobrar el control sobre sus vidas, facilitar los procesos de duelo, vencer el miedo y la desesperanza y recuperar la autoría sobre su propia vida.
2010	Red de Solidaridad Contra las Violencias hacia las Mujeres: Mariposas de Alas Nuevas Construyendo futuro	Mujeres acompañamiento emocional	Nuevo actor-red, convocado y liderado por mujeres, es la primera organización colombiana en recibir el premio Nansen para los Refugiados de ACNUR en 2014, por su labor de acompañamiento a miles de mujeres que han sido víctimas de diversas formas de violencia en Buenaventura.
s. f.	Líderes	Protección	Construyendo medidas de autoprotección y disminución del riesgo.
	Capilla de la Memoria	Mujeres Memoria	Surge en la Parroquia San Pedro y de FUNDESCODES en conjunto con un grupo de mujeres (página 410). Se dedican a contar relatos, hablar sobre las experiencias traumáticas, realizar celebraciones religiosas y actos simbólicos, apoyar las denuncias y visibilizar a través de la galería fotográfica el dolor de las víctimas y sus luchas en contra de las políticas de olvido, silencio e impunidad.
2013	Conmemoración del 9 de abril (con CNMH y otros)	Afros e indígenas	Desobediencia civil frente al terror : (visibilizar, denunciar, marcar territorio) reclamar la autoridad sobre sus sonidos, sus voces y sus memorias. La marimba, el guasá y los conunos solicitaron el movimiento a los cuerpos afrodescendientes e indígenas que estaban quedando paralizados como efecto del terror que se estaba enquistando en el territorio.
2014	Marcha del 19 de febrero	Pobladores	Convocó a más de 25.000 personas a protestar pacíficamente contra el terror, bajo la consigna "Enterrar la violencia en Buenaventura: para vivir con dignidad" (páginas 419-420) convocada por la Diócesis de Buenaventura.

2014 (13 de abril)	Zona humanitaria del Puente Nayero en el Barrio La Playita	290 familias/ 1.000 personas	Se crea la primera Zona Humanitaria en Buenaventura, con el respaldo de organizaciones defensoras de derechos humanos, iglesia y organizaciones internacionales como: “Consolidación de la Paz Comunidades en los Territorios (Compaz), la Comisión de Justicia y Paz, el Perpetuo Socorro Parroquia y la Diócesis de Buenaventura, Witness For Peace, Peace Brigades International, WOLA, Asokatio, un Mundubat, Christian Aid, Lepala, Hernani, Poder Ciudadano, Red de Alternativas, entre otros”. 290 familias, aproximadamente 1.000 personas. Ante las amenazas, la Comisión de Justicia y Paz interpone una solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH dicta la medida cautelar N° 152-14, del 15 de septiembre de 2014, solicitando al Estado la adopción de las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los miembros de las 302 familias (páginas 421-422).
2015 (feb)	2da zona humanitaria en Buenaventura		Se comienza a impulsar la creación de la segunda zona humanitaria con el respaldo de las organizaciones sociales y el apoyo público del obispo de Buenaventura, monseñor Héctor Epalza Quintero.
2005 - 2015		Resistencias cotidianas	“El llamamiento”. • Acciones simbólicas de retaliación o venganza. • “Curar la muerte”. Restablecer comunicación con lo divino, ritos mortuorios para duelo y que almas descansen en paz.
		Resistencias cotidianas	El paisanaje, el vecinaje y la organización por colonias al interior de los barrios de Buenaventura se vienen contraponiendo a los repertorios de violencia. • Padrinos y madrinas. • Actos de valentía individuales. • El cuidado del otro, la construcción de una ética social para el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y el mantenimiento de relaciones de solidaridad y de apoyo mutuo. Reconstruir los vínculos sociales, familiares y comunitarios.

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

GRANADA			
Fecha	Actor	Tipo de Acción	Evento
1994	Iglesia Regional (Diócesis Sonsón - Rionegro)	Intermediación con actores armados	En 1994, cuando las guerrillas del ELN y las FARC tenían importantes estrategias de avanzada en la región, el entonces monseñor Flavio Calle Zapata convocó a un encuentro de dirigentes del oriente antioqueño a más de 200 personas entre empresarios, organizaciones y líderes de las comunidades con el objetivo de trabajar en las regiones en la humanización del conflicto y el acompañamiento a procesos sociales, con este fin se crearon varias comisiones, una de ellas la Comisión Vida, Justicia y Paz, que más tarde y por iniciativa de varias instituciones locales y la misma Iglesia, se convierte en una institución legalmente definida. A través de esta Comisión se viabilizaron acuerdos con los actores armados jugando un papel de facilitadora e intermediadora para lograr avances en la humanización del conflicto; se impulsaron programas de formación y capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario para la población (página 302).
1998	Iglesia-párroco	Intermediación con actores armados	Durante la “primera incursión paramilitar en el Corregimiento de Santa Ana (...) “el párroco sale afuera y encuentra que en el carro han subido muchas personas, él se arma de valor, se enfrenta a estos personajes y defiende a sus fieles, argumentando que no tenían por qué hacerles daño, fue así como no permitió que se llevaran a nadie. Ese día solo perecieron dos hombres” (página 290).
s.f [durante el conflicto]	Pobladores	Sobrevivencia	Los pobladores desarrollaron estrategias de huida y resguardo para responder [a los] ataques armados, mecanismos de emergencia con códigos y rutas de salida para salvaguardar la vida y protegerse colectivamente” (página 285).
s.f	Comerciantes	Resistencia frente a la guerra	Varios comerciantes se negaron a cerrar sus negocios (página 292).
s.f	Maestros	Sobrevivencia	Los maestros y maestras desplegaron un conjunto de acciones para proteger a sus estudiantes y evitar la huida: encerrarles en el salón de clase hasta que menguaban los hostigamientos, llevar uno por uno hasta sus casas después de la clase para protegerles, poner música y hacer actividades recreativas para centrar su atención en un registro distinto al de la guerra, borrar del carné estudiantil un apellido que se consideraba “peligroso” (página 293).

s.f	Personal Médico	Resistencia a la guerra	El personal médico y las entidades prestadoras de salud resistieron a marcharse y a dejar de prestar el servicio a la población. A pesar de que continuamente tuvieron que trabajar en medio de los retenes de los grupos armados, las presiones, amenazas e, incluso, el señalamiento y la fiscalización de las personas que atendían, ellos permanecieron en los territorios (página 294).
s.f	Varios- ayuda humanitaria	Papel humanitario	Quienes ya fuera en función de su oficio o de una decisión personal tomaron la labor de “recoger a los muertos”: el sacerdote, la religiosa, el inspector de Policía, el conductor de la ambulancia, el líder de la acción comunal (página 307). En las masacres de La Minita [2000], fue el inspector de Policía. (página 307).
1997	Asambleas Provinciales	Intermediación con actores armados	Las Asambleas Provinciales son una respuesta de los 23 municipios del oriente antioqueño [incluido Granada] a los hechos de violencia de los grupos armados. Se originan en el municipio de San Luis en contra de los atentados del ELN a la infraestructura eléctrica logrando acercamientos humanitarios y la reactivación del servicio (página 297).
1997 - 1998	Iglesia	Intermediación con actores armados	Procesos de mediación y negociación con grupos armados: la liberación de los veedores de la OEA, secuestrados por el ELN en 1997, o las liberaciones de los seis alcaldes del oriente, entre ellos el de Granada, en agosto de 1998; incluso, intermediaciones por la población en momentos en que se registraban desplazamientos masivos de las veredas por presiones de los grupos armados, posibilitando diálogo y acuerdos para que los pobladores pudieran regresar a sus veredas, como el caso de la vereda Galilea en el año 2002 (página 303).
1997	Comité Interinstitucional	Por el empoderamiento regional	Participó, con otros actores locales y regionales, de acciones en pro de una autonomía territorial y de soberanía popular en el marco de la Asamblea Provincial de Paz y las posteriores Asambleas Provinciales Constituyentes (página 297).
1998	Campesinos desplazados	Llamado a autoridades locales por soluciones	Durante el primer desplazamiento de campesinos del corregimiento de Santa Ana, albergados en el coliseo municipal de Granada: conformaron un comité y establecieron un diálogo con las autoridades locales para intentar poner fin a este desplazamiento (páginas 145-146). Como producto de la negociación, se conformó una comisión verificadora de los acuerdos conformada por la Defensoría del Pueblo, Departamento Administrativo de Prevención de Desastres (DAPARD), la Cruz Roja, el Procurador Provincial, entre otros (página 147).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

1998	Comité Interinstitucional	Llamado autoridades departamentales y opinión pública	Luego de que las AUC anunciaran su llegada al territorio, el comité rechazó los señalamientos realizados hacia la población civil e hizo un llamado a la opinión pública y a las autoridades departamentales para prevenir este peligro latente. Inicialmente el llamado fue atendido y respondido por la Gobernación de Antioquia quien tramitó la denuncia a la IV Brigada del Ejército, a la Policía de Antioquia y a la Dirección de Fiscalías, además se dotó al municipio de un protocolo del Sistema de Alertas Tempranas para el caso de violaciones a los derechos humanos prevenibles (página 297).
1999	Pobladores - Corregimiento Santa Ana	Llamado a autoridades locales por prevención	Después de la operación Lusitania del Ejército: la población [hizo] un llamado urgente a las autoridades locales, para que les dieran una pronta solución y así poder disminuir el miedo y la zozobra en que les estaba sumiendo el Ejército con sus acciones, lo que estaba forzando al desplazamiento de la población (página 148). La Administración ofreció acompañamiento e insistió en que la población evitara el desplazamiento por fuera del corregimiento de Santa Ana (página 149).
1999	Comité Interinstitucional	Acompañamiento a desplazados, información de daños y violaciones DD. HH. a autoridades	Después de la operación Lusitania se conformaron comisiones por funcionarios públicos y personas de la comunidad para acompañar a los habitantes del corregimiento con acompañamiento emocional, tomando declaraciones sobre la situación en el corregimiento y veredas aledañas, envío de mercados a la población afectada en conjunto con el DAPARD, comunicaciones con la fuerza pública para informar sobre los daños y perjuicios ocasionados por ellos en las parcelas, prestando servicios de salud, censo de las casas afectadas. En otros momentos, el Comité conformó brigadas para llevar alimentos a los pobladores de las veredas, buscó el acompañamiento de la Cruz Roja Colombiana e insistió en la necesidad de respaldar procesos de retorno (página 306).
2000	Comité Interinstitucional	Denuncias y movilización subsiguiente	Luego de la masacre llevada a cabo por las AUC, el Comité Interinstitucional expidió un comunicado de rechazo, y reitera el carácter neutral de la comunidad frente al conflicto armado (página 297). El 23 de noviembre promovió la Jornada por la Vida rechazando actores armados y reclamando el respeto a los derechos humanos (páginas 297-298). <ul style="list-style-type: none"> • Frente al ataque de las FARC, ocurrido un mes después se dirigieron a la opinión pública exigiendo el respeto por la neutralidad y los derechos de la población civil. Estos comunicados iban acompañados de una invitación a la movilización y a la solidaridad desde la misma población (página 298).

2000	Comité interinstitucional más colonia granadina Alianza para la Reconstrucción de Granada	Reconstrucción en medio de lo más álgido de la guerra	Luego de la toma armada por parte de las FARC, el 6 y 7 de diciembre de 2000, los granadinos se propusieron reconstruir su territorio. El Comité Interinstitucional fue la organización lideró el proceso de reconstrucción y coordinó recursos y organizaciones para recomponer en tres años, que a su vez, fueron tres de los años más álgidos del conflicto, las edificaciones destruidas por el ataque armado (página 311). El 8 de diciembre de 2000 se organizaron dos iniciativas paralelas para promovidas por la colonia granadina y por el Comité Interinstitucional, que para crear comisiones de atención a la emergencia, crean una nueva organización social que se apersonaría de la causa: la Alianza para la Reconstrucción de Granada (páginas 312-313).
2000	Pobladores	Entierro: Acción colectiva pública Vs confinamiento	Después de la masacre paramilitar en noviembre de 2000: El velorio y entierro colectivo: (...) No quedarse en la casa, salir a estar con los vivos y los muertos era, en estas circunstancias, un profundo acto no sólo de solidaridad sino de resistencia, contra el confinamiento que ocasiona el miedo (páginas 285-286).
2000	Colonias granadinas	Primer capital para la reconstrucción. 10 días después de la toma	Inicialmente la colonia granadina residente en Medellín acordó desplazarse al municipio para brindar apoyo y fuerza a los pobladores. Pero la respuesta más importante fue la "Granadatón", una colecta benéfica en pro de la reconstrucción física llevada a cabo en las ciudades donde había presencia de colonias granadinas. La Granadatón se realizó diez días después de la toma, el 16 de diciembre de ese mismo año en el coliseo Yesid Santos en Medellín, posteriormente las colonias en Barranquilla, Cali y Bogotá recolectarían fondos para sumarse a la iniciativa. El resultado evidencia el apoyo mostrado por los granadinos y el compromiso hacia su territorio: una suma total de \$ 457.000.000 aportados por individuos e instituciones, se convirtió en uno de los primeros capitales de la reconstrucción y una base importante para empezar con el proceso (página 312).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

2000	Campesinos vereda La Cascada	Mantenerse en territorio contra Condiciones FARC Instituciones locales y regionales luego apoyan con proyecto productivo	Las FARC conminaron a sus habitantes a ingresar a sus filas. De manera colectiva decidieron permanecer en el territorio exigiendo respeto por su neutralidad, de lo contrario, todos abandonarían su vereda. Las FARC (...) aceptaron la decisión de la comunidad (página 292). Este proceso de la vereda La Cascada fue reconocido por las instancias municipales y regionales, apoyando a sus pobladores en la implementación de un proyecto productivo comunitario. Es así como en el 2002 surge la Asociación de Paneleros el Tesoro Comunitario con la participación de 22 familias en la producción de panela. Esta asociación busca la sustentabilidad económica de las familias que participan en él y un alto nivel de producción panelera por medio de la utilización de nuevas herramientas de trabajo que vayan en beneficio de su labor (páginas 292-293).
2001 - 2002	Arquitectos	Reconstrucción	El proceso de construcción se dividió en dos fases, la primera de ellas fue coordinada por la Sociedad Colombiana de Arquitectos (Capítulo Oriente), quienes realizaron la propuesta arquitectónica para el diseño de la obra, donando el 40 por ciento de los honorarios a través del programa Arquisocial. Etapa que inicia el 14 de octubre de 2001 y termina el 17 de mayo de 2002 con la construcción de las Torres Gemelas, nombre que se le dio en analogía a los hechos ocurridos el 11 de septiembre en Estados Unidos, “Mientras las americanas caen, las de Granada se levantan”. La segunda etapa inicia el 7 de octubre de 2002 con diseños del arquitecto Germán Hernández con la construcción de 99 apartamentos y 50 locales comerciales (página 315).
2001	Autoridades locales	Frente al confinamiento	Las instituciones locales gestionaron apoyos con organismos no gubernamentales para llegar a las veredas y acompañar a las poblaciones que se encontraban confinadas (página 305).
2001	Comité Interinstitucional	Denuncia y acción por bloqueo gasolina	Dedicó gran parte de su trabajo a atender la emergencia de abastecimiento de alimentos e, incluso, el desabastecimiento de combustible en el municipio. Inicialmente entabló una denuncia a instancias internacionales por el bloqueo, y, apoyándose en la fuerza pública, aseguró la llegada de carro-tanques con gasolina y tomó mayores medidas en las vías para asegurar el desplazamiento del transporte y la entrada y salida de alimentos y otros productos (páginas 305-306).

2001	Pobladores y colonias y gobernador	Marcha simbólica: por la reconstrucción	La reconstrucción se oficializó con la “Marcha del adobe” el 14 de octubre de 2001, cuando los pobladores, las colonias y el entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, marcharon por La Variante, una de las calles principales del municipio, con un adobe en la mano simbolizando el granito de arena que cada poblador ponía para la reconstrucción (página 315).
2001	Alcalde	Reconstrucción y pago con la vida	El proyecto de reconstrucción fue coordinado inicialmente por el exalcalde del municipio Jorge Alberto Gómez Gómez, (...) el 13 de julio de 2001 fue asesinado en el parque principal [presuntamente por las FARC]. A partir de ese momento la reconstrucción pasó a ser liderada por el alcalde de ese entonces Iván Darío Castaño Gómez, bajo la coordinación de la Secretaría de Planeación Gloria Cecilia Montoya, quien coordinó la alianza y fijó las metas de reconstrucción física y sicosocial (páginas 314-315).
2001	Comité Interinstitucional	Comunicados	Expidió una gran cantidad de comunicados (...) dirigidos a la opinión pública: denuncias ante organismos de derechos humanos, llamados directos a los actores armados para persuadirlos de [no] llevar a cabo acciones que ponían en peligro la vida y la integridad de los habitantes de Granada, como los paros armados, las amenazas al comercio o a las instituciones: en rechazo a homicidios, en agradecimiento a la labor de pastoral social, en rechazo asesinatos, agradecimientos a instituciones comprometidas con Granada y aclaraciones sobre tergiversaciones de los medios de comunicación, denuncias ante organismos nacionales e internacionales de DD. HH. y DIH, rechazo a asesinatos (13 de julio), exigiendo la liberación del concejal Alcides de Jesús Herrera Amaya (página 299).
2002 - 2004	Comité interinstitucional e Iglesia	Retoma de espacios de sociabilidad	Cuando los paramilitares tenían el control del casco urbano, la calle y los espacios de encuentro fueron férreamente controlados y la gente conminada al encierro, En respuesta, las diversas entidades gubernamentales y el Comité Interinstitucional fomentaron los espacios de encuentro nocturno con las llamadas Lunadas (páginas 286-287).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

2002	Iglesia	Denuncias	La Iglesia jugó un papel fundamental en la denuncia pública y el apoyo humanitario de la población. En los diferentes medios de comunicación, denunciando los desplazamientos masivos, bloqueos, amenazas, el reclutamiento de menores. Con motivo de los bloqueos alimentarios a los campesinos de Santa Ana y otras veredas de Granada y del oriente antioqueño en el año 2002, el obispo de la Diócesis Sonsón-Rionegro denunció el bloqueo de alimentos (página 302).
2002	Asamblea Provincial	Por autonomía territorial región	Luego de la amenaza a los alcaldes del oriente, la Asamblea [Provincial] se proclamó Constituyente en razón de la soberanía popular y respaldo a los alcaldes (página 297).
2002	Comité Interinstitucional	Comunicado	Comunicado por el secuestro del exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa y de su comisionado de paz, Gilberto Echeverri Mejía (página 299).
2002	Iglesia	Retoma de espacios de sociabilidad	La iglesia contribuyó con la promoción de canelazos o chocolatadas con las que buscaba igualmente que la población volviera a salir y realizar los encuentros comunales tanto en la zona urbana como en las veredas (página 287).
2003	Comité Interinstitucional	Llamado a autoridades nacionales	Carta a la Defensoría del Pueblo denunciando la presencia de grupos paramilitares (página 176)
2003	Comité Interinstitucional	Llamado por salida negociada	En el marco de una Asamblea por la Vida, el Comité Interinstitucional hizo parte del Movimiento Regional por la Paz que abogó por una salida negociada del conflicto armado (página 300).
2003	Autoridades locales y nacionales	Entrega oficial: Reconstrucción en medio de atentado	La obra se concluyó el 17 de agosto de 2003, tres años luego de la toma armada. El acto público fue presidido por el presidente de la república Álvaro Uribe Vélez quien en el helicóptero que volaba fue atacado por las guerrillas. Esta era la mejor señal de que se trataba de una reconstrucción en medio del conflicto (página 316). <ul style="list-style-type: none"> • El Parque Guillermo Gaviria Correa a la memoria del entonces gobernador, como agradecimiento colectivo de los granadinos al apoyo prestado por él al proceso de reconstrucción. Y el Parque de la Vida, que alberga uno de los mayores monumentos a la memoria, el monumento a los desaparecidos, con un total de 120 piedras con nombres grabados representa cada granadino que fue víctima de la violencia y que su familia aún no ha podido recuperar su cuerpo (página 317).

2003	Alcaldes, Iglesia, mujeres	Movilización regional	Los alcaldes del oriente antioqueño se reunieron en una asamblea regional por acercamientos humanitarios, con el apoyo de la Diócesis de Sonsón-Rionegro a través de la Corporación Vida, Justicia y Paz. Impulsó una importante movilización social regional a favor de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado en el oriente antioqueño, generando la conformación de Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño (AMOR), así como otras organizaciones locales movilizadas por mujeres (ASOVIDA) (páginas 317-318).
2003	ONG regional y nacional	Comités por la reconciliación, la memoria colectiva y apoyo psicoafectivo	Conciudadanía y el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) capacitaron en el oriente antioqueño a 350 personas de los 23 municipios del oriente antioqueño quienes a su vez buscaron conformar en cada uno de esos municipios un comité de reconciliación que impulsara localmente movilizaciones sociales que tendrían como eje nodal la reconciliación y la construcción de una memoria colectiva. Los comités de reconciliación y AMOR, las cuales fueron diplomadas por la Universidad Javeriana como Promotoras de Vida y Salud Mental (PROVISAME). Como resultado de esa iniciativa nacen las “Abrazadas”, una propuesta que tenía como objetivo brindar apoyo emocional y psicoafectivo a las víctimas del conflicto (elaboraciones de duelo y reconstrucción del tejido social, reivindicación de los derechos de las víctimas y su dignificación). En Granada, las PROVISAME iniciaron el proceso de apoyo psicosocial mediante una estrategia denominada “amigos de la memoria” (páginas 318-319).
2003	Administración municipal	1er proyecto de retorno	Cuando en el casco urbano se concentraba un importante número de campesinos que habían tenido que desplazarse, el municipio desarrolló el primer proyecto de retorno y apoyo a la población desplazada denominado Tierra Viva. Esta fue una finca comprada por la administración municipal en las inmediaciones del casco urbano y tuvo como objetivo la promoción del retorno al municipio a través de la generación de condiciones favorables de empleo, alimentación, educación, salud, el trabajo en la parcela para el autoconsumo y para comercializar (página 130).
2004	Consejo provincial de paz	Participación ciudadana y autonomía territorial región	El Consejo Provincial de Paz es el soporte legal de la Asamblea Provincial Constituyente del oriente antioqueño, busca “promover en la región la democracia participativa, la búsqueda de la paz y propender por el desarrollo integral, sostenible, equitativo y pacífico de la población que habita este territorio” (página 301).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

2004 - 2006	PROVISAME y amor (ong Mujeres) y ONG regional y nacional	Movilizaciones regionales por reapropiación territorio y voz víctimas	PROVISAME y AMOR impulsaron varias movilizaciones en cada uno de los 23 municipios del oriente antioqueño que buscaban reapropiarse de los territorios y hacer visible la voz de las víctimas en un contexto de guerra aún latente. Estas iniciativas fueron apropiadas luego por cada municipio y en Granada en particular, ASOVIDA las introdujo dentro de su repertorio de movilizaciones y acciones de memoria (página 322).
2004	Asambleas Comunitarias de Granada	Apoyo a Consejo Provincial de Paz	En 2004 las asambleas comunitarias (que en Granada tuvieron el nombre de “Dialogando por la Vida”) fueron insumo para la construcción del Consejo Provincial de Paz en el oriente y un espacio vital para la construcción de una postura a favor de la paz desde los procesos comunitarios alrededor del derecho a la vida y el respeto a la neutralidad (página 301).
2004 -2010	Víctimas	Jornadas de la Luz Y Abriendo Trochas por la vida Por recuperación espacios públicos-resignificación y memoria colectiva	Las Jornadas de la Luz, realizadas con regularidad todos los primeros viernes entre 2004 y 2010 (...). Posteriormente, las marchas fueron cediendo sus espacios a otros actos de encuentro como conversatorios o charlas convocados por ASOVIDA (página 322). En el 2004 en el marco de las Semana por la paz se construyó un telón con el nombre de las víctimas (página 325). Otra iniciativa, “Abriendo trochas por la vida”, tenía por objetivo resignificar aquellos caminos teñidos con la sangre de sus víctimas y confinados al olvido por el miedo y el dolor que generaban (página 323). [Ambos eventos también tienen el vínculo con el movimiento regional].
2005	Víctimas y gobernador Comité Interinstitucional, C. de Reconciliación, coogranada, Personería	Marcha	La Marcha por la Vida, en conmemoración de los cinco años de la toma armada del municipio. La marcha, acompañada por el entonces gobernador del departamento Aníbal Gaviria Correa, se desplazó por las principales vías del municipio con un gran telar blanco de 600 metros de longitud símbolo de paz en el cual estaba impresa la frase “El respeto a la vida es cuestión de humanidad” y se sembró un árbol en el parque principal como símbolo de compromiso con la paz y la vida. En esta marcha, las organizaciones que convocaban como el Comité de Reconciliación, el Comité Interinstitucional, la Personería Municipal y Coogranada les pidieron a los marchantes llevar las fotos de sus víctimas, de sus muertos y desaparecidos; a partir de ahí se evidenció la magnitud de la destrucción familiar que tuvo la guerra (página 327).

2006	Asociación de Desplazados (Asodesplazados)	Formación y Defensa Derechos	<p>Creada en 2006 hace parte de esta dinámica de visibilización y reconocimiento de las víctimas. (...) Asodesplazados ha liderado desde entonces múltiples iniciativas con la intención de mejorar las condiciones del campo y con ello facilitar las condiciones de retorno de la población campesina a sus tierras (página 320). En los últimos años ha trabajado con ASOVIDA con el objetivo de formar a las víctimas en la defensa de sus derechos y lograr un empoderamiento político por parte de las mismas. Ambas organizaciones han liderado en espacios interinstitucionales como el Comité Interinstitucional, el Comité Local para la Atención a la Población Desplazada o el Comité de Justicia Transicional (páginas 320-321).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crítica a los programas de retorno impulsados en el municipio por Acción Social, Retornar es Vivir y Familias en su Tierra, programa de Incentivos para la Reubicación y el Retorno (IRR). Los representantes de ambas organizaciones emiten un derecho de petición en el 2010 (septiembre 23) en el que denuncian que estos no se están efectuando ni con el enfoque ni con los procedimientos que contempla la ley en términos de voluntariedad, dignidad y seguridad (página 321).
2006	Desplazados	Retorno y demanda apoyo institucional	<p>La población desplazada comienza a hacerse más visible y a demandar acompañamiento institucional. Así, a pesar de que las acciones armadas continuaban en el territorio hacia finales de 2005, concentradas en la zona de Calderas y Santa Ana, en los inicios de 2006, eran las veredas ubicadas en la parte baja de estas cuencas las que registraban importantes retornos de su población, especialmente en veredas como Las Palmas, San Francisco, el Roblal y Los Medios, en donde para febrero de ese año, fueron 296 personas las que habían regresado (OPROA, 2006, página 130).</p>

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

2007	Asovida-org Víctimas	Política de memoria viacruzis, monumento parte de APROVIACI (Regional, nacida en 2007)	<p>El capital inicial [comités de reconciliación y AMOR] con el cual se constituyó la Asociación de Víctimas Unidas por la Vida (ASOVIDA): la búsqueda de la verdad, justicia y reparación construyendo propuestas para la consolidación local de una cultura no violenta. En función de esto, se ha promovido una política de la memoria (página 320). Se ha consolidado como una de las organizaciones importantes y a través de su participación en la Asociación Provincial de Víctimas a Ciudadanas y Ciudadanos (APROVIACI) –que agrupa las organizaciones de víctimas del oriente antioqueño–, ha asesorado varias organizaciones de víctimas en procesos locales de construcción de memoria. En el 2010, recibe el Premio Nacional de Paz (página 320).</p> <p>El 5 de octubre de 2007 se realizó el Viacruzis, desde el casco urbano hasta la vereda San Matías (página 323).</p> <p>Como consecuencia de esta acción se generó el primero y uno de los más significativos monumentos a la memoria que tiene el municipio de Granada: “El monumento a los desaparecidos”. Allí fueron sembradas las piedras recogidas en este trayecto, marcadas con los nombres de las víctimas con las que los marchantes conmemoraron a sus desaparecidos (página 324).</p>
2008	Asovida	Política de memoria	<p>La realización de un “monumento de memoria a las víctimas”, esta vez, en homenaje a las víctimas de la primera incursión de las autodefensas al municipio, el 3 de noviembre de 2000 (página 324). Este monumento, erigido en septiembre de 2008, fue la antesala de una movilización social que reunió a más de 200 víctimas de 14 municipios del oriente que marcharon en contra del olvido y en la cual las múltiples voces replicaban una sola consigna que hizo eco por las calles de Granada: “No más víctimas, no más desaparecidos, no más desplazados” (página 325).</p>
2008	Desplazados		<p>Se realizan jornadas simbólicas de retorno masivo de población desplazada a Santa Ana (página 131).</p>

2008	Desplazados Campesinos Asoproa-Asociación de Campesinos y Productores de Oriente Antioqueño	Retorno, reconstruir producción agro y tejido social	Asociación de Campesinos y Productores de Oriente Antioqueño (ASOPROA), una organización que “nace en medio de la guerra”, como respuesta al desplazamiento masivo y al confinamiento y con la que se buscaba “fortalecer a la comunidad campesina; potenciar el liderazgo y la participación de los distintos asociados en procesos y movimientos sociales del oriente; establecer y desarrollar programas de capacitación para elevar el nivel organizacional y político de la población beneficiaria”. Se fundamenta en la producción y comercialización de alimentos y productos agropecuarios. Para esta organización, la guerra se convirtió en una oportunidad de acoger y congregar un grupo de campesinos en torno al desarrollo rural, lo que a su vez permitió la protección de los pobladores y de sus territorios (PNUD, 2010). En el momento en que inició el retorno de los pobladores a sus veredas, muchos de ellos sin acompañamiento institucional, empezaron a buscar por sí mismos nuevas formas de producción y de levantar nuevamente sus parcelas, cultivos que fueran productivos y les permitiera el autosostenimiento (página 284).
2009	Asovida - víctimas acompañadas por CINEP y PNUD	Iniciativa de Memoria: Salón Nunca más	La Asociación de Víctimas convocó a los candidatos a la Alcaldía para el periodo 2008-2009 para que se comprometieran mediante la firma de un documento público a brindar un espacio físico para construir el Salón de la Memoria y además de ser incluidos en el Plan de Desarrollo para aquel periodo; el compromiso fue sellado por los tres candidatos (...) luego de su posesión como alcalde del municipio, se inició un nuevo proceso para hacer cumplir aquel compromiso preelectoral que tras la presión comunitaria logró hacerse efectivo, el Salón de la Memoria ahora tenía lugar, ubicado en el primer piso de la Casa de la Cultura, obtenido en comodato por cuatro años y luego ampliado a ocho años. Se realizaron los talleres y ejercicios de memoria en las diferentes veredas del municipio, en los cuales se hacía conciencia a la población sobre el valor de la memoria (páginas 328-329). El proceso [fue acompañado por] el CINEP y organizaciones como el PNUD que permitieron asesoría museológica y la consecución de los recursos para su funcionamiento (página 329).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

			<ul style="list-style-type: none"> • El Salón del Nunca Más fue abierto al público el 3 de julio de 2009: “una acción de memoria colectiva, que reconoce que los rostros en este Salón, fueron historias cortadas por la violencia, y son seres humanos, con sueños inconclusos” (Aso-vida, 2012c). Un proyecto que identifica a cada granadino y representa el mayor acto de resistencia en contra de la guerra y sobre todo en contra del olvido (página 326). En la parte principal del Salón se ubican 254 fotografías, 254 historias de asesinados y desaparecidos del conflicto que representan una tercera parte de las víctimas totales que dejó el conflicto en el municipio y aunque es una mínima parte, logra evidenciar la magnitud de la violencia en el rostro de las víctimas (página 329). De las 277 bitácoras que se albergan allí, al menos 61 corresponden a personas dadas por desaparecidas (páginas 199-200).
2010	Desplazados	Retorno	Continúan los retornos de población desplazada a las veredas de la zona baja de Granada (página 132).
2011	Desplazados	Retorno	En un contexto nacional favorable por el proceso de discusión y aprobación de la Ley 1448 de 2011 (ley de víctimas y restitución de tierras) continúan los retornos de población, se fortalece la actividad organizativa, se posicionan las víctimas como actor social relevante (página 132).
2012	Retornados	Celebración	A través de distintos frentes de inversión social, con recursos públicos y privados, se ha celebrado el día del campesino, las fiestas del retorno, se inició el proceso de remodelación, habilitación y dotación del puesto de salud de Santa Ana, la remodelación de la escuela El Edén, entre otras, acciones que han buscado la recuperación, por lo menos parcial, de los territorios y la población más golpeada por la guerra en Granada (páginas 132-133).
2013	Retornados	Iniciativa memoria	Se ponen en marcha manifestaciones simbólicas como “Reconstruyendo Caminos”. Además, empiezan a llegar múltiples programas de asistencia y acompañamiento orientados a la titulación de predios baldíos, la reconstrucción de memoria, la reparación administrativa, los proyectos de incentivo a retornos, todos programas que buscan contribuir con el restablecimiento y reparación de los derechos de las víctimas (página 132). Según el análisis de la información de caracterización realizada en el municipio en el periodo 2012-2015 han retornado aproximadamente 7.484 personas (familias 2.138) y reubicado a 3.561 personas (familias 1.017) para un total de caracterizados en el municipio de Granada de 11.045 personas (3.155 familias) (páginas 132-133).

SAN CARLOS			
Fecha	Actor	Tipo de Acción	Evento
90 - hoy	Jóvenes	Teatro	Creación grupo de teatro juvenil La Gotera.
90 - hoy	Líderes culturales	Casa de la Cultura	Creación y sostenimiento Casa de la Cultura. Trabajo en el casco urbano y las veredas. Sólo cerraron entre 2000-2002.
	Parroquia y jóvenes	Trabajo social en veredas	Trabajo social en veredas
2000	Parroquia y jóvenes	Suspensión	En el año 2000, la parroquia y el grupo de jóvenes que la apoyaba tuvieron que suspender el trabajo social en las veredas por la situación crítica de violencia y desplazamiento. Abrieron entonces el centro pastoral en la parte urbana, precisamente en la misma época en que los paramilitares establecieron un dominio total del casco urbano con su centro de operaciones en el Hotel Punchiná. En un acto de profundo desafío simbólico, el centro pastoral se abrió frente al centro paramilitar (página 323).
2000	Líderes deportivos y jóvenes	Juegos de paz	En el año 2000 se realizó en San Carlos la primera versión de los Juegos por la Paz con la participación de seis equipos mixtos a nivel regional en deportes como fútbol, baloncesto, voleibol y ajedrez (página 349).
2001	Comerciantes de la colonia en Medellín y desplazados	Núcleos barriales de desplazados en Medellín	Tejido Social Distante (TESODI), a partir de la invitación que la Oficina de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia hizo a un grupo de comerciantes de San Carlos del sector “El Hueco” en Medellín (página 350). El número de personas identificadas como desplazados de San Carlos alcanzó la cifra de 5.000 para el 2001, y estaban distribuidas en 55 barrios de Medellín y algunos municipios circundantes. Este grupo ha desarrollado una propuesta de diez núcleos organizativos por barrios (página 351). Una de las líneas estratégicas de TESODI es la reconfiguración del tejido social de San Carlos; esto es, de sus lazos básicos de confianza, fiestas, referentes sociales y culturales (página 351). Es una muestra clara de cómo se reproduce en el entorno urbano una dinámica asociativa semejante a aquella que adoptaron en San Carlos los centros zonales (página 264).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

2001	Desplazados	Retorno	El 1 de agosto de 2001 retornan 282 personas. De las cuales 139 habían sido desplazadas masivamente de la urbanización Los Sauces y asentadas temporalmente en el casco urbano de San Carlos (página 205).
2002-2004	Jóvenes	Tomas de espacios públicos	La iniciativa Jóvenes por la Paz (JOPPAZ): organizaron bingos en las calles, marchas y plantones para manifestar su rechazo frente a la violencia. El propósito era fomentar la confianza, la solidaridad y la esperanza entre la ciudadanía (página 347).
2002	Desplazados	Derechos	La Corporación de Desplazados de San Carlos (CORDESAN) nació en el año 2002 cuando se registró un alto índice de desplazamientos del sector rural al casco urbano: mediador y representante de las víctimas ante el aparato institucional local y nacional, a su vez se ha convertido en un espacio de deliberación y de gestión política para la población en situación de desplazamiento. (...) Sus acciones han estado encaminadas al establecimiento de demandas relacionadas con la entrega de alimentos y ayudas a la población desplazada. Han participado también de distintos procesos comunitarios que buscan mejorar las condiciones de vida de la población desplazada y de otros que pretenden generar espacios de interlocución directa con la administración local para garantizar el respeto de los derechos de la población en situación de desplazamiento (página 350).
2002	Líderes y organizaciones san carlitanas y Gob. De Antioquia	Fiestas del Retorno (caravana desde Medellín)	En agosto de 2002 llegaron a San Carlos 38 buses en caravana provenientes de Medellín. Se celebraban las tradicionales fiestas del agua y diversos líderes y organizaciones de la población sancarlitana, con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, dieron forma a lo que denominaron las fiestas del retorno (páginas 203-204).
2002	Desplazados con apoyo adm local	Retorno colectivo	El 26 de abril de 2002 retornan 72 hogares integrados por 290 personas. Algunas de estas familias habían sido desplazadas masivamente el 25 de enero de 2000 y otras en el 2002 desde las veredas El Chocó, Caldera, Arenosa, Dosquebradas y Betulia. El retorno contó con algún acompañamiento institucional de la administración local (página 205).

2003	Iglesia	Marchas de protesta	Las marchas lideradas por el sacerdote se repitieron en varias ocasiones y caracterizaron las acciones colectivas que tuvieron lugar en los períodos de mayor hostigamiento (página 321). Hacia el año 2003, miembros de la comunidad concluyeron que necesitaban conjurar el temor, demostrar su cansancio con la guerra y protestar por las listas. Nuevamente con Santísimo y sacerdote al frente, unos pocos salieron a protestar. Poco a poco otros se unieron hasta que un gran número de personas marchó (página 322).
2003	Jóvenes y casa de la cultura	Marcha de solidaridad	Durante la marcha realizada en solidaridad con las más de mil personas desplazadas de Dos Quebradas, quienes huyeron al pueblo después de la masacre de 2003. En la marcha, jóvenes subidos en zancos [en el testimonio se refieren a ellos como “Los Ángeles”- actividad liderada por la Casa de la Cultura] recorrieron por cerca de veinte horas los barrios y calles del municipio recolectando ayudas, comida y demás objetos que pudieran servir para la atención a las víctimas (página 345).
2003	Desplazados	Retorno colectivo	El 19 de mayo de 2003 89 familias integradas por 397 personas, reasentamiento colectivo al casco urbano de San Carlos. Se presume que estas personas corresponden al 100 por ciento de las personas que fueron expulsadas de forma masiva el 9 de noviembre de 2002 de las veredas Sopetrán, San Antonio, La Aurora, El Socorro y El Silencio. Estas familias retornaron desde la zona urbana del municipio de San Luis donde se habían asentado temporalmente (página 205).
2004	Líderes deportivos y jóvenes	Mantener los Juegos por la Paz a pesar del carro bomba	En los Juegos por la Paz de 2004 se realizó un atentado contra el pueblo con un carro bomba en el que murieron varias personas. Pero este suceso no disuadió a los organizadores, por el contrario, les ratificó su importancia. Desde entonces y hasta hoy, San Carlos es escenario a nivel regional de los Juegos por la Paz y la integración del oriente antioqueño (página 348).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

2004	Jóvenes y apoyo institucional y eclesial regional e internacional	Prevención reclutamiento niños y jóvenes por armados	<p>El proyecto Nuestra Opción: ¡La Vida!, liderado por la Mesa de Trabajo por la Infancia y la Juventud del Oriente Antioqueño. Este proyecto buscaba prevenir la vinculación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a los grupos armados ilegales, y promover la construcción de proyectos de vida alejados de la guerra, orientados por el respeto a la diferencia y la convivencia (Prodepaz 2007) (página 348). Coordinada por Prodepaz y de la que hacían parte la Diócesis de Sonsón-Rionegro desde la Pastoral Social y la Pastoral Familiar, la Universidad Católica de Oriente y la Corporación Educativa para el Desarrollo Integral (COREDI). El proyecto es apoyado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Embajada de Canadá (página 348).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esta iniciativa creó el Centro de Escucha y Operación, y fomentó grupos juveniles. En estos grupos se ha promovido el apoyo psicoafectivo entre los participantes por medio de herramientas lúdicas, creativas y culturales. Además, apoyó la creación de colectivos de comunicación que buscaban fortalecer y dar a conocer la red juvenil regional. Estos jóvenes usaron la comunicación como herramienta para establecer un circuito comunicativo con la población y como medio para la reconstrucción de la memoria histórica. Así estos jóvenes “se toman” la radio local y ponen en circulación las revistas <i>La Escalera</i> y <i>La Esquina</i>, las cuales incluyeron trabajos de memoria visual del municipio o la elaboración de semblanzas de personajes reconocidos en la historia local (páginas 348-349). También bajo este programa se trabajan proyectos de emprendimiento agroindustrial y se pone en marcha una cooperativa donde se elaboran y comercializan alimentos (página 349).
2004	Jóvenes y casa de la cultura	Iniciativa de memoria y toma de espacio público	<p>En las Jornadas de luz, organizadas en el año 2004 por JOPPAZ, la Casa de la Cultura y la Casa de Jóvenes, desde el programa Nuestra Opción: ¡La Vida!, invitaron a mujeres y hombres a salir a las calles portando velas encendidas en memoria de las víctimas. El propósito era dignificar su memoria y de devolver simbólicamente las calles del municipio a la sociedad civil (página 349).</p>

2004	Jóvenes y municipio	Participación espacios políticos	La Casa de la Juventud, creada junto con el Concejo Municipal de juventud y la política pública municipal de juventud por la administración local en septiembre de 2004, ha sido uno de los espacios desde donde un grupo de líderes sociales ha implementado esta estrategia [incidencia en la administración local, como Concejos Municipales de Juventud] (página 349). Allí también se ofrecen cursos, capacitaciones y jornadas de trabajo para los jóvenes del área rural y urbana (página 349).
2006	Mujeres	Búsqueda desaparecidos	<p>Pastora Mira que buscaba a su hija, desaparecida por los paramilitares, recabó los primeros datos. Fue en un viaje que hizo hasta Ibagué donde preguntó a un grupo de desmovilizados, responsables por la desaparición de Sandra, sobre su paradero. Ella regresó a San Carlos con indicios de la existencia de fosas entre las fincas La Holanda y La Llore, donde posiblemente estarían Sandra y Gloria, otra joven desaparecida en el municipio (página 330). Al encontrar el cuerpo de una de las víctimas, las mujeres señalaron el lugar, lo protegieron con un padre nuestro y acudieron a la Fiscalía para pedirle que hiciera la exhumación. A partir de este hallazgo empezaron una relación de trabajo conjunto con la Fiscalía, la cual ha sido fundamental en la promoción de investigaciones y exhumaciones que permitan encontrar a los desaparecidos (página 331).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para continuar se hacía necesario convocar a más mujeres, demostrar la dimensión de la desaparición forzada, activar solidaridades y responsabilidades. Las mujeres respondieron y decidieron enfrentar el aislamiento y la estigmatización en que vivían. A partir de esta respuesta se consolidó un colectivo de víctimas (página 331).
2006	Mujeres con apoyo ONG	Cabildo abierto y promoción reconciliación con desmovilizados y reparación víctimas	La iniciativa de búsqueda de los desaparecidos surgió cuando un grupo de 46 desmovilizados del Bloque Héroes de Granada llegó al municipio. (...) En este contexto, el Concejo Municipal bajo el liderazgo de Pastora Mira y el acompañamiento de organizaciones regionales de la sociedad civil, como Conciudadanía y de la Compañía de Jesús, propuso un cabildo abierto para entablar un diálogo cívico sobre los desmovilizados. De este cabildo salió la propuesta de crear el Centro de Acercamiento para la reconciliación y la Reparación (CARE) cuyo mandato es el de promover la reconciliación y reparación entre los pobladores de San Carlos. La creación del centro ha facilitado la organización de estas mujeres para la búsqueda de los desaparecidos y la obtención del apoyo institucional (páginas 328-329).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

2006	Mujeres	<p>Centro de Acercamiento para la Reconciliación y Reparación - CARE- (Trabajo desmovilizados - víctimas)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE) nació en el año 2006, luego de que un grupo de mujeres del municipio participara en experiencias de atención, formación psicosocial y salud mental auspiciadas en el oriente antioqueño por organizaciones como la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño (AMOR), Con Ciudadanía y Prodepaz (página 352). El CARE tendría en la labor de las mujeres Promotoras de Vida y Salud Mental (Provisame), a su vez, la inspiración y la metodología para el trabajo con las víctimas. El centro surgió en un período en que la confrontación armada disminuyó y cuando las víctimas empezaban a hacerse visibles, algunas a reclamar sus derechos y otras a vencer el miedo impuesto por los actores armados (página 352). • El CARE es una iniciativa que acompaña a las víctimas y promueve acciones en pro del bienestar físico y espiritual de la población de San Carlos. Una muestra de ello es la inauguración del CARE con una invitación a la comunidad a unirse a la movilización: “Siembra una planta, cultiva una vida”. En esta actividad se invitaba a la población a transformar su relación con la guerra sembrando una planta como símbolo de paz. En ella también participaron algunos de los desmovilizados, lo que la hizo una actividad con un alto contenido simbólico, pero a la vez controversial, al proponer compartir estos espacios recuperativos con los victimarios que llegaban a habitar el municipio en condición de civiles (página 353). Otra iniciativa fue la de la Mesa de Reconciliación, a través de la cual se ha intentado promover diálogos entre los desmovilizados que llegan al municipio en el marco de la desmovilización promovida por la ley de justicia y paz y la recuperación de los espacios públicos (página 354). • El CARE propuso en ese entonces un escenario de “diálogo” entre víctimas y desmovilizados a través de las mesas de reconciliación. Las mesas tenían como finalidad abrir un espacio para que las víctimas pudieran interpelar a los victimarios y a la vez examinar cuál debería ser un escenario apropiado para la reconciliación. Este espacio fue aprovechado por estas madres para preguntar y tratar de obtener información sobre sus desaparecidos. Con frecuencia sus angustiosas preguntas sólo se encontraron con el silencio del victimario, ellas preguntaban y ellos no contestaban (páginas 332-333).
------	---------	---	--

2006	Jóvenes	Teatro y memoria	En la Obra de teatro <i>Asfalto</i> del grupo de teatro juvenil La Gotera, los jóvenes reconstruyen hechos de la guerra en San Carlos (páginas 345-346). La obra se presentó con posterioridad a la desmovilización del Bloque Héroes de Granada (...). En el estreno de la obra, una funcionaria local trajo a cincuenta desmovilizados de San Carlos (página 346).
2006	Desplazados con apoyo institucional	Retorno	El 24 de abril de 2006 retornan 290 personas. Se presume que estas personas hacen parte de las 886 que fueron desplazadas en enero de 2003, de las veredas Dinamarca, La Tupiada y Dosquebradas. Fue un retorno colectivo con algún apoyo institucional (página 205).
2007	Mujeres CARE	Marcha y repartición mapas para información fosas	En junio de 2007 las mujeres marcharon por el pueblo y repartieron doscientos mapas del municipio (veredas y casco urbano), solicitando que quienes conocieran información sobre fosas comunes o vestigios de personas desaparecidas las marcaran en el mapa. Las mujeres comprendieron que, en el clima de miedo e inseguridad que se vivía en San Carlos, era difícil compartir esta información, y por eso optaron por solicitar que la información se entregara de manera anónima y que los mapas fueran dejados en la iglesia, la alcaldía o la sede del CARE. Este proceso de mapeo colectivo sirvió para recabar lo que las mujeres consideran “písticas”, datos que, si bien por sí solos no resultan en el hallazgo de fosas o restos, permitieron avanzar en su búsqueda. A febrero de 2011, gracias a las acciones de búsqueda, las tácticas de la persistencia y demandas de verdad de estas mujeres, se han ubicado los restos de siete personas desaparecidas (página 334).
2007	Desplazados	Retorno	El 2 de agosto de 2007 retornan 134 hogares conformados por 685 personas: retorno no colectivo con acompañamiento institucional de personas que fueron desplazadas forzosamente en varios eventos desde 32 veredas, principalmente desde las veredas Betulia, Capotal, Chocó, Pabellón, Palmichal y Santa Inés entre el 2000 y el 2002. Retornaron desde el casco urbano de San Carlos (página 205).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

COMUNA 13			
Fecha	Actor	Tipo de Acción	Evento
2000-2002	Jóvenes	Recuperación de espacios públicos	<p>Por iniciativa de grupos juveniles y comunitarios se realizaron acciones para resistir al encierro y al miedo (...) se enfocaron en la recuperación de los espacios de uso colectivo de la comunidad: las canchas, la calle y el tiempo de la noche.- Los líderes de los semilleros y grupos juveniles, en específico la Corporación Jóvenes Líderes Unidos, realizaron eventos públicos que intentaron recuperar el sentido del encuentro social en la noche y en los espacios públicos mediante la organización de alboradas y torneos de fútbol. (...) El deporte masivo se transforma así en acción colectiva de resistencia indirecta (página 207).</p> <p>(Las milicias intentaron cooptar y aprovechar estas actividades. Ante el riesgo que podría suscitar, los organizadores desistieron de ellas, por temor de que los paramilitares los señalaran) (página 208).</p>
2002 (Mayo)	Pobladores Durante Operación Mariscal	Banderas blancas para cese al fuego. Marcha Protesta	<p>Izar prendas blancas o banderitas blancas fue una respuesta colectiva y espontánea para pedir [el] cese al fuego con el objeto de atender los heridos y detener la acción de la fuerza pública en ejecución de la Operación Mariscal (que duró 12 horas y media), el 21 de mayo de 2002 fue interpretado por algunos sectores como un favorecimiento táctico para los milicianos en combate y no como un gesto de paz (página 26).</p> <p>Cuando dos civiles fueron heridos y no los pudieron recoger, una niña se paró en la calle con un palo y agitando una sábana blanca pidió el pare al fuego. (...) La población llegó marchando hasta el lugar donde estaba la fuerza pública para expresarse en contra de las operaciones militares y el costo humanitario. La marcha culminó con la intervención de los escuadrones antidisturbios. Después de varias horas en las que los residentes protestaron no hubo ninguna negociación y al final de la tarde las personas se dispersaron y retornaron a sus hogares (páginas 209-211).</p>

2002 (Mayo)	Pobladores	Marcha silenciosa. Petición de excluir población de los combates	El joven John Wílmar Ayala, de 16 años, recibió un disparo en el pecho y murió al intentar auxiliar a un hombre que se encontraba mal herido en la calle. A raíz de su muerte, los compañeros de estudios y profesores del Liceo La Independencia promovieron una marcha que se lleva a cabo el 23 de mayo de 2002. La marcha silenciosa inicia en las instalaciones del liceo y llegó hasta la estación de Metro de San Javier; a ella se unieron habitantes de la Comuna 13, quienes pedían que se excluyera a la población civil de los combates (El Colombiano, 23 de mayo de 2002) (página 212).
2002 (Junio)	Habitantes de la Comuna 13	Marcha de solidaridad y denuncia	El mismo día que las personas se refugiaron en el liceo [La Independencia, 30 de junio de 2002], los habitantes de la Comuna 13 marcharon por las calles de la Comuna para denunciar que varias familias habían quedado sin vivienda por la incursión de las Autodefensas en la parte alta del barrio El Salado (El Colombiano, 1 de julio de 2002, 8 ^a) (página 34).
2002 (Junio)	Jóvenes Líderes Unidos	Solidaridad con desplazados	En las horas de la mañana del 30 de junio de 2002, miembros del grupo Jóvenes líderes Unidos (JOLUN), con presencia en distintos barrios de la Comuna 13 llegaron al Liceo La Independencia, lugar donde solían reunirse [los desplazados del barrio El Salado después de la incursión del BCN]. Al presenciar la situación de crisis, decidieron quedarse y brindar su apoyo a las víctimas de desplazamiento (páginas 32-33).
2002 (Junio)	Líderes comunitarios	Comunicado	El coordinador del Liceo La Independencia y la presidenta de la Acción Comunal del barrio El Salado, decidieron escribir un comunicado a la Personería Municipal de Medellín para informar que el Liceo había sido ocupado por 450 personas entre adultos y niños desplazados de la parte alta del barrio El Salado y solicitan “atención médica urgente para Ivonne Jordán Salas, Didier Antonio Mosquera y Elena Margarita Mejía Álvarez” (República de Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-268 de 2003) (páginas 33-34).
2002	Desplazados	Resistencias cotidianas	En medio del riesgo constante, los residentes temporales del liceo se organizaron en comisiones para la preparación de los alimentos, la realización de las labores de aseo de las instalaciones y la atención de los enfermos. Acordaron horarios para ingreso y salida del establecimiento, alimentación, así como la hora en que cada noche se apagaban las luces del liceo (página 35).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

2002 (Julio)	habitantes	Marcha a La Alpujarra por Derecho a la Vida y Dignidad Humana y Llamado a solidaridad con Comuna	La marcha por la vida y la dignidad humana tuvo como punto de concentración el centro administrativo de la ciudad de Medellín el 13 de julio de 2002. Los habitantes de la Comuna 13, organizaciones educativas, comunitarias y religiosas, con el acompañamiento de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la Pastoral Social, el Instituto Popular de Capacitación, la Red Juvenil, la Corporación Realizadores de Sueños, se reunieron en la Plazoleta de la Alpujarra para reclamar el derecho a la vida y a la dignidad humana de todos los habitantes de la zona. Allí se dio a conocer un manifiesto por la vida y la dignidad humana en el que se hizo un llamado a la solidaridad con la población de la Comuna 13. Además, el comunicado condena el uso de la fuerza “ya que esta deriva en mayores y brutales confrontaciones” (Manifiesto por la vida y la dignidad, 2002, 13 de junio) (páginas 212-213).
2002 (Sept)	Jóvenes	Creación Red Élite Hip Hop y Festival “la violencia no nos vence”	La Red Élite de Hip Hop se conforma como propuesta artística y organizativa en el momento más álgido del conflicto, en septiembre de 2002. En esta fecha se realiza el Festival Élite Hip Hop con el lema: “En la 13 la violencia no nos vence”. En un claro contrapeso simbólico y comunicativo al despliegue de operaciones militares en la Comuna, esta propuesta que reúne a 23 organizaciones juveniles, se llama a sí misma como Operación Élite Hip Hop, a sólo cuatro meses después de la Operación Mariscal y 24 días antes de Operación Orión (páginas 215-216). El festival se continuó desarrollando en otros años y mantiene como tema central la oposición a la guerra y la invitación a la reflexión sobre las violencias (página 216).
2002	Defensoría del pueblo	Tutela para incluir desplazados	La Defensoría del Pueblo interpuso una acción de tutela a favor de las 65 familias desplazadas después de la incursión del BCN. Esta acción fue fallada a favor por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín mediante Sentencia de julio 25 de 2002 que ordenó a la Red de Solidaridad inscribir en el Registro Único de Población Desplazada a las familias y brindarles la atención necesaria. No obstante, el 24 de septiembre de 2002, en segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, profirió un fallo revocatorio de la decisión de tutela de primera instancia por considerar que estas personas no habían abandonado su lugar de residencia y porque las declaraciones individuales de los afectados no se remitieron a la Red de Solidaridad Social (página 39).

2002	Defensoría del pueblo	Recurso para inclusión de desplazados	El 6 de diciembre de 2002 la Defensoría del Pueblo presentó solicitud de insistencia ante los magistrados de la Corte Constitucional. El 23 de abril de 2003 la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-268 de 2003, confirmó el fallo de la primera instancia y revocó el de la Corte Suprema de Justicia. Las víctimas del desplazamiento masivo de la parte alta de El Salado fueron así reconocidas como personas en situación de desplazamiento forzado y sujetos de atención y protección (página 40).
2002	Organizaciones mujeres (Marco Operación Orión)	Comunicado exigiendo libertad de líderes	En el marco de la Operación Orión, tres líderes de Asociación de Mujeres de Las Independencias (AMI) fueron detenidas. El hecho provocó la reacción inmediata de otras organizaciones de mujeres quienes congregadas en la Ruta Pacífica de las Mujeres por la Paz, circularon un comunicado público que exigía la libertad inmediata de las líderes (páginas 213-214).
2002 Nov	Organización Nacional. Mujeres de Negro y Habitantes Comuna	Marcha de solidaridad con líderes AMI retenidas	Después de la Operación Orión, el Movimiento Nacional de Mujeres de Negro y otras organizaciones sociales piden el cese de la guerra en la Comuna 13 y el país (página 163). Convocaron para el 21 de noviembre de 2002 una movilización de solidaridad con los habitantes del sector y para respaldar a las mujeres integrantes de AMI (detenidas durante la Operación Orión) (...). La movilización salió desde el centro de la ciudad y llegó a la Comuna 13 con cientos de mujeres vestidas de negro que exigían la libertad de Socorro y Mery y daban a conocer que contra ellas no había una orden de detención judicial, sino tan sólo el señalamiento de un encapuchado (Colorado 2003). A la marcha de personas y organizaciones de afuera de la Comuna 13 se unieron algunos habitantes y líderes de la Comuna (páginas 214-215). Las mujeres recobraron la libertad 10 días después gracias a la presión que ejercieron las organizaciones sociales (página 215).
2003	Movece	Marcha peregrinación por desaparecidos	A un año de la Operación Orión, en 2003, el Movimiento de Crímenes de Estado (MOVECE), con presencia de dirigentes nacionales y medios de comunicación promovió La Peregrinación. En esta se pretendía recordar a las personas desaparecidas en el marco de esta acción militar y sacar del ámbito local la problemática de la desaparición forzada en la Comuna 13. Sus participantes recorrieron durante la noche, con antorchas, varios de los barrios de la Comuna 13 (...) aunque algunos pocos pobladores se sumaron al recorrido, la mayoría les vieron pasar expectantes y temerosos (página 225).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

2003	Organizaciones DD. HH.	Solicitud a CIDH de medidas cautelares de protección a niños	Ante el reclutamiento de niños durante y después de la desmovilización del BCN, el Grupo Interdisciplinario de DD. HH. (GIDH), apoyado por la Ruta Pacífica de las mujeres, Red de hermanamiento Lazos Visibles- Pueblos hermanos, la Red Juvenil y la Corporación El Solar, presentaron ante la Comisión Interamericana de DD. HH. una solicitud de medidas cautelares. A su vez, la CIDH solicitó a la Cancillería de Colombia información sobre medidas adoptadas para proteger a los niños de la Comuna 13 frente a los miembros de grupos armados (páginas 128-129).
2004	Grupo DD.HH	Solicitud de medidas cautelares para líderes sociales	Después del asesinato de la líder Teresa Yarce, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos solicita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la adopción de medidas cautelares a favor de las demás líderes (Socorro Mosquera y Mery Naranjo), las cuales fueron reconocidas a su favor el 22 de octubre de 2004 (Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos 2007) (página 215).
2004	Red Élite Hip Hop-Jóvenes	Festival anual conmemoración-memoria terror. Operación Orión y contra la guerra	A partir de 2004 el festival Élite Hip Hop toma el nombre de Revolución sin muertos, impulsado por la Red Élite Hip Hop. Con esta red se realiza el primer concierto, el cual se opone a la guerra y cada año, el 16 de octubre, conmemora la Operación Orión. Desde la tarde hasta la noche, los jóvenes y los grupos ocupan la cancha y allí, con una representación teatral corta y la participación de diversas agrupaciones de la ciudad y el país, recuerdan el terror vivido con Orión y dejan clara su postura contra la guerra (página 216).
2007 en adelante	Habitantes Comuna 13 Aso-comunales	Feria de la antioqueñidad en memoria de líder	Cada año se realizan eventos como la Feria de la Antioqueñidad, con la cual se trae a la memoria la obra de Haider Ramírez (asesinado el 26 de agosto de 2006) en el sector de Villa Laura. En esta acción de memoria se recorren los lugares por los cuales transitó el último día de su vida (página 227). Haider era el director ejecutivo de la corporación Corapas y presidente de Asocomuna de la Comuna 13. Esta es una asociación integrada por las y los presidentes y las y los delegados de las Juntas de Acción Comunal, dirigió las organizaciones sociales más representativas de la Comuna: la Junta Administradora Local, Asocomuna 13, de la cual fue uno de sus fundadores. Él fue además el pionero en el tema de televisión comunitaria en el barrio Villa Laura (página 190).

2006	Red Élite Hip Hop-Jóvenes	Jornadas por la Paz, la Memoria y la No Violencia	Jornadas por la Paz, la Memoria y la No Violencia organizadas cada año por la Red Élite Hip Hop (página 224).
2007	Víctimas	Galería de la memoria	Antes de 2007 los actos conmemorativos fueron sobre todo una expresión de las organizaciones sociales. Sin embargo, a partir de 2007 la dinámica cambia cuando personas de la comunidad se deciden a contar su testimonio y a marchar con las fotos de sus hijos. La Galería de la Memoria desde este año ha crecido tanto en el número de fotografías de los desaparecidos como en su base de datos (página 226).
2008-2010	Movie	Homenaje a víctimas y denuncias de impunidad	El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, acompañado de otras organizaciones de derechos humanos y víctimas de la Comuna 13, realizaron posteriormente, en los años 2008, 2009 y 2010, diversos homenajes a las víctimas de la Comuna en los cuales denunciaron la impunidad en que se encuentran los hechos allí ocurridos y exigieron al Estado respuestas en torno a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas (páginas 225-226).
2008	Jóvenes	Jornada anual por la paz, la memoria y la no violencia C13- Caravana para resignificar territorios	Una acción que buscó subvertir la marca de violencia y el control armado sobre los espacios de encuentro social en los barrios es la caravana “porque los límites no son frontera”, realizada por primera vez en 2008. En el marco de la jornada anual por la paz, la memoria y la no violencia, realizada en el mes de octubre, que organizan jóvenes de la Comuna 13 con el apoyo de Asociación Cristina de Jóvenes, ACJ, se llevó a cabo una caravana desde el sector de Cuatro Esquinas hasta la cancha de El Salado. La ruta fue definida con el fin de “des-marcar” o quitarle el sello de violencia a aquellos territorios controlados por los actores armados (página 217).
2009		Caravana se suspende por asesinato	La caravana culminó en un evento central en la cancha de El Salado con la asistencia de aproximadamente 100 personas (página 218). La caravana tiene que suspenderse en el 2009 por la amenaza que representó la situación de violencia en el sector y el asesinato la noche anterior a esta de tres personas en el lugar donde culminaría (página 218).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

2009	Red Élite Hip Hop-Jóvenes	Jornada por la Paz- Seminario “Habitantes de la memoria”	En el marco de la IV Jornada por la Paz, la Memoria y la No Violencia, organizada cada año por la Red Élite Hip Hop, realizada en el 2009 se impulsó la realización del seminario “Habitantes de la memoria” (página 224).
2009	Víctimas	Exposición fotográfica desaparecidos	Se expuso la galería de fotografías de las personas desaparecidas en la Comuna 13 en la cancha de San Javier. En un pendón se informaba el número de víctimas por año a partir de 2002 y hasta el 2009. Se invitaba a los asistentes a coger una flor, decir el nombre de una de las víctimas y poner la flor en un círculo. Esta acción y las velas encendidas fueron parte de un evento ritual con la participación de los familiares de las víctimas y de quienes asistieron al evento (página 226).
2009	Jóvenes	Marcha y homenaje a joven asesinado	En el caso de <i>Kolacho</i> (Héctor Enrique Marmolejo, asesinado el agosto 25 de 2009) (página 190) se realizó una marcha que inició con la pintura de un mural que dejó plasmado su rostro en una pared en su barrio de origen, el Eduardo Santos. Los grafiteros dejaron allí su rostro pero también estamparon camisetas que llevaban puestas sus compañeros durante el homenaje. La marcha se dirigió al parque biblioteca San Javier, donde se realizó un ritual con bombas de colores y el concierto organizado por la Red Élite Hip Hop (página 220).
2010	Jóvenes	Plantón por joven asesinado	El plantón realizado por el asesinato de Andrés Felipe Medina tuvo lugar en la vía pública cerca de la estación del metro de San Javier. Su asesinato ocurrió a las 6 de la mañana del julio 4 de 2010 y el plantón se llevó a cabo ese mismo día en las horas de la tarde (página 220).
2010	Jóvenes	Plantón por joven asesinado	Marcelo Pimienta Sánchez, <i>Chelo</i> , fue asesinado a las 10 de la noche el 5 de agosto de 2010 y al día siguiente, a mediodía, se realizó el plantón. Allí se agitó la frase “¿Hasta cuándo ver caer, hasta cuándo ver morir?”. En este encuentro, sus compañeros del grupo musical Esk-lones, parientes, amigos y asistentes solidarios se reunieron en la cancha deportiva del barrio San Javier (página 221).
2010	Jóvenes	Caravana	Se retoma la caravana realizada por primera vez en 2008 escogiendo un lugar diferente para su “retoma” simbólica (página 218).
2010	Jóvenes	Jornada por la Paz, Memoria y la No Violencia	En el marco de las Jornadas por la Paz, la Memoria y la No Violencia el performance continúa con la puesta en escena de una memoria sobre las violaciones a los derechos humanos de las operaciones militares y con la conmemoración de quienes han sido desaparecidos en la Comuna 13 (página 224).

2011	Red Élite Hip Hop-Jóvenes	Marcha Rechazo asesinato	La marcha a Favor de la Vida y los Derechos Humanos de los y las jóvenes de la ciudad se realizó el 29 de marzo de 2011 para rechazar al asesinato del rapero de 17 años Daniel Alejandro Guerra, <i>Daniel Yhiel</i> , el quinto integrante de un grupo musical juvenil de esta comuna asesinado en un período de menos de dos años. La marcha fue convocada por la Red Élite de Hip Hop y apoyada por el cantante antioqueño Juan Esteban Aristizabal, Juanes (página 218). La marcha contó con la asistencia de aproximadamente cuatro mil personas (página 222).
s.f	Red Expresarte	Carnaval de la 13 y Caminando por la 13 para contrarrestar control microterritorial	La Red Expresarte promueve una serie de acciones con las que buscan contrarrestar el control microterritorial en la Comuna 13, entre ellas, El Carnaval de la 13 y Caminando por la 13. En su realización convergen una variedad de espectáculos coreográficos, musicales, líricos y teatrales, actividades con las que se pone en escena una fiesta de resistencia para vivir y sentir el arte. De otra parte, se promueven recorridos urbanos a través de los cuales se difunden las actividades artísticas de los grupos de los barrios (página 222).

TIBÚ			
Fecha	Actor	Tipo de Acción	Evento
Años 1950	Pobladores, JAC y sindicatos	Juntas de Acción Comunal “Huelga del arroz”	Ante la asimetría entre el abandono estatal frente a las necesidades de los pobladores, y su presencia para proteger la industria petrolera, los pobladores se organizaron y surgieron procesos de economía solidaria, tiendas comunitarias y cooperativas regionales, así como organizaciones ganaderas, cacaoteras, cafeteras, y a la par “se fortalecieron las movilizaciones en temas petroleros, salariales y de tierras” (página 38). A finales de la década se crearon las Juntas de Acción Comunal (Ley 19 de 1958), que asumieron múltiples funciones como el mantenimiento de las vías y la construcción y dotación de escuelas. Con la “Huelga del Arroz”, promovida por el Sindicato de Trabajadores del Catatumbo (Sidelca), se fortalecieron los nexos entre los trabajadores y las juntas (página 38).
Años 1960	Campesinos	ANUC Norte de Santander	Fue constituida la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Norte de Santander (ANUC) (página 39).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

Años 1970	Sindicatos	Paro Cívico 1971	Hicieron presencia en la región el Partido Comunista, y sindicatos de diverso tipo como: la Asociación de Institutores de Norte de Santander (Asinort), el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas, Consultorios, Entidades Dedicadas a Procurar Salud (Antoch) y la Unión Sindical Obrera (USO) de la que hizo parte Sidelca. Estos últimos convocaron al paro cívico de 1971 que derivó en la terminación del contrato con las compañías multinacionales, y la explotación pasó a manos de la Empresa Colombiana de Petróleo (página 40).
1979	Indígenas	Organización indígena Asocarí	En defensa de la vida y del territorio, en 1979 los indígenas conformaron Asocarí, dirigida por las autoridades tradicionales, el Consejo Autónomo de los Caciques, los cabildos de las veintitrés comunidades y los representantes de las cinco asociaciones en los municipios en que tienen presencia (Asocariteo en Teorama, Asocarielcar en El Carmen, Asocaricon en Convención, Asocarieldarra en El Tarra y Asocaritibu en Tibú) (página 36).
Años 1980	Grandes fincas (abandonadas por dueños extorsionados o secuestrados por guerrillas) son parceladas por INCORA		
1985	Llega primera mata de coca a La Gabarra		
1985	Campesinos	Marcha	El secuestro y homicidio de tres campesinos en La Gabarra-Sitio Kiosko y en la vereda Caño Salado, el 29 de junio de 1985, por miembros del Ejército, motivó la marcha de treinta y seis campesinos a Cúcuta, para desmentir la sindicación de que se trataba de guerrilleros del ELN muertos en combate (página 55).
1987	Campesinos	Paro del Nororiente Colombiano macro-regional	El Paro del Nororiente Colombiano, realizado entre el 7 y 14 de junio 1987, en el que campesinos de 45 municipios de Cesar, Bolívar, Santander, Arauca y Norte de Santander reclamaron la entrega y formalización de la tierra; la provisión de bienes y servicios públicos (luz, vías, educación y salud), y la participación de las comunidades en las regalías de la explotación petrolera (páginas 55-56). En el paro las reivindicaciones de campesinos, obreros y otros sectores fueron acompañadas por agrupaciones de izquierda que tenían afinidades ideológicas y políticas con las guerrillas (Unión Patriótica y Partido Comunista Colombiano y FARC, A Luchar y ELN y Partido Comunista-ML y Frente Popular y EPL), situación que propició estigmatizaciones y ataques contra las organizaciones sociales y políticas (página 153)

1988	Campesinos	“Marchas de Mayo” por líder de la UP asesinado Macro-regional	Al Paro del Noroccidente Colombiano le siguió una ola de amenazas, el asesinato de líderes de la Coordinadora Popular del Nororiente y otras organizaciones en varios de los municipios y la desaparición forzada de otros. En Tibú se recuerda que el 13 de abril de 1988 fue asesinado un campesino militante de la Unión Patriótica, junto con su mujer y su hijo, por un grupo armado no identificado (página 56). Ante esos hechos entre el 22 y el 30 de mayo de 1988 se efectuaron las “Marchas de Mayo” en las que veinte mil campesinos de los departamentos antes mencionados reclamaron el respeto a la vida. Si bien los crímenes e intimidaciones eran presentados a nombre de “La Mano Negra”, en ocasiones se evidenció “la participación directa de agentes oficiales” (FUCUDE y Fundación Progresar, 2005, agosto) (página 56).
1989-1996	Pobladores	Organizaciones sociales	Entre 1989 y 1996 “se fortalecieron las Juntas de Acción Comunal (...) se crearon las organizaciones sociales, ganaderas, comerciantes (...) y las cooperativas de trabajo asociado de campesinos”, así como el “apoyo a la constituyente”, la participación de amplios sectores en la “creación de la constitución de 1991”, y la movilización política promovida por grupos de izquierda, el Frente Popular, la Unión Patriótica (UP) y los sindicatos (página 57).
1996	Campesinos	Marcha de protesta	Al auge del movimiento político se sumaron las tradicionales movilizaciones, entre ellas la realizada en 1996, en la que más de ocho mil campesinos marcharon hacia Cúcuta para exigir atención del Estado e inversión social y económica en Tibú; la presentación de iniciativas “sociales, de sustitución de cultivos y de mejoramiento de infraestructura” al Plan Nacional de Rehabilitación y sobre las tierras y el mejoramiento de las condiciones a los docentes, lideradas por la ANUC y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) (páginas 57-58).
1996	Unidad Sindical Obrera	Propuesta de política nacionalista petrolera	La USO, junto con otros sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) presentó la propuesta de una “política petrolera nacionalista”, que incluía entre sus objetivos la adopción de una ley de hidrocarburos, el fortalecimiento de Ecopetrol y la nacionalización de las reservas petroleras y de las instalaciones industriales (página 58).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

1998	Campesinos e indígenas	Marcha contra incursión paramilitar y fumigaciones	<p>En octubre de 1998, cuando “se escuchaba que iban a venir los paramilitares”, quince mil campesinos e indígenas de las zonas rurales y del casco urbano de Tibú marcharon hacia Cúcuta para expresar[se] en contra de la incursión paramilitar y las fumigaciones (página 47).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se firmó un acuerdo para el levantamiento de la protesta en Cúcuta el 29 de octubre de 1998, por los voceros de los campesinos e indígenas y los representantes del Gobierno nacional, regional y local (página 48). Se concertó que no ingresarían paramilitares y que las fumigaciones no iniciarían hasta que se formulara el Plan de Desarrollo y Paz del Catatumbo y el Plan de Vida del Pueblo Barí, además de la implementación de alternativas económicas a los cultivos de coca (página 48). <p>En mayo de 1999 el Bloque Catatumbo ingresó masacrando a Tibú y en [el año] 2000 se implementaron masivas aspersiones aéreas con químicos (página 48).</p>
1998	Profesores	Marcha por asesinato de docente	<p>El asesinato de un docente en 1998 convocó la marcha de “400 profesores que exigieron la protección de los trabajadores del sector educativo” (página 154).</p>
1999	Pobladores	Huir - Desplazamiento	<p>Ante el terror de la llegada de los paramilitares a La Gabarra “más de 3.000 pobladores” migraron a otros lugares del departamento antes de llegar a los poblados de Casigua El Cubo y La Vaquera, en el estado Zulia en Venezuela. De ellos, más de dos mil personas fueron trasladadas al coliseo Eustorquio Colmenares de Cúcuta y otros prefirieron refugiarse “en La Manigua” (página 96) A este grupo se suma el de “más de 700” que huyeron de las zonas rurales a los poblados de La Vaquera, El Cerrito y El Ranchito, El Cruce, Frontalia, La Villa, Machiques y Casigua en Venezuela en donde improvisaron ranchos de plástico para refugiarse. Entre los migrantes forzados a romper montaña para llegar al vecino país se encontraban aquellos que huyeron de Río de Oro, La Pista y La Cooperativa, lugares que fueron desocupados con la incursión paramilitar.</p> <p>Muchas de las personas desplazadas transfronterizas no regresaron y “[re]hicieron la vida en Venezuela” (página 96) Otras víctimas se refugiaron en El Tarra, “porque en ese entonces esa zona estaba des poblada de paramilitares y Ejército y era más viable la salida por ahí”, en los cascos urbanos de otros municipios del Catatumbo y “[c]entenas de personas” individualmente o por grupos familiares optaron por llegar a Tibú de donde debieron desplazarse a</p>

			la capital, algunos se quedaron allí y otros migraron hacia otros lugares del país o a San Antonio, San Cristóbal y Ureña, Venezuela (página 96).
1999	Desplazados	Retorno	Las víctimas retornaron en el año 1999 con apoyo de la Red de Solidaridad Social, pero que debieron desplazarse de nuevo ante el terror de las masacres. La ausencia de condiciones de seguridad también truncó otras iniciativas de regreso apoyadas por esa entidad y organizaciones de la sociedad civil (página 230).
2001	Campesinos y raspachines	Marcha contra fumigaciones	Con el inicio de las fumigaciones, en el año 2001 cuatro mil campesinos cultivadores y raspachines de La Gabarra y Paccelly se concentraron en Tibú, y como en anteriores oportunidades reclamaron la puesta en marcha de proyectos alternativos para erradicar los cultivos de coca (página 178).
Después de 2004	Organismo de cooperación internacional	Agencias internacionales y creación de Asociación de desplazados y Asociación de Mujeres desplazadas de Tibú	Con posterioridad a la desmovilización del Bloque Catatumbo volvieron al territorio organismos y agencias de cooperación internacional. Entre ellas, Agencia de la Oficina de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización internacional para las migraciones (OIM), Consejo Noruego para los Refugiados (CNR), Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Servicio Jesuita de Refugiados (SJR) (página 205). Con el acompañamiento de esas instituciones, se crearon la Asociación de Desplazados del Catatumbo, la Asociación de Desplazados Vida y Dignidad y la Asociación de Mujeres Desplazadas de Tibú, y espacios como la Mesa Provincial de Ocaña en la que participan más de una docena de asociaciones de personas desplazadas en la zona media y alta del Catatumbo. Jóvenes y personas en estado de discapacidad por efecto del conflicto también se animaron a organizarse y fundaron la Asociación Tibuyana de Líderes Juveniles y la Asociación de Discapacitados del Catatumbo (página 205).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

Después de 2005	Víctimas	Talleres y encuentros colectivos	En desarrollo de la Ley 975 de 2005, con el acompañamiento de organismos internacionales, estatales y no gubernamentales, la Diócesis de Tibú, la Pastoral Social, la Parroquia de La Gabarra y la MAPP-OEA, se iniciaron los ejercicios de “construcción de la memoria” las víctimas pudieron expresar su dolor, miedos, rabias y otros sentimientos comprimidos durante años y en algunos casos durante décadas, por el terror (páginas 206-207).
Después de 2005		Moveice, ONG Fundación Progresar	En la reconstrucción del horror y la identificación de los responsables han contribuido al Capítulo Norte de Santander del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la Asociación Minga, el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y la Fundación Progresar, que brinda asistencia judicial a las víctimas de la desaparición forzada, las masacres y desplazamientos forzados y de los “falsos positivos” en el marco de la “agresiva estrategia de militarización del territorio” desplegada a partir de 2005. El distanciamiento de varias de esas organizaciones con el proceso de Justicia y Paz menguó la posibilidad de construir una memoria polifónica y una verdad judicial más holística (página 209).
Después de 2005		Nacen y se reagrupan organizaciones distintos sectores sociales, creación de Faro Catatumbo	Uno de los aspectos positivos que resaltan las víctimas sobre el fin de la era sangrienta del dominio paramilitar es que “nacen y se reagrupan las organizaciones sociales como las organizaciones de mujeres, de jóvenes, de comerciantes, de pescadores, de víctimas, de ganaderos. Las Juntas de Acción Comunal vuelven y se pierde ese miedo a ser partícipe de las juntas. Se crean organizaciones no gubernamentales, como el Faro Catatumbo” (página 205).
2006	Retornados	Iniciativas de memoria	Memoria Tibuyanos y tibuyanas que resistieron y que retornaron realizan caminatas, jornadas, museos itinerantes, galerías, marchas, festivales, encuentros culturales campesinos, peregrinaciones por los ríos, procesiones, alboradas, para recordar a las víctimas, recuperar y fortalecer la dignidad y el sentido de pertenencia al territorio. De especial recordación son la campaña “Juguemos en serio a la paz”, promovida por el Instituto Popular de Capacitación y la Fundación Cultura Democrática (IPC-FUCUDE); la Galería de la Memoria: “Catatumbo, la terquedad por la vida”, en la que la Asociación Minga y la Fundación Progresar, entre otras organizaciones presentaron el libro <i>Memoria: Puerta a la esperanza</i> , y el Primer Festival de Memoria de La Gabarra en 2006, en el que se contó con

			el apoyo de la MAPP-OEA y de la parroquia de ese corregimiento. El festival se continúa realizando anualmente y a partir del año 2012 es apoyado por la Unidad para las Víctimas (página 207).
Después de 2006		Asociación para la memoria y la dignidad de las víctimas del Catatumbo	De los ejercicios de memoria surgieron organizaciones como la Asociación para la Memoria y la Dignidad de las Víctimas del Catatumbo y colectivos que asistieron a las audiencias de Justicia y Paz de Laverde Zapata y de Mancuso Gómez y otros, en las que les exigieron a sus victimarios la verdad sobre lo sucedido, les pidieron informar sobre el paradero de sus deudos y les reclamaron dignificarlos y no persistir en los señalamientos de que eran guerrilleros (páginas 208-209).
2006	Organizaciones	Comité de Integración del Catatumbo. Marcha por el empleo	Se instituyeron espacios como el Comité de Integración del Catatumbo (Cisca) y se crearon organizaciones como la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat). Pese a que subsistía el temor a los paramilitares que “estaban ahí y mandaban”, en “2006 se realizó la primera marcha, cuya finalidad no fue la defensa de la vida, sino del empleo que es el problema de Tibú”. En esta oportunidad reclamaron mejores condiciones de los subcontratistas de Ecopetrol (página 213).
2007	Desplazados vereda Las Delicias	Retorno	Las familias que fueron desplazadas de la vereda Las Delicias, que con el apoyo de una profesora de Tibú, se organizaron en el año 2007 (...). Con sus propios medios lograron que les donaran la escuela y le han solicitado al Incoder que compre la “única finca que quedó” en la que no hay palma, cuya propietaria huyó a Venezuela y voluntariamente se las ha ofrecido en venta. Además, han solicitado a la Unidad para las Víctimas que apoye un programa de reparación colectiva para que “las personas que están aquí en Tibú de Las Delicias vuelvan otra vez a sembrar (...) plátano, yuca y limón, cacho, pero palma no” (página 211).
2007	Líderes sociales	Plan de Vida La Gabarra. Segundo Festival de La Gabarra. Necesidades básicas insatisfechas	En La Gabarra, juntas comunales, líderes sociales, indígenas y docentes, entre otros, con el apoyo de la parroquia de ese corregimiento formularon el Plan de vida La Gabarra. Una propuesta para reescribir la historia de toda una región, presentado en el segundo Festival de La Gabarra en 2007. Previamente, elaboraron un diagnóstico sobre las carencias en vías, educación, salud, saneamiento, medio ambiente y otras necesidades básicas insatisfechas (página 212).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

2009	Ascamat	Refugio Humanitario. Mesa de interlocución y acuerdo	Ante el éxodo forzado de “decenas de familias” de los municipios de Tibú, Convención, Teorama, El Tarra, San Calixto, El Carmen y Hacarí, provocado por las confrontaciones entre la fuerza pública y las guerrillas, campesinos asociados a Ascamcat crearon la zona de refugio humanitario “por la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y la permanencia en el territorio” (Ascamcat, 2013) (página 213). En desarrollo de esa zona se constituyó la Mesa de Interlocución y Acuerdo, en la que labriegos con representantes del Gobierno acordaron, al igual que en 1998, la puesta en marcha de proyectos alternativos viables y concertados que acompañaran la erradicación forzada de coca “para no dejar a las familias en la inopia” por la erradicación manual de los cultivos de coca (Restrepo, A, 2013) (página 213).
2010	Campesinos	Movilización para exigir cumplimiento de acuerdos	En noviembre de 2010, ante el incumplimiento de los acuerdos de la Mesa de Interlocución y Acuerdo, campesinos del Catatumbo arribaron a Cúcuta y reclamaron nuevamente el cumplimiento de los acuerdos de 1996, 1998, 2001 y 2009 (página 214).
Después de 2011		Víctimas	Con el apoyo de la MAPP-OEA, la Iglesia, la Unidad para las Víctimas, organizaciones no gubernamentales locales, regionales y nacionales, las víctimas intentan reconstruir confianzas y solidaridades y el tejido social y trabajar en la Ley 1448, ley de víctimas (página 209).
2012	Pobladores		Recordando a las víctimas en el río Catatumbo. VII Festival por la Vida de la Gabarra (página 225).
2013	Campesinos	Paro y exigencia de creación de ZRC	Más de 20 mil campesinos exigieron una vez más del Gobierno nacional, departamental y local el cumplimiento de los compromisos suscritos en las anteriores movilizaciones y rechazaron la erradicación forzada manual, sin alternativas económicas para los pequeños cultivadores de coca (página 214). Frente al <i>boom</i> agroindustrial, minero energético y de infraestructura, componentes de la <i>Estrategia de Desarrollo Integral de la región del Catatumbo</i> (DNP, 2013), campesinos y campesinas de Tibú y otros municipios del Catatumbo propusieron la creación de la Zona de Reserva Campesina (página 49). [4 campesinos murieron durante la manifestación (página 214)]. El paro se levantó reiterando los acuerdos anteriores 1998, 2009. El nuevo acuerdo se firmó el 13 de septiembre de 2013 y nuevos compromisos entre el Gobierno y los representantes de la movilización. Entre ellos se destaca el reconocimiento del subsidio a los

			campesinos cocaleros, un programa gradual de sustitución de cultivos de uso ilícito y la creación de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, cuyo trámite se inició en 2011, cuando el Incoder financió los estudios sobre las 353.006 hectáreas en 339 veredas de los municipios de El Carmen, Convención, Teorama, Hacarí, San Calixto, El Tarra y Tibú (página 215).
2013		Homenaje a líder	Luisa Benilda Jaimes, fundadora de La Gabarra, homenajeada por la Unidad de Víctimas en el VII Festival de la Memoria de La Gabarra, fallecida en 2013 (página 14) [el CNMH le dedica el informe].
s.f	Víctimas	Reparación de daños causados por desplazamiento	Con el apoyo de la Asociación Minga, gabarreños y tarreños acudieron por primera vez en la historia de Colombia a la interposición de acciones de grupo para reclamar la reparación de los daños causados por el desplazamiento forzado. La acción fue instaurada por las víctimas sobrevivientes de las masacres perpetradas el 29 de mayo de 1999 y en Filo Gringo, El Tarra, los días 29 de febrero y 3 de marzo de 2000. En los dos casos, el Consejo de Estado condenó patrimonialmente a la Nación — Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Policía Nacional— y ordenó indemnizar a las víctimas, con la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto del daño moral ocasionado por los desplazamientos y la muerte de sus familiares (páginas 211-212).

BAHIA PORTETE			
Fecha	Actor	Tipo de Acción	Evento
1982	Indígenas media y alta Guajira	Reclamo derechos frente al Cerrejón	Entre las formas de organización que surgieron durante los últimos treinta años, está Yanama — que significa “días de trabajo colectivo”—, creada en 1982 y cuya líder, Remedios Fajardo trabajó en coordinación con comunidades de la media y alta Guajira para defender sus derechos y territorio frente al proyecto de desarrollo de la explotación carbonífera El Cerrejón. La organización indígena Yanama lideró la resistencia de las comunidades wayúu a la apropiación o el desplazamiento de su tierra para la construcción y desarrollo del complejo minero; evitó la nivelación del Cerro de la Teta, lugar sagrado de los Wayúu, y promovió el reconocimiento del territorio indígena como resguardo de la media y alta Guajira (página 182).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

1991	Mujeres de la sal	Denuncias reclamos derechos frente al Estado (frente privatización de salinas)	La organización Waya Wayúu —Nosotras las Wayúu, las mujeres de la sal—, fue creada en 1991 por mujeres que explotaban la sal en Manaure. La crearon para denunciar las decisiones arbitrarias del Estado para la explotación de sal de Manaure y sus políticas de privatización y por la defensa de los derechos humanos y el derecho al trabajo de quienes tradicionalmente han explotado la sal (página 183).
1993	Familia Epinayú	Reclamo ante el Estado	La familia Epinayú reclamó ante el Estado el acuerdo en Uribia sobre el Puerto. El Estado decidió a favor de la familia Epinayú y en visita al gobernador lo comunicó: “se anuló el documento y se reconoció que Bahía Portete es el territorio ancestral de las familias Fince Uriana, Fince Epinayú y Ballesteros Epinayú, y que como resguardo la propiedad es colectiva e intransferible” (página 144).
1993	Mujeres	Crear Organización	Al momento del viaje a Bogotá de los Epinayú a reclamar por reunión Uribia para dirimir asuntos del Puerto de Bahía Portete, sin ellos presente y en contravía de las consideraciones del derecho consuetudinario, “se creó la Asociación Indígena de Autoridades Tradicionales de Bahía Portete, Akotchijirrawa, la primera que se constituyó en el país, posterioridad a la vigencia de la Constitución”. Por consideración estratégica dadas las posibilidades que abría la Nueva constitución, aunque en contravía de las formas descentralizadas y “la autoridad se asienta sobre nociones más de tipo cultural y moral, y opera mediante unas instituciones representativas que funcionan de manera coyuntural (la mujer chamán, el tío materno, los ancianos mayores) e idealmente de forma consensual”. La fundación de la asociación fue liderada por mujeres de Bahía Portete, entre ellas, Rosa Fince y Margoth Fince, torturadas y asesinadas posteriormente en la masacre (página 145)
1995	Mujeres	Cerrar puerto	Las tensiones entre las familias de nuevo se agudizaron con el asesinato en 1995 de Francisco Iguarán Epinayú (página 145) (quien tenía un fallo a su favor sobre el Puerto en 1993). <ul style="list-style-type: none"> • En el relato de algunos miembros de la comunidad, se interpreta que este evento es el que llevó a que las mujeres intervengan y apacigüen a las partes: “nosotras las mujeres calmamos a nuestros hombres para que no sucediera nada”. A raíz de este hecho, aproximadamente 20 de ellas se organizaron y cerraron el puerto (página 146).

			<ul style="list-style-type: none"> • “Las mujeres se fueron, se organizaron y cerraron los puertos y se pararon como veinte mujeres ahí: ‘Si descargan, le echan el barco a la gente (...)’” (página 146). • Pipa Iguarán, quien controlaba uno de los tres puertos de Bahía Portete (los otros dos eran de Chema Bala y de Marcos Ibarra) se acercó a José María Fince, autoridad mayor de la comunidad de Portete, para negociar el pago por el asesinato de Francisco, pero no se llegó a ningún acuerdo y, por ende, el puerto siguió cerrado. Los barcos fueron desviados a Puerto Nuevo (página 147).
2004 (8 abril)	Indígenas	Emboscada a paramilitares	El 8 de abril de 2004, diez días antes de la masacre, se produce una emboscada por parte de algunos integrantes de la comunidad Wayúu a un grupo de paramilitares. La emboscada es planeada como una estrategia para “hacer ir” a los “arijunas que vestían de prenda militar” [después de los asesinatos de los dos hermanos Barros]. Con esta emboscada, los Wayúu hacen saber a los paramilitares que no se van a dejar doblegar y que no van a ceder su territorio a los nuevos grupos, constituidos además por extraños (página 48).
Masacre 18 abril 2005			
2004	Desplazados	Desplazamiento	Más de 600 personas, quienes en su mayoría se escondieron durante días entre cardones y manglares en el desierto. Posteriormente, emprendieron la huida hacia Uribia, Maicao, Riohacha o iniciaron una larga marcha por el desierto para cruzar la frontera y buscar protección humanitaria en Venezuela (página 29).
2004	Los indígenas	Instar al Gobierno central	Los indígenas por su parte, en una clara comprensión de la coyuntura política, instaron al Gobierno Nacional a que condicionara el inicio de los diálogos en Santa Fe de Ralito (Córdoba) al cese efectivo de los asesinatos y las amenazas contra sus integrantes en la media y la alta Guajira por parte de los mandos paramilitares. Uno de los integrantes de la comunidad indígena anotó que “Jorge 40 está en la mesa y él fue el que mandó a matar a todo el mundo. No tiene sentido continuar con el diálogo mientras allá (en La Guajira) siguen las hostilidades, los asesinatos, las amenazas para que abandonen su tierra, el reclutamiento de sus trabajadores”, y resaltó a renglón seguido cómo a pesar de la gravedad de la situación “ésta sigue invisible para el país” (páginas 25-26).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

2004 (Mayo 6)	Autorida- des indíge- nas BP	Comunica- dos. Recha- zo versiones	Las autoridades de Bahía Portete han rechazado con indignación la presentación de los motivos de la masacre como un episodio de confrontaciones entre grupos al margen de la ley y exigen que se identifique a los verdaderos responsables y los motivos que están en el trasfondo de esta masacre. Desde el primer comunicado que emiten en mayo 6 de 2004 y envían a la Organización Nacional Indígena del Cauca (ONIC), la comunidad responsabiliza a los paramilitares por estos eventos, y adicionalmente destaca la omisión y participación de las fuerzas militares en la masacre. En ese mismo comunicado destacan el abandono en que se encuentran, puesto que ni el alcalde de Uribia ni el gobernador de La Guajira se habían pronunciado y tampoco habían recibido atención o protección adecuadas por parte del gobierno nacional (página 156).
2004 (Junio)	Autorida- des indíge- nas BP	Comunica- dos. Recha- zo versiones	En junio de 2004 los alaülayu, autoridades de Portete, entregan a diversas organizaciones un comunicado en el que rechazan la presentación de la masacre como producto de rencillas familiares o del robo de droga (página 158).
2004 (agos- to)	Las auto- ridades indígenas Bahía Portete	Comu- nicado. Oposición “retorno oficial”	Las autoridades de Portete en su comunicado fechado el 22 de agosto de 2004 indican que no más del 10 por ciento de los habitantes de Bahía Portete regresaron. El comunicado además agrega: “Mientras en el acto oficial presidido por el vicepresidente se repartía abundante comida a personas traídas en camiones que pertenecen a la jurisdicción de Uribia, las verdaderas víctimas, 320 familias wayúu se encuentran desplazadas en Maracaibo, sin alimentos, sin techo, sin haber recibido la visita del gobernador de La Guajira, José Luis González Crespo, ni de su alcalde Marcelino Gómez Gómez. En medio de nuestra difícil situación observamos con indignación la parodia oficial del “retorno” (página 164) (...) [que] la vicepresidencia no haya invitado a quienes nos representan en el ámbito nacional, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y no hayamos estado nosotros como autoridades y dueños del territorio (página 164).
2004 (agos- to)	AICO	Denuncia	En 25 de agosto de 2004, la Asociación Indígena de Colombia (AICO) denunció irregularidades, falta de garantías para el retorno de los Wayúu y el carácter incompleto del informe sobre la situación de los desplazados.

2004 en adelante	Autoridades y miembros comunidad	Reivindican	Las autoridades y miembros de la comunidad mantienen como meta central su determinación de retornar, pero para ello demandan un compromiso por parte del Estado, que sostenga y garantice el retorno, brinde condiciones de seguridad, no se repitan los hechos, y que para el desarrollo de proyectos económicos, de reconstrucción de viviendas e instalaciones de salud y educativas se dispongan de los recursos para su adecuada materialización.
2004 en adelante	Líderes	Denuncia y conmemoración	En respuesta a la masacre y a la violación de los derechos humanos contra indígenas wayúu, así como a la situación de desplazamiento de la totalidad de la comunidad, los líderes emprenden numerosas actividades de denuncia pública y de conmemoración, que incluyen frecuentes viajes a Bogotá para divulgar dichos eventos. Durante los últimos 6 años, las amenazas en su contra se han incrementado y su situación de alto riesgo condujo a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgue medidas cautelares a diez miembros de la comunidad y le solicite al Estado colombiano la adopción de medidas de protección para garantizarles su vida e integridad física (página 70).
	Líderes y autoridades	Hacer visible la masacre	Los líderes y autoridades de la comunidad inician un trabajo incansable para hacer visible una masacre ignorada por los medios de comunicación nacionales, trivializada por las instituciones oficiales y poco conocida y nombrada entre las organizaciones de derechos humanos. Este trabajo ha estado signado por obstáculos y desafíos que incluyen dificultades para construir y mantener alianzas con otras organizaciones locales y nacionales de mujeres y de víctimas (página 183).
	Líderes y mujeres	Búsqueda de justicia	Líderes y mujeres de Bahía Portete han emprendido numerosos recorridos a diferentes partes de Colombia y Venezuela en búsqueda de justicia, asistiendo a las sesiones en el juicio de Chema Bala, a las versiones libres de <i>Jorge 40</i> y otros integrantes del Bloque Norte de las AUC y a cualquier reunión o evento en el cual puedan recabar más información o presentar el caso de Bahía Portete (página 183).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

2004 en adelante	Mujeres	Denuncia y memoria	Se conformaron organizaciones como Fuerza de Mujeres Wayúu en Maicao, liderada por Kar-men Ramírez, que han venido documentando las violaciones de los derechos humanos a las comunidades wayúu de La Guajira y el riesgo en el que se encuentran las mujeres líderes de este grupo étnico (página 182). “Somos una alianza de mujeres wayúu, delegadas de diferentes organizaciones, asociaciones de autoridades tradicionales, cabildos, rancherías y comunidades. Todas procuramos la defensa de los derechos de nuestro pueblo” (página 183).
	Red de Mujeres del Caribe	Víctimas y Memoria	Otra organización es la Red de Mujeres del Caribe, cuya representante en La Guajira es Carmen Alicia Sánchez, impulsa redes de mujeres y jóvenes y trabaja documentando violaciones de los derechos humanos y realizando acompañamiento a las organizaciones de víctimas. La comunidad de Bahía Portete construye sobre esta tradición histórica sus propias respuestas organizativas, de resistencia y de búsqueda de verdad y justicia en relación con los eventos asociados a la masacre. Desde ese escenario establecen diálogos con la resistencia de otros pueblos indígenas y con otras iniciativas organizativas y de mujeres de la baja, media y alta Guajira e incluso de los ámbitos nacional e internacional (página 183).
2005	Mujeres	Memoria y denuncia	Dos meses después de la masacre, Débora Barros, joven líderesa de la comunidad viaja a Bogotá para comenzar un arduo trabajo de documentación y denuncia, labor que le vale múltiples amenazas y atentados. En 2005, ella con otros Wayúu de la alta y media Guajira conforman la organización Wayúu Munsurat, Mujeres Tejiendo Paz, como organización de defensa de los derechos colectivos de los Wayúu, con atención particular a las mujeres y jóvenes, y como iniciativa que busca visibilizar la crítica situación en materia de derechos humanos que afecta a las mujeres wayúu y de la alta Guajira (página 185).

2005 (Abril)	Mujeres Wayúu Munsurrat	Conmemoración Yanama	<p>En abril de 2005 los integrantes de Wayúu Munsurrat invitan a diferentes organizaciones sociales a regresar juntos a Bahía Portete en el primer aniversario de la masacre, como un acto simbólico de recuperación del territorio. Se organizó un regreso y una conmemoración bajo la forma de un Yanama. Esta conmemoración ha tenido lugar cada año desde 2005 (CNRR, MH, 2009).</p> <p>Ancianos, autoridades, líderes, mujeres, hombres y niños de los dos clanes familiares víctimas de esta masacre regresan desde Maracaibo, Maicao, Uribia y Riohacha acompañados por otros indígenas y autoridades wayúu tanto de La Guajira como de Venezuela, por miembros de otros pueblos indígenas, organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos y solidaridad, organizaciones gubernamentales y otras organizaciones civiles y sindicatos. Este regreso al territorio, del cual fueron desterrados y en el cual fueron testigos del horror del asesinato de mujeres y niños, tiene un peso simbólico y político muy grande (página 187). “Nosotros lo que queremos es verdad, justicia, no tanto reparación porque para nosotros la reparación, nosotros nuestros muertos nunca no los van a reparar, nuestros muertos nunca los van a reparar con dinero (...)” (página 187).</p> <p>Se establece una clara diferencia entre el pago como medio para la resolución de disputas en la sociedad wayúu y la reparación administrativa adelantada por el gobierno nacional (página 187).</p>
-----------------	-------------------------------	-------------------------	--

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

<p>Mujeres Wayúu Munsurrat</p>		<p>Es un trabajo en el que organizaciones como Wayúu Munsurat combinan una mirada de su particularidad étnica, con la de género. Además, reconocen su responsabilidad y capacidad como lideresas del mundo no indígena y comunicadoras en su comunidad y desde su comunidad. Las iniciativas de memoria emprendidas por Mujeres Tejiendo Paz retoman su identidad de mujeres indígenas.</p> <p>Desde estos lugares, de género y etnicidad han emprendido numerosas alianzas y trabajos con otras organizaciones indígenas y de mujeres, como es el caso de la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu, Ejepenajirrawa, que tienen como tarea central acompañar anualmente a los Yanamas y visibilizar la masacre de Bahía Portete (página 189). Wayúu Munsurat y la Asociación de Autoridades Tradicionales son ejemplos de resistencia en los que el trabajo de reconstrucción de memoria histórica y la búsqueda de justicia ocupan un lugar central.</p> <p>Son iniciativas que han recibido amplia difusión en circuitos internacionales (página 190).</p>
	<p>Iniciativas de memoria individuales</p>	<p>Para mantener una red de comunicación informada sobre todo lo que acontece durante el proceso judicial y reparación a la comunidad y para mantener viva y documentar la memoria de la masacre. Son vistos por la comunidad como guardianes de la memoria, pero también como “corredores humanos”, entendiendo la expresión como a aquellas personas que están en continua comunicación con los distintos sectores de la comunidad en ambos países (página 190).</p> <p>Dos personas que viven en Maracaibo hacen extensos recorridos para llevar mensajes a las familias en situación de desplazamiento y a la autoridad tradicional que aprueba decisiones concernientes a la comunidad (página 191). Guardan también elementos simbólicos de los días de la masacre (cotizas; recortes de prensa, un trabajo de grado sobre el tema).</p>

2007	Indígenas	Rechazo a propuesta justicia Chema Bala	Por su parte, José María Barros Ipuana solicita durante el proceso que se le juzgue en el marco de la jurisdicción indígena Wayúu. En carta dirigida al magistrado ponente, Jorge Alonso Flechas de marzo 20 de 2007, ochenta miembros de la comunidad Wayúu de Bahía Portete expresan su oposición a esta solicitud, enfatizando que delitos de lesa humanidad y en los que se ha actuado con conocimiento de causa y complicidad de personas de fuera de la comunidad (arrijunas, hombres blancos y fuerzas extrañas) bajo órdenes de un jefe paramilitar, no pueden ser solucionados por la vía de la justicia consuetudinaria de los Wayúu (páginas 72-73).
------	-----------	---	---

Fracturas y tensiones entre organizaciones sociales y de mujeres en la región (página 189)

Un campo plural en que organizaciones sociales, iniciativas locales, las mismas familias despliegan sus labores de memoria y hacen reclamos acerca de cómo se construye verdad histórica y quiénes son los responsables y las víctimas de la crítica situación de violación de los derechos humanos que ha vivido el departamento (página 192).

Memoria que una hija de José María Barros Ipuana, Chema Bala: su versión sobre quién es su padre y de los hechos de los que han sido víctimas ella y su familia, con el propósito de romper con la estigmatización a que ella y sus hijos se han visto sometidos. En octubre de 2009, ella circula un escrito en donde planteaba que si bien las voces de las víctimas deben ser escuchadas, la verdad completa requiere también escuchar a aquellos que están en prisión como responsables de los hechos. [Que su alianza con *Jorge 40*] continúa la “tradición trazada por guerreros wayúu que lo antecedieron en el tiempo y que en las circunstancias específicas de cada época establecieron todo tipo de alianzas, como aquellas que se consumaron con piratas y bucaneros (página 193). Los comunicados llaman a “construir un mapa completo de todas y cada una de las víctimas wayúu del conflicto armado” con miras a que se les dé “un trato simétrico (página 194). Propone construir memoria “sin exclusiones”.

Así, invitaba a la conmemoración de la masacre del barrio Santander (Maicao, 8 de noviembre de 2009) que planeaban realizar en Bahía Portete (193).

Las organizaciones Wayúu Munsurat y Akotchijirrawa de Bahía Portete respondieron a estas comunicaciones enfatizando que la verdad ya está plenamente documentada en los expedientes judiciales y en la memoria del pueblo Wayúu. En su respuesta manifiestan que si José María Barros tiene voluntad de verdad lo que debe hacer es revelar donde están las desaparecidas. “Una cosa son las alianzas de nuestros antepasados en guerra justa, para enfrentar al invasor español y otra, son las alianzas de Chema Bala con los paramilitares para masacrar a su propia etnia del pueblo Wayúu y para continuar a manos llenas con el negocio del narcotráfico”.

Quienes firman se oponen vehementemente a la conmemoración de la masacre de Maicao en Bahía Portete y anuncian que la organización de dicho evento constituye una nueva afrenta a “la memoria de las verdaderas víctimas” y “un paso más al repoblamiento paramilitar”.

- Las líderes y autoridades mayores reconocidas de Bahía Portete exigen que cualquier iniciativa de desarrollo o retorno hacia Bahía Portete debe partir de reconocer la masacre y sus responsables, que casi la totalidad de la población de este asentamiento aún se encuentra en situación de desplazamiento, que todavía hay personas desaparecidas, y que el proceso de búsqueda de justicia continúa (página 195).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

EL CASTILLO			
Cont c.a	Fecha	Actor	Evento
Poder electo- ral UP	1986	Campesinos	Más de 2000 campesinos se dirigieron hacia la cabecera municipal y luego hacia la capital del Meta, donde presentaron un pliego de peticiones, en las que exigían la desmilitarización de la región y la investigación penal y disciplinaria de la masacre (Colombia Nunca Más, 2011) (página 82).
	Década 1980	Mujeres	El Domingo de Mujeres que llevó a las mujeres a asumir por sí mismas el riesgo de salir a las calles o caminos para proteger a los hombres que corrían especial peligro (página 83) (los hombres ya no salían...). En la década de 1980 los Domingos de Mujeres fueron una expresión inequívoca de su valor para enfrentar a los armados.
Disputa FARC ACCU/ AUC	1994 - 2000		En 1994-96: Entra la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) a acompañar la población. En 1998 se reforzó. En el 2000 “se fundó la Misión Claretiana en esta zona”, “equipo permanente de acompañamiento pastoral, espiritual y solidario a las comunidades, con misioneros, laicos y miembros de la CIJP, que paulatinamente se fueron convirtiendo en un mecanismo de defensa de la comunidad frente a los actores armados” (página 226).
	2000		La Misión Claretiana se convirtió en “presencia profética” para impedir asesinatos selectivos, acompañante para realizar levantamientos de los campesinos asesinados en las zonas rurales, orientadora de las víctimas en las rutas de denuncia y exigibilidad de sus derechos ante las autoridades. Acompañó psicológica y espiritualmente a las víctimas, denunció en el ámbito nacional e internacional las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y acompañó las experiencias de resistencia comunitaria impulsadas por las organizaciones locales” (páginas 227-228).

Disputa FARC ACCU/ AUC	2000 en adelante		Después de 2000, nosotros nunca pusimos denuncias formales ante la Fiscalía porque ya sentimos que eso no servía para nada. (...) De nada valía colocar las denuncias a la Fiscalía porque terminaba siendo investigada la víctima, porque terminaba siendo asesinada y nosotros comenzamos a utilizar otra manera, que es lo que llamamos las historias y es en lo formal una descripción de los hechos, pero no tiene la formalidad de una denuncia, pero sí tiene formalidad de la entrega ante las instituciones: Defensoría, Procuraduría, Ministerio del Interior, Vicepresidencia y Fiscalía. Pero lo poníamos como “ponemos en su conocimiento tal cosa”, porque teníamos claro que el solo hecho de que una autoridad conozca de un delito, por su función le toca abrir una investigación de oficio (página 113).
Desplazamiento “duro” Disputa FARC - AUC - FF.AA.	2002 - 2008	Desplazados en otras ciudades	En “territorio ampliado lugares de llegada” se construyeron nuevas redes de ayuda y de solidaridad entre paisanos y vecinos, se reconstruyeron redes de apoyo que se mantienen hasta la actualidad, en una especie de ampliación del territorio común desde donde se comienza a gestar el “regreso” al territorio (páginas 20-21).
		Organizaciones sociales en el territorio	En el territorio durante mucho tiempo las organizaciones tuvieron que ausentarse del debate público, pero con el tiempo encontraron mecanismos para no renunciar a la deliberación, la participación democrática y la búsqueda de soluciones colectivas a los problemas del municipio. En este contexto de alternativas propias para la acción colectiva, han surgido diferentes espacios de confluencia política, como la Mesa Política Ambiental de Participación Comunitaria en la que participan, entre otros, la Asociación de Ganaderos de El Castillo, el Acueducto Comunitario Peñas Blancas, Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta (Sintragrim), la Atcarí (Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Alto Ariari), el Sector de Víctimas de El Castillo, la Asociación de Usuarios del Acueducto de Medellín del Ariari, la Comunidad Civil de Vida y Paz (Civipaz) - Zona Humanitaria, la Asumar (Asociación de Mujeres) y delegados de 17 Juntas de Acción Comunal (página 152). “Es una expresión de organización para intentar enfrentar los desafíos que hoy presenta el territorio: la minería, la destrucción del medio ambiente, la protección de los recursos naturales como el agua. (...) ellos han tenido la capacidad de organizar y convocar un cabildo abierto por el agua de casi 500 personas [y] de organizar el día de conmemoración a las víctimas de crímenes de Estado que reunió más de mil personas de la región” (página 220).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

Desplazamiento “duro” Disputa FARC - AUC - FF.AA.		Organizaciones sociales	<p>Organizaciones sindicales, Juntas de Acción Comunal, cooperativas, comunidades religiosas, organizaciones de derechos humanos, apoyados por otros actores nacionales e internacionales, han creado múltiples espacios de participación comunitaria que configuran una compleja red organizativa, a la que han podido apelar las familias e individuos (página 213).</p> <p>Desde el apoyo emocional basado en las relaciones de confianza, la emergencia y activación de nuevas redes de solidaridad en los lugares de llegada, el apoyo en la búsqueda de recursos materiales para la supervivencia, hasta la realización de acciones colectivas orientadas a la defensa de los derechos y la protección del territorio (página 213).</p>
		Mujeres	<p>Algunas de las mujeres que integraron los comités femeninos siguen en la lucha por reactivar la Unión de Mujeres Demócratas en Villavicencio, al tiempo que hacen parte de otros espacios colectivos de víctimas (página 214).</p>
			<p>Desde algunas organizaciones se ha promovido el sostenimiento de vínculos entre los expulsados y quienes permanecen en el territorio, a través de diferentes procesos algunos de ellos tendientes a la reconstrucción de la memoria histórica y otros a la movilización y exigibilidad jurídica (...) dirigidos a buscar el restablecimiento de los derechos de la población en situación de desplazamiento así como a generar resistencias frente a los factores que amenazan la permanencia de quienes están en el territorio, o dificultan el retorno hay muchos hechos organizativos (página 220).</p>

	Desplazados en Bogotá y Villavicencio	<p>El Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta (Sintragrim) ha sido una de las organizaciones con gran relevancia a la hora de convocar a la población desplazada, promover su organización fuera del territorio y continuar trabajando aun en medio de la violencia y las amenazas que pesan sobre sus líderes y lideresas. “A muchos nos tocó venirnos para Bogotá y seguir trabajando desde aquí, pero hay directivas que están en la región al frente del trabajo organizativo” (Líder) (página 214).</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Entonces Andescol ha sido una de las organizaciones que nos ha recibido”. Nos hacen la invitación a participar de la Mesa Humanitaria del Meta, al Banco de Datos Regional, al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y con una compañera empezamos a formar el Capítulo Meta del Movimiento Nacional de Víctimas y ahí seguimos reunidos” (página 215). • “Uno aprende a conocer sus derechos y aprende a exigirle a las autoridades, y si uno se organiza como mujer [puede] ayudar a otras mujeres y [al] estar organizadas podemos exigirle al Estado” (páginas 215-216). Para desenvolverse en los intrincados itinerarios burocráticos: manejar un computador (...) ya sabemos llevar un derecho de petición ya bien sustentado con fotocopias (...) resignificar la experiencia, encontrar sentido, adquirir control sobre la propia existencia e incentivar la toma de decisiones con un grado relativo de autonomía, frente a las mejores alternativas para afrontar el hecho victimizante sin sumirse en el aislamiento, el dolor, el silencio y el olvido” (páginas 216-217).
	Pobladores en el territorio y desplazados	<p>De manera simultánea a la desestructuración violenta han surgido mecanismos familiares, comunitarios, organizativos e individuales para afrontar los daños y las rupturas que han dejado el conflicto armado, la violencia sociopolítica y el desplazamiento forzado. En la emergencia de estos mecanismos se han entrelazado de manera permanente las personas expulsadas y quienes permanecen en el territorio (página 210).</p>
		<p>Algunas de las familias que fueron expulsadas activaron de manera inmediata redes familiares de apoyo durante los desplazamientos [mandan dinero, comida, alojamiento].</p>

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

		Mujeres	En los días aciagos del desplazamiento, emergió esa capacidad para cuidar del otro por encima de su propia integridad, de sobreponer la valentía al miedo y al dolor. Incluso ante la muerte, la desaparición y las amenazas, muchas decidieron enrostrar a los victimarios y desafiar su poder (página 231).
		Campesinos desplazados en ciudades	“Las víctimas de la zona rural”, ligadas a la organización política y comunitaria que intentan trasladarse a los lugares de llegada, con rasgos heredados de la tradición organizativa del Partido Comunista Colombiano (PCC) y posteriormente de la Unión Patriótica (UP) (página 211).
		Pobladores y campesinos víctimas en el territorio	Víctimas de la zona rural, el casco urbano y los centros poblados: conservan gran cantidad de monumentos, símbolos, ofrendas, placas conmemorativas, bustos, acciones de movilización, homenajes, celebraciones, conmemoraciones, actos litúrgicos, pronunciamientos, peregrinaciones y recorridos de la memoria (página 211).
			En el territorio, Justicia y Paz y la Misión Claretiana “han contribuido de manera significativa en varios temas: el proceso de adjudicación y titulación de tierras baldías, la defensa del derecho al agua, la protección del territorio frente a la minería y el proceso de regreso autónomo de las familias que hoy hacen parte de Civipaz, establecida en la vereda Puerto Esperanza” (página 228).
Retorno	2003	Desplazados Villavicencio. Asentamiento urbano y retorno	Desde enero 2003, desplazados en Villavicencio se empezaron a reunir en una iglesia, hicieron un asentamiento al que llamaron Comunidad Civil de Vida y Paz (Civipaz) e inspiradas por Reinaldo Perdomo Hite, líder campesino, defensor de derechos humanos e integrante del PCC y de la UP, quien, con el acompañamiento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz había conocido las experiencias de resistencia de las comunidades negras de Cacarica en el bajo Atrato chocoano; decidieron intentar el regreso a través de un mecanismo de protección fundado en el principio de distinción de la población civil, denominado zona humanitaria (página 223).

Retorno		Desplazados Villavicencio. Asentamiento urbano y retorno	Mediante una “ficha de trabajo familiar”, en la que se reconstruyeron las violaciones a los derechos humanos y el desplazamiento”. Hicieron pliego de peticiones al Gobierno nacional, sin respuesta. Además, “solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de las 35 familias asociadas en Civipaz, las cuales les fueron otorgadas el 16 de agosto de 2004” (página 223).
	2006		“Sin contar con el apoyo del Estado, entre el 18 y el 20 de marzo de 2006, aproximadamente 27 familias regresaron a El Castillo donde conforman una zona humanitaria en el corregimiento de Puerto Esperanza” (página 224). “Quienes no pudieron regresar continúan organizados en Civipaz Villavicencio” (página 225).
2008 en adelante		Pobladores frente a la minería	Una facción de la comunidad (no sólo de El Castillo, sino del vecino municipio de El Dorado) continúa en resistencia y se ha organizado para evitar la entrada de la minería y los hidrocarburos al territorio. Para ello se han valido de diferentes estrategias, como bloquear las vías para no dejar pasar a los funcionarios de Ecopetrol, ir siempre en grupo a las reuniones, entre otras (página 154). - La posición de los castillenses frente a la explotación de los recursos naturales no renovables no es unánime (página 154) “las veredas que cubren los acueductos comunitarios de Peñas Blancas y Medellín no quieren que vengan las empresas mineras” (página 154) (otras veredas si quieren por empleo fijo, para que lleguen carreteras...).
		Campeños y titulación tierras	“Frente al tema de la tierra, digamos las personas que se encuentran en la parte alta, muchos se encuentran ubicados en zonas que son de amortiguamiento o que hay parte ya del páramo de Sumapaz y en esa medida las personas han buscado la titulación de sus tierras. (...) Entonces se ha venido haciendo un proceso para que se dé la titulación de esas tierras” (página 221).
		Pobladores y campesinos por fuentes de agua y manejo autónomo de acueductos	Un movimiento de resistencia a través de organizaciones, como el Comité Pro Acueducto del Alto Ariari y Civipaz, entre otras (página 298).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

Víctimas Memorias	2008	Víctimas	Los ejercicios en pro de la verdad y la memoria realizados por las víctimas y organizaciones, que recogen relatos y los hacen públicos, con el objetivo de visibilizar los hechos victimizantes y reclamar justicia (página 114).
	2008	Víctimas macroregión	Entre los habitantes de El Castillo, la memoria es una lucha por nombrar antes que por contar (...) la elaboración de archivos y bases de datos donde se establezcan el tiempo de ocurrencia, los hechos, los victimarios y los móviles (página 233). En 2008 fue creado el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Suroriente Colombiano, para recopilar la memoria”, como instrumento para reclamar derechos y un mecanismo para trabajar por la memoria. La continuidad de la violencia y el surgimiento de nuevas denuncias sobre hechos pasados implican una labor permanente de actualización de la información (página 233).
		Víctimas Macro-región	Los ejercicios de verdad y memoria se encuentran consignados en dos publicaciones: <i>Trochas de la memoria, suroriente colombiano</i> , Comité de Impulso al Banco de Datos de Violencia Política del Suroriente Colombiano, 2010, 2013, 2014 y <i>Ariari, memoria y resistencia</i> (Cinep y otros, 2009) 2002-2008.
		Los resistentes en el territorio	Se impulsan acciones en pro de la recuperación de las memorias de los castillenses, por ejemplo, por medio de la elaboración de “historias de vida” (página 235).
		Memorias en tensión	Las víctimas que sufrieron con mayor rigor la violencia de los paramilitares y el Ejército reclaman con vehemencia que, además de recordar los ataques de las FARC al casco urbano, cuando se haga memoria sobre El Castillo se recuerde también la barbarie militar y paramilitar. Señalan la imposibilidad ética, política y jurídica de olvidar que el Estado participó activamente en algunos de los hechos victimizantes (página 236). • Memoria: para señalar a otros grupos y personas cuya responsabilidad tampoco ha sido esclarecida” (narcos, políticos...) (página 237).

			<ul style="list-style-type: none"> • Para reconstruir y resignificar el espacio que quedó vacío tras la detonación de los cilindros de gas por parte de las FARC y la destrucción de varias manzanas en el casco urbano. Pero la iniciativa podía constituir un mecanismo de ocultamiento de la violencia paramilitar y de la responsabilidad estatal (...) se convocó un escenario de planeación con la presencia de personas del casco urbano y de la zona rural, víctimas y resilientes, representantes de organizaciones, investigadores y otros actores estratégicos, para realizar una construcción colectiva de una propuesta que contribuya a la formulación de una iniciativa plural, integradora, responsable con las víctimas y con toda la población en general (página 247).
		Pobladores urbanos y campesinos	Memoria frente a la estigmatización: se resisten a que la comunidad siga siendo designada como guerrillera”, “si nosotros no reconstruimos la historia de El Castillo para que la gente la conozca, pues El Castillo seguirá siendo lo que es: un pueblo guerrillero, y para que se den cuenta de que El Castillo sí fue y sigue siendo un pueblo de gente sana” (página 239),
EL PLACER			
Cont c.a.	Fecha	Actor	Evento
RESISTENCIAS INSPECCIÓN EL PLACER			
Do- minio FARC	1990	Pobladores	Denuncias y protestas población contra los Masetos y las denuncias de alianza entre sicarios y Policía.
	1994	Pobladores	Paro cívico contra fumigaciones y por puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (Plante). También por “vías, electrificación, educación, salud e inversión de las regalías petróleo en obras priorizadas por los municipios” (página 38).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

Do- minio AUC BCB		Pobladores	Sólo resistencias cotidianas no públicas para sobrevivir, evitar, neutralizar o interpelar el control de los armados, proteger la vida y defender su vínculo con el territorio. Hombres y mujeres cambiaron sus rutinas cotidianas, transformaron sus cuerpos y “aprendieron a vivir” para evitar la muerte. También hubo quienes, como las maestras, inventaron acciones tácticas para “quitarle espacio a la guerra”, para hacer contrapeso al orden simbólico, cultural y social instaurado por los paramilitares y mitigar los efectos de la violencia. Incluso algunas personas, principalmente mujeres, interpellaron frontalmente a los armados, mediaron y negociaron con ellos para salvar la vida de sus hijos, familiares, vecinos o conocidos (página 290).
		Pobladores	Museo de la memoria guarda vestigios de la guerra, cuentos elaborados por maestras y canciones compuestas por jóvenes (página 320).
MOVIMIENTO DE MUJERES PUTUMAYO (Padre Alcides Jiménez impulsor)			
	1985 - 1994	Mujeres	Procesos organizativos. Ámbitos de esa acción: seguridad alimentaria, organizarse para salir a la pública, reclamar derechos, confrontar la dominación patriarcal (planificación familiar, no maltrato), promovidos por el Padre Alcides Jiménez. Al igual que la creación de la Asociación de Mujeres del municipio de Puerto Caicedo (ASMUM) (página 351).
	1995	Mujeres	Asisten a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijín. A su regreso se convocó a una asamblea de mujeres de todo el Putumayo, que tuvo lugar en la Iglesia de Puerto Caicedo, se plantea la necesidad de mayor participación en política de las mujeres, pensar en candidaturas a los concejos municipales. En 1998 fue elegida una mujer concejal en Puerto Caicedo (páginas 352-353).
	1996	Mujeres	Participan en marchas cocaleras.

	1996	Mujeres	ASMUM cofundadora de La Ruta Pacífica de Mujeres en Mutatá (páginas 353-354). Comenzaron a hacer denuncias, marchas, foros, difusión de discursos sobre los derechos de la mujer, la paz y la resistencia civil contra la guerra —producidos tanto en el país como en el exterior— que se introducen en la región y dan nuevos significados a los procesos que estaban llevando a cabo en el municipio, en respuesta a la agudización del conflicto armado. De esta manera se introducen entre sus principios el de la no violencia, el feminismo, el pacifismo y el antimilitarismo (página 355).
	1997	Mujeres	Ante la inminencia de la entrada paramilitar: se adopta el discurso de la neutralidad, que generó tensiones con FARC (páginas 355-356).
	1998	Mujeres	Crean emisora comunitaria Ocaína Estéreo “un medio de información como parte de la estrategia de neutralidad para hacer resistencia a la vinculación de grupos armados, al monocultivo y para promover alternativas productivas organizadas” (página 357).
	1998	Iglesia	Semana por la Paz (las FARC asesinan al Padre Alcides), se silencia el movimiento de Mujeres en El Putumayo (páginas 358-359).
Do- minio AUC y Fumiga- ciones	2003	Mujeres	Ruta Pacífica de Mujeres y ASMUM organizan una movilización “Contra las fumigaciones, la guerra y por la desmilitarización” se llevó a cabo el 25 de noviembre de 2003 (página 361). Logros: <ul style="list-style-type: none"> • Movilización a través del espacio regional (local y departamental) • Denuncias.
	2003	Mujeres	Se organiza la Alianza Departamental de Organizaciones de Mujeres del Putumayo, “Tejedoras de Vida”, para responder a requisito Plan Colombia: recursos a organizaciones formales (página 367).
	2004	Mujeres	Marcha protesta asesinato líder indígena, que se opuso a la ocupación sus territorios por parte de las FARC (página 367).
Dismi- nución intensi- dad del conflic- to	2007	Mujeres	Cuando la comunidad pudo volver a salir a las veredas como resultado de la disminución del conflicto, las líderes de ASMUM reanudaron el trabajo que caracterizó a esta organización en sus inicios. En memoria del padre Alcides retomaron la filosofía del campo y empezaron a trabajar con Comités rurales en las veredas (página 371).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

	2011	Mujeres/ Hombres	“El ejercicio del liderazgo femenino continuó hasta el 2011, cuando los hombres empezaron a retomar la dirigencia”. “Desde el 2011 ya los hombres ven que no hay tanto problema y entran ellos a coger otra vez la junta de la organización [Asociación de Comunidades Campesinas, Indígenas y Afrocolombianas del Corredor Fronterizo Puerto Vega-Teteyé] (Acsomayo), pero de todas maneras yo sigo como vocal, digo que debe haber una mujer ahí, muchachos” (página 373).
--	------	---------------------	--

TRUJILLO			
Cont c.a.	Fecha	Actor	Evento
	Años 1980	Pastoral social	Impulso a la asociación de productores de tiendas comunitarias.
	Años 1980	Padre Tiberio Fernández	Impulsa el cooperativismo campesino.
	1988 (Oct.)		Paro cívico nacional.
	1989		Marcha campesina: “Cuando fue llegando la noche les quitaron la luz [a los campesinos de la marcha], los dejaron ahí con el Ejército, no los dejaron mover. Ya de pronto una señora se rebeló y le dio a un policía y lo rompió. Da la casualidad que la primera persona que desaparecieron fue esa señora” (página 215).
Hechos violentos de Trujillo (29 de marzo y el 17 de abril de 1990)			
CIJP y Asoc Víctimas Trujillo	1990	Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz (CIJP)	Documentar lo concerniente a 62 víctimas (las que más adelante se incrementan hasta completar las 235 víctimas) (página 179).
	ca. 1995	CIJP	Realizó gestiones ante la Procuraduría para aportar elementos a las investigaciones, y rechazamos indignados su vergonzosa resolución absolutoria (página 179).

ca. 1995	CIJP	Distribuyó a numerosas entidades humanitarias nacionales e internacionales un documento testimonial y analítico (página 179).
	CIJP	Presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (página 179).
1994	CIJP	Aceptó la propuesta presentada por el Gobierno en la audiencia del 26 de septiembre de 1994, de conformar una comisión amplia de investigación de los hechos, pero con tres condiciones: que no se calificara la propuesta de “solución amistosa”, que los resultados se presentaran antes de la siguiente sesión y que el trabajo de la Comisión fuera acompañado por delegados del CIDH. Las cuales fueron aceptadas por el gobierno (página 179).
1994	CIJP	Participó en la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo (CISVT) y en el Comité Operativo de la misma, como representantes de las víctimas (página 180).
1995		El presidente Samper reconoció la responsabilidad estatal en la tragedia, ocurridos entre 1988 y 1991 (página 180).
	CISVT	Construcción Parque Monumento con cargo al presupuesto nacional (página 181).
	CIJP	Se organiza la Asociación de Familiares de las Víctimas de Trujillo (Afavit) (página 181).
1995 abril		Primera peregrinación para conmemorar cinco años del asesinato del padre Tiberio Fernández. Asistieron 2.000 personas pertenecientes a organizaciones defensoras de los derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales, así como habitantes de varios departamentos habitantes de Trujillo no se unieron a la marcha por el temor a las represalias y se limitaron a observar el paso de la gente desde las ventanas de sus casas. A pesar de no haber participado directamente, por primera vez se dieron cuenta de que no estaban solos (página 184).
1996	CIJP, Colectivo de Abogados (Cajar) y Amnistía Internacional de Holanda	Comienza la remoción del terreno de donde se construye el Parque Monumento, con aportes de CIJP, Colectivo de Abogados Cajar y Amnistía Internacional de Holanda y pequeñas donaciones hechas por organizaciones populares, no del gobierno (página 182). <ul style="list-style-type: none"> • El significado del muro es de protección, de resistencia. El monumento establece una analogía entre el inmenso cuerpo humano masacrado, el cuerpo de Cristo y el cuerpo del pueblo (páginas 182-184).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

		Red de apoyo	La red de apoyo a las víctimas de Trujillo (compuesta por la Unión Patriótica, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), entre otros) (página 183).
			Alcanzan visibilidad pública prominente a través del parque y la peregrinación, se desencadenan una serie de retaliaciones por parte de los victimarios. Las organizaciones de la memoria en Trujillo entrarían en una fase de repliegue (páginas 184-185).
Crisis: Justicia y Paz. Repliegue Inicativas Memoria	ca. 1997		Oficialidad católica pone en tela de juicio a CIJP por denunciar solo crímenes del Estado, dejando de lado aquellos cometidos por las guerrillas (página 186).
	ca. 1997		Justicia y Paz ha acordado hacer presencia por la vía del acompañamiento (página 186).
	1998		Justicia y Paz cuestionado a nivel nacional por la oficialidad de la Iglesia.
	1998		Incremento de amenazas y hostigamientos a los miembros de Afavit (página 188).
			Salen al exilio dirigentes o acompañantes del proceso asociativo (salieron 30 al Canadá), allanamiento a Justicia y Paz, y del primer atentado al <i>Muro de la sombra del amor</i> del Parque Monumento (páginas 188-189).
	1999		Ante amenazas deben salir artistas que trabajaban por la memoria de las víctimas (páginas 186-187).
			La hermana Maritze Trigós toma el relevo a pesar de las amenazas y asume la tarea de acompañar a las víctimas. Su acompañamiento contó con el respaldo de Santiago Camargo, de la hermana Carmen Cecilia Ávila y de Fabio Serna, y con el apoyo permanente del padre Giraldo, en ese momento en el exilio en Holanda (página 188).
			Maritze encabezó las exhumaciones que se hicieron para recuperar los restos de algunas de ellas sin que hubiera ninguna participación por parte de peritos forenses (página 188).
	1999-2000		Se cierra sede Justicia y Paz (página 189).
	2001-		Nuevo impulso: Bajo la dirección de Adriana Lallinde, escultora, se inicia el diseño de altoprelieves representando la vida víctimas (oficios, las cosas que les gustaban) (página 189).

2002	Afavit, CRIC, CIJP Colectivo de abogados José Alvear Restrepo	Segunda peregrinación (anual) organizadas por Justicia y Paz. La ruta se inicia en Caloto, Cauca, y culmina en Trujillo. El objetivo fue ingresar al parque cementerio los restos mortales de cerca de 90 víctimas. Los restos humanos masacrados fueron vistos como una “potente voz colectiva que interpela a la nación y al mundo”. “El hecho de ver 3.000 peregrinos fortaleció mucho a Afavit (...) Asistieron representantes de organismos de Derechos Humanos de Holanda, Canadá y Estados Unidos” (páginas 189-190).
2002		Bajo la asesoría del antropólogo Fernando Alegría de Justicia y Paz, los jóvenes se independizan (de Afavit) y fundan la Orden Perdida sin dejar nunca de reconocer su origen en Afavit la memoria del padre Tiberio, no a través de las imágenes de dolor que han caracterizado su representación, sino exaltando algunos aspectos de su filosofía comunitaria (página 194).
2003	CIJP, Comisión Claretiana Justicia y otras	Tercera peregrinación (anual) organizada por Justicia y Paz, tuvo como lema: “Desafío de resistencia por la vida y contra la impunidad” con el objetivo de trasladar los restos mortales del padre Tiberio al mausoleo del parque cementerio (página 192). Participaron también: Paz e Integridad de la Creación, Colectivo de Abogados Cajar, Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia con la Creación.
	CIJP	Talleres en los que cada persona reconstruía la historia de su familiar muerto, también cartas que recogen un registro biográfico, el aspecto sentimental y humano de los familiares y las víctimas (páginas 190-191).
2004	Afavit y CIJP	Cuarta Peregrinación. A los asistentes se les pide llevar una planta con el fin de sembrarla en el Parque Monumento (página 192).
2005		Quinta peregrinación con el fin de conmemorar los 15 años transcurridos desde la masacre, y los 10 años del primer informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (páginas 192-193).
2003		El libro <i>¡Tiberio vive hoy! Testimonios de la vida de un mártir, Tiberio Fernández Mafla</i> , con el propósito recordar al hombre como hijo, familiar, trabajador comunitario y sacerdote (página 193).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

División	2005		Justicia y Paz sale de Trujillo por discrepancias con Afavit (página 194).
			Afavit y la hermana Maritze, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), asumen la representación de las víctimas (página 194).
			Parque Monumento ha sido y continúa siendo el centro de gravedad de la memoria pese a los sentimientos contradictorios que genera (página 197).
Memoria Integradora	2008 feb	GMH	El Grupo de Memoria Histórica (GMH) demandó un proceso paulatino de construcción de confianza, gradual apertura y negociación de las metas de la recuperación de memoria histórica (...) construcción de sentido y memorias desde la perspectiva de las mujeres de Trujillo que contribuyeran a la reconstrucción de una memoria histórica integradora de las voces diversas de las víctimas y residentes del municipio (páginas 198-199).

EL SALADO			
Cont. c.a.	Fecha	Actor	Evento
	Antes de la masacre	Víctima	Quienes confrontaban a la guerrilla: “muchachos, nosotros no somos sus enemigos, no señor, pero nos están perjudicando con pasar tantas cosas por aquí, que la vaca la pasan por aquí, que el carro lo pasan por aquí, que secuestraban a una persona y la pasan por aquí, nos están perjudicando (...) por qué no lo sacan por más afuerita” (...). Es que le voy a dar un ejemplo, lo fueron a buscar al trabajo y lo mataron porque dijeron que estaba torcido (página 223).
Masacre	2000	Víctimas - Mujeres	Alejandro Alvis es la víctima que hirió a un paramilitar con una rula. Los sobrevivientes recuerdan que siempre decía que cuando aquellos incursionaran, él no iba a permitir que lo mataran sin dar pelea (página 115).
	2000	Víctima	“La parte que más me duele es cuando señalaron a Francisca Cabrera de Paternina. Le pegaron un palazo, ella resistió, ella se confrontó, cuando ella está en el suelo, le pegaron en la cara. Instalaron una bayoneta y se la insertaron en el pecho. “Todavía está viva”, entonces le dispararon en la cara” (página 56).
	2000	Víctimas - Mujeres	Dora Torres, la madre que no vaciló un momento en exponer su vida para salvar la de su hijo; Margoth Fernández Ochoa y Francisca Cabrera de Paternina, quienes forcejearon con sus victimarios a pesar de la desigualdad de fuerzas (páginas 114-115).

	2000	Sobrevivientes - Huir a los montes	El recuerdo del sufrimiento en los montes de los vecinos de la vereda La Sierra que huyeron cuando se difundió el rumor de la masacre que estaba ocurriendo en El Salado, similar al de los sobrevivientes de El Salado, con una diferencia: mientras estos pudieron regresar a recoger la parte de sus cosas no saqueadas o destruidas, antes de su desplazamiento forzado, aquellos nunca volvieron a su caserío porque los paramilitares lo ocuparon después de la masacre en El Salado. El sufrimiento en los montes se prolongó en su situación de desplazamiento forzado definitivo (página 127). (...) dificultades asociadas a la carencia de comida y agua, las presiones de los niños por hambre y sed, las precauciones que debieron tener para no ser detectados, los accidentes, las incomodidades para dormir, la separación entre hombres, mujeres y niños en las noches, y un miedo generalizado y una zozobra exacerbada por la percepción de vulnerabilidad extrema (página 119).
	2000	Familiares	Los familiares de los habitantes del pueblo intentaban ingresar por la vía a El Carmen de Bolívar para esclarecer lo que había sucedido con sus seres queridos y para rescatarlos en caso de que hubiesen sobrevivido. Los miembros de la Infantería de Marina y los funcionarios de la Alcaldía de El Carmen de Bolívar impidieron el paso alegando que la carretera estaba minada. Esto provocó una protesta de las personas que exigían se les permitiera ingresar para saber lo que había sucedido con sus familiares (página 65).
Retorno	2001	Desplazados	Lo que le imprime fuerza al retorno como memoria de resistencia es que este fue agenciado por las víctimas sobrevivientes a pesar de la oposición del Estado, incluyendo la Infantería de Marina, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de El Carmen de Bolívar, que alegaron que no había condiciones de seguridad. No les quedó más alternativa que un retorno sin la protección y sin el acompañamiento requerido de la institucionalidad estatal. La convicción del retorno queda expresada en la carta que dirigieron los desplazados al ministro de Defensa el 23 de septiembre de 2001 (página 155).
	2002	Desplazados	Retorno autónomo de 300 personas sin apoyo de Estado; en contra de las recomendaciones del Estado (Infantería de Marina, Gobernación de Bolívar y Alcaldía del Carmen de Bolívar) (página 155). Elegir la fecha de conmemoración de la masacre fue un acto simbólico para resignificar la tragedia y marcar un nuevo comienzo (página 152).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

Después de 2002	Retornados	<p>Los habitantes de El Salado recuerdan la interpelación que le hicieron en el momento del encuentro con las FARC: le reclamaron por su grado de responsabilidad en la masacre, ironizaron amargamente sobre sus consignas durante las reuniones en el pueblo (la guerrilla decía que nunca un infante de marina ni un paramilitar pondrían un pie en El Salado), caricaturizaron su defensa (la guerrilla le decía a la población que no se fuera porque ellos los iban a defender), les exigieron que dejaran de exponerlos y reivindicaron su derecho a la neutralidad en medio del conflicto armado (página 158).</p> <p>[Testimonios: Cuando ustedes retornan, ¿vuelve otra vez la guerrilla a presionarlos? Víctima: No. Porque una vez vino aquí y enseguida los echamos. ¿Cuando ellos regresaron ustedes les pidieron alguna explicación por lo que había pasado? Claro, por ellos nos había pasado lo que había pasado, que se retiraran de una vez, no los queremos ni ver, ni en fotos, ni en fotos. ¿Cuál fue la explicación de ellos ante el reclamo?</p> <p>Que no se qué, que nos iban a ayudar, ¿como nos ayudaron la otra vez?, por ustedes nos mataron a toditos, esa es la ayuda, y nos resolvimos todos aquí que no y no (...) (Testimonio # 17, mujer adulta mayor) (página 158). Cuando estaban trabajando en el camino, la gente se les paró, ellos les dijeron: «qué pasa, tenemos hambre, tenemos que trabajar y si nos están ofreciendo un trabajo, tenemos que hacerlo, estamos en el pueblo, porque ese pueblo nos pertenece, y porque hemos pasado mucho trabajo por fuera, y por qué nos van a hacer otra vez desplazar de la comunidad donde ya hemos pasado tantas cosas, ya no vamos a aguantar otro desplazamiento más, así que ustedes tienen que (respetarnos); «no, porque son órdenes», dicen; «bueno, a quienes manden esa orden, a quienes ustedes tengan que llevar esa orden, dígales que ahí vamos a esperar todos, que nos maten, que bombardeen el pueblo, que hagan lo que quieran, pero ahí vamos a estar, ya estamos muy cansados de esta situación» (páginas 158-159).</p>
-----------------	------------	---

2002 en adelante	Colectivo de comunicaciones Siglo XXI	Uno de los emprendimientos más importantes hacia la rehabilitación de los espacios públicos marcados por el terror en El Salado: el cineclub itinerante “La Rosa Púrpura del Cairo” del proyecto “Cinta de Sueños” del Colectivo de Comunicaciones Siglo XXI, que nació en El Carmen de Bolívar y ha recorrido los Montes de María, incluyendo la cancha del corregimiento El Salado después del retorno en el año 2002. Proyectar películas en los espacios públicos marcados por el terror, sean estos plazas, calles o parques, le permite a la gente que se reúne a ver las películas encontrarse con los amigos, conversar o simplemente estar allí donde ya no se estaba por el miedo; y las conversaciones empiezan a tejer nuevamente intereses y temas comunes, esta vez sobre las historias del cine, que permiten hablar de las cosas propias a través de los intereses y las palabras de otros. De esta manera se vuelve a tejer la sociabilidad y la confianza (página 201).
2004	Amnistía Internacional	En octubre de 2004, cuatro años y medio después de la ocurrencia de la masacre, el silencio del empalamiento se reveló cuando Amnistía Internacional publicó su informe sobre violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado, titulado “Colombia. Cuerpos marcados, crímenes silenciados”. El primer párrafo del informe es un fragmento de un testimonio sobre los episodios de violencia sexual en la masacre de El Salado (página 124).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

2006 (Enero)	Asodesbol - Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas)	El 3 de enero de 2006 la CIDH recibió una petición presentada por la Asociación de Desplazados del Salado Bolívar (Asodesbol) y la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas) en la que relataban los hechos ocurridos en El Salado entre los días 15 a 19 de febrero de 2000. En esta petición las dos asociaciones alegaron que, como consecuencia de los hechos, el Estado de Colombia era responsable por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y servidumbre, la libertad personal, la protección de la honra y de la dignidad, el derecho de reunión, la libertad de asociación, la protección a la familia, los derechos del niño, la propiedad privada, la circulación y residencia, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en los artículos 4, 5, 6.2, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 22 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con los deberes de garantía y de adopción de disposiciones de derecho interno, establecidos en los artículos 1.1 y 2 de esta Convención y el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” (página 310).
2006	Iniciativas de Memoria	La iniciativa de recordar el acontecimiento de la masacre de 2000 se ha extendido hasta la violencia como proceso y se ha concretado en la construcción de un Monumento a las Víctimas (construido sobre la mayor fosa común que se cavó en El Salado después de la masacre de 2000). El proyecto fue liderado por el sacerdote Rafael Castillo, y fue concertado y construido con la participación comunitaria de las organizaciones sociales de El Salado y con el apoyo y acompañamiento del programa Redes del PNUD, ACNUR, ISA, Fundación Social Hocol, la Red EcuMénica de Colombia, la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar, la Fundación Red de Desarrollo y Paz de los Montes de María, la ONG Mujer y Futuro, el Instituto Nacional de Promoción Social y el Colectivo de Comunicaciones de Montes de María (página 166).

		Iniciativas de Memoria	Como iniciativa de Memoria se elaboraron placas con los nombres de cada una de las víctimas, aunque aún faltan algunos nombres reclamados por la comunidad: están los nombres y los apellidos de 49 víctimas (39 hombres y 10 mujeres) de las masacres de febrero de 2000, marzo de 1997 y las posteriores al retorno de 2002, todas víctimas de los paramilitares y de la guerrilla en dicho corregimiento y en la vereda La Sierra. Sin embargo, no incorpora a las víctimas de las áreas rurales del municipio de Ovejas (veredas Pativaca, El Cielito y Bajo Grande- corregimientos Canutal y Canutalito) (página 166).
	2006	Iniciativas de Memoria	Resignificar el lugar de la tragedia y revertirlo en un lugar de esperanza, pintando un mural. La iniciativa surgió en el año 2006 bajo el liderazgo de las Mujeres Unidas de El Salado, quienes vincularon a los jóvenes en su implementación, pintando en el muro que da a la cancha de microfútbol, lugar en el cual se perpetraron las torturas y las atrocidades durante la masacre, así como en la pared de una casa a la entrada del pueblo (página 172).
		Mujeres Unidas de El Salado	La emblemática experiencia organizativa de las Mujeres Unidas de El Salado, se levantó sobre una tradición local: las mujeres no habían estado del todo alejadas de los espacios públicos y de los liderazgos comunitarios, como lo atestigua su presencia como víctimas en todas las masacres: Doris Torres en la de 1997, Rosmira Torres en el 2000 y María Cabrera en el asesinato selectivo de 2003; pero lo que hace distinta su experiencia después del retorno es que han hecho una presencia más organizada en el espacio público y han incurrido con más autonomía en el campo del trabajo a través de su articulación con proyectos productivos; además de haber participado en discusiones sobre política pública en espacios institucionales. Pero las víctimas citadas construyeron sus liderazgos desde roles tradicionales que asocian a la mujer con las labores del cuidado y la crianza infantil, las cuales se han resignificado y cuentan con mayor reconocimiento social (página 212).
		Mujeres Unidas de El Salado y Asodesbol	Las organizaciones comunitarias como expresiones de resistencia y dignidad: las Mujeres Unidas de El Salado y Asociación de Desplazados de El Salado Bolívar (Asodesbol), y el umbral de la memoria se coloca en el proceso de retorno con énfasis en la reivindicación del liderazgo y la resistencia de la comunidad (página 168).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

	2005 - 2009	Mujeres Unidas de El Salado	Sólo hasta el año 2005, las Mujeres Unidas de El Salado propusieron volver a las fiestas para que el daño causado por la violencia no continuara extendiéndose hasta acabar con sus tradiciones. Reconociendo su sufrimiento y su luto, lo primero que decidieron recuperar los sobrevivientes fueron las fiestas patronales de la Virgen del Rosario realizadas en octubre; y en el año 2009 recuperaron las fiestas de San Juan en las que realizan carreras de caballos y cabalgatas. También funcionan hoy en día una gallera y dos billares (página 201).
2009 en adelante iniciativas de memoria a partir de GMH y CNMH	2009 (Sept)	GMH	El primer reencuentro comunitario entre desplazados y retornados casi 10 años después de la masacre de febrero de 2000. Varios buses provenientes de Sincelejo, Cartagena, Barranquilla y El Carmen de Bolívar arribaron al corregimiento El Salado con cientos de salaeros que volvieron a reencontrarse con los suyos y con su pueblo en una ocasión que evocaba la vida para resistir a la muerte y a la desolación de la masacre (página 31).
	2010 (Feb)	GMH	Los actos de conmemoración de los 10 años de la masacre el 20 de febrero de 2010, evento que contó con la realización de un ritual simbólico en la iglesia del pueblo, el descubrimiento de una placa conmemorativa en homenaje a Luis Pablo Redondo en el colegio de bachillerato y una jornada de luz que consistió en una ruta por los lugares de victimización o de residencia de las víctimas que emprendieron todos los habitantes del corregimiento con una vela encendida y que en cada parada venía acompañada con un tributo a los ausentes y una exaltación a su humanidad y su legado (página 32).
	2010	GMH	Las iniciativas de memoria construidas alrededor de la tradición oral y las expresiones artísticas fueron recogidas en el disco “Las voces de El Salado” que contó con el apoyo del músico César López. El disco fue lanzado en el corregimiento El Salado en septiembre de 2010 y contó con la presencia del maestro Adolfo Pacheco, juglar de la música vallenata de las sabanas de Bolívar y Sucre (página 32).

		GMH	<p>Recuperación del Monumento a las Víctimas y un cambio en el énfasis del recuerdo de los ausentes. Con un lugar de memoria iluminado por velas, los saleros se congregaron para rendir tributo a las víctimas ya no desde la evocación del horror sino desde la vida y la humanidad de las víctimas, congregándose en torno a las anécdotas y las vivencias de los ausentes (página 32).</p> <p>La comunidad de El Salado reclama que no todas las víctimas han sido incorporadas en la iniciativa de memoria, incluyendo las que fueron desaparecidas forzosamente antes y después de la masacre de 2000, así como las que fueron asesinadas en el casco urbano de El Carmen de Bolívar después de la masacre de 2000, lo cual es percibido por los dolientes como una doble invisibilización de sus víctimas (página 145). MH ha reconstruido el universo de esas víctimas fatales reclamadas por la memoria colectiva, incorporando a los desaparecidos de El Salado, los desplazados asesinados en El Carmen de Bolívar en el 2000 y las víctimas de la masacre del 19 de enero de 2000 en la vía El Salado-El Carmen de Bolívar (Tabla N° 2), el cual se extiende a 107 víctimas en un lapso que se prolongó más allá del año 2003, con nuevas modalidades como las detenciones arbitrarias y las amenazas. En rigor, las víctimas sobrevivientes que han retornado consideran que el último hito de victimización de su comunidad fue el exilio de su líder comunitario Luis Torres en el año 2006 (página 145).</p>
--	--	-----	--

REMEDIOS/SEGOVIA			
Contexto c.a.	Fecha	Actor	Evento
Primeras masacres	1983	Político - Iglesia	Los hechos violentos de Remedios y Amalfi fueron denunciados públicamente por el concejal del Partido Comunista Gilberto Gallego Copeland, quien responsabilizó al Ejército en 1982, fue asesinado un año después (página 50). - Los sacerdotes Jorge Jesús Mira Balbín y Gabriel Yepes Yepes, párrocos de Segovia y Remedios. En agosto de 1983, el padre Mira envió telegramas a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación de Antioquia y el Comando de la XIV Brigada del Ejército Nacional. En declaraciones posteriores a la prensa, ambos sacerdotes señalaron la responsabilidad del Ejército (páginas 59-60).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

1984 - 1988 Antes de la masacre de 1988		Campeños	“Éxodos campesinos”: el detonante de la movilización fue generalmente la victimización de las comunidades rurales en medio del conflicto armado. Los reclamos por inversión estatal en bienes públicos (infraestructura, salud, educación, vías) acompañaban sus denuncias de violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). En el plano rural fue la movilización cívica y regional las claves en la movilización local (página 172).
		Población Urbana	Paros cívicos. La violencia contra los líderes sociales también era un detonante de la movilización, pero esta estuvo acompañada con manifestaciones que reclamaban acceso a servicios públicos domiciliarios e inversión en infraestructura pública (...). Liderada por A Luchar y la UP. En el ámbito urbano los sindicatos fueron claves de la movilización (páginas 172-173).
	1988	Autoridades	Las autoridades civiles denunciaron los excesos de la fuerza pública. El Concejo Municipal remitió telegramas y cartas a la Procuraduría General de la Nación, a la Gobernación de Antioquia y a los Ministerios de Justicia y Defensa en dos ocasiones: 25 de octubre y 1 de noviembre. La Inspección de Policía y la Personería mediante el envío de cartas a la Procuraduría General de la Nación el 29 de octubre y el 3 de noviembre, respectivamente (página 77).
Después de La masacre de 1988	1990	Pobladores	Las masacres y los asesinatos selectivos provocaron una reacción social y política manifiesta en los comunicados públicos de rechazo, movilización (paros cívicos y manifestaciones y sepelios colectivos) (página 255).
	1988- 1994	Org. de izq. preexistentes	El signo más notable de resistencia fue la supervivencia de las organizaciones de la izquierda social y política, a pesar de la brutalidad de las embestidas del terror desplegado por los armados. La UP pudo resistir el efecto devastador de la masacre del 11 de noviembre de 1988, prolongando su presencia en el mapa político hasta 1994. El PC también resistió los golpes devastadores de 1982 y pudo rehacerse con la aparición de la UP. Las Juntas Cívicas, el Comité de Derechos Humanos y los sindicatos persistieron en la movilización social, a pesar de una estigmatización cada vez más asfixiante y de una violencia incesante (páginas 255-256).

	1989 - 1995	Organizaciones	A partir de 1989 se crean nuevas organizaciones en la región como respuesta a la guerra. En este marco, la masacre del 11 de noviembre de 1988 fue el hito que desencadenó un proceso inédito en la organización popular de la región: la conformación de organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Las principales organizaciones de este tipo fueron: la Corporación Comité de Damnificados de Segovia y Remedios “Once de noviembre” y el Comité de Derechos Humanos de Segovia y Remedios (reconocido legalmente en 1992). La primera organización representaba a parte de las víctimas de la masacre en la búsqueda de justicia y reparación por parte del Estado. La segunda fue la organización de derechos humanos de la región que realizó el acompañamiento a las comunidades, denunciando las violaciones de derechos humanos y participando de acciones humanitarias hasta 1997, cuando la mayor parte de sus miembros había sido asesinada y los sobrevivientes desplazados (páginas 169-170).
	1989 - 1996	Conmemoraciones (masacre 1988)	La evocación de la masacre del 11 de noviembre de 1988 se plantea como memoria activa. A la memoria se le dotó de iniciativa pública, especialmente a través de las conmemoraciones, y en ese momento se introdujo dentro del componente simbólico del conflicto social y político como interpelación a la fuerza pública. Esto significó que las prácticas de la memoria fueran representadas como expresiones insurgentes desde la perspectiva de la fuerza pública (página 361).
Iniciativas de memoria	1995	Comité de Derechos Humanos - Conmemoración de la masacre 1988	El acompañamiento a las comunidades afectadas por la construcción del oleoducto Colombia en Remedios y Segovia al comenzar la década de 1990 (...). En términos de promoción de los derechos humanos, existieron tres momentos significativos: - El acompañamiento a la comunidad indígena Embera en Segovia, especialmente en la titulación de su resguardo en la vereda La Po en octubre de 1992. - La realización del Primer Foro del Nordeste Antioqueño por los Derechos Humanos en abril de 1993. - La conmemoración de noviembre de 1995, que incluyó tanto la Peregrinación Nacional en el séptimo aniversario de la masacre del 11 de noviembre como el Foro Regional “Paz con Verdad, Justicia y Reparación” (...) (página 170). Para esta conmemoración fue muy importante el aprendizaje que se hizo de la experiencia de las víctimas de la masacre de Trujillo, tanto en términos del repertorio de iniciativas de memoria empleado —la peregrinación y el acompañamiento

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

			<p>nacional—, como en el recorrido en la búsqueda de justicia (página 374). Previo a la peregrinación tuvieron el acompañamiento de ONG: la Conadhegs, ILSA. “Para 1995 tuvimos el acompañamiento de la Corporación Jurídica Libertad y el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, Codhesel” (página 367).</p> <ul style="list-style-type: none"> • La conmemoración del séptimo aniversario de la masacre del 11 de noviembre de 1988 tuvo una doble dimensión de la memoria: como práctica de re-creación comunitaria y como resistencia política (denuncia) (página 369). Múltiples sectores de la población regional participaron en los procesos conmemorativos. Las autoridades locales llegaron a declarar el 11 de noviembre como día cívico municipal. Los Comités de Derechos Humanos y las organizaciones sociales lograron que el ejercicio de memoria se incorporara a la agenda del movimiento popular y la conmemoración a su repertorio (página 372). • En el marco de las conmemoraciones se realizaron marchas y elaboraron murales, una valla alusiva a la paz, al derecho a la justicia, a la no impunidad, a la entrada del pueblo, ceremonias religiosas y ofrendas florales; discursos conmemorativos ofrecidos en reuniones públicas y en los volantes de invitación, así como en las imágenes y textos elaborados y expuestos como marcas de memoria (página 367).
	1995	Juntas cívicas	Última iniciativa [de las Juntas Cívicas] de reivindicación social ocurrió en 1995 con un paro cívico en Remedios. La agenda se centró en los derechos humanos, lo que significó la transición de una movilización social transformadora a una de resistencia (página 174).
	1996	Comité de Derechos Humanos de Remedios y Segovia	La insistencia en el reconocimiento de los victimarios de la masacre de abril de 1996 en Segovia (página 170).
El ataque contra los gestores de la memoria y la desarticulación de las víctimas provocaron la suspensión de las prácticas conmemorativas desde 1996 hasta 2008.			

1996 - 2008		<p>Cuando la violencia se volvió recurrente y se presentaron nuevas masacres, la memoria activa perdió su capacidad para tramitar el dolor. De manera complementaria, cuando los vínculos sociales a través de los cuales se había construido la memoria se destruyeron o fueron resignificados la tramitación colectiva del duelo perdió sentido (página 362). - En los relatos de las víctimas de las masacres de 1996 y 1997, en lugar de reivindicarse la identidad política como en 1988, se privilegió la resistencia al estigma para evitar el señalamiento (...). Ante la presencia hegemónica del victimario, la identidad política disidente y el recuerdo de la víctima en su dimensión pública se convirtieron en una sentencia de muerte (página 363).</p>
1998 en adelante	Iniciativas de memorias "individuales"	<p>Las historias realizadas por los intelectuales locales, especialmente en Segovia, que comenzaron a producirse desde el año 1998, son empresas de pequeña escala, editadas por los propios autores. En ellas se recupera la historia local a partir de diversas fuentes: la tradición oral de los habitantes, algunos documentos históricos y fuentes secundarias como bibliografía y prensa que describen hechos particulares de la región. Es así como los intelectuales locales han construido una trayectoria histórica particular. En estas historias se recogen los diferentes hitos y períodos de violencia del siglo XX (página 383).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colección de objetos de memoria (resguardada por Francisco William Gómez Monsalve, que tuvo la colaboración de la Corporación Comité de Damnificados de Segovia y Remedios "Once de noviembre"): el dibujo premonitorio que realizó el niño (Francisco William Gómez Monsalve, niño de 10 años, víctima de la masacre del 11 de noviembre de 1988) antes de la masacre; cartelera creada por su familia, especialmente para el recuerdo de las víctimas, en la que sus nombres son colocados en torno a la representación de Francisco William como figura central; los murales que se hicieron como parte de la séptima conmemoración son incorporados a través de registros fotográficos; además: dos iniciativas importantes realizadas por la Iglesia Católica en Segovia: una cruz con los nombres de las víctimas de la masacre de 1983 y un impreso de conmemoración de las víctimas de la masacre de 1988 (páginas 365-366).

REGIONES Y CONFLICTO ARMADO
BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CNMH AL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

Resurgir	2008	Iniciativas de memoria	Las actividades conmemorativas de los 20 años de la masacre de 1988 marcaron el comienzo de un nuevo resurgir de la memoria, que ha continuado con diversos actos en años posteriores, agenciados tanto por organizaciones de víctimas y derechos humanos como por individuos (página 381).
	2008	Iniciativa de memoria - Org. DH y víctimas - Conmemoración de la masacre 1988	<p>En el año 2008 se realizaron conmemoraciones simultáneas en Segovia y Medellín. Ambas iniciativas tuvieron su origen en mediadores de memoria que no formaban parte del grupo de víctimas. La conmemoración local fue realizada por un mediador de la memoria particular: un funcionario público preocupado por la construcción de la identidad segoviana y la conservación de una memoria local. A quienes pretendían mencionar a los responsables de la masacre no se les permitió hablar. Esto significa que persisten en las localidades limitaciones para narrar públicamente los hechos en una forma en que las víctimas tengan la opción de darle a su memoria una dimensión política, de reclamo por la justicia y de dignificación de sus muertos (páginas 377-379).</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Otra característica importante de la iniciativa local de memoria del año 2008 es que no reconoce el proceso de memoria del período 1989–1996, con sus numerosas y constantes iniciativas y con su peso simbólico como protesta social. [Es] parte de la ruptura intergeneracional... en la construcción de las representaciones sobre la movilización popular del período 1985–1997, producto de la proscripción del reconocimiento del pasado durante las hegemonías armadas posteriores” (página 379). • La conmemoración de 2008 en Medellín fue convocada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) capítulo de Antioquia y varias organizaciones sociales (página 380).

2010	Iniciativa de memoria - Conmemoración de la masacre 1988	<p>La conmemoración del año 2010 en Segovia significó el retorno a la luz pública de una memoria de violencia en el alto nordeste antioqueño, que puso el énfasis en el daño político, componente que no se privilegiaba desde 1996 (página 381). Fue promovida por un conjunto de organizaciones sociales y de derechos humanos: Corporación Reiniciar, Corporación Cahucopana, Coordinación Nacional de Víctimas y Familiares del Genocidio contra la Unión Patriótica, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) y Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos). Significó un regreso simbólico de la UP a la región. La conmemoración incluyó iniciativas como la siembra de árboles en memoria de cada una de las víctimas de la masacre, actividad denominada por los organizadores como “Sembrar memoria viva”. También se realizó una marcha por las calles que han sido escenario del hecho violento, actividad nombrada como “Desandar la muerte”. Aquí volvieron a desplegarse públicamente las banderas de la UP en la región después de 15 años de ausencia. El evento culminó con la entrega a la población de una columna en el parque principal de Segovia en homenaje a las personas asesinadas el 11 de noviembre de 1988, donde se consignó una breve descripción de los hechos. La conmemoración del año 2010 volvió a constituirse en un espacio público para el reclamo social y la práctica volvió a asumir un carácter político (páginas 381-383).</p>
------	--	--

La sociedad colombiana, a través de diferentes expresiones e iniciativas, ha reconocido la importancia de avanzar en la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado, para contribuir a la dignificación y la reparación de las víctimas, al esclarecimiento histórico y para aportar a la construcción de paz.

Esta ha sido también la tarea del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) que, desde su creación, en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), ha emprendido procesos de investigación para contribuir al esclarecimiento de los hechos ocurridos en el conflicto armado. Estas investigaciones, sumadas a las realizadas por el Grupo de Memoria Histórica, son un aporte para las instituciones resultantes de la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, y más específicamente para la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz.

El resultado de este trabajo se compendia en diez balances que dan cuenta de las dimensiones y dinámicas del conflicto, de las modalidades de violencia, y de los actores y los responsables de los daños causados a millones de colombianos que, en medio del dolor, han sabido resistir y reconstruir con su memoria el pasado, y enfrentar los retos que les impone el presente.

Este balance, dividido en 5 capítulos, busca establecer la contribución que ha hecho el CNMH al esclarecimiento histórico del conflicto armado en torno a la temática de las memorias que sobre dicho conflicto se han construido en las diversas regiones, y a partir de una muestra de 13 estudios de caso. Finaliza con unas recomendaciones para las instituciones que en la actual etapa de posconflicto con las FARC se ven abocadas a la compleja tarea de construir paz en el país, tarea que implica al mismo tiempo la consideración del territorio como uno (país) y como muchos (regiones).

ISBN: 978-958-8944-95-1



PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional
de Memoria Histórica



GOBIERNO DE COLOMBIA

